



Informe de Evaluación Mutua

Anti Lavado de Dinero y Contra el
Financiamiento del Terrorismo
(ALD/CFT)

GUATEMALA

Noviembre 4 de 2010

Guatemala es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Esta Evaluación fue realizada por el GAFIC y aprobada por su Consejo de Ministros como parte de la tercera ronda de evaluaciones mutuas, en Noviembre 4 de 2010.

© 2009 GAFIC. Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción o traducción de esta publicación sin previa autorización escrita. Las solicitudes de permiso para la diseminación, reproducción o traducción de todo o parte de esta publicación deben solicitarse a la Secretaría del GAFIC: CFATF@cfatf.org

INDICE

INDICE	1
Prefacio - Información y metodología utilizada para la evaluación	3
RESUMEN EJECUTIVO.....	4
1. General.....	10
1.1. Información general sobre Guatemala	10
1.2. Situación General sobre el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo	14
1.3. Panorámica del Sector Financiero	15
1.4. Panorámica de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas	19
1.5. Panorámica sobre personas jurídicas y otras figuras jurídicas.....	20
1.6. Panorámica sobre estrategia contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo	21
2. Sistema Jurídico y Medidas Institucionales Relacionadas.....	26
2.1. Penalización del Lavado de Dinero (R.1 y 2).....	26
2.2. Penalización del Financiamiento del Terrorismo (RE.II)	34
2.3. Confiscación, congelamiento y decomiso de activos del crimen (R.3)	37
2.4. Congelamiento de fondos utilizados para el financiamiento del terrorismo (RE.III)	44
2.5. La Unidad de Inteligencia Financiera y sus funciones (R.26)	50
2.6. Autoridades del orden, ministerio público y otras autoridades competentes (R.27 y 28).....	62
2.7. Declaración transfronteriza (RE. IX).....	70
3. Medidas Preventivas – Instituciones Financieras	75
3.1. Riesgo de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo.....	75
3.2. Diligencia debida sobre el cliente, incluyendo medidas ampliadas o reducidas (R.5 a 8).....	76
3.3. Terceros y negocios intermediados (R.9)	91
3.4. Secreto o confidencialidad de la institución financiera (R.4)	92
3.5. Mantenimiento de registros y Transferencias cablegráficas (R.10 y RE.VII)	93
3.6. Monitoreo de transacciones y relaciones (R.11 y 21).....	99
3.7. Informes sobre transacciones sospechosas y otros reportes (R.13-14, 19, 25 y RE.IV).....	103
3.8. Controles internos, cumplimiento, auditoría y sucursales extranjeras (R.15 y 22).....	112
3.9. Bancos ficticios (R.18)	116
3.10. Supervisión y vigilancia –Autoridades y Autorreguladores (R. 23, 29, 17& 25).....	118
3.11. Servicios de transferencia y envío de fondos (SR.VI)	133
4. Medidas Preventivas – Actividades y Profesiones No Financieras Designadas.....	137
4.1. Diligencia debida sobre el cliente; registros (R.12) (R.5, 6, 8 a 11 & 17).....	137
4.2. Reporte sobre transacciones sospechosas (R.16) (R.13 a la 15, 17 y 21).....	144
4.3. Regulación, supervisión y monitoreo (R. 24-25).....	149
4.4. Otros negocios y profesiones no financieras; Técnicas modernas de pago (R.20).....	152
5. Estructuras Jurídicas y Organizaciones Sin Fines de Lucro	154
5.1. Personas Jurídicas – Acceso a la información sobre beneficiario y control (R.33).....	154
5.2. Estructuras Jurídicas - información sobre beneficiario y control (R.34)	156
5.3. Organizaciones sin fines de lucro (RE.VIII).....	158
6. Cooperación Nacional e Internacional.....	164
6.1. Cooperación y coordinación a escala nacional (R.31).....	164
6.2. Las Convenciones y las Resoluciones Especiales de las NU (R.35 y RE.I)	167
6.3. Asistencia Legal Mutua (R.36-38, RE.V).....	174
6.4. Extradición (R.37, 39, RE.V)	179
6.5. Otras Formas de Cooperación Internacional (R. 40, RE.V)	183
7. OTRAS CUESTIONES	185
7.1. Recursos y estadísticas.....	185
7.2. Otras medidas o asuntos ALD/CFT relevantes.....	186
7.3. Marco general para el sistema ALD/CFT (ver también sección 1.1)	186

Tabla 1. Calificación del Cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI.....	187
Tabla 2: Plan de Acción Recomendado para mejorar el sistema ALD/CFT	198
Tabla 3: Respuesta de las Autoridades a la Evaluación (en case de darse)	213
Anexo 1: Abreviaturas.....	214
Anexo 2: Órganos con los que se realizaron reuniones durante la visita in situ –.....	215
Anexo 3: Lista de leyes, regulaciones y demás material recibido.	217

Prefacio - Información y metodología utilizada para la evaluación

1. Esta evaluación del régimen anti lavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de Guatemala se basó en las Cuarenta Recomendaciones sobre Lavado de Dinero del 2003 y en las Nueve Recomendaciones Especiales sobre el Financiamiento del Terrorismo del 2001 del Grupo de Acción Financiera (GAFI), y se elaboró haciendo uso de la Metodología ALD/CFT del 2004¹. La evaluación estuvo basada en las leyes, regulaciones y otros materiales suministrados por el País, y la información obtenida por el equipo de evaluación durante la visita in situ efectuada a Guatemala del 8 al 19 de Junio de 2009. El equipo de evaluación se reunió con funcionarios y representantes de todas las entidades gubernamentales y del sector privado pertinentes. Como Anexo 2 del informe de evaluación mutua aparece una lista de las entidades con las que se sostuvieron reuniones.

2. La evaluación fue realizada por el siguiente equipo de evaluadores compuesto por un miembro de la Secretaría y expertos de países miembros y cooperantes del GAFIC: Ernesto López, Subdirector Ejecutivo de GAFIC y coordinador de la evaluación; Abdel Almengor, Subdirector de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá (experto legal); Sara Molina, Analista de la Unidad de Información Financiera de Honduras (evaluadora Financiera); Heynar Martínez, Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras de Nicaragua (evaluador financiero); y Mauricio Pastora, Especialista Regional del Financial Crimes Enforcement Network –FINCEN, de los Estados Unidos de América (evaluador de autoridades del orden). El equipo expresa su agradecimiento al gobierno de Guatemala.

3. Los expertos sometieron a revisión el marco institucional, las leyes ALD/CFT, regulaciones, lineamientos y otros requisitos acordes, así como los sistemas de regulación y de otro tipo establecidos para impedir el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT) a través de las instituciones financieras y las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), además del examen de la capacidad, la implementación y la efectividad de todos estos sistemas.

4. El presente informe ofrece un resumen de las medidas ALD/CFT instauradas en Guatemala en la fecha en que se realizó la visita in situ o inmediatamente después. Describe y analiza esas medidas, incluye los niveles de cumplimiento de Guatemala con respecto a las 40+9 Recomendaciones del GAFI (Tabla 1) y plasma recomendaciones sobre cómo se pueden superar las deficiencias identificadas (Tabla 2).

¹ De conformidad con la versión actualizada en febrero de 2008

RESUMEN EJECUTIVO

1. Este informe ofrece un resumen del sistema ALD/CFT instaurado en Guatemala al momento de la visita in situ (8 al 19 de Junio de 2009) e inmediatamente después. Describe y analiza sus características, indica los niveles de cumplimiento del país con respecto a las 40+9 Recomendaciones del GAFI y plantea recomendaciones para superar las deficiencias identificadas.

1. Hallazgos Principales

2. El sistema ALD/CFT de Guatemala se ha fortalecido legal e institucionalmente en años recientes, especialmente la prevención en el sistema financiero, y ha logrado algunas condenas importantes, pero aun tiene serias dificultades para investigar delitos complejos de LD, para combatir al crimen organizado y el lavado procedente de la corrupción. Las fuerzas del orden, especialmente la Policía Nacional Civil, no tienen capacidades técnicas ni humanas suficientes para apoyar al Ministerio Público en sus investigaciones. Esto se suma a una débil coordinación entre las autoridades del orden público, la cual se espera mejorar con el Comité Interinstitucional recientemente creado con este fin.

3. El tipo penal de LD es acorde con los estándares internacionales y hay evidencia de su aplicación práctica. Sin embargo, y teniendo en cuenta los altos índices de criminalidad del país, aun son pocas las condenas con penas severas o por casos complejos de LD a través del sistema financiero. La mayoría de condenas corresponde a casos de transporte ilegal de efectivo o “mulas”.

4. En materia de FT, este se tipifica siguiendo los parámetros de la Convención Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo, salvo que falta hacer mención expresa de la financiación a una organización terrorista o a un terrorista individual. Para sancionar esta conducta sería necesaria una interpretación extensiva de la ley penal cuya validez no ha sido puesta a prueba judicialmente. El riesgo de FT es bajo, según estudios contratados por las autoridades, aunque la ausencia de casos e investigaciones de FT en Guatemala y la inhabilidad del Sistema Judicial para investigar otros delitos complejos, impiden conocer la efectividad con que se podría combatir el financiamiento del terrorismo.

5. Todas las actividades financieras descritas en el glosario de la metodología del GAFI, excepto los corredores y agentes de seguros, son sujetos obligados en Guatemala y se encuentran sometidos a la ley ALD, a la ley CFT, y a sus respectivos reglamentos. También existen disposiciones secundarias como circulares y “guías”, todas ellas de obligatorio cumplimiento. En términos generales este cuerpo normativo provee un fundamento jurídico suficientemente sólido para el esquema preventivo ALD/CFT. Las regulaciones más recientes y completas se aplican por ahora únicamente a los sectores considerados de mayor riesgo y que abarcan la mayor parte de los servicios financieros en cuanto a volumen y número de operaciones. Es necesario ampliar su alcance a las demás instituciones financieras.

6. La Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) es al mismo tiempo unidad de inteligencia financiera y autoridad de regulación y supervisión de todos los sujetos obligados para propósitos ALD/CFT. Su capacidad financiera, técnica y humana es notablemente superior a la de otras autoridades guatemaltecas con competencias en la lucha contra el LD/FT, ha logrado un desarrollo importante en materia de inteligencia financiera y recientemente fortaleció también su capacidad de supervisión. Aun así, sus 49 funcionarios resultan insuficientes para el cúmulo de responsabilidades que debe cumplir.

2. Sistemas Jurídicos y Medidas Institucionales Relacionadas

7. El delito de Lavado de Dinero y otros Activos se encuentra tipificado en el Código Penal Guatemalteco de acuerdo a los parámetros y reglas de la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de Viena, respectivamente. Puede perseguirse el lavado de dinero proveniente de cualquier delito, incluido el FT, y el concepto de bienes es suficientemente amplio para abarcar todos los tipos de “propiedad” que provenga de modo directo o indirecto de los activos del crimen, como lo exige el GAFI. Del año 2005 al 2008 se ha registrado un vertiginoso incremento en la incautación de dinero en efectivo. El LD se tipifica como un delito autónomo y para condenar por LD no es necesaria una condena por el delito predicado; existen incluso sentencias condenatorias que ratifican esto.

8. Se pudo apreciar mediante sentencias de Tribunales de Justicia, que el entendimiento, interpretación, alcance y aplicación del elemento doloso inserto en la norma es adecuado y se traduce en buenos resultados al momento de emitir sentencias condenatorias por LD. La redacción de la norma, hace posible al Juzgador su aplicación en todo su alcance, e inferir el elemento dolo mediante circunstancias objetivas del hecho.

9. El Financiamiento del Terrorismo penaliza en Guatemala sobre la base de la Convención Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo. Sin embargo, la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (Ley CFT), adoptada mediante Decreto del Congreso N° 58-2005 y reglamentada mediante Acuerdo Gubernativo N° 86-2006 del Presidente de la República, no hace referencia explícita a la financiación de individuos u organizaciones terroristas.

10. Una amplia gama de medidas cautelares y mecanismos de cooperación internacional están disponibles y son usados en Guatemala. También se ha demostrado en la práctica la posibilidad de congelar muy rápidamente activos derivados de cualquier delito y el fiscal podría directamente dar una orden en cuestión de horas, incluso con base en los listados de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No obstante, hace falta un mecanismo más inmediato, como crear una obligación general para los sujetos obligados de suspender estas transacciones e inmovilizar los fondos sin esperar por una orden específica para cada caso.

11. La Intendencia de Verificación Especial o IVE es la unidad de inteligencia financiera de Guatemala, cuenta con la autonomía operacional y las facultades legales y de acceso a información necesarias para cumplir su función, y desarrolla en la práctica un papel importante en la detección e investigación del delito de LD, así como en materia de coordinación interinstitucional. Algunas de las principales deficiencias que reducen su efectividad son las siguientes: 1) la falta de acceso rápido a información policial; 2) la demora de otras instituciones en dar respuestas a los requerimientos de la IVE; 3) el excesivo gasto de tiempo y recursos para tramitar consultas del MP; y 4) la escases de publicaciones que produce dando a conocer estadísticas, tipologías, tendencias, y otras actividades de análisis estratégico.

12. El Ministerio Público es quien dirige la investigación penal y formula acusación ante el juez competente. Cuenta con una fiscalía especializada en LD, y varias fiscalías especializadas en Corrupción, Narcotráfico, Delitos Económicos, Delitos Patrimoniales, Trata de Personas y Crimen Organizado, las cuales también pueden conocer e investigar el LD cuando surge como delito conexo dentro de sus investigaciones. Sólo la Fiscalía especializada en LD puede solicitar a la IVE información que esté en poder de sujetos obligados, sin necesidad de obtener orden judicial. Las demás fiscalías hacen entonces estos pedidos a través de la fiscalía de LD, la cual lo retransmite a la IVE. Esto ha ocasionado un sobrecargo de requerimientos de información del Ministerio Público hacia la IVE, consumiendo gran parte de sus recursos que podrían enfocarse en su función principal de análisis e inteligencia financiera.

13. Entre principios del 2005 y mayo del 2009 fueron dictadas 16 sentencias condenatorias por Lavado de Dinero, número que resulta bajo teniendo en cuenta los altos índices de criminalidad del país.

Aun son pocas las condenas con penas severas o por casos complejos de LD a través del sistema financiero y la mayoría de condenas corresponde a casos de transporte ilegal de efectivo o “mulas”. Hace falta mayor especialización de jueces en estos temas, aumentar las capacidades legales y humanas del Ministerio Público y, especialmente las de la Policía y demás entidades que apoyan la investigación penal. Se deben fortalecer los controles de prevención, especialmente en las fronteras terrestres y puertos marítimos y es necesario que se tomen medidas para obtener una mayor coordinación a nivel nacional.

3. Medidas Preventivas – Instituciones Financieras

14. Las obligaciones ALD/CFT abarcan a casi todas las categorías de instituciones financieras exigidas por el GAFI, salvo a los intermediarios de seguros. La calidad de la implementación, sin embargo, es superior en el sector bancario.

15. El régimen jurídico preventivo se encuentra contenido en la ley ALD de 2001, la ley CFT de 2005, los respectivos reglamentos de estas dos leyes, y en circulares, oficios y “guías” emitidas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Estas últimas tienen el carácter de “otros medios coercitivos” tal como se definen en la metodología de evaluación. Las más recientes circulares de la IVE incorporan la mayoría de los controles requeridos por el GAFI, e introducen por primera vez el concepto de administración del riesgo de LD y FT. En ellas se crea la obligación de incrementar los controles de DDC cuando el riesgo sea mayor, se detallan las medidas que deben tomarse con respecto a PEPs y los controles para sucursales y cuentas de corresponsalía. Aun no se ha hecho extensiva esta nueva regulación a todos los sujetos obligados, pues las autoridades han decidido cubrir primero a las instituciones financieras que involucran más riesgo y volumen de negocios en el sistema (especialmente bancos, compañías financieras y entidades off-shore).

16. Las disposiciones legales, reglamentarias y de otro tipo sobre conocimiento del cliente, debida diligencia continua, monitoreo de transacciones, reporte de operaciones sospechosas, controles internos y mantenimiento de registro, son bastante completas, aunque requieren ser aclaradas y complementadas en varios aspectos señalados en el informe, entre los que cabe destacar los siguientes: mayor detalle y claridad de la obligación de identificar al beneficiario real, especialmente cuando se trata de personas jurídicas;

17. Así mismo, existen dificultades prácticas que limitan la efectividad de la DDC por parte de los bancos, entre ellas la falta de confiabilidad del documento nacional de identificación, el alto nivel de informalidad de la economía y la cultura arraigada en la población de no suministrar información completa a los bancos por temor a tener que pagar más impuestos. También se encontró que la prevalencia de sociedades con acciones al portador y la falta de información completa y actualizada en el registro mercantil hacen difícil la labor de identificación del beneficiario real de los servicios financieros.

18. La Guía de Administración de Riesgo emitida por la IVE en abril de 2009, que constituye el lineamiento que aborda en forma directa el tema de los productos y servicios innovadores, y el tema de los canales de distribución (incluyendo las relaciones que no son cara a cara) no ha sido completamente implementada y aplica solamente a Bancos, Financieras y Offshore, por lo que las demás personas obligadas están desprovistas de una instrucción clara y específica al respecto.

19. En Guatemala, los Sujetos Obligados deben monitorear transacciones y relaciones con el propósito de detectar y analizar las que sean inusuales, de conformidad con parámetros y señales determinados en la ley y en los instructivos emitidos por la IVE, así como en sus propios Manuales de PLD/FT. De ello se deja constancia escrita a disposición de las autoridades competentes. No se establece expresamente para todas las instituciones la obligación de prestar atención especial a las relaciones comerciales y transacciones relacionadas con países que no apliquen satisfactoriamente las Recomendaciones del GAFI. En el caso de bancos, financieras y entidades off-shore, la Guía de Administración de Riesgos

LD/FT sí las obliga a evaluar sus riesgos a partir del factor geográfico, pero el lenguaje utilizado en esta circular debería ser más claro e imperativo.

20. La obligación de reportar operaciones sospechosas es suficientemente amplia y clara, tanto en relación con LD como con FT. En la práctica la abrumadora mayoría de RTS y RTE son enviados por bancos y es mínimo el número de RTS por FT, aunque la IVE ha recibido dos reportes en los que la institución reportante sospechaba de posible financiamiento de terrorismo. Con el propósito de mejorar la calidad de los RTS, la IVE desarrolló un procedimiento de verificación para la admisibilidad de los RTS desde julio 2008. Este filtro ha logrado que haya menos RTS reactivos, disminuyó ligeramente el número de RTS y aumentó la cantidad de RTS útiles para la construcción de casos enviados al Ministerio Público.

21. La IVE realiza la supervisión ALD/CFT de las instituciones financieras y de todos los demás sujetos obligados. Cuenta para ello con suficientes facultades legales y con la autoridad para imponer sanciones. Al momento de la visita ya había realizado 9 inspecciones a bancos (el 50% de los bancos existentes) usando una nueva metodología de supervisión basada en riesgos que fue diseñada con asistencia del FMI, y presentaba (aunque solo verbalmente) las conclusiones a las Juntas directivas de cada institución. No había iniciado todavía la práctica de notificar por escrito los resultados de sus inspecciones a las personas obligadas y no daba un seguimiento de las recomendaciones emitidas (cuestiones que ya están contempladas en la nueva metodología de supervisión pero que no habían sido implementadas aún). Debido a la insuficiencia de personal, la IVE no puede supervisar a la totalidad de las entidades que forman parte de los sectores obligados. También se encontró que el rango de sanciones pecuniarias y de otra índole debería ser más amplio, y debería ser más frecuente la imposición de sanciones pecuniarias.

22. El proceso de autorización previa de todas las instituciones bajo supervisión de la SIB impide que criminales lleguen a obtener la propiedad, control o funciones administrativas de una institución. Además todos los sujetos obligados, incluso los que no están bajo competencia de la SIB, tienen obligación de registrarse ante la IVE. Los negocios de transferencia de dinero o de valor, o de cambio de dinero o moneda, son sujetos obligados de acuerdo a las leyes ALD y CFT, sujetos a registro y supervisión de la IVE. La IVE ha auditado una parte significativa de las instituciones registradas y, aunque no es posible determinar si existen remesadoras informales que no estén registradas ante la IVE, su número es seguramente pequeño gracias al alto grado de bancarización de este servicio en Guatemala.

4. Medidas Preventivas – Negocios y Profesiones No Financieros Designados

23. Los APNFDs en Guatemala son negocios listados en la Ley CFT, la cual crea un régimen especial de personas obligadas de régimen especial (“PORES”) constituido por: a) Actividades de promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles; b) Actividades de compraventa de vehículos automotores; c) Actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos; d) Actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades; e) Notarios, Contadores Públicos y Auditores; y, f) Cualquier otra actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizada para el financiamiento del terrorismo. Hay negocios que están previstos como APNFD en los estándares internacionales pero que aún no son Sujetos Obligados en la legislación guatemalteca; como es el caso de los proveedores de servicios de societarios y los casinos.

24. Las APNFD en Guatemala, sólo están obligadas en el ámbito de la Prevención FT y no en el ámbito de la Prevención PLD, y tampoco quedan sujetas por Ley a la implementación de la política conozca a su cliente, a las medidas sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), ni a la conservación de registros, ni están obligados a presentar RTS sobre LD, ni a monitorear relaciones contractuales para detectar inusualidades tendientes a determinar patrones de LD. Hasta el momento el sector de las APNFD no cuenta con Programas de Prevención LD/FT que incluyan políticas y controles internos para

monitorear riesgos, capacitación y auditorías. Por otro lado, al estar iniciando el proceso de registro y primeros contactos con ciertos sectores de las APNFD, la IVE no puede aún cerciorarse sobre la implementación y efectividad de las políticas PLD/FT, ni hacer supervisión y seguimientos al respecto. Los notarios, contadores y auditores no han sido registrados ante la IVE para fines de PLD/FT. Los Abogados y los proveedores de servicios de sociedades no son Sujetos Obligados en Guatemala.

5. Personas y Estructuras Jurídicas, y Organizaciones Sin Fines de Lucro

25. Guatemala no ha desarrollado medidas suficientes de identificación de los beneficiarios reales o de control de las personas jurídicas, u otras medidas dirigidas a prevenir el uso indebido de las personas jurídicas en general y particularmente de aquellas que emiten acciones al portador para la consecución de actividades ilícitas relacionadas con el Lavado de Dinero o el Financiamiento del Terrorismo. Pese a los esfuerzos que con escasos recursos hace el Registro Mercantil, la información disponible al público no es lo suficientemente completa ni actualizada para determinar la identidad de los beneficiarios reales o de quienes ostenten el control de las personas jurídicas a través de la propiedad de acciones al portador o de Sociedades Anónimas en general.

26. En cuanto a fideicomisos, el Código de Comercio establece que solo podrán constituirse en fiduciarios los bancos e instituciones de crédito establecidos en territorio guatemalteco. Estos son objeto de regulación y supervisión en materia ALD/CFT por parte de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. Se les aplican las mismas normas generales ALD/CFT aplicables a todos los sujetos obligados, y algunas específicamente contenidas en un formulario obligatorio para el inicio de relaciones de fideicomiso.

27. Las autoridades no han evaluado las posibles vulnerabilidades de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) con respecto al LD o el FT. La legislación guatemalteca, en general, obliga al registro, licencias y controles contables y tributarios de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), cuya información está disponible para las autoridades competentes, e incluso para el público en general conforme la Ley de Acceso a la Información. Las OSFL que están sometidas a un mayor monitoreo son las que clasifican como Sujetos Obligados ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en razón del giro de su actividad: créditos, remesas y loterías, las cuales están obligadas a mantener archivos de sus transacciones por un período de cinco años. Existen otras OSFL que además son controladas por la Contraloría General de Cuentas la República en razón de manejar fondos públicos para ejecutar obras sociales.

6. Cooperación Nacional e Internacional

28. No existen grupos de trabajo interdisciplinarios a un nivel operativo para coordinar la lucha ALD/CFT. Tampoco existe un intercambio de inteligencia espontáneo y efectivo entre la IVE, la Unidad de Análisis, y las fiscalías de sección del Ministerio Público que conocen los casos de LD/FT. La comunicación entre el MP y la IVE está limitada al traslado de denuncias de la IVE a la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, a contestaciones de la IVE a requerimientos de ampliación de información del MP, y en algunos casos a diseminaciones espontáneas de informaciones mediáticas sobre LD de la IVE a la Fiscalía ante mencionada, salvo los recientes esfuerzos que han llevado a sostener reuniones periódicas con la Fiscalía de Lavado de Dinero. El proyecto de Acuerdo Gubernativo que crea la Comisión Nacional de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala, es un buen comienzo con respecto a la coordinación y cooperación interinstitucional de ALD/CFT [*Algunos meses después de la visita de evaluación Guatemala confirmó que ya fue promulgado este Acuerdo Gubernativo bajo el número 132-2010*].

29. Existe una serie de Tratados de Asistencia Legal Mutua (TALM) y otros instrumentos legales multilaterales suscritos y ratificados por la República de Guatemala que hacen posible a este país brindar una amplia cooperación judicial internacional en investigaciones y procesos penales por la presunta comisión de los delitos de Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo. El principio de Doble Incriminación, si bien es cierto rige como parte de los requisitos para la asistencia judicial mutua; el mismo no constituye un impedimento para brindar la asistencia judicial por la forma amplia con que es concebido el tipo penal base de Lavado de Dinero y otros activos, el cual no restringe a un catálogo cerrado de actividades ilícitas predeterminadas por la norma penal, el origen de los fondos. Esta situación definitivamente facilita la cooperación legal entre Guatemala y el resto de países.

7. Recursos y Estadísticas

30. Aunque la IVE recopila estadísticas adecuadas relacionadas con su trabajo como UIF y como Supervisor, no existe un sistema de recolección y análisis de datos en otras instituciones que le permita a las autoridades priorizar necesidades, planear una estrategia integral nacional, ni revisar la eficacia de su sistema ALD/CFT. El Ministerio Público no cuenta con un sistema de estadísticas establecido para darle seguimiento a la efectividad de investigaciones y condenas por LD-FT. No se conoce el número exacto, sino una estimación de las APNFDS. No hay estadísticas disponibles sobre cooperación con autoridades aduaneras de otros países para la detección de dinero o valores en frontera.

31. En materia de cooperación Guatemala solo aportó estadísticas agregadas sobre asistencia legal mutua, por un total de 1,482 solicitudes hechas y 251 enviadas por ellos. También informó la lista de países involucrados e indicó que estos números incluyen cualquier tipo de asistencia, desde solicitudes de información, hasta declaración de testigos, etc. No fue posible identificar el número de solicitudes por LD y FT, los tiempos de respuesta, el tipo de solicitud ni otros elementos para evaluar la efectividad de la cooperación ALD/CFT.

32. El equipo evaluador es optimista sobre la evolución de los planes existentes en el país para integrar y coordinar los esfuerzos de las distintas autoridades. Los esfuerzos y recursos para combatir la corrupción, modernizar el sistema judicial y combatir el crimen en general, deben redoblarse para crear los cimientos de un sistema ALD/CFT más eficaz.

1. GENERAL

1.1. Información general sobre Guatemala

Sistema de Gobierno

1. Guatemala es una República democrática, constitucional, independiente y unitaria (no federal). Tiene tres ramas del poder independientes: Ejecutivo, Legislativo, y Judicial. El Presidente, elegido por voto popular directo para períodos de cuatro años, no reelegible, es Jefe de Estado y de Gobierno y nombra autónomamente a su Consejo de Ministros. El poder Legislativo lo ejerce un Congreso unicameral, de 158 diputados elegidos por voto popular por sufragio directo cada cuatro años (al igual que el Presidente). El máximo órgano jurisdiccional es la Corte Suprema de Justicia, cuyos miembros son elegidos por el Congreso para períodos de cuatro años. Ésta nombra a los jueces de los tribunales inferiores. También existen, independientemente, la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral. Guatemala se subdivide en 22 Departamentos, cada uno con un gobernador nombrado por el Presidente, y un total de 333 municipios.



2. Guatemala está situada en la parte norte del Istmo Centroamericano, con acceso a los océanos Atlántico y Pacífico, y limita también con México, Belice, Honduras y El Salvador. Es el tercer país más extenso de América Central (108.889 Km² o 42,042 mi²).

3. La mayor parte de la población se concentra entre los 915 m y 2.440 m de altitud, donde los días son cálidos y las noches frías, con un promedio de temperatura anual de 20°C. La Capital es Ciudad de Guatemala.

4. Guatemala es el país más poblado de Centroamérica, con más de 12 millones de habitantes según el censo de 2002. Su población se caracteriza por ser principalmente pobre, rural, joven e indígena: 61% de los habitantes vive en zonas rurales y las etnias indígenas representan 41% de toda la población. Veintitrés idiomas se hablan en Guatemala, siendo el español la lengua oficial.

Sistema Legal y Jerarquía de Normas:

5. El sistema jurídico está basado en el derecho continental (o “derecho civil”) y la Corte Suprema de Justicia está facultada para revisar la legalidad y constitucionalidad de los actos administrativos expedidos por el Ejecutivo. El sistema penal es acusatorio, en el cual un fiscal conduce la investigación y sustenta posteriormente su acusación ante el juez. Las medidas cautelares que se requieran durante la etapa de investigación deben ser previamente autorizadas por un Juez de garantías (o juez “contralor”) a menos que las dicte el Fiscal por razones de urgencia ante “peligro de pérdida” del bien objeto de la medida, caso en el cual debe ser convalidada posteriormente por el juez.

6. La jerarquía normativa y los nombres usados en cada caso son, en su orden: 1.- Constitución Política (norma suprema a la cual todas las demás deben sujetarse), 2.- Derechos Humanos de rango constitucional, 3.- Leyes (llamadas “Decretos del Congreso”), 4.- Reglamentos expedidos por el

Ejecutivo (denominados “acuerdo gubernativo”), 5.- otros actos expedidos por el ejecutivo o por entidades con facultades regulatorias como la Superintendencia de Bancos: Circulares y Guías de obligatorio cumplimiento.

7. Las leyes que violen la Constitución pueden desaparecer del ordenamiento jurídico mediante sentencia de la Corte de Constitucionalidad. Los reglamentos que excedan el marco previsto en la ley correspondiente, son revocables por el Tribunal Constitucional competente. Y los actos administrativos expedidos pueden ser anulados por resolución judicial por tribunal competente cuando quiera que el organismo que lo expidió se extralimite en el ejercicio de las facultades regulatorias delimitadas en las leyes y/o los reglamentos.

8. El cuerpo normativo en materia ALD/CFT está compuesto principalmente por los siguientes elementos:

- Constitución Política de la República de Guatemala.
- **Leyes:** 1) La Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto Número 67-2001 del Congreso de la República (en adelante “Ley ALD”); 2) Ley Para Prevenir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto Número 58-2005 del Congreso de la República (en adelante “Ley CFT”); 3) el Código Penal; y 4) Código Procesal Penal, 5) Ley contra la Delincuencia Organizada, Decreto del Congreso 21-2006; 6) Ley del Organismo Judicial. En este mismo nivel se encuentran la Ley de Bancos y demás leyes que le asignan a la Superintendencia de Bancos (SIB) facultades de regulación prudencial.
- **Reglamentos:** 1) Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Acuerdo Gubernativo Número 118-2002 del Presidente de la República (“Reglamento ALD”); y 2) Reglamento de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Acuerdo Número 86-2006 del Presidente de la República (“Reglamento CFT”), ”), y Otros Acuerdos del Presidente de la República que modifican el Reglamento de la LCLD.
- **Otros medios coercitivos:** Circulares y Guías emitidas por la SIB. Se aclara desde ahora, que algunos de los criterios marcados con asterisco en la metodología, los cuales deberían estar plasmados en “ley o reglamento”, en Guatemala sólo constan en circulares y formularios que, aunque son de obligatorio cumplimiento, no tienen la jerarquía y estabilidad propias de la ley o el reglamento (específicamente los criterios 5.5.2.b y 5.4.a).

9. Conviene aclarar algunas importantes diferencias entre este sistema y el que se encuentra normalmente en las jurisdicciones de derecho consuetudinario anglosajón (“common law”). En Guatemala ocurre lo siguiente:

- Al igual que en la mayoría de países de derecho continental, la SIB no solamente ejerce supervisión sobre el sistema financiero en materia ALD/CFT, sino que está expresamente facultada por el Congreso para expedir regulaciones para sus vigilados, dentro del marco de acción indicado por las respectivas leyes y reglamentos ALD y CFT. El artículo 25 de la Ley ALD dispone que “... la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, podrá instruir a las personas obligadas, en la forma que considere pertinente, acerca de nuevas medidas que deberán implementar, dentro del ámbito de la legislación aplicable, para prevenir que su institución sea utilizada en el lavado de dinero u otros activos” Así mismo, el Reglamento de la Ley CFT dispone lo siguiente: “Artículo 14 - Instrucción de medidas administrativas: La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, podrá instruir a las personas obligadas a que se refieren los artículos 15 y 18 de la Ley, en la forma que considere pertinente, acerca de nuevas medidas que deberán implementar, incluyendo lo

referente a procedimientos de designación de personas cuyos activos o bienes se sospeche estén relacionados con el terrorismo, así como las medidas especiales que en tales casos deberán aplicarse. En virtud de lo anterior, las personas obligadas deberán efectuar las modificaciones en sus manuales de cumplimiento, cuando corresponda. El incumplimiento de dichas instrucciones será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley. ”.

- En desarrollo de lo anterior, las regulaciones ALD/CFT de la SIB han sido expedidas mediante “circulares” firmadas por el Intendente de Verificación Especial, las cuales normalmente llevan anexa una “Guía” o un formulario que contiene el detalle de los procedimientos, medidas, controles u obligaciones de cualquier tipo que se pretende detallar. A pesar de su nombre, lo dispuesto en estas *guías* es de obligatorio cumplimiento, y su incumplimiento acarrea sanciones administrativas (multas) que puede imponer la propia IVE.

10. Pese al carácter obligatorio de las Guías expedidas hasta el momento en materia ALD/CFT estas utilizan dos tipos de lenguaje distintos: a veces imponen obligaciones claras y explícitas a los bancos (ejemplo “deben estar en capacidad de establecer el perfil de riesgo...”), y otras veces simplemente enuncian los temas mínimos que los bancos “deben considerar” al elaborar, modificar o actualizar su programa de cumplimiento (*Guía sobre Administración de Riesgos de LD/FT* expedida en abril de 2009, y la Guía para Servicios de Banca Corresponsal y Sucursales en el Exterior, expedida en 2008). En el capítulo 3 de este informe se explican los casos en que esta situación tiene implicaciones para el cumplimiento de alguno de los criterios de la metodología de evaluación.

Historia reciente e Información Socio-Económica

11. Entre 1960 y 1996 Guatemala padeció una cruenta guerra civil. Tras el Acuerdo de Paz de 1996 el país se ha dado a la tarea de dismantelar paulatinamente los aparatos clandestinos de seguridad que se crearon durante la guerra y que son generadores de violencia y corrupción. Desde 1996 el sistema democrático se ha consolidado y se logró una notoria mejoría en indicadores tales como alfabetismo y mortalidad infantil. La crisis del café y la sequía de 2001 generaron un retroceso y la pobreza extrema aumentó al 21% en promedio en el año 2002, y en áreas rurales se alcanzó 31%. Sin embargo, de acuerdo con el Banco Mundial, “hasta antes del impacto de la crisis financiera global en el 2008, su crecimiento había sido relativamente estable en comparación con el resto de la región” (Banco Mundial, Perfil del País, www.worldbank.org.)

12. Guatemala se caracteriza por una concentración alta de riqueza, donde 64% del ingreso va al 20% de la población, y es el segundo país más desigual en América Latina. Con un coeficiente GINI de 58,3 [2] el país tiene uno de los indicadores de desarrollo humano más bajos en el continente (0,640). De acuerdo a la ENCOVI 2006², el 51% de la población es considerada pobre. Este indicador es mejor al observado en el año 2000 el cual se situó en 56%, sin embargo los niveles de pobreza extrema se mantuvieron estables.

Indicadores Sociales 2007					
Ingreso Pércapita (US\$)		Esperanza de Vida		Mortalidad Infantil (por 1000 niños nacidos)	
Guatemala	LA	Guatemala	LA	Guatemala	LA
\$ 2,440	\$ 5,540	70	73	31	22

Fuente: Banco Mundial, citada por las autoridades en su cuestionario

Pobreza extrema	
Guatemala (2006)	LA (2007)
54.8	34.1

² Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2006, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

13. Guatemala se caracteriza también por poseer una de las cargas tributarias más bajas de Latinoamérica. La baja carga tributaria se debe principalmente, según las autoridades, a la debilidad de los controles sobre la evasión y a la proliferación de exoneraciones y exenciones.

14. La economía es pequeña y abierta, y las medidas de apertura comercial (la cual es en todo caso menor a la de sus pares centroamericanos) se han visto reflejadas en un mayor volumen de intercambio comercial.

15. En adición a la apertura económica, Guatemala también ha logrado un alto grado de apertura financiera de acuerdo a cálculos realizados por CABI³ con base en la metodología de Chinn e Itto⁴. El mercado de capitales, en cambio, no se ha vinculado al mercado internacional gracias a lo cual no fue objeto de pérdidas por inversión en activos tóxicos durante la reciente crisis mundial, aun cuando se desconocen los montos de pérdidas que hayan podido tener inversionistas individualmente considerados. Sin embargo, en el año 2006 uno de los principales bancos del país (Bancafé) tuvo que ser intervenido y liquidado tras invertir y perder sumas muy importantes de dinero en fondos de capital de riesgo (hedge funds) del exterior.

Transparencia, gobernabilidad y combate a la corrupción.

16. De acuerdo al informe de la agencia calificadora Fitch, “Las principales debilidades del país, incluyen su baja carga tributaria, un alto nivel de pobreza y desigualdad, así como unos indicadores sociales y de gobernabilidad débiles...”.⁵

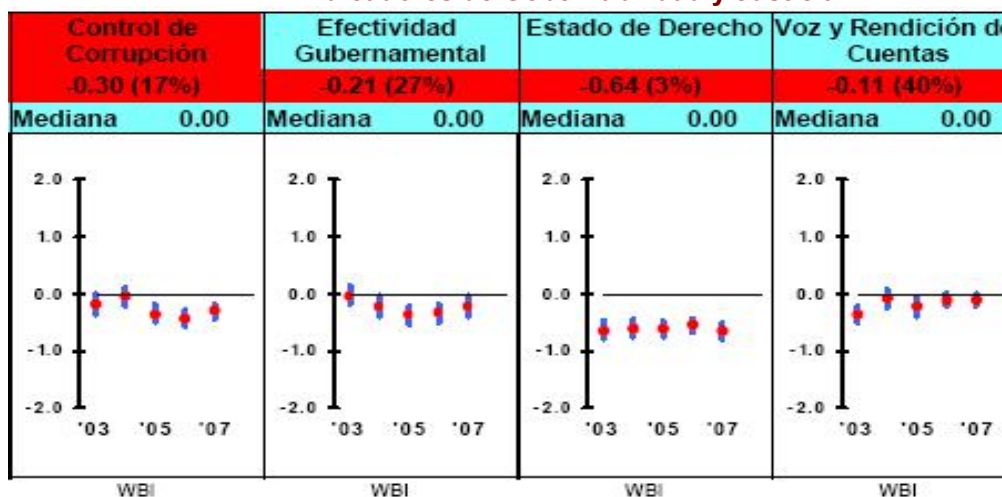
17. El World Bank Institute (WBI), elaboró un índice para medir la calidad del Estado de Derecho del que gozan los ciudadanos de un país. En este índice, un país con una calificación de 2.0 es un país en el que se respeta plenamente el Estado de Derecho. Por el contrario, un país con una calificación de -0.2 es un país en el cual se vive en la anarquía total. Para el caso de Guatemala, el WBI le otorga una calificación de -0.64 en términos de respeto al Estado de Derecho. La débil institucionalidad del país, también es un factor de riesgo alto. Tiene que ver con la escasa aplicación de la ley y con la ausencia de certeza en el castigo.

³ Central American Business Intelligence. CABI evaluó a 177 países de todo el mundo. La calificación más alta la obtuvo Guatemala con 2.6 al igual que 37 países más. La calificación más baja fue de -1.77.

⁴ Autores que se han dedicado a la investigación de metodologías para el cálculo de la apertura financiera.

⁵ Fitch Ratings. Análisis de Riesgo Soberano de Guatemala. www.fitchratings.com

Indicadores de Gobernabilidad y Justicia



1.2. Situación General sobre el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo

18. La corrupción, la debilidad del aparato judicial, y el impacto del narcotráfico y otras actividades criminales, se combinan con la pobreza para aumentar la vulnerabilidad respecto a operaciones de lavado de dinero.

19. De acuerdo al mapa de narcoactividad proporcionado por las autoridades, una de las principales rutas está ubicada en la región norte y noroccidente del país la cual coincide con las dos áreas con mayores niveles de pobreza extrema, constituyéndose en un factor de riesgo que las autoridades han identificado proactivamente.

20. De acuerdo con el Banco Mundial: “El gobierno ha tomado medidas importantes para mejorar la transparencia de las instituciones públicas tanto a nivel nacional como municipal. Pero los esfuerzos por reducir el crimen y la violencia, combatir la corrupción y modernizar el sistema judicial necesitan continuar para hacer más propicio el clima empresarial y mejorar la confianza del público”

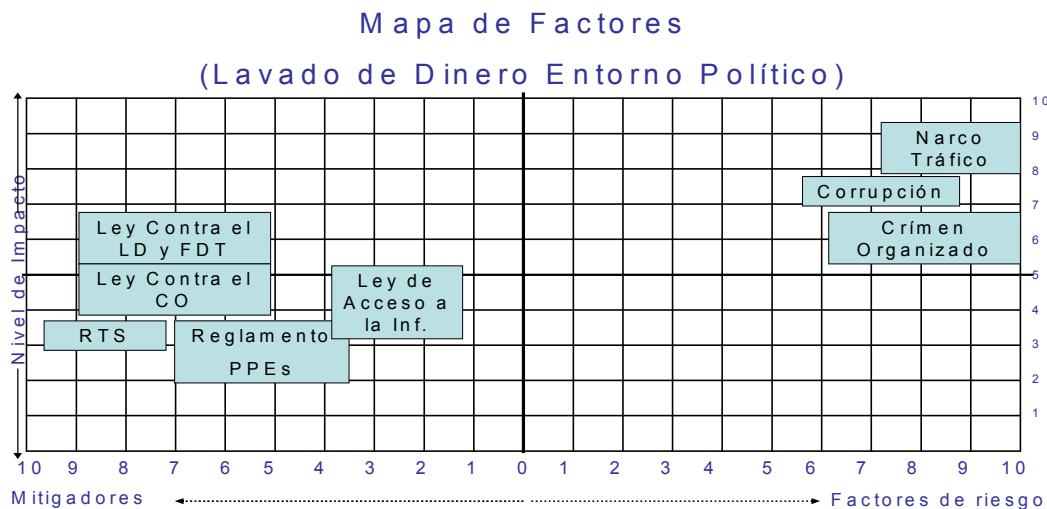
21. Se han llevado a cabo esfuerzos importantes en materia legislativa. Aparte de la legislación vigente que busca prevenir el delito de Lavado de Dinero y el financiamiento del terrorismo, en el año 1996 se estableció el delito de defraudación tributaria.

22. Informaron las autoridades que está en desarrollo un nuevo *Sistema de Monitoreo y Denuncias de actos de corrupción*, que es una herramienta valiosa para que tanto los directamente afectados como la sociedad civil en general, pueden poner a prueba, a las instituciones encargadas de velar por la probidad de los actos públicos. La nueva *Ley de Libre Acceso a la Información* también favorecerá la transparencia de los actos públicos y puede servir como un desincentivo para cometer actos al margen de la ley. El desafío será implementarla y que efectivamente los ciudadanos hagan uso de ella.

23. Otras iniciativas que se espera tengan efectos positivos en materia de combate al LD, son una propuesta de Ley para normar y transparentar la integración de las comisiones de postulación a los cargos principales en el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de Cuentas, así como Reformas pendientes a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

24. Fue comunicado a la misión evaluadora, que pese a que la Legislación contra el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala contempla este delito en particular desde el año 2005, a la fecha no se han detectado casos de Financiamiento del Terrorismo en el país. Sin embargo, en la evaluación de Riesgo País realizada por Guatemala, los consultores consideraron muy baja la probabilidad de que el territorio guatemalteco sea utilizado con propósitos de financiamiento del terrorismo teniendo en cuenta la información estadística disponible en el país, su historia, su posición geográfica, condiciones sociales, políticas y culturales. Esto podría explicar la ausencia de investigaciones por FT en el pasado, y en opinión del equipo evaluador las conclusiones del estudio son razonables. Ello no impide que en el futuro cambien las circunstancias y aumente el riesgo de FT, y por ello las autoridades están empeñadas en fortalecer los mecanismos para prevenir este fenómeno.

25. Las autoridades resumieron su visión de los principales factores generadores y mitigadores del riesgo de lavado de dinero en la siguiente gráfica:



1.3. Panorámica del Sector Financiero

26. Aunque el nivel de profundización financiera del país es relativamente bajo, el sistema financiero ha venido creciendo en cobertura geográfica, en un esfuerzo por mejorar el servicio a sus clientes y bancarizar a la población rural, que representa el 61% del total nacional. Posee puntos de servicio en áreas urbanas de toda la República, aunque con una alta concentración en el área metropolitana. Asimismo las APNFD, principalmente las dedicadas a la venta de bienes inmuebles están concentradas en áreas urbanas.

27. Los **bancos** más importantes del sistema (medido por el nivel de activos) compiten con productos y servicios financieros similares, y tratan de diferenciarse por medio de otros atributos: puntos de servicio, servicio personalizado, precio, etc.

28. La mayoría de bancos puede ser considerada como bancos universales, atendiendo a casi todos los segmentos.

29. Existe una categoría de **bancos “off-shore”** en Guatemala con la característica especial de que el dinero de los clientes (normalmente guatemaltecos con depósitos promedio de US\$100,000) legalmente se considera depositado en el país extranjero en el cual está la casa matriz, y no en Guatemala. Además de captar depósitos, los bancos off-shore también otorgan préstamos a clientes residentes en Guatemala. Estos bancos fueron creados en el 2002 con el objeto de poder aprovechar

para el desarrollo del país el ahorro que los guatemaltecos pudientes mantenían en bancos del exterior para evitar el antiguo control de cambios y las frecuentes devaluaciones. Al momento de la visita se calculaba en US\$2,500 millones el valor total de los préstamos otorgados por estos bancos en Guatemala.

30. El equipo evaluador no encontró limitaciones al cumplimiento de la normativa ALD/CFT derivadas del régimen especial de estas instituciones. Los bancos “off-shore” están sujetos a las mismas regulaciones ALD/CFT de cualquier banco doméstico, y la IVE puede acceder a cualquier tipo de información acerca de sus clientes, tanto en el ejercicio de su función como Unidad de Inteligencia Financiera, como cuando supervisa el cumplimiento de las normas ALD/CFT. La SIB solamente otorga licencia a los bancos off-shore cuya matriz se encuentre en un país con el cual tenga memorandos de entendimiento para el intercambio de información. Actualmente existen 7__ entidades off-shore, cuyas matrices se encuentran en Panamá, Bahamas y Puerto Rico.

31. En congruencia con el supuesto legal de que el dinero de los depositantes se encuentra en el exterior y bajo las leyes del país extranjero, la Superintendencia de Administración Tributaria no puede acceder a información de los clientes de los bancos off-shore. Igualmente, la Superintendencia de Bancos (SIB), cuando supervisa el cumplimiento de regulaciones en materia prudencial, sólo puede acceder a información sobre préstamos y demás operaciones activas del banco off-shore, mas no a las operaciones pasivas (i.e depósitos de sus clientes). Ninguna de estas restricciones es aplicable a la IVE, y tampoco al Ministerio Público cuando investigan operaciones sospechosas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, ni a la IVE cuando supervisa el cumplimiento de la regulación ALD/CFT.

32. Existen aproximadamente 216 **cooperativas de ahorro y crédito** activas, las cuales se encuentran sujetas a regulación y supervisión de la IVE para propósitos ALD/CFT. Estas cooperativas deben obtener autorización previa y registro ante el Instituto Nacional de Cooperativas (INACOOOP). Adicionalmente, la Inspección Gubernamental de Cooperativas, INGECOOP, tiene a su cargo la inspección de todas las cooperativas en Guatemala y ocasionalmente incorpora temas de ALD/CFT en sus inspecciones, pero no es una entidad especializada en las actividades de intermediación financiera. El total de activos de las cooperativas de ahorro y crédito a marzo del 2009 se estima en Q 5,290.53 millones de Quetzales.

33. El número y volumen de negocios de las **casas de cambio** se ha reducido significativamente desde que entró en vigencia la Ley de Libre Negociación de Divisas en el año 2001. Esta ley faculta a los bancos a realizar las mismas operaciones de las casas de cambio, y además permite que las operaciones bancarias pueden ser realizadas libremente en moneda extranjera, lo cual reduce la necesidad de los clientes de realizar operaciones cambiarias. A marzo de 2009 sólo una casa de cambio se encontraba operando, con utilidades de Q0.5 millones anuales (aprox. US\$61,000).

34. Desde el 2002 se han registrado ante la IVE 41 **empresas remesadoras**, algunas de las cuales ya no están en operación. De acuerdo con los formularios enviados a la IVE, en 2009 estas empresas movilizaron US\$93.5 millones en transacciones iguales o superiores a US\$2,000. Se desconoce el número de remesadoras que existen en el país que no han cumplido su obligación de registrarse ante la IVE, pero se estima que debe ser mucho mayor a las 41 registradas teniendo en cuenta el alto volumen de remesas de trabajadores residentes en el exterior, calculado en US\$2.200 millones anuales. Conviene anotar que uno de los bancos del sistema, el Banrural, concentra aproximadamente el 50% de estas remesas. Como elemento mitigador la IVE ha exigido en la Guía de Administración de Riesgos que los Bancos pongan especial atención cuando las operaciones realizadas son con empresas de remesas.

35. El **mercado bursátil** en Guatemala no realiza operaciones sofisticadas y su tamaño relativo es muy pequeño. Existen 18 casas de bolsa, todas las cuales deben ser supervisadas por la IVE para

propósitos de cumplimiento ALD/CFT. La Bolsa de Valores, como empresa privada, también ejerce una supervisión desde el punto de vista de las reglas de operación de este mercado. Cuatro de las 18 casas de valores no pertenecen a ningún grupo financiero y por lo tanto no reciben supervisión prudencial por parte de la SIB, pero ello no las exime de supervisión ALD/CFT por parte de la IVE. El número de clientes de estas 4 casas de bolsa independientes es de aproximadamente 40 cada una.

36. Se trata de un mercado principalmente de renta fija (casi no se negocian acciones), y predominan los títulos de deuda pública, emitidos por el Gobierno nacional y por el Banco Central. Únicamente 15 o 16 empresas han emitido bonos y éstos no superan los \$150,000 en total. Se realizan transacciones diarias principalmente de Mercado Primario y Reportos y el volumen negociado en el 2008 fue de \$USD 22,589.000 , valor que en un gran porcentaje constituye transferencias de títulos entre distintas empresas de un mismo grupo financiero, vigiladas por la SIB.

37. **Otras actividades financieras** que también están sometidas a regulación y supervisión ALD/CFT, pero que no tienen supervisión prudencial de la SIB ni requieren licencia de funcionamiento, son: emisión de tarjetas de crédito, arrendamiento financiero (“leasing”), descuento de cartera (“factoring”) y transferencias de fondos.

38. **Cubrimiento de la Regulación ALD/CFT:** Como se observa en la siguiente tabla, todas las actividades financieras descritas en el glosario de la metodología del GAFI, excepto los corredores y agentes de seguros, son sujetos obligados en Guatemala y se encuentran sometidos a la regulación y supervisión de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. El sector bancario es muchísimo más grande que el resto.

Actividades Financieras según el Glosario del GAFI: tamaño y regulación ALD/CFT

Actividad financiera	Tipo de Institución	Cantidad	Activos USD	Obligado ALD/CFT	Autoriza/Supervisa
1. Aceptación de depósitos	1. Bancos	20	25,066,095,727	Si	SIB (IVE)
	2. Financieras	14	730,154,113	Si	SIB (IVE)
	3. Offshore	7	2,713,427,009	Si	SIB (IVE)
	4. Cooperativas	256	791,836,619	Si	SIB (IVE)
2. Préstamos. 1/	1. Bancos	19	16,806,047,084	Si	SIB (IVE)
	2. Financieras	14	730,154,113	Si	SIB (IVE)
	3. Offshore	7	2,713,427,009	Si	SIB (IVE)
	4. Casas de Empeño	1	2,710,665	Si	SIB (IVE)
	5. Cooperativas	256	791,836,619	Si	INCOOP/ IVE*
	6. Tarjetas de Crédito	9	530,170,129	Si	SIB (IVE)
	7. Financiadoras	1	13,311,720	Si	SIB (IVE)
3. Leasing financiero 2/	1. Bancos	3	6,506,159,298	Si	SIB (IVE)
	2. Financieras	3	104,039,937	Si	SIB (IVE)
	3. Offshore	2	1,520,927,462	Si	SIB (IVE)
	4. Arrendadoras	8	163,675,651	Si	SIB (IVE)
4. Transferencia de dinero o valores 3/	1. Bancos	20	25,066,095,727	Si	SIB (IVE)
	2. Offshore	7	2,713,427,009	Si	SIB (IVE)
	3. Cooperativas	22	625,796,312	Si	INCOOP/ IVE*
	4. Remesadoras *	12	130,612,031	Si	SIB (IVE)
5. Medios de emisión y gestión	1. Bancos	20	25,066,095,727	Si	SIB (IVE)

de pagos (por ej: tarjetas crédito o débito, cheques, cheques de viajero, órdenes de pago y giros bancarios, dinero electrónico)	2. Offshore	7	2,713,427,009	Si	SIB (IVE)
	3. Tarjetas Crédito	9	530,170,129	Si	SIB (IVE)
6. Garantías y compromisos financieros 4/	1. Bancos	16	16,457,797,757	Si	SIB (IVE)
	2. Financieras	10	650,455,156	Si	SIB (IVE)
	3. Offshore	7	2,713,427,009	Si	SIB (IVE)
	4. Afianzadoras	11	73,138,562	Si	SIB (IVE)
	5. Almacenadoras	1	1,226,123	Si	SIB (IVE)
7. Negociación de:	1. Bancos	20	25,066,095,727	Si	SIB (IVE)
a) Instrumentos monetarios (cheques, pagarés, cd, derivados, etc.); 5/	2. Financieras	14	730,026,360	Si	SIB (IVE)
	3. Offshore	7	2,713,427,009	Si	SIB (IVE)
	4. Casas de Bolsa	9	10,279,400	Si	SIB (IVE)
b) divisas extranjeras 6/	1. Bancos	20	25,066,095,727	Si	SIB (IVE)
	2. Financieras	10	669,546,717	Si	SIB (IVE)
	3. Offshore	2	489,409,064	Si	SIB (IVE)
	4. Cooperativas	8	261,378,198	Si	SIB (IVE)
c) Instrumentos de tasas de cambio, tasas de interés e índices 7/	1. Bancos	13	12,882,716,370	Si	SIB (IVE)
	2. Financieras	5	95,579,236	Si	SIB (IVE)
	3. Casas de Bolsa	2	7,741,952	Si	SIB (IVE)
d) títulos valores transferibles	1. Casas de Bolsa	21	21,956,606	Si	SIB (IVE)
e) negociación de productos y futuros 8/	1. Bancos	4	10,140,297,361	Si	SIB (IVE)
	2. Casas de Bolsa	3	63,672,883	Si	SIB (IVE)
8. Participación en la emisión de títulos y la prestación de servicios financieros vinculados a tales emisiones 9/	1. Bancos	12	19,036,573,293	Si	SIB (IVE)
	2. Financieras	11	682,996,412	Si	SIB (IVE)
	3. Offshore	2	431,559,793	Si	SIB (IVE)
	4. Almacenadoras	8	12,957,252	Si	SIB (IVE)
	5. Casas de Bolsa	10	13,900,920	Si	SIB (IVE)
9. Manejo de carteras individuales y colectivas 10/	1. Bancos	14	15,447,307,612	Si	SIB (IVE)
	2. Financieras	10	558,855,652	Si	SIB (IVE)
	3. Offshore	1	194,575,868	Si	SIB (IVE)
	4. Casas de Bolsa	5	10,454,380	Si	SIB (IVE)
10. Custodia y administración de efectivo o valores en nombre de otros 11/	1. Bancos	17	24,839,322,746	Si	SIB (IVE)
	2. Casas de Bolsa	12	92,591,024	Si	SIB (IVE)
11. Otras formas de inversión, administración o manejo de fondos en nombre de otros 12/	1. Bancos	14	93,047,245,724	Si	SIB (IVE)
	2. Casas de Bolsa	7	9,926,086	Si	SIB (IVE)
12. Seguros	1. Aseguradoras	17	444,921,153	Si	SIB (IVE)
13. Cambio de Dinero/Divisas	2. Casas de Cambio	1	1,275,414	Si	SIB (IVE)

1/ Solo 19 bancos realizan como actividad la de otorgar préstamos al público con excepción del Banco Central

2/ Se incluyen únicamente aquellas entidades que en la práctica realizan leasing financiero

3/ Se incluye solo las cooperativas que prestan este servicio

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/ Se incluye solo aquellas entidades que en la práctica realizan este servicio

5/ Se incluye solo aquellas casas de bolsa que en la práctica realizan este servicio

* INACOOB es el Instituto Nacional de Cooperativas

* 92% de activos de remesadoras corresponde a 2 entidades cuya actividad principal es venta de electrodomésticos y apoyo a la microempresa.

1.4. Panorámica de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas

39. En la actualidad, el artículo 18 del Decreto No. 58-2005 del Congreso de la República crea un régimen especial de personas obligadas constituido por: a) Actividades de promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles; b) Actividades de compraventa de vehículos automotores; c) Actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos; d) Actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades; e) Notarios, Contadores Públicos, Auditores y Contadores; y, f) Cualquier otra actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizada para el financiamiento del terrorismo.

40. Estas actividades, denominadas PORES (“personas obligadas bajo régimen especial”), no están obligadas en el ámbito de la prevención LD y tampoco sujetas a la implementación de la política conozca a su cliente, las medidas sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP’s), ni la conservación de registros, que establecen las Recomendaciones de GAFI.

41. Determinadas actividades del sector APNFD están incluidas en un Régimen Especial de prevención FT, establecido en el artículo 18 del Decreto No. 58-2005 del Congreso de la República, que los obliga al cumplimiento de obligaciones mínimas en el ámbito FT. Este régimen especial es una solución parcial para la prevención LD en el sector APNFD.

42. Actualmente se estudia Modificar el artículo 18 del Decreto No. 67-2001 del Congreso de la República para incluir entidades del sector APNFD dentro del régimen general de personas obligadas de la normativa LD-FT.

43. La siguiente tabla resume la información disponible acerca de APNFDs, y se observa todas estas actividades, salvo las profesiones de abogado y de proveedor de servicios societarios, están reguladas total o parcialmente para propósitos ALD/CFT.

APNFDs	Información sobre esta actividad	Obligado ALD/CFT	Autoriza/
(Según Glosario GAFI)		(si o no)	Supervisa
Casinos	En Guatemala los casinos son ilegales. Guatemala cuenta como sujetos obligados a 3 loterías, rifas y similares autorizadas por el Ministerio de Gobernación.	Si	Superintendencia de Bancos - IVE-
Agentes bienes raíces	Registradas ante la IVE, 322 con activos aproximadamente de US\$ 96.2 millones.	Si, solo CFT	Superintendencia de Bancos - IVE-
Agentes metales y piedras preciosas	Registradas ante la IVE, 76 con activos aproximadamente de US\$ 8.0 millones.	Si, solo CFT	Superintendencia de Bancos - IVE-
Notarios	En Guatemala los egresados en leyes obtienen el título de Abogado y Notario, existen aproximadamente 13,000	Si, solo CFT	Superintendencia de Bancos -

	profesionales.		IVE-
Abogados	En Guatemala los egresados en leyes obtienen el título de Abogado y Notario, existen aproximadamente 13,000 profesionales.	Si, solo CFT	Superintendencia de Bancos - IVE-
Profesionales legales independientes	N/A	N/A	N/A
Contadores	Existen aproximadamente 10,000 profesionales.	Si, solo CFT	Superintendencia de Bancos - IVE-
Proveedores de servicios societarios	N/A	N/A	N/A
Proveedores fiduciarios	Bancos y Sociedades Financieras son los únicos autorizados para prestar estos servicios. Ver tabla de instituciones financieras	Si	Superintendencia de Bancos - IVE-
Actividades de compraventa de vehículos automotores	Registradas ante la IVE, 96 con activos aproximadamente de US\$ 185.9 millones.	Si, solo CFT	Superintendencia de Bancos - IVE-
Actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades;	Registradas ante la IVE, 37 con activos aproximadamente de US\$ 1.6 millones.	Si, solo CFT	Superintendencia de Bancos - IVE-

1.5. Panorámica sobre personas jurídicas y otras figuras jurídicas

44. **Sociedades anónimas.** Se encuentra ampliamente diseminado el uso de las sociedades anónimas y acciones al portador dentro del sistema jurídico mercantil, regulado por el Código de Comercio, Decreto No. 2 de 1970 del Congreso de la República. Sin embargo la desactualización de la legislación de sociedades, la lentitud del proceso para crear compañías y las características fiscales (impuestos) en Guatemala no parecen propicias para ofrecer los servicios propios de proveedores profesionales de servicios corporativos.

45. En datos estadísticos oficiales del Registro Mercantil General de la República de Guatemala, se estableció que en un período aproximado de 10 años (enero 1999- marzo 2009), se registraron 41,965 sociedades mercantiles nacionales, que en un porcentaje mayoritario se cree que son sociedades anónimas (no fue posible obtener información precisa al respecto). En el mismo período se emitieron más de 28,156 acciones, la mayoría de las cuales se presume que son acciones al portador.

46. El uso de las sociedades anónimas y acciones al portador para la realización de operaciones LD-FT, en opinión de las autoridades encargadas de la persecución penal y administración de justicia, tiene incidencia negativa en Guatemala.

47. Se están desarrollando propuestas específicas con relación a lo siguiente:

- Estudiar un mecanismo legal para atenuar la utilización de estos instrumentos legales;
- Estudiar la elaboración de un proyecto de reformas al Código de Comercio, Decreto No. 2-70 del Congreso de la República, para suprimir las acciones al portador;
- Proyecto de Reforma al Código de Comercio, elaborado por la Superintendencia de Bancos y remitido al Congreso de la República, en el cual se establece la creación obligatoria de un Registro de Acciones al portador en las Sociedades Anónimas y se modifica el contenido del

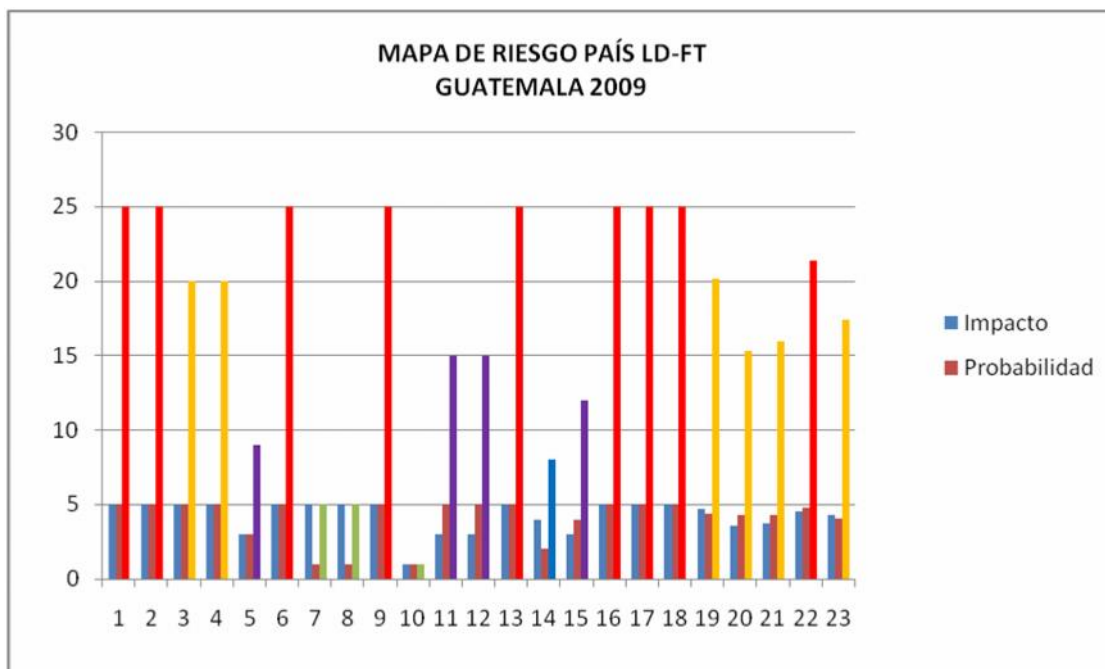
artículo 21 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos a efecto de otorgar a las personas obligadas la facultad de requerirle al cliente la información contenida en dicho registro.

1.6. Panorámica sobre estrategia contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

a. Estrategias y Prioridades ALD/CFT

48. Con el propósito de establecer estrategias exitosas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del Terrorismo, Guatemala contrató consultores cuyo objetivo central fue la construcción de una Matriz o “Mapa” de Riesgo LD/FT. Esto se enfocó desde la perspectiva política, jurídica, económico-financiera y, finalmente, desde la criminalidad subyacente. Cada una de estas áreas, para propósitos del estudio de referencia, se focalizó exclusivamente en los elementos provenientes de dichos campos especializados, que tuvieran relación directa o indirecta con los delitos que se trata de prevenir.

49. Para este estudio se tomó como base la *Guía del Enfoque Basado en Riesgo* elaborada por el GAFI, en la que se identificaron 4 áreas a evaluar y 14 factores de riesgo específicos.



No.	Área a Considerar	No.	Área a Considerar
1	Entorno Jurídico	13	Áreas clandestinas. Informales de la Economía
2	Actividad Delictiva y tipos de delitos	14	Dimensión comportamiento sector servicios financieros
3	Estructura. Instituciones. Financieras y Negocios. de los APNFD	15	Naturaleza de sistemas pago operaciones en efectivo
4	Sector actividades no financieras designadas	16	Corrupción.
5	Estructura económica del país	17	Debilidad institucional
6	Sector economía legal afectada.	18	Financiamiento partidos políticos.
7	Estructura instituciones financieras	19	Narcotráfico
8	Acuerdos gobernabilidad	20	Tráfico ilegal
9	Dimensión y naturaleza de. APNFD	21	Robos
10	Distribución sector Financiero	22	Delincuencia organizada
11	Tipo de Productos y Servicios. Instituciones	23	Promedio general

	financieras		
12	Tipo de clientes atendidos.		

50. En función de lo anterior se ha trazado una estrategia de ruta que, según las autoridades, se ha seguido meticulosamente. Es importante mencionar que el fruto de este esfuerzo, liderados por la SIB con el apoyo del Vicepresidente de la República, dependerá de poder crear una estructura de coordinación interinstitucional, un mecanismo formal que garantice mantener el impulso de las actividades definidas en esta matriz de riesgos para las distintas instituciones del Gobierno. Al momento de la visita existía un borrador de Acuerdo Gubernativo al respecto. Tampoco se estaban generando estadísticas adecuadas que permitan establecer metas, hacer seguimiento y medir sus resultados.

b. Marco institucional para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

51. A continuación se describe el papel que juegan las distintas entidades estatales involucradas en el combate al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en Guatemala.

- **Ministerio Público:** Es una institución creada por la Constitución Política de la República de Guatemala, auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyo fin principal es velar por el estricto cumplimiento de las leyes. El jefe del Ministerio Público es el Fiscal General, a quien le corresponde la acción penal pública. Los Auxiliares Fiscales bajo su dirección son quienes lideran las investigaciones penales, recopilan las pruebas del delito y presentan la acusación ante los tribunales. El Ministerio Público es también la autoridad central designada para la asistencia judicial mutua con otros países.
- **Superintendencia de Bancos:** Es un órgano de Banca Central, organizado conforme la ley; eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás entidades que otras leyes dispongan. La Superintendencia de Bancos tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, goza de la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de sus fines, y para velar porque las personas sujetas a su vigilancia e inspección cumplan con sus obligaciones legales y observen las disposiciones normativas aplicables en cuanto a liquidez, solvencia y solidez patrimonial.
- **Intendencia de Verificación Especial.** Es la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala y al mismo tiempo la entidad encargada de supervisar que los sujetos obligados cumplan las obligaciones ALD/CFT en el ámbito administrativo. Se encuentra dentro de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos pero es la única Intendencia cuya creación y funciones están consignadas directamente en una Ley de la República.
- **Policía Nacional Civil:** La Policía Nacional Civil es una institución profesional armada que, en materia ALD/CFT, está llamada a apoyar las investigaciones penales dirigidas por el Ministerio Público.
- **Dirección General de Inteligencia Civil:** Tiene como principales funciones la de planear, recolectar y obtener información, procesarla, sistematizarla y analizarla, transformándola en inteligencia; obtener, evaluar, interpretar y difundir la inteligencia para proteger del crimen organizado y delincuencia común, los intereses políticos, económicos, sociales, industriales, comerciales, tecnológicos y estratégicos de la República de Guatemala, dentro del área de inteligencia que le corresponde; proporcionar al Ministerio de Gobernación asesoría en el área de la inteligencia civil, para la toma de decisiones y la formulación de políticas y planeamientos para apoyar la prevención, control y combate del crimen organizado y de la delincuencia común, entre otras.

- **Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado:** Es la encargada de sugerir la creación de estrategias sugeridas al Presidente de la República con el objetivo de eliminar cualquier amenaza que genere intranquilidad en Guatemala y sus habitantes; y con el objetivo de implementar estrategias que permitan la conservación de la gobernabilidad del país. Es de naturaleza civil y actúa bajo la directa responsabilidad del Presidente de la República como máximo representante de la unidad nacional.
- **Inspección General de Cooperativas:** Tiene por objetivo cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables a las asociaciones cooperativas y demás instituciones sujetas a su control; Revisar regularmente las operaciones de las asociaciones cooperativas, efectuando inspecciones, arqueos y otras verificaciones convenientes, las cuales deberán realizarse por lo menos una vez al año y sin previo aviso; hacer a las asociaciones bajo su control las sugerencias o recomendaciones que estime convenientes; impartir las instrucciones necesarias para subsanar las deficiencias o irregularidades que se encontraren; y adoptar las medidas que estime convenientes para sancionar y corregir las infracciones que se hubieren cometido; entre otras.
- **Banco de Guatemala:** El Banco de Guatemala es el Banco Central de la República. Tiene como objeto fundamental, contribuir a la creación y mantenimiento de las condiciones más favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional, para lo cual, propiciará las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias que promueven la estabilidad en el nivel general de precios. No tiene facultades de regulación ni supervisión en materia ALD/CFT y, por el contrario, se le considera un “sujeto obligado” a establecer controles ALD/CFT.
- **Procuraduría General de la Nación:** Tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales. El Procurador General de la Nación ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría General de la Nación. No tiene funciones directas en materia ALD/CFT.
- **Contraloría General de Cuentas;** Tiene a su cargo la fiscalización en forma externa de los activos y pasivos, derechos, ingresos y egresos y, en general todo interés hacendario de los Organismos del Estado, entidades autónomas y descentralizadas, las municipalidades y sus empresas, y demás instituciones que conforman el sector público no financiero; de toda persona, entidad o institución que reciba fondos del Estado o haga colectas públicas; de empresas no financieras en cuyo capital participe el Estado, bajo cualquier denominación. También están sujetos a su fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier persona nacional o extranjera que, por delegación del Estado, reciba, invierta o administre fondos públicos, en lo que se refiere al manejo de estos. Además debe velar por la probidad, transparencia y honestidad en la administración pública, así como también por la calidad del gasto público.
- **Ministerio de Relaciones Exteriores;** Depende del Organismo Ejecutivo y le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a la representación diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca; la demarcación del territorio nacional; los tratados y los convenios internacionales, y los asuntos diplomáticos y consulares. Este Ministerio se encarga de enviar a la IVE las comunicaciones relacionadas con las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
- **Ministerio de Gobernación;** Depende del Organismo Ejecutivo y le corresponde la función de formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público. La seguridad de las personas y de sus bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes y resoluciones judiciales, el régimen migratorio y refrendar los nombramientos de los ministros de Estado incluyendo el de quien lo suceda en el cargo.

- **Superintendencia de Administración Tributaria:** Entre otras funciones se encuentran las siguientes: a) Ejercer la administración del régimen tributario, aplicar la legislación tributaria, la recaudación, control y fiscalización de todos los tributos internos y todos los tributos que gravan el comercio exterior, que debe percibir el Estado, con excepción de los que por ley administran y recaudan las municipalidades; b) Administrar el sistema aduanero de la República de conformidad con la ley, los convenios y tratados internacionales ratificados por Guatemala, y ejercer las funciones de control de naturaleza paratributaria o no arancelaria, vinculadas con el régimen aduanero; c) Establecer mecanismos de verificación de precios, origen de mercancías y denominación arancelaria, a efecto de evitar la sobrefacturación o la subfacturación y lograr la correcta y oportuna tributación; d) Organizar y administrar el sistema de recaudación, cobro, fiscalización y control de los tributos a su cargo; e) Mantener y controlar los registros, promover y ejecutar las acciones administrativas y promover las acciones judiciales, que sean necesarias para cobrar a los contribuyentes y responsables los tributos que adeuden, sus intereses y, si corresponde, sus recargos y multas.
- **Organismo Legislativo:** La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un período de cuatro años, pudiendo ser reelectos.
- **Organismo Judicial:** Este organismo ejerce la función jurisdiccional del Estado la cual es ejercida exclusivamente por la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.

c. Enfoque en cuanto al riesgo

52. **En materia legal:** Las leyes y regulaciones Guatemaltecas no prevén una graduación de controles con base en el riesgo LD/FT. En este sentido, se observa que las disposiciones no permiten obviar ciertos requisitos para los casos de bajo riesgo y, por ejemplo, los mismos requisitos y formularios se aplican para la vinculación de un cliente de banca personal que para la apertura de una cuenta de nómina.

53. A pesar de lo anterior, Guatemala ha avanzado en el enfoque de riesgos al emitir en abril de 2009 (dos meses antes de la visita), la Guía para administración del riesgo LD/FT, la cual incluye pautas útiles que indican a las instituciones cómo identificar y administrar el riesgo, y establece que a mayor riesgo, mayores deben ser los controles a aplicar.

54. **En cuanto a identificación del riesgo país:** Según la SIB, los dos tipos de clientes que la mayoría de los bancos ha identificado como de mayor riesgo para el lavado de activos, son las personas dedicadas al cambio de moneda y los funcionarios públicos, principalmente aquellos del nivel municipal que controlan recursos para la contratación de obras de infraestructura. Para detectar recursos derivados del crimen organizado, como narcotráfico y extorsión, aún no se ha podido identificar un perfil de cliente más riesgoso debido al frecuente uso de testaferros involucrados en muy variadas actividades comerciales.

55. Guatemala realizó un interesante ejercicio de evaluación de sus diferentes áreas de atención, vulnerabilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades específicas de mejora. En una matriz o tabla como la que se muestra a continuación las autoridades resumieron los principales riesgos, las acciones tendientes a reducirlos, y el estado de avance según su propio diagnóstico (se muestra un ejemplo de la información contenida en dicha matriz).

Seguimiento a las Acciones para Mitigar los Riesgos LD/FT (ejemplo)

Área a Evaluar	Factores de Riesgo a Considerar	Controles Mitigadores Implementados a la fecha	Efecto del factor de Riesgo	Vulnerabilidades Especiales	Acciones Mitigadoras Adicionales del País
Entorno Político.	La corrupción como fenómeno precursor del LD y FDT	Mecanismo de Monitoreo de las PEPs, Sistema de Monitoreo y Denuncias de actos de corrupción, Participación Sociedad Civil, Ley de Libre Acceso a la Información	Enriquecimiento ilícito de funcionarios y autoridades del Estado		En el Congreso de la República se encuentra un proyecto de Ley sobre Enriquecimiento Ilícito, mismo que está siendo impulsado por varias instancias.

d. Progreso alcanzado desde la última evaluación mutua

56. Esta es la primera evaluación que se hace a Guatemala utilizando la nueva metodología del GAFI aprobada en el 2004. La anterior evaluación fue realizada del 19 al 22 de octubre del 2004, bajo los estándares y la metodología vigentes en octubre de 2002, como parte de la segunda ronda de evaluaciones de GAFIC. La anterior visita de evaluación fue de sólo tres días, teniendo en cuenta que el GAFI había hecho recientemente una revisión de la situación en Guatemala la cual dio lugar a sacarla, en Junio de 2004, de la Lista de Países y Territorios No Cooperantes en donde había sido incluida en Junio de 2001.

57. El informe anterior no es fácilmente comparable con el actual debido a las grandes diferencias de criterios de evaluación que hay entre el anterior informe y el que ahora presentamos, así como el énfasis que la nueva metodología hace en la efectiva aplicación práctica de los estándares del GAFI. Sin embargo, sí es posible resumir de la siguiente manera el avance demostrado por Guatemala con respecto a las principales deficiencias y/o recomendaciones identificadas en el informe anterior:

Informe Anterior	Situación actual
No estaba tipificado el financiamiento del terrorismo	Superado.
No existían normas respecto de DDC y controles especiales en transferencias electrónicas.	Superado
No existía legislación en cuanto reporte de operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo	Superado
Aumentar la proporción de casos enviados al Ministerio Público en relación con el número de RTS recibidos (sólo 6% del total).	Superado
Mejorar la realimentación a sujetos obligados	Pacialmente superado: mejoras importantes en evaluación de calidad de RTS, pero sólo recientemente se conformó un equipo en la IVE para estudio de tipologías y análisis estratégico.
Incorporación de técnicas especiales de investigación al marco normativo legal	Superado, pero aún con poca aplicación.

Mejorar recursos (humanos, técnico y financiero) de la Policía para que actúe de forma eficaz ante el combate de los fenómenos relativos al LD y FT.	Pendiente La Policía aun no desempeña el papel que debería tener en el sistema ALD/CFT.
Atención a vulnerabilidad por remesadoras de dinero, por su alto volumen y por la cantidad de negocios informales.	Parcialmente superado. Actividad sujeta a registro, y significativa bancarización del servicio de remesas.
Vulnerabilidad por alto número de empresas con acciones al portador.	Pendiente
Dar mayores recursos a la IVE, especialmente para poder cumplir requerimientos de información del Ministerio Público	Superado.

2. SISTEMA JURÍDICO Y MEDIDAS INSTITUCIONALES RELACIONADAS

2.1. Penalización del Lavado de Dinero (R.1 y 2)

2.1.1. Descripción y Análisis

Recomendación 1.

Marco legal e institucional.

58. (C. 1.1) El Lavado de Dinero es una conducta que se tipifica y penaliza en Guatemala sobre la base de los estándares internacionales establecidos en el artículo 3 acápites a, b y c de la Convención de Viena y el artículo 6 numeral 1 de la Convención de Palermo. El tipo penal está contenido en el artículo 2 de la “Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos”, Decreto N° 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala (en adelante “Ley ALD”) que establece:

“Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí o por interpósita persona:

- a) Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;*
- b) Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito;*
- c) Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión este obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.”*

59. Guatemala tiene Fiscalías Especializadas de Lavado de Dinero, y otras Fiscalías competentes para conocer este delito, tales como las Fiscalías de Corrupción, Narcotráfico y Delitos Contra Bancos. Se pudo determinar que el Ministerio Público cuenta con un grado mayor de especialización que el

Órgano Judicial en el abordaje e interpretación de la normativa de Lavado de Dinero, y puede interpretar y aplicar adecuadamente este tipo penal. Por otra parte, en lo que se refiere al Organismo Judicial, no existen tribunales especializados, corresponde a todos los Jueces a nivel nacional la competencia para conocer estos delitos, y gozan para ello de independencia de criterio en la interpretación y aplicación de la norma. El Organismo Judicial, proporcionó inicialmente estadísticas en donde se refleja que entre los años 2005 hasta mayo del 2009, fueron dictadas un total de 19 sentencias por delitos de Lavado de Dinero, 16 de ellas condenatorias y 3 absolutorias.

60. En Guatemala opera mediante mandato legal, a través de Acuerdo entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, una Comisión Internacional contra la Impunidad, denominada CICIG, con facultades para auxiliar al Ministerio Público en casos de Alto Impacto que se consideren asociados a cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. También puede auxiliar al Ministerio Público en la investigación de conductas ilegales de seguridad en donde pueda verse comprometida la imparcialidad de las autoridades guatemaltecas competentes. Existe la posibilidad dentro de su mandato, de que la CICIG investigue casos por Lavado de Dinero, lo que contribuiría al procesamiento de PEP's por este delito, además de lograr la culminación del proceso y Sentencias Condenatorias en un tiempo mucho menor al que regularmente toman los procesos en Guatemala. Justamente una de las dificultades que enfrenta el aparato judicial en Guatemala, por razones que se detallarán en este Informe, es su limitada capacidad para tomar acciones en contra de funcionarios públicos involucrados en LD producto de la corrupción, a pesar de ser ésta una situación que se reporta con relativa frecuencia en los Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) que envían las instituciones financieras.

Concepto de Propiedad, Autonomía del delito y Autolavado

61. (C. 1.2) El delito de Lavado de Dinero en Guatemala se hace extensivo a todo tipo de propiedad que provenga de modo directo o indirecto de los activos del crimen, con independencia de su valor. El artículo 2 acápite a) de la Ley ALD, señala que comete el delito de Lavado de Dinero u Otros Activos, todo aquel que por si o por interpuesta persona, *“invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, ... [que] son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito”*. Es importante mencionar que el Reglamento de la Ley CFT, adoptado mediante Acuerdo Gubernativo N° 86-2006, de 2 de marzo de 2006 hace extensiva la definición y alcance del concepto *“bienes”*, definiéndolo en su artículo 2, como: *“Los bienes de cualquier tipo, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, con independencia de cómo se hubieran obtenido, y los documentos o instrumentos legales, sea cual fuere su forma, incluida la forma electrónica o digital, que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos bienes.”* Adicionalmente, el concepto de bienes, como en la mayoría de países con tradición de derecho continental, es suficientemente amplio para abarcar todos los tipos de “propiedad” exigidos por el GAFI. En efecto, el Código Civil define bienes de la siguiente manera: Bienes son las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación, y se clasifican en inmuebles y muebles.

62. Por lo tanto, no existen limitantes normativas para acceder a todo tipo de propiedad. Cabe señalar que según estadísticas proporcionadas por el Organismo Judicial, desde el año 2005 al año 2008 se ha registrado un vertiginoso incremento en la incautación de dinero en efectivo.

63. (C. 1.2.1 y 1.6) Para condenar por LD no es necesaria la condena de persona alguna por el delito predicado, pues basta probar que los bienes objeto del proceso *“son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito”* (art. 2 Ley ALD). Para demostrar la ocurrencia de cualquier delito es admisible la prueba indiciaria, toda vez que el Lavado de Dinero es un delito autónomo del delito predicado. El artículo 2 de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, aprobado mediante Decreto Número 67-2001, de 11 de diciembre de 2001, da margen a que el delito de Lavado de Dinero se haga extensivo no sólo a las personas que cometen el delito de Lavado de Dinero, sino también a las

personas que cometen ambos delitos, el lavado de dinero y el delito predicado, respetándose en todo momento la autonomía del tipo penal, tanto del delito predicado como del delito de Lavado de Dinero.

64. Se resalta la existencia de un caso concreto, en donde ya los tribunales de justicia emitieron una sentencia condenatoria por LD que se encuentra en firme y debidamente ejecutoriada en todas sus instancias procesales. En ese caso no se logró demostrar la vinculación y acreditación del delito previo, y sin embargo se condenó y comisó el dinero por delito de Lavado de Dinero, no siendo para ello necesaria una condena anterior por el delito predicado. De conformidad con el artículo 2 de la Ley ALD, el delito se extiende no sólo a aquellas personas que han cometido el delito de LD, sino también a las personas que hayan cometido ambos delitos, el Lavado de Dinero y el delito predicado.

65. Se tuvo conocimiento de que en el Organismo Judicial, a diferencia del Ministerio Público, no existen tribunales especializados para el LD/FT, corresponde a todos los Jueces a nivel nacional la competencia para conocer estos delitos, y gozan para ello de independencia de criterio en la interpretación y aplicación de la norma. El Organismo Judicial proporcionó estadísticas en donde se refleja que desde el 2005 hasta mayo de 2009, han sido dictadas un total de 19 sentencias por delitos de Lavado de Dinero, 16 de ellas condenatorias y 3 absolutorias. Se aprecia que si bien se ha dado un alcance adecuado a la norma penal y que los Tribunales de Sentencia le han otorgado valor probatorio a las pruebas presentadas por el Ministerio Público basadas en indicios, todas las sentencias han sido dictadas en casos de similares características (“mulas” que transportaban efectivo).

66. La misión evaluadora pudo evidenciar, que no existe una buena interacción entre el Ministerio Público y las autoridades policiales, pues estas últimas no se encuentran capacitadas para asistir a los Fiscales en investigaciones por LD y delitos conexos. Ante esta falencia, el Ministerio Público se asiste del Departamento de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), el cual que se encuentra bajo la estructura del Ministerio Público y que se conforma mayormente de estudiantes universitarios, quienes tampoco están adecuadamente capacitados a nivel técnico.

Delitos Predicados/Precedentes

67. (C. 1.3 y 1.4) En Guatemala el artículo 1 de la Ley ALD contempla la posibilidad de que el Lavado de Dinero provenga de la comisión de cualquier delito, por tanto no es necesario un listado de delitos predicados. Los delitos precedentes descritos en la tabla de categorías del GAFI, se encuentran contenidos en el Código Penal, además de Leyes Especiales como la Ley Contra la Delincuencia Organizada (Decreto N°21-2006), Ley de Migración (Decreto N°95-98), Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (Decreto N° 9-2009), Ley Contra la Narcoactividad (Decreto N° 48-92), Ley de Armas y Municiones (Decreto N°15-2009), Ley Contra la Defraudación y el Contrabando Aduanero (Decreto N° 58-90) y Ley Forestal (Decreto N° 101-96).

GAFI - CATEGORÍAS DE DELITOS PRECEDENTES	GUATEMALA:
Participación en un grupo delictivo organizado y extorsión	Ley contra la Delincuencia Organizada (art. 3 y 4) y Artículo 261 del Código Penal
Terrorismo, incluido el Financiamiento del Terrorismo	Artículo 391 del Código Penal
Tráfico de seres humanos y tráfico de migrantes	Artículo 202 Ter y Quáter Del Código Penal
Explotación sexual, incluida la explotación sexual de menores	Artículos 188 y 191 del Código Penal
Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas	Artículo 307 y ss del Código Penal
Tráfico ilícito de Armas	Artículo 404 del Código Penal

Tráfico Ilícito de Bienes Robados y de Otro Tipo	
Corrupción y Cohecho	Artículos 439 al 444 del Código Penal
Fraude	Artículo 263 y ss del Código Penal
Falsificación de moneda	Artículo 313 y ss del Código Penal
Falsificación y Piratería de productos	Artículo 299 y ss del Código Penal
Delito Ambiental	Artículo 343 y ss del Código Penal
Homicidio, Lesión corporal grave	Artículo 123 y ss del Código Penal Artículo 144 y ss del Código Penal
Secuestro, retención ilegal y toma de rehenes	Artículo 201 del Código Penal
Robo o hurto	Artículo 251 y ss del Código Penal
Contrabando	
Extorsión	Artículo 261 del Código Penal
Falsificación	Titulo VIII-Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Nacional del Código Penal
Piratería	Artículo 299 del Código Penal
Uso de Información Privilegiada, Manipulación del Mercado	Artículos 274 “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”. 275; y, 369 No. 3. Todos del Código Penal.

68. Una gran ventaja que ofrece la legislación penal, con el objeto de procesar casos por el delito de LD es que esta conducta no está limitada en su autonomía a una lista de delitos predichados, sino que puede originarse de la comisión de cualquier delito consagrado en el ordenamiento penal. Guatemala cuenta con cuatro Fiscalías Especializadas de Lavado de Dinero, y otras fiscalías competentes para conocer este delito, tales como las fiscalías de Corrupción, Narcotráfico y Bancaria. Se pudo determinar que el Ministerio Público cuenta con un grado adecuado de especialización en el uso de la normativa de Lavado de Dinero, y puede interpretar y aplicar adecuadamente el alcance de este tipo penal.

69. (C. 1.5) Los delitos predichados para el LD se extienden a la conducta que tuvo lugar en otro país, de acuerdo con el artículo 5 del Código Penal. Según éste, el Código Penal también se aplicará en caso de delitos cometidos por guatemaltecos en el extranjero, así como “Por delito que, por tratado o convención, deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiere sido cometido en su territorio”

70. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos ha procesado en el pasado y actualmente procesa casos de extranjeros sindicados por transporte transfronterizo de dinero en efectivo, en los cuales existen indicios de que los delitos predichados pudieron ser cometidos en otros países. Existen condenas a extranjeros emitidas por tribunales de justicia en Guatemala, por la comisión del LD en las circunstancias descritas.

71. La Ley Contra la Narcoactividad emitida mediante Decreto N° 48-92 del Congreso de Guatemala, en su artículo 63, así como la Ley ALD, en su artículo 3, contemplan la extradición tanto activa, como pasiva para las personas que hayan cometido estos delitos, y describe los procedimientos para la asistencia legal mutua.

Coparticipación y Formas “accesorias” del delito

72. (C.1.7) Existen delitos auxiliares para el delito de LD en la Legislación guatemalteca, incluyendo la Proposición o Conspiración, Instigación y la Tentativa, que se contemplan en el artículo 6 de la ley ALD. “*Quienes se hallaren responsables de participar en la proposición o conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, así como la tentativa de su comisión, serán sancionados con la misma pena de prisión señalada en el artículo 4 para el delito consumado,*

rebajada en una tercera parte, y demás penas accesorias.”. El artículo 14 del Código Penal guatemalteco, penaliza la Tentativa cuando: “.....con el fin de cometer un delito, se comienza su ejecución por actos exteriores, idóneos y no se consuma por causas independientes de la voluntad del agente.” Por su parte, el artículo 17 del Código Penal, establece que hay Conspiración cuando: “.....dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo.”, y proposición cuando: “.....el que ha resuelto cometer un delito, invita a otra u otras personas a ejecutarlo”. En lo que corresponde al delito accesorio de la Instigación, el mismo está contenido en el numeral 1 del artículo 37 del Código Penal, que establece: “.....Quienes animaren o alentaren a otro en su resolución de cometer delito.”

73. De igual forma, el Código Penal guatemalteco consagra en su Capítulo Primero las diversas formas de autoría y participación criminal, específicamente en sus artículos 36 y 37 en donde se detallan modalidades de ayuda, auxilio y facilitación para la comisión del delito. En el artículo 2 acápite c de la Ley ALD, se recoge la modalidad de la Ocultación en calidad de verbo rector del tipo penal base de LD, cabiéndole una pena de seis a veinte años de prisión inconvertibles, más penas accesorias.

74. La Ley ALD, que en su artículo 6 asigna una pena inconvertible de seis a veinte años de prisión a los autores del delito de Lavado de Dinero u otros Activos, más una multa igual al valor de los bienes, establece una pena de prisión similar en su artículo 4, a los responsables de participar en la proposición o conspiración para cometer delitos de LD u otros activos.

Recomendación 2.

Elemento Mental del tipo

75. (C.2.1) El artículo 2 de la Ley ALD estipula que se condenará por este delito a quien con conocimiento de su actuar, por sí o por interpuesta persona, ejecuta cualquiera de los verbos rectores allí descritos

76. El elemento intencional o dolo, se infiere de modo directo en la norma, a partir de circunstancias fácticas u objetivas, tal cual se aprecia en la redacción del artículo 2 de la Ley ALD, en donde como condicionante inserta en el tipo penal, se exige que la conducta desplegada, aparte de configurar los verbos rectores para el LD, debe ser desplegada o acometida “*sabiendo*”, es decir, con pleno conocimiento que involucra a la actividad de LD. Además de esta condicionante a la intencionalidad dolosa y manifiesta, se inserta en los tres acápites de la citada norma base (a, b y c), la posibilidad de sancionar a aquella persona “.....que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligada a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.”

77. Por otra parte, el Código Procesal Guatemalteco en su artículo 186 le otorga al juez la libertad de apreciar las pruebas de acuerdo con la “sana crítica” y valorar el conocimiento, la intención o la finalidad del autor a través de indicios, según las circunstancias objetivas del caso.

“Artículo 186. (Valoración)... Los elementos de prueba así incorporados se valorarán, conforme el sistema de la sana crítica razonada, no pudiendo someterse a otras limitaciones legales que no sean las expresamente previstas en este Código”.

78. Se pudo apreciar mediante sentencias de Tribunales de Justicia, que el entendimiento, interpretación, alcance y aplicación del elemento doloso inserto en la norma es adecuado y se traduce en buenos resultados al momento de emitir sentencias condenatorias por LD. La redacción de la norma,

hace posible al Juzgador su aplicación en todo su alcance, e inferir el elemento dolo mediante circunstancias objetivas del hecho.

Responsabilidad de Personas Jurídicas

79. (C.2.3 y c.2.4) La responsabilidad penal por LD es imputable a personas jurídicas en Guatemala, sin perjuicio de la responsabilidad penal de sus funcionarios, pero hasta ahora no ha sido aplicada en la práctica. El artículo 5 de la Ley ALD dispone que *“Serán imputables a las personas jurídicas, independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales, los delitos previstos en esta ley, cuando se tratare de actos realizados por sus órganos regulares siempre que se hallaren dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios”*. La pena puede ser una multade US\$10,000 hasta US\$625,000 o su equivalente en moneda nacional, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que se cometió el delito, y en caso de reincidencia, la cancelación de su personería jurídica en forma definitiva.

80. De igual forma, el mismo artículo 5 autoriza aplicar a las personas jurídicas, sanciones de comiso, pérdida o destrucción de objetos provenientes de la comisión del delito o de instrumentos utilizados para su comisión, el pago de costas y gastos procesales y la publicación de la sentencia en dos diarios de amplia circulación nacional.

81. El literal g. del artículo 33 de la Ley ALD, establece que entre las funciones de la Intendencia de Verificación Especial IVE, se encuentra la de imponer a las personas obligadas las multas administrativas en dinero que corresponda por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones que les impone la ley. Para el efecto, mediante Acuerdo No. 43-2002 del Superintendente de Bancos, publicado en el Diario Oficial el 18 de julio de 2002, se estableció la Escala para el Régimen Sancionatorio, la cual establece la multa a imponer para cada caso, lo que otorga las pautas objetivas para la imposición de multas. Sin embargo, en dicho Acuerdo se limita a \$25,000 la multa máxima imponible, lo cual reduce significativamente su efecto disuasivo (ver análisis de la Rec.17 en la Sección 3.10 de este informe).

82. (C.2.4) La responsabilidad penal de las Personas Jurídicas por LD no limita, ni impide la posibilidad de procesamientos paralelos a la misma persona jurídica en los ámbitos penales, civiles o administrativos. Como prueba de ello se observa que el propio artículo 5 de la Ley ALD, después de describir la sanción penal aplicable a las personas jurídicas, establece que cuando se trate de personas jurídicas sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, *“el juez notificará a dicho órgano supervisor la sentencia condenatoria respectiva, para que proceda a aplicar las medidas contenidas en las leyes de la materia”*. Debe interpretarse lógicamente que las sanciones que impondría la Superintendencia serían de carácter administrativo y se aplicarían en adición a la sanción penal previamente impuesta por el juez. Por ejemplo, el Juez podría sancionar a un banco con multa de hasta \$625,000 por incurrir en delito de LD, e independientemente de ello la Superintendencia podría aplicar el artículo 31 de la Ley ALD que prevé multas de hasta \$50,000 si se comprueba incumplimiento de los controles ALD previstos en dicha Ley.

Efectividad, Proporcionalidad y Disuasión de las penas.

83. (C.2.5) Tal como se describe en los artículos 4 y 5 de la Ley ALD la pena para las personas naturales es prisión incommutable de seis a veinte años, más la imposición de una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objeto del delito. También se aplican el comiso, la pérdida o la destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión. Se le asigna también a los responsables, el pago de costas y gastos procesales, además de ser publicada la sentencia en por lo menos dos medios de comunicación social. Si el autor del delito

corresponde a un extranjero, además de la sanción, se le expulsará del territorio guatemalteco una vez haya cumplido su pena.

84. El ordenamiento jurídico guatemalteco abarca en su artículo 6 de la Ley ALD, los grados de participación de la proposición, conspiración, así como la modalidad tentada para el delito de LD, consagrando para estas conductas, una pena igual a la reservada para los autores (artículo 4), pero atenuada en una tercera parte, sin descartar la posibilidad de que se impongan a estas modalidades imperfectas de ejecución las demás penas accesorias contenidas en la norma.

85. El artículo 7 de la Ley ALD, agrava la pena en una tercera parte cuando el delito es cometido por funcionarios públicos con ocasión del ejercicio de su cargo, además de imponerle la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta.

86. En lo que atañe a las personas jurídicas, el artículo 5 de la referida Ley, contempla autónomamente la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas, con independencia a la probable determinación efectiva de la responsabilidad penal de las personas naturales; imponiéndoseles una multa de diez mil dólares a seiscientos veinticinco mil dólares, atendiendo a la gravedad y circunstancias de comisión del delito. En caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personería jurídica de forma definitiva. De igual forma, la persona jurídica hallada responsable por delito de LD, le cabrá la sanción de comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados en su comisión; además del pago de costas y gastos procesales y la efectiva publicidad de la sentencia en medios de comunicación social de circulación en el país. La Legislación ALD en Guatemala data del año 2001, y a la fecha no se ha condenado a ninguna persona jurídica por LD, a pesar de ser contemplado en la legislación.

87. Al comparar las penas arriba descritas con las aplicables a otros delitos graves según la legislación guatemalteca, se observa que existe proporcionalidad entre las penas que establece el Código Penal al delito de Lavado de Dinero y otros activos y las que asigna el mismo Código a otros delitos graves.

Estadísticas –eficacia en condenas (R.32)

88. El tipo penal ha sido aplicado en la práctica, como se evidencia a nivel de Tribunales de Justicia, en donde a la fecha se han obtenido un total de 16 Condenas en 19 casos por Lavado de Dinero, las cuales parecen indicar que no existen vacíos legales ni resistencia de los jueces a sancionar la comisión del LD sin que exista condena previa por el delito antecedente, al menos cuando el caso llega a juicio. Sin embargo, opiniones recogidas durante las entrevistas indican que la falta de capacitación especializada de los jueces en materia de LD/FT, así como en todo lo relacionado a delitos financieros, está ocasionando que algunos jueces (especialmente jueces de garantía) sean reacios a ordenar medidas cautelares cuando no se les presenta clara evidencia del delito precedente. Ello puede ocasionar que el MP también desista de solicitar dichas medidas durante la etapa de investigación, lo cual parece verse reflejado en que nunca se ha solicitado la incautación de bienes en casos complejos de lavado.

89. Por otra parte, todos los Jueces son competentes para conocer casos por LD en Guatemala, además de una amplia gama de delitos, lo cual según algunos operadores de justicia, ha ocasionado una heterogénea o diversa interpretación sobre el alcance de la normativa de LD en las discusiones académicas. Hasta el momento estos problemas de interpretación no se han reflejado en las sentencias producidas, pero el riesgo existe y debería ser atendido mediante capacitación especializada a los jueces.

90. El número total de sentencias por casos de LD parece bajo en relación con el alto índice de criminalidad que existe en este país. Entre los años 2005 hasta mayo de 2009, fueron dictadas un total de 19 sentencias por delitos de Lavado de Dinero, 16 de ellas condenatorias y 3 absolutorias. Una gran mayoría de las sentencias son condenatorias, y normalmente se trata de casos de transporte ilegal de efectivo (“mulas”). En muy pocas se han aplicado penas severas como resultado de casos complejos de LD a través del sistema financiero.

91. Según datos estadísticos suministrados por el país con posterioridad a la visita in situ, se observa que en torno a las Sentencias Condenatorias por delito de LD y otros activos, las cifras desglosadas por año corresponden a: en el año 2005, 1 sentencia; para el 2006, 5 sentencias; para el 2007, 7 sentencias; para el 2008, 7 sentencias, y para el 2009, 11 sentencias, lo que suma en total 31 sentencias condenatorias por LD u otros activos.

92. Si bien, esta información estadística revela un incremento progresivo de sentencias condenatorias por LD u OA, se sigue considerando esta cifra como baja, atendiendo comparativamente a los altos niveles de criminalidad e inseguridad existentes y percibidas por la misión evaluadora en el país.

93. Existen pocas sentencias de casos de alto impacto y sensitivos, entre las que sobresale la condena impuesta en el 2007 a un ex Superintendente de Administración Tributaria, la cual se basó en una denuncia presentada por la IVE. Esta partía del análisis de operaciones complejas con fondos públicos recibidos por ese alto funcionario de Gobierno y su familia, inversiones en depósitos a plazo fijo y bonos hipotecarios a nombre del hijo del funcionario, de una empresa del funcionario, del hermano y la cuñada. Esta sentencia, según informó el país al equipo evaluador, fue de alto impacto no solo por su tipología compleja sino también por lo siguiente:

- a) Uno de los primeros casos que evidenciaba la relación del LD con actos de corrupción;
- b) Alto monto de dinero y bienes lavados;
- c) Malversación del erario público;
- d) Uno de los autores era un funcionario público de alto rango, responsable y representante legal de la administración tributaria del país (Superintendencia de Administración Tributaria);
- e) Implicación de varias personas individuales, familiares y empresas.

94. El funcionario fue condenado, entre otros delitos, por lavado de dinero y otros activos a 17 años y 4 meses de prisión, multa de Q.280,000 (equivalente a aproximadamente US\$34,000 de los cuales se decomisaron US\$31,000 en cuentas bancarias), publicación de la sentencia en medios de amplia circulación, y al pago de costas y gastos procesales. Uno de sus hijos fue condenado a 13 años de prisión por LD y multa de Q.24,158,725 (casi 3 millones de dólares).

95. Pese a la importancia del caso mencionado, el número de condenas es tan bajo y la relevancia de estas es tan escasa que reducen el carácter disuasivo de las penas exigido en la Rec. 2 del GAFI, y la eficacia misma del tipo penal y de todo el sistema ALD/CFT en Guatemala. Si la probabilidad de ser condenado por LD es ínfima, entonces la existencia de un tipo penal no tiene toda la fuerza que corresponde, independientemente del número de años de prisión que supuestamente se asigne a este delito. La causa de este problema no parece estar en defectos inherentes a la ley penal sustancial o procedimental, pues no parece haberlos.

96. En opinión del equipo, una de las principales causas para la poca eficacia real en materia de condenas e incautaciones radica en la debilidad institucional y la escasez de recursos técnicos y humanos de las autoridades competentes para investigar y juzgar los delitos, especialmente al interior de la Policía. Tampoco existe en la actualidad una adecuada interacción entre los estamentos de seguridad, el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera IVE, lo que probablemente

contribuye a que no se generen procesos y condenas a personas o casos de alto impacto. Debería considerarse crear una comisión interinstitucional que incluya además al Organismo Judicial con la intención de minimizar esta desconexión sistemática en el abordaje integral del tema.

97. Existe una unidad especializada de análisis financiero como parte del Ministerio Público, que cuenta con un grupo muy reducido pero bien capacitado de técnicos en el análisis de casos de LD y otros delitos financieros y apoya a los fiscales. Sin embargo, la falta de comunicación y coordinación entre esta unidad del Ministerio Público y la UIF de Guatemala (la IVE) parece ocasionar duplicidad de esfuerzos.

2.1.2. Recomendaciones y Comentarios

98. Fortalecer la capacidad de la Policía para apoyar más eficazmente al Ministerio Público en las investigaciones. Considerar la creación de una unidad especializada de investigación policial.

99. Debería considerarse incrementar el número de Fiscalías especializadas (actualmente 4) que atienden casos de LD, con la intención de agilizar los procesos.

100. Dictar a los jueces programas de actualización acerca de la normativa penal de LD, para evitar interpretaciones incorrectas sobre su alcance y capacitarlos para manejar casos de LD más complejos que los asociados al contrabando de efectivo. Debería valorarse la posibilidad de crear Tribunales Especializados para conocer casos de LD o de delitos financieros.

101. Debe aprobarse el Acuerdo Gubernativo que está en proyecto y crea una comisión interinstitucional que incluye a los estamentos de seguridad, el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera IVE, además del Organismo Judicial, e implementar el trabajo de la misma con la intención de minimizar la desconexión sistemática en el abordaje integral del fenómeno del LD.

102. Buscar entablar un vínculo a nivel técnico entre los analistas de la IVE y los de la unidad especializada de análisis financiero del Ministerio Público, para perfeccionar y distribuir adecuadamente el análisis, y así ahorrar tiempo y optimizar la calidad de los informes.

2.1.3. Cumplimiento de las Recomendaciones 1 y 2

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.1	MC	<ul style="list-style-type: none"> Efectividad: Bajo número de sentencias por LD en relación con el alto índice de criminalidad que existe en el país.
R.2	MC	<ul style="list-style-type: none"> No se ha condenado penalmente a ninguna persona jurídica por LD, a pesar de estar previsto en la legislación desde el 2001. Aun son pocas las condenas con penas severas y los casos complejos de LD a través del sistema financiero (uno de ellos relacionado con Corrupción). La mayoría de condenas corresponde a casos de transporte ilegal de efectivo (o “mulas”). Esto reduce el efecto disuasivo de las penas.

2.2. Penalización del Financiamiento del Terrorismo (RE.II)

2.2.1. Descripción y Análisis

103. (C. II.1) El Financiamiento del Terrorismo, es una conducta que se tipifica y penaliza en Guatemala sobre la base de los estándares internacionales establecidos en el artículo 2 numerales 1, 2, 3, 4 y 5 de la Convención Internacional para la Represión del Financiamiento del Terrorismo.

104. La noma anterior y las conductas descritas en los numerales del 1 al 5, es recogida en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, adoptada mediante Decreto del Congreso N° 58-2005 y reglamentada mediante Acuerdo Gubernativo N° 86-2006 del Presidente de la República (Ley FT), que establece:

“Artículo 4, Ley CFT: “Comete el delito de financiamiento del terrorismo quien por el medio que fuere, directa o indirectamente, por sí mismo o por interpósita persona, en forma deliberada proporcionar, proveer, recolectar, transferir, entregar, adquirir, poseer, administrar, negociar o gestionar dinero o cualquier clase de bienes, con la intención de que los mismos se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados en todo o en parte, para el terrorismo.

Asimismo, comete este delito quien realice alguno de los actos definidos como financiamiento del terrorismo en cualquiera de los convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala.

Al culpable de este delito se le impondrá prisión inmutable de seis (6) a veinticinco (25) años, más una multa de diez mil dólares (US\$10,000.00) a seiscientos veinticinco mil dólares (US\$625,000.00) de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional.

Para que el delito de financiamiento del terrorismo se tenga por consumado, no será necesario que se lleven a cabo los actos de terrorismo, pero sí que la intención de cometer dichos actos se manifieste por signos materiales exteriores. Tampoco será necesario que sobre los actos de terrorismo se haya iniciado investigación, proceso penal o haya recaído sentencia condenatoria.”

105. El citado artículo 4 permite sancionar el acto de financiar la comisión de un acto de terrorismo, pero no dice nada con respecto al acto de financiar a una organización terrorista o a un terrorista individual. Para sancionarlo, según las autoridades, es necesario recurrir al argumento de que esas conductas están previstas en la Convención contra el Financiamiento del Terrorismo ya ratificada por Guatemala, y que el artículo 5 del Código Penal permite la aplicación de la ley penal guatemalteca a cualquier “delito que, por tratado o convención, deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiere sido cometido en su territorio”. El equipo evaluador aceptó como posible esta interpretación, pero ante la falta de decisiones judiciales que la confirmen, y siguiendo la posición asumida por GAFIC ante un hecho idéntico en la evaluación mutua a Nicaragua, consideró necesario que se haga referencia explícita en la ley a la financiación de individuos u organizaciones terroristas.

106. (C.II.2) En Guatemala todos los delitos son predicados para el LD, tal cual se aprecia en la redacción del artículo 1 de la Ley ALD, en donde se contempla la posibilidad de que el Lavado de Dinero provenga de la comisión de cualquier delito, incluyéndose al delito de FT que se encuentra tipificado en el artículo 4 de la Ley FT.

107. (C.II.3) El delito de FT en Guatemala, no hace necesario para su materialización y aplicación que la persona que ejecute el FT se encuentre en el mismo país u otro distinto al de ubicación de los terroristas, la organización terrorista o donde se planea u ocurre el acto

terrorista. Para la configuración del tipo penal de FT en Guatemala, basta con que se configuren los verbos rectores exigidos en la norma (*“en forma deliberada proporcionar, proveyere, recolectare, transfiriere, entregare, adquiriere, poseyere, administrare, negociare o gestionare dinero o cualquier clase de bienes.....”*), con la intención y a sabiendas de que serán o podrán ser utilizados en su totalidad o en parte para el Terrorismo, sin importar el lugar del acto o lugar de ubicación física de los terroristas o la organización.

108. Conviene mencionar que el delito de terrorismo no sólo incluye actos cometidos en contra del Estado de Guatemala, sino también contra otros Estados.

Artículo 391, Código Penal. **“Terrorismo.** *Comete el delito de terrorismo quien con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado o coaccionar a una persona jurídica de Derecho Público, nacional o internacional, ejecutare acto de violencia, atentare contra la vida o integridad humana, propiedad o infraestructura, o quien con la misma finalidad ejecutare actos encaminados a provocar...”*

109. (C.II.4) El elemento intencional o dolo, se infiere de modo directo en la norma, a partir de circunstancias objetivas, tal cual se aprecia en el texto del artículo 4 de la Ley FT, en donde como condicionante inserta en el tipo penal, se exige que la conducta desplegada, específicamente para configurar los verbos rectores del tipo, debe ser ejecutada *“en forma deliberada”* y *“con la intención”* taxativa de que los dineros o cualquier clase de bienes sean utilizados o *“a sabiendas”* de que serán utilizados....; es decir, mediando un actuar de pleno conocimiento y animo doloso.

110. *La responsabilidad criminal por FT, además de las personas naturales, se extiende a las Personas Jurídicas, tal cual se establece en el artículo 7 de la Ley FT, lo cual está penalizado con una multa equivalente al monto de los bienes o dinero objeto del delito, y en el caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva. También se sancionará a la Persona Jurídica con el comiso, pérdida o destrucción de objetos provenientes de la comisión del delito o de instrumentos utilizados para su comisión, así como el pago de costas y gastos procesales. Cuando se tratare de personas jurídicas sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos, el juez notificará a dicho órgano supervisor la sentencia condenatoria respectiva, para que proceda a aplicar las medidas contenidas en las leyes de la materia. En cuanto a sanciones administrativas, el artículo 31 de la LCLDOA establece multas a las personas obligadas, por incumplimiento de las obligaciones que la misma ley impone, que van desde US\$10,000.00 hasta US \$50,000.00.*

111. En Guatemala, tanto las personas naturales, como jurídicas están sujetas a sanciones penales, civiles y administrativas por FT, tal cual se describe en el artículo 4 y 7 de la Ley FT. Contemplando para las personas individuales una pena de prisión incommutable de seis a veinte cinco años de prisión, más la imposición de una multa de USD\$ 10,000.00 a USD\$625,000.00 o su equivalente en moneda local.

112. En lo que atañe a las personas jurídicas, el artículo 7 de la referida Ley FT contempla autónomamente la posibilidad de sancionar a las personas jurídicas, con independencia a la probable determinación efectiva de la responsabilidad penal de las personas naturales;

2.2.2. Recomendaciones y Comentarios

113. Incorporar expresamente en el Código Penal el acto de financiar a una organización terrorista o a un terrorista individual, para que el castigo de esta conducta no dependa de una interpretación amplia del artículo 5.

114. Se recomienda fortalecer y modernizar las estructuras y técnicas investigativas tanto del Ministerio Público, como de los estamentos de seguridad, así como la interacción entre estos cuerpos instructivos, con la finalidad de poder iniciar y desarrollar investigaciones efectivas en materia de delitos complejos, como el Financiamiento del Terrorismo.

115. Debería implementarse el uso de los modernos métodos de investigación, consistentes en las operaciones encubiertas, entregas vigiladas, interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación, contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de detectar e investigar casos por delitos complejos, entre estos el FT en Guatemala. Estas modernas técnicas de investigación, se encuentran consagradas y en vigencia por Ley, en el Título III, del Decreto del Congreso de la República N° 21 del año 2006.

2.2.3. Cumplimiento de la Recomendación Especial II

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
RE.II	MC	<ul style="list-style-type: none"> Aunque estudios serios realizados por las autoridades indican que el riesgo de FT ha sido muy bajo en el pasado, la ausencia de casos e investigaciones impide tener total certeza sobre la efectiva implementación de esta recomendación. La inhabilidad del Sistema Judicial para perseguir e investigar delitos complejos en los que se utilice al sistema financiero, pone en duda la posibilidad de imponer sanciones por FT. La financiación de individuos u organizaciones terroristas no es mencionada en el Código Penal y para sancionarla es necesario hacer una interpretación amplia de la ley, la cual aun no ha sido puesta a prueba judicialmente.

2.3. Confiscación, congelamiento y decomiso de activos del crimen (R.3)

2.3.1. Descripción y Análisis.

116. Las autoridades cuentan con los instrumentos legales precautorios necesarios, tanto provisionales como en cualquier etapa del proceso, sin la necesidad de la determinación del delito previo. En este sentido el artículo 11 de la Ley ALD señala: *“El Juez o Tribunal que conozca del proceso podrá dictar en cualquier tiempo, sin notificación ni audiencias previas, cualquiera providencia cautelar o medida de garantía establecida en la ley encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos provenientes o relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos, cuando lo solicite el Ministerio Público.”* Se establece además que el procedimiento para tramitar este requerimiento debe ser resuelto por el Juez de inmediato. Sin embargo, en la práctica se han detectado problemas de lentitud y filtración de información confidencial en la realización de estas diligencias. Por lo tanto, los Fiscales prefieren hacer uso del artículo 12 de la Ley ALD, que les permite invocar *“Peligro de Demora”* y les da la facultad de ordenar incautaciones, embargos o inmovilización de bienes, documentos y cuentas bancarias, sin autorización judicial previa. Esta decisión debe ser convalidada con posterioridad por el Tribunal. En la práctica este procedimiento

ha demostrado ser más efectivo y rápido, pues sólo en una ocasión, de un total aproximado de 40 diligencias practicadas, no se convalidó posteriormente la decisión.

Bienes objeto de comiso (“confiscación”)

117. (C.3.1 y 3.1.1) El artículo 8 de la Ley ALD establece la figura del Comiso [definitivo] a favor del Estado, mediante sentencia de juez competente, *“de los bienes, instrumentos o productos utilizados o provenientes de la comisión del delito de LD”*.

118. El comiso es procedente incluso cuando los bienes no son propiedad del acusado o no se encuentran en su poder, *“a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho”* (párrafo primero, art. 8 Ley ALD).

119. Tal como se observa en el citado artículo 8 de la Ley ALD, la inclusión de la palabra “proveniente” permite inferir una autorización para el comiso de bienes, no sólo los directamente provenientes del delito, sino también los indirectamente derivados del producto del delito, como podrían ser las utilidades en empresas, o los intereses percibidos en cuentas bancarias en las que se depositó el dinero inicialmente lavado. En todos esos casos es posible argumentar razonablemente que los bienes provienen de la comisión de LD Sin embargo, para evitar posibles dudas interpretativas sería aconsejable que la ley lo dijera explícitamente.

120. Tampoco se encontró ninguna disposición que autorice el comiso de bienes de valor equivalente cuando los bienes directamente derivados del delito ya no se encuentran disponibles.

121. Esta disposición de la Ley ALD tampoco prevé el comiso de los bienes e instrumentos asociados al delito antecedente del LD. Sin embargo, el Código Penal, en su artículo 60, sí dispone que esta es una pena accesoria que recae sobre los objetos provenientes de un delito o falta, así como sobre los instrumentos con que se hubieren cometido, salvo que pertenezcan a un tercero de buena fe.

122. En lo referente al delito de FT, en Guatemala se consagra el Comiso en el artículo 9 de la Ley FT, estableciéndose que con independencia a las penas principales fijadas para este delito, el dinero o bienes provenientes o producto de este delito, serán objeto de Comiso. La devolución de bienes a terceros de buena fe se rige por las disposiciones de la Ley ALD.

123. De igual forma, el artículo 10 de la Ley FT, consagra para este delito la figura del Comiso Civil, independiente de cualquier acción penal, mediante el cual la Procuraduría General de la Nación puede solicitar a un Juez del ramo civil, el Comiso Civil de los dineros o bienes, cuando estos hayan sido o vayan a ser utilizados en la comisión del FT.

124. La misión evaluadora pudo detectar como una debilidad del Sistema Guatemalteco, el hecho de que la totalidad de lo decomisado mediante Sentencia en firme, por casos de LD y FT pasa a formar parte del pecunio del Organismo Judicial exclusivamente, sin posibilidad de beneficiar a las demás autoridades involucradas en la lucha ALD/CFT, entre estas el Ministerio Público.

Medidas Provisionales

125. (C.3.2 y c.3.3) El artículo 11 de la Ley ALD recoge las figuras precautorias provisionales, denominadas Providencias Cautelares; en donde el Juez competente a petición del Ministerio Público, tiene la facultad para dictar u ordenar en cualquier momento, sin notificaciones, ni audiencias previas, *“cualquier providencia cautelar o medida de garantía establecida en la ley”* para garantizar la preservación y disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos provenientes o relacionados con el delito de LD u otros activos. Para determinar exactamente cuáles son las medidas autorizadas nos remitimos a otras leyes, tales como el Código de Procedimiento Penal, el cual contempla, en su artículo 198 lo siguiente: *“Entrega de cosas y secuestro: Las cosas y documentos relacionados con el delito o que pudieran ser de importancia para la investigación y los sujetos a comiso serán depositados y conservados de mejor modo posible. Quien los tuviera en su poder estará obligado a depositarlos y a entregarlos a la autoridad requirente. Si no son entregados voluntariamente se dispondrá su secuestro”*.

126. Por su parte, el artículo 200 del Código de Procedimiento Penal dispone que *“La orden de secuestro será expedida por el Juez ante quien penda el procedimiento o por el Presidente, si se tratare de un Tribunal Colegiado. En caso de peligro o demora también podrá ordenar el secuestro el Ministerio Público, pero deberá solicitar la autorización judicial inmediatamente, consignando las cosas o documentos ante el Tribunal Competente. Las cosas o documentos serán devueltos, si el Tribunal no autoriza un secuestro”*. En Guatemala, el Ministerio Público tiene además la potestad de invocar el *“Peligro de Demora”*, para ordenar de modo directo e inmediato la incautación, embargo o inmovilización de bienes, documentos y cuentas bancarias, con posterior convalidación judicial, con fundamento en el artículo 12 de la Ley ALD. En la práctica este procedimiento ha arrojado resultados positivos.

127. Todo lo relativo a procedimiento y providencias cautelares regulado en la Ley ALD, se hace extensivo a los casos de financiamiento del terrorismo, por expresa disposición del artículo 12 de la Ley CFT.

128. No existe en Guatemala, una Unidad de Administración de Bienes incautados provisionalmente, que permita la adecuada distribución y utilización de los mismos por parte de los cuerpos preventivos o represivos vinculados a la lucha ALD/CFT. La decisión sobre el destino de los bienes afectados por providencias cautelares la toma autónomamente el juez penal en cada caso, el cual puede autorizar el uso temporal de los bienes a las autoridades competentes en materia de LD (art. 15 Ley ALD). Por otra parte, la misión evaluadora fue informada de que no existe una cuenta bancaria destinada para el depósito de los dineros incautados por estos delitos, sino que son almacenados en una bóveda de un local bajo la administración y custodia del Organismo Judicial, con el fin de preservar la integridad de la prueba. El equipo consideró que esta práctica genera un riesgo innecesario de seguridad, además de no generar ningún tipo de interés bancario. Podrían explorarse medidas alternativas para aprovechar mejor estos fondos sin que se afecte con ello la investigación.

129. Las referidas solicitudes de providencias cautelares, deben ser atendidas y resueltas por el Juez competente, de forma inmediata. Sin embargo, la misión evaluadora en razón del elevado volumen de casos, además del riesgo de filtración de información que pudiese comprometer la oportunidad, confidencialidad y el resultado efectivo de las diligencias, el Ministerio Público por intermedio de sus fiscales, con frecuencia no solicitan estas medidas al

juez. En cambio, los fiscales prefieren hacer uso del artículo 12 de la Ley ALD que les permite de modo directo invocar el “*Peligro de Demora*” y ordenar directamente la incautación, embargo o inmovilización de bienes, documentos y cuentas bancarias. Estas órdenes deben ser ratificadas posteriormente por el juez competente, y en la práctica el resultado ha sido positivo: de un total aproximado de 40 órdenes de medidas cautelares urgentes dictadas por el Ministerio Público, sólo una ha sido revocada judicialmente.

Poderes para identificar y rastrear

130. (C. 3.4) El Ministerio Público en Guatemala, cuenta con los poderes para ejercer la persecución penal de los delitos, con base a los parámetros establecidos en el artículo 9 de la Ley ALD, además de lo consagrado en el Capítulo II del Código de Procedimiento Penal en su artículo 24, que señala que la acción penal será ejercida de oficio por el Ministerio Público en representación de la sociedad, sobre todos los delitos de acción pública, con excepción de los delitos contra la seguridad del tránsito y los delitos cuya sanción principal conlleve pena de multa.

131. Existen organismos de investigación auxiliares del Ministerio Público, como la Policía, sin embargo, su personal no está adecuadamente capacitado para atender una investigación preliminar por LD o FT. Ante esta situación, las Fiscalías Especializadas para el LD, prefieren utilizar a un departamento auxiliar del Ministerio Público, denominado DICRI, que se encuentra integrado por estudiantes en su mayoría, y que cuentan con muchas limitantes, tanto presupuestales, como de carácter técnico.

132. La IVE de conformidad con lo dispuesto en los acápites a, b y f del artículo 33 de la Ley ALD, cuenta con facultades para identificar y rastrear propiedad sujeta a confiscación, así como el requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el LD u otros activos. La IVE también provee al Ministerio Público asistencia para el análisis de esta información.

133. La Unidad de Análisis del Ministerio Público, la cual auxilia directamente a los Fiscales de LD, entre otros, amplía los informes recibidos por parte de la IVE, profundizando o dimensionándolos en todo su contexto para que el Fiscal pueda desarrollar una adecuada acusación dentro del proceso penal. La misión evaluadora pudo constatar la falta de comunicación e interacción entre ambas oficinas, lo que puede traer consigo una duplicidad de funciones y demora en trámites burocráticos que pudieran ser solucionados con reuniones entre el personal de analistas que llevan los casos a nivel técnico en ambas entidades.

134. La IVE cuenta con la potestad de solicitar a las entidades financieras obligadas, información adicional sobre los RTS y RTE, cuando así lo considere o requiera. En la práctica se tuvo conocimiento que el Ministerio Público por intermedio de sus fiscalías especializadas solicitan de modo directo a la IVE información financiera sobre investigaciones que adelantan producto de RTS, y es la IVE quien requiere la misma al sistema financiero, contando con mayor efectividad y celeridad en la obtención de la misma. Sin embargo, esta práctica congestiona con frecuencia el trabajo de la IVE y la desvía de su función principal de producir inteligencia financiera, para convertirla en un intermediario de comunicaciones entre el Ministerio Público y los sujetos obligados. El Ministerio Público debería tener la capacidad de

acceder directamente a la información de todos los sujetos obligados cuando así lo estime conveniente.

135. El beneficio de Antejuicio de que gozan algunos funcionarios públicos en Guatemala, dificulta el alcance de las autoridades para rastrear y confiscar oportunamente sus bienes o propiedades, ya que deben ser sometidos previamente a una audiencia para el levantamiento de su fuero. Esta dificultad ha sido especialmente notoria en la investigación de casos de posible corrupción pública con ocasión de la construcción de obras públicas por parte de alcaldías municipales, los cuales son reportados con alguna frecuencia por los bancos, pero pueden pasar mucho tiempo en la etapa investigativa en la Fiscalía correspondiente, pues los fiscales no confían en poder obtener el levantamiento del fuero o “beneficio de antejuicio” del funcionario público investigado. La principal razón de esta desconfianza, según conoció el equipo evaluador, es que el procedimiento para conformar los tribunales que deciden en cada caso si se levanta o no el fuero, está politizado. En opinión del equipo evaluador, el beneficio de antejuicio, que es una manera de proteger la función pública, debería otorgarse únicamente a un reducido número de funcionarios de muy alto rango, y no a todo alcalde municipal del país.

136. Dentro del Ministerio Público de Guatemala, opera una figura *sui generis* para responder al elevado nivel de Corrupción infiltrado en las investigaciones: se creó mediante convenio suscrito entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, ratificado mediante Ley de la República, una Comisión Internacional Contra la Impunidad, CICIG, dirigida por funcionarios de las Naciones Unidas y dedicada únicamente a apoyar al Ministerio Público en ciertos casos de alto impacto. Los procesos y las decisiones judiciales en estos casos han resultado más rápidos. Hasta la fecha la CICIG no ha participado en casos por LD o FT,, pero las razones de su creación reflejan deficiencias estructurales del aparato de justicia guatemalteco que limitan también la efectiva persecución de estos delitos.

Protección de Terceros de Buena Fe

137. (C.3.5) Se protegen adecuadamente los derechos de terceros de buena fe. Según el artículo 16 de la Ley ALD *“las Medidas y Sanciones establecidas en los artículos 11, 12 y 15 [todos referentes a medidas cautelares] se aplicarán salvo los derechos de terceros de buena fe”*. A su vez el artículo 8 establece el Comiso definitivo de Bienes a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho.” Por último, estos terceros que reclamen derechos sobre los bienes deben intervenir dentro del mismo proceso penal y cumplir las condiciones previstas en el artículo 17 de la Ley ALD que ordena, entre otras cosas, demostrar que el bien no le fue transferido “para evitar el eventual decomiso posterior” y que hizo “todo lo razonable para impedir el uso ilegal de los bienes”.

138. (C.3.6) Las autoridades no cuentan con facultades expresas que les permitan tomar medidas para prevenir o anular los actos, contractuales o de otro tipo, en los que las partes involucradas sabían o debían haber sabido que afectarían la posibilidad de las autoridades de recuperar bienes sujetos a confiscación. Sin embargo, como mitigadores encontramos que para casos en que el Estado evidencie la lesividad de actos y contratos administrativos tiene la facultad jurídica de recurrir a declarar la lesividad de los mismos ello en razón de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley del Organismo Ejecutivo, que contempla como función, además de las que le asigna la Constitución Política y la ley, al Consejo de Ministros la siguiente:“(…) b) Concurrir con el Presidente de la República a declarar o no la lesividad de los actos o contratos

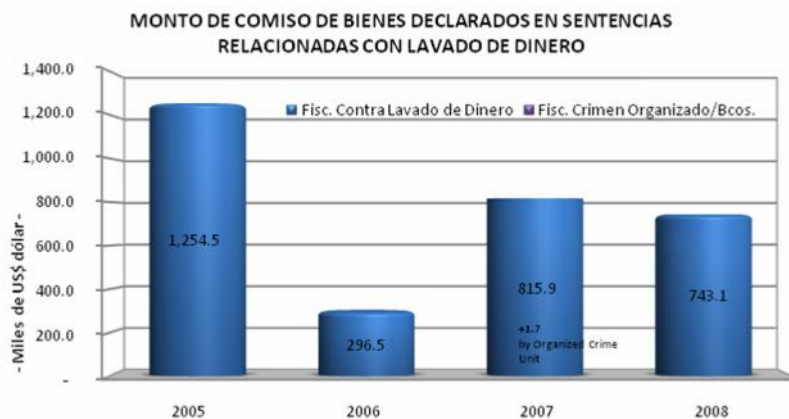
administrativos, para los efectos de la interposición del recurso de lo contencioso administrativo. (...)” así mismo la Ley Contra la Delincuencia Organizada en su artículo 80 faculta al Ministerio Público con autorización judicial a la inmovilización de bienes inmuebles o muebles registrables, propiedad de terceros mediante autorización judicial que sean propiedad de terceros, cuando exista clara evidencia que estas personas se hayan beneficiado directa o indirectamente con el producto del delito cometido por algún miembro de un grupo delictivo organizado. Esta última disposición aplicará a crimen organizado relacionado con los delitos de LD/FT

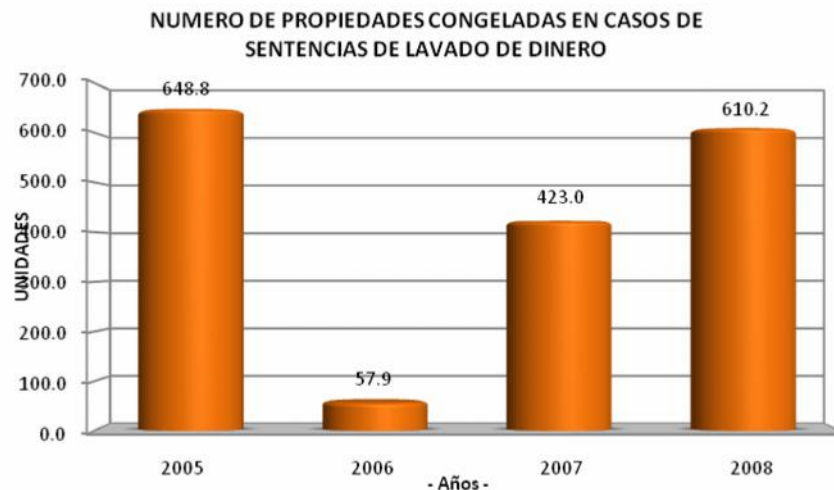
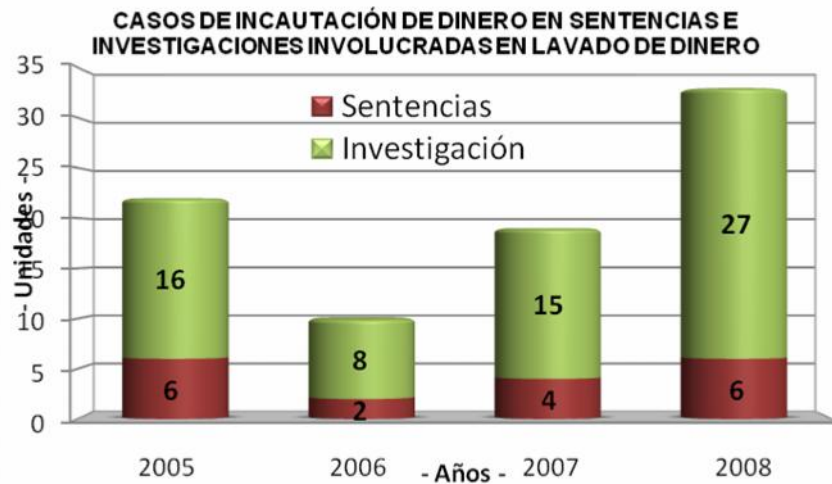
Estadísticas

139. Las siguientes estadísticas fueron proporcionadas por el Ministerio Público y el Organismo Judicial:

Bienes incautados, Embargos, inmovilización de bienes y comiso de bienes declarado en sentencia, respecto de casos que involucren LD o FT. Últimos 4 años	2005	2006	2007	2008
Fisc. Contra Lavado de Dinero			27	29
Fisc. Contra Corrupción	1		25	59
Fisc. Narcoactividad				2
Fisc. Crimen Organizado/Bcos.			110	

Bienes incautados, Embargos, inmovilización de bienes y comiso de bienes declarado en sentencia, respecto de casos que involucren LD o FT. Últimos 4 años	2005	2006	2007	2008
Cuentas Bancarias	1		105	90
Bienes Inmuebles			57	





2.3.2. Recomendaciones y Comentarios

140. Identificar y eliminar las razones por las cuales el Ministerio Público teme que al solicitar medidas provisionales a los jueces se pone en riesgo la confidencialidad y eficacia de las investigaciones. Eliminar también los efectos indeseados del beneficio de antejuicio en las investigaciones por lavado sobre los funcionarios públicos a quienes beneficia esta figura.

141. Autorizar el comiso de bienes de valor equivalente y crear recursos legales para que las autoridades puedan prevenir o anular los contratos celebrados por personas que simplemente buscan impedir la confiscación de bienes.

142. Debería considerarse una reforma legal, para que el dinero y bienes comisados por casos de LD y FT, así como el uso temporal de bienes sujetos a medidas provisionales, sean distribuidos de acuerdo con criterios de equidad y política criminal entre todos los cuerpos

tanto preventivos, como represivos involucrados en la lucha ALD/CFT, y no sólo al Organismo Judicial.

143. Crear canales de comunicación interinstitucionales entre la IVE y las demás entidades encargadas del orden público, como la policía y las fiscalías, y fortalecer la capacidad técnica, operativa, y presupuestaria de Policía y Fiscalías para identificar y rastrear la propiedad sujeta a confiscación.

144. Realizar esfuerzos para lograr una interacción y un mayor grado de comunicación y coordinación entre el IVE y la Unidad de Análisis del Ministerio Público, con el objetivo de evitar duplicidad de funciones y la mayor comunicación a nivel técnico de los analistas.

145. Considerar modificar y ampliar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIG para atender casos relacionados con el LD y el FT, lo que podría descongestionar el sistema, agilizar los procesos y llegar a fallos por estos delitos más rápido y con resultados más efectivos.

2.3.3. Cumplimiento de la Recomendación 3

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.3	PC	<ul style="list-style-type: none"> • No se autoriza el comiso de bienes de valor equivalente. • No existen medidas para prevenir o anular actos o contratos celebrados con el fin de restringir la posibilidad de las autoridades de recuperar bienes sujetos a confiscación. • La solicitud del Ministerio Público ante los Tribunales, para que sean dictadas medidas cautelares es dilatada, poco efectiva y compromete la confidencialidad de la diligencia a practicar. • El beneficio de Antejuicio de que gozan algunos funcionarios públicos, especialmente a nivel municipal, limita en la práctica la investigación, rastreo y confiscación de bienes en casos de corrupción. • No existe coordinación táctica, técnica ni operativa entre las autoridades y agencias del orden público para identificar y rastrear adecuadamente la propiedad sujeta a confiscación.

2.4. Congelamiento de fondos utilizados para el financiamiento del terrorismo (RE.III)

2.4.1. Descripción y Análisis.

146. En Guatemala, la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, en su artículo 12 específicamente en cuanto a las Providencias Cautelares se refiere, establece que dicho procedimiento será el consagrado para las disposiciones que rigen la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.

147. (C.III.1, III.2 y III.4) La legislación guatemalteca en este sentido, permite la posibilidad de que un Juez a solicitud del Ministerio Público, en cualquier momento del proceso y sin notificación previa, emita cualquier providencia o medida de garantía de las establecidas en el Código Procesal Penal, entre estas el congelamiento de fondos en general, incluyendo los que

pertenecen a Al-Qaida, el régimen Talibán y Usama Bin Laden, así como de cualquier persona asociada a estos, y designadas a partir de la Resolución 1267 de 1999, así como de forma conjunta entre designados y terceros. El artículo 11 de la Ley ALD establece que estas providencias o medidas solicitadas deben ser resueltas por el Juez de manera inmediata. Sin embargo, la norma supone la existencia de un proceso penal en curso. Si en Guatemala aparecieran fondos de Al-Qaida u otra organización terrorista de las referidas en la Res.1267 (hasta el momento no ha ocurrido), no parece factible que el Ministerio Público esté en capacidad de abrir una investigación, solicitar formalmente al juez la orden de congelación de fondos y obtener respuesta favorable con la rapidez que exige la RE.III.

148. Hay sin embargo un mecanismo legal alternativo que permite una respuesta mucho más rápida. El artículo 12 de la Ley ALD y el art. 12 de la Ley CFT permiten al fiscal competente expedir una orden de congelamiento sin necesidad de acudir al juez, basado en el peligro causado por la demora en congelar, incautar, inmovilizar cualquier activo, documento o cuenta bancaria (para detalles ver Rec. 3 en este informe). La orden del fiscal debe ser convalidada después por un juez, y de acuerdo con entrevistas de los evaluadores con jueces y otras autoridades, las cortes no tendrían inconveniente en avalar dichas órdenes e investigaciones abiertas sólo con base en resoluciones del CSNU, porque están basadas en convenciones internacionales incorporadas en el derecho interno.

149. El mecanismo descrito no es específicamente diseñado para las Resoluciones 1267 y 1373 del CSNU, y en muchos casos requiere que un sujeto obligado detecte y reporte la transacción como sospechosa. Esta es una limitación importante pues no hay obligación general para los sujetos obligados de suspender la transacción e inmovilizar los fondos mientras reciben una orden formal. La IVE distribuye todas las listas enviadas por la Cancillería sobre las Res. 1267 y 1373, y hasta ahora no ha habido coincidencia de nombres, pero los evaluadores pudieron observar casos en los que fondos relacionados con lavado de dinero fueron provisionalmente congelados por la Fiscalía usando estas facultades, y confirmados mediante orden judicial, en cuestión de horas.

150. No se ha establecido un procedimiento en Guatemala que le indique a las autoridades cómo actuar en caso de que otro país les notifique que ha designado a una persona como terrorista con base en la Resolución 1373 de las Naciones Unidas. Las mismas medidas provisionales generales aplican para cualquier congelamiento de activos solicitado por otro país mediante asistencia legal mutua. Sin embargo, las designaciones en el marco de la Res.1373 no necesariamente revisten el carácter de asistencia legal mutua, y para esos casos Guatemala debería prever un procedimiento interno claro que le permita evaluar la razonabilidad de la designación, y proceder en consecuencia. Guatemala no ha sido notificada hasta el momento por ningún país acerca de la designación de alguna persona basándose en la Res. 1373.

Medidas Provisionales y “Fondos” sobre los que recaen

151. (C.III.4) Independientemente de la falta de procedimientos especiales para actuar con celeridad en caso de la designación de alguna persona en el marco de las Res.1267 y 1373, la legislación de Guatemala contempla un rango amplio de medidas cautelares que permitirían congelar bienes o activos relacionados con actividades terroristas en la mayoría de los casos exigidos por la RE.III.

152. La Ley CFT (Decreto 58-2005) establece en su artículo 12 que en materia de procedimiento, reserva de investigación y providencias cautelares, serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley ALD. Específicamente son relevantes el artículo 11 sobre Providencias Cautelares ordenadas por juez competente, y el 12 sobre medidas ordenadas por un Fiscal en casos de “*Peligro de Demora*” (a este respecto, ver análisis de la Rec.3 en la sección 2.3.1 de este informe).

153. Además de las disposiciones procesales mencionadas, la Ley Contra la Delincuencia Organizada, Decreto del Congreso de la República 21-2006, en su artículo 73, establece un catálogo de medidas precautorias que alcanzan los bienes de personas o grupos delictivos organizados, entre estos de los Financiadores del Terrorismo. Entre las medidas disponibles están: el secuestro y embargo de bienes, la inmovilización de cuentas bancarias y bienes inmuebles, el secuestro de libros y registros contables, la suspensión de patentes y permisos que no han sido debidamente extendidos o utilizados para la comisión de un delito, las incautación y la ocupación de bienes.

154. El artículo 2 del Decreto 21 de 2006 define como organización criminal, “*a cualquier grupo estructurado de tres o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente, con el propósito de cometer uno o más de los delitos siguientes: a) de los contenidos en la ley contra la narcoactividad...b) de los contenidos en la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos....d) de los contenidos en la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y Tráfico de Dinero; 4) Terrorismo.....*”

155. El artículo 78 establece la posibilidad de inmovilizar cuentas bancarias pertenecientes a sindicatos u otras personas beneficiadas directa o indirectamente de delitos. Para proceder con estas medidas, el Fiscal debe hacer formal petición ante el Juez de Garantías o Contralor. Los artículos 79 y 80 autorizan también inmovilizar “*los bienes inmuebles o muebles registrables, de una persona que pertenece a grupos delictivos organizados, [cuando] están en peligro de ocultarse, desaparecer o simularse actos traslativos de dominio sobre los mismos*”, así como los bienes “*que sean propiedad de terceros, cuando exista clara evidencia de que estas personas se hayan beneficiado directa o indirectamente con el producto del delito cometido por algún miembro de un grupo delictivo organizado*”.

156. El artículo 74 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada también dispone que “*Podrá ordenarse el secuestro y embargo de los bienes de las personas sindicadas pertenecientes a grupos delictivos organizados, que sean producto directo del delito o de la transformación o conversión en otros bienes. También ... cuando éstos aparezcan registrados a nombre de terceras personas*”. De acuerdo con esto, la orden de congelamiento puede extenderse también a los activos indirectamente generados a partir de otros activos que estén bajo control de organizaciones terroristas, así como activos que estén en manos de terceras personas.

157. Las disposiciones mencionadas no aplican en el caso de un terrorista o un financiador del terrorismo que no pertenezcan a una organización criminal. Para ordenar medidas sobre los activos de estas personas hay que recurrir a la Ley ALD en la cual, como se explicó anteriormente, se consagra un buen número de medidas provisionales. Tampoco se contemplan medidas para impedir actos simulados tendientes a dificultar el rastreo de los bienes..

Acciones de congelamiento por solicitud de otro país

158. (C.III.3) Guatemala es suscriptor de diversos acuerdos y convenios bilaterales sobre la materia, que han sido incorporadas mediante Ley a su derecho interno, y que permiten la colaboración y asistencia legal recíproca entre Estados para atender acciones de congelamiento ya iniciadas en distintas jurisdicciones. Entre las posibilidades de asistencia legal mutua consignadas en estos convenios están la identificación, congelamiento, decomiso o confiscación de activos lavados o que se pretendió lavar, o que se pretendió utilizar para el financiamiento del terrorismo.

159. Además para garantizar las acciones de congelamiento de fondos u activos iniciadas en otras jurisdicciones de modo inmediato, Guatemala cuenta en el artículo 21 de la Ley FT, en donde establece que *“Con la finalidad de facilitar las actuaciones e investigaciones judiciales relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, el Ministerio Público y las autoridades judiciales competentes podrán prestar y solicitar asistencia a las autoridades competentes de otros países para:h)Cualquier otra forma de asistencia judicial recíproca, autorizada por el derecho interno.”* Tal como explicamos anteriormente, si bien existen limitaciones menores (por ejemplo, necesidad de interpretaciones amplias para poder congelar bienes indirectamente usados por terrorista individual) el derecho interno contempla una amplia gama de medidas cautelares que pueden usarse para atender solicitudes de otros Estados.

160. ***Comunicación y Guía a instituciones financieras*** (C.III.5) La Intendencia de Verificación Especial, emitió un oficio identificado con el número IVE 1445-2007 en el año de 2007 en donde puso en conocimiento al sector financiero sobre las listas consolidadas de personas vinculadas a actividades terroristas; remitiendo a los destinatarios al portal de Internet de las Naciones Unidas para obtener la información actualizada; sin embargo, la misión pudo constatar que al ser cuestionados al respecto un número significativo tanto de autoridades, como de regulados, no tenían conocimiento de las Resoluciones emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni tenían claridad sobre las medidas que deberían tomar en caso de detectar posibles coincidencias. De acuerdo con el oficio mencionado, *“dicha lista debe incluirse como fuente de consulta”* para complementar procedimientos de debida diligencia y monitoreo y, en caso de encontrar posibles coincidencias *“debe observar lo establecido en ...[Ley LD, Ley FT y sus reglamentos]”*. Según el procedimiento aplicable, que es el mismo para el reporte de cualquier operación sospechosa, los sujetos obligados podrían tomarse hasta 15 días para reportar a la IVE después de ocurrida la transacción, lo cual resulta excesivo tratándose de posibles coincidencias de nombres con la lista de terroristas de la Res. 1267.

161. (C.III.6) La misión evaluadora pudo constatar que si bien existe la Guía de Administración del Riesgo de Lavado de Dinero u Otros Activos y de Financiamiento del Terrorismo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) para orientar a los sujetos obligados sobre medidas a aplicar en caso de poseer fondos o activos relacionados al Terrorismo o su Financiamiento, este instrumento es de muy reciente data, por lo que no se tiene experiencia alguna sobre este particular.

162. (C.III.7 y III.8) Existe un procedimiento al cual pueden acudir las personas que se vean equivocadamente afectadas por estas medidas provisionales. El artículo 17 de la Ley ALD dispone lo relativo a la Devolución de bienes en depósito, indicando al efecto que “el Juez o

Tribunal del caso podrá disponer la devolución, con carácter de depósito durante el proceso, al reclamante de los bienes, productos o instrumentos de lícito comercio cuando se haya areditado o concluido en la vía incidental que;

- a) *El reclamante tiene legítimo derecho respecto de bienes, productos o instrumentos;*
- b) *El reclamante no puede ser imputado de ningún tipo de participación, colusión o implicación con respecto a los delitos de lavado de dinero u otros activos, objeto del proceso;*
- c) *El reclamante no adquirió derecho alguno a los bienes, productos o instrumentos de la persona procesada en circunstancias que llevarán razonablemente a concluir que el derecho sobre aquellos le fue transferido para evitar el eventual decomiso posterior de los mismos, y*
- d) *El reclamante hizo todo lo razonablemente para impedir el uso ilegal de los bienes, productos o instrumentos....”*

163. Si bien existe un proyecto de Acuerdo Gubernativo, que crea la Comisión Nacional de Coordinación con miras a facilitar la cooperación y la creación de mecanismos para el efectivo cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, en la actualidad no existe un procedimiento interno establecido, para la eventual petición de eliminación de personas y entidades de la lista consolidada, ni del descongelamiento de sus fondos y otros activos. De igual forma no se cuenta con mecanismos definidos para el descongelamiento de fondos u activos pertenecientes a personas u entidades que hayan sido afectadas de modo involuntario por estas medidas, al determinarse que no guardaban relación con personas designadas.

164. (C.III.9) El artículo 15 de la Ley ALD, establece procedimiento para disponer de modo temporal, previa autorización del Juez competente el uso de los objetos, instrumentos y productos del LD u otros activos, así como del Terrorismo y su Financiamiento, con la finalidad de que los mismos se les asignen a autoridades encargadas de prevenir, controlar, investigar y perseguir estos delitos. En Guatemala, esto no se da comúnmente en la práctica, y es el Órgano Judicial, quien se beneficiaría al final del proceso de la totalidad de los bienes ordenados en comiso.

165. (C.III.10) La normativa procesal guatemalteca, en lo atinente a Providencias Cautelares, establece el mecanismo jurídico apropiado para que una persona o entidad pueda objetar o hacer revisar una medida de congelamiento activada en contra de sus fondos o activos. El artículo 14 de la Ley ALD, establece que todas las providencias cautelares decretadas podrán ser objeto de revisión, modificación e incluso revocadas en cualquier momento por un Juez o Tribunal competente, mediando para ello una solicitud de parte interesada. Hasta la fecha este procedimiento nunca ha sido puesto en práctica en Guatemala en relación con congelamiento de activos de terroristas.

166. (C.III.11) (C.III.12) Guatemala cuenta con medios jurídicos, que procuran la protección a los derechos de terceros de buena fe, específicamente en el artículo 16 de la Ley ALD, en donde de modo taxativo establece que “*Las medidas y sanciones a que se refieren los artículos 11, 12 y 15 se aplicarán salvo los derechos de terceros de buena fe.*”; es decir,

en lo referente a Providencias Cautelares, Procedimiento y Providencias Cautelares y Destino de bienes, productos o instrumentos objeto de providencias cautelares.

167. (C.III.13) Administrativamente le corresponde a la Intendencia de Verificación Especial IVE, de la Superintendencia de Bancos, el velar por el cumplimiento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala, tal cual se estipula en el artículo 20 de la precitada Ley. De igual forma, todas las entidades públicas y privadas están obligadas a prestar la colaboración al IVE para la consecución de los objetivos de la Ley. El artículo 19 establece las sanciones reservadas a las personas que incumplan la presente Ley, que van de USD\$10,000 a USD\$50,000., atendiendo a criterios de gravedad del hecho cometido. El artículo 7 de la Ley FT establece que cuando las personas jurídicas sancionadas penalmente, sean sujetas a la vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Bancos, el Juez deberá notificar a este de la Sentencia Condenatoria para que tome las medidas respectivas en el ámbito administrativo.

168. En el ámbito o esfera Penal, el artículo 4 de la Ley FT, establece sanciones para sus autores, tanto en grado de tentativa, como de delito consumado, de 6 a 25 años de prisión incommutables, además de una pena pecuniaria accesoria de USD\$10,000.00 a USD\$625,000.00. El artículo 5 establece una agravante especial al tipo penal base, de un aumento de 1/3 parte, para los sujetos activos *“empleados o funcionarios públicos”* que cometieren el delito de FT en el ejercicio de su cargo o empleo. Se contempla además, en el artículo 7, sanciones penales, para las personas jurídicas con independencia de la responsabilidad penal que les quepa a los propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales, de una multa equivalente al monto de los bienes o dinero objeto del delito y en caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica de modo definitivo. Además de las sanciones accesorias del comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito, así como de los instrumentos utilizados para su comisión, el pago de costas, gastos procesales y la publicación de la sentencia.

2.4.2. Recomendaciones y Comentarios

169. Establecer un procedimiento específico que permita congelar en cuestión de horas después de detectados, los activos de personas designadas bajo el marco de la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU.

170. Establecer un procedimiento para actuar en tiempo razonable en caso de que otro país notifique a Guatemala que ha designado a una persona como terrorista con base en la Resolución 1373 de las Naciones Unidas, cuando dicha notificación no reviste el carácter de asistencia legal mutua.

171. Se sugiere comunicar más eficazmente a los sujetos obligados cada vez que haya una actualización de las listas, y darles instrucciones precisas sobre cómo proceder. Se sugiere además que en caso de coincidencias con listas de Naciones Unidas, el reporte se envíe simultáneamente a la IVE y a una Fiscalía especializada, con el fin de obtener una orden de congelamiento rápidamente.

172. Realizar esfuerzos tendientes a agilizar la culminación y entrada en vigencia del Acuerdo Gubernativo que crea la Comisión Nacional de Coordinación, lo que facilitaría la coordinación interinstitucional tanto a nivel gubernamental, como en el ámbito privado, lo que haría más efectiva la implementación de los procedimientos para el congelamiento de fondos o activos de personas designadas.

173. Definir un procedimiento para autorizarle a la persona cuyos fondos sean incautados en virtud de la Res.1267, que acceda a fondos para su subsistencia o para cubrir ciertos honorarios y servicios necesarios.

2.4.3. Cumplimiento de la Recomendación Especial III

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
RE.III	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha demostrado en la práctica la posibilidad de congelar muy rápidamente activos derivados de cualquier delito y el fiscal podría dar una orden en cuestión de horas con base en los listados del CSNU. pero no hay obligación general para los sujetos obligados de suspender la transacción e inmovilizar los fondos mientras reciben una orden formal–. • No hay procedimiento para tramitar peticiones de retirar un nombre de la lista de la Res. 1267, ni para autorizar acceso a fondos mínimos de subsistencia al afectado. • No se permite el embargo o secuestro de bienes adicionales generados indirectamente a partir de los bienes utilizados por un terrorista, a menos que éste sea parte de una organización criminal.

Autoridades

2.5. La Unidad de Inteligencia Financiera y sus funciones (R.26)

2.5.1. Descripción y Análisis

174. Resumen: La IVE llena los requisitos fundamentales de una unidad de inteligencia financiera, en conformidad con la definición de una UIF del Grupo Egmont. Algunas deficiencias de operatividad inhiben su efectividad y por lo tanto no le permiten cumplir completamente con la Recomendación 26. Su estructura y recursos le permiten a la IVE llevar a cabo sus funciones cotidianas de acuerdo a su mandato. Asiste a otras agencias públicas y privadas en la lucha contra el LD y FT en Guatemala. Recaba información de las personas obligadas, e intercambia información financiera con unidades homólogas en el extranjero. Ha tomado pasos sustantivos hacia su fortalecimiento, así como una reestructuración orientada hacia un mejor servicio a su cliente y aliado principal que es el Ministerio Público. No obstante, aún debe mejorar la calidad de la información que transmite al Ministerio Público; aprovechar mejor sus recursos humanos, asignándoles a sus analistas funciones que se apeguen más a la misión principal de la institución; buscar un acercamiento y mejor cooperación con un mayor número de instituciones para obtener un mejor y más rápido acceso a información que soporte sus investigaciones; dar a conocer públicamente más información sobre ALD y CFT; y asegurarse de que la información que posee esté siempre bien protegida.

Creación de la UIF y funciones centrales:

175. (c. 26.1): La Intendencia de Verificación Especial (IVE) es la unidad de inteligencia financiera de Guatemala y es según la Ley ALD (artículo 33) la única institución que recibe y centraliza los reportes de transacciones sospechosas (RTS) elaborados por el sector financiero. Su presupuesto y estructura los aprueban la Junta Monetaria del Banco de Guatemala. Sus funciones principales son requerir y/o recibir de todas las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el lavado de dinero u otros activos, con el fin de analizar y transferir dicha información al Ministerio Público. También efectúa las mismas funciones sobre la información requerida por el Ministerio Público y Jueces competentes. El literal b) del artículo 33 de la Ley ALD, establece que entre las funciones de la IVE se encuentra, analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos. Si después de realizados los procedimientos de recopilación y análisis de la información obtenida la IVE considera que hay suficientes elementos que indiquen que se ha cometido el delito de LD y/o FT, ésta prepara una “denuncia”, la cual presenta ante el MP.

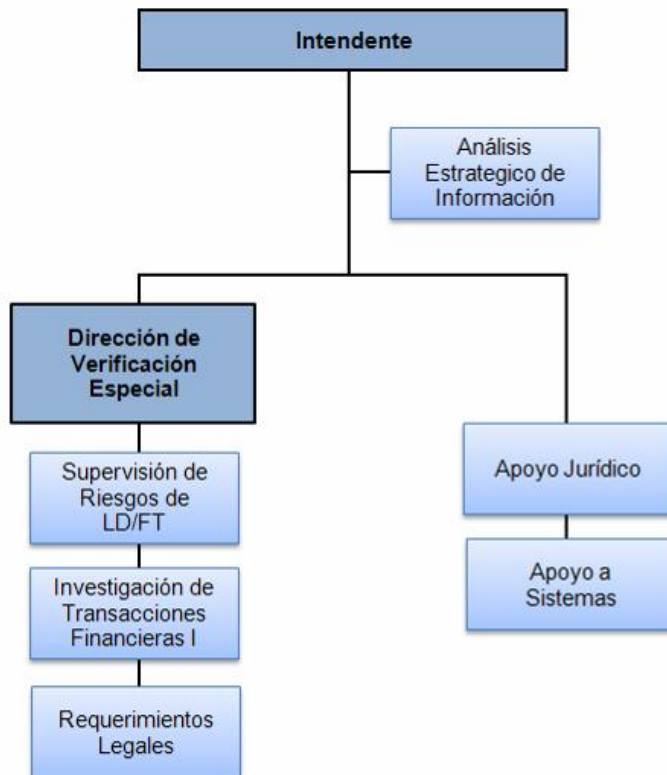
176. Conviene aclarar que la IVE también cumple funciones de supervisión ALD/CFT sobre todas las instituciones vigiladas por la SIB más algunas otras tales como empresas de remesas. Sin embargo, para propósitos del análisis de la R.26, esta sección se referirá exclusivamente al desempeño de la IVE como unidad de inteligencia financiera.

177. La tabla siguiente indica que el número de denuncias enviadas al MP al mismo tiempo que aumenta el número de RTS incorporados en cada denuncia, lo cual fue apreciado por los evaluadores como indicativo de un creciente valor agregado y calidad en el producto del trabajo de la IVE. Esta opinión pudo corroborarse al observar muestras de los expedientes de trabajo de la UIF.

DENUNCIAS PRESENTADAS							
2005 - 2010							
Posible delito y/o actividad irregular que dio origen a la denuncia	2005	2006	2007	2008	2009	2010¹	Total
Corrupción	3	11	12	10	14	1	51
Remesas	2	3	6			0	11
Extorsión		8	1		17	0	26
Cambistas			6	2	1	0	9
Estafa		5	2			0	7
Narcotráfico	1	1	1		3	2	8
Adopciones ilegales		2	2			0	4
Falsedad	1				1	0	2
Robo		2				0	2
Defraudación Tributaria	1			2	2	0	5
Transferencias Cablegráficas			2	5	3	0	10
Tráfico de personas				2	1	0	3
Total por año	8	32	32	21	42	3	138
1= al 3 de marzo de 2010							
Reportes de Transacción Sospechosa enviados al MP en dicho periodo 472							

178. De conformidad con lo que establece el artículo 32 de la Ley ALD y artículo 24 de su Reglamento, la IVE, forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos, y por lo

tanto el Superintendente de Bancos es su autoridad superior. Su presupuesto del año 2009 asciende a la cantidad de US\$2.8 millones. Su personal está compuesto de la manera siguiente: El Intendente de Verificación Especial quien es el encargado y responsable de la unidad; un Director; un Supervisor de Investigación de Transacciones Sospechosas que tiene bajo su cargo 12 analistas; un Supervisor de Supervisión de Riesgos LD y FT que tiene bajo su cargo 11 inspectores (éstos no realizan funciones de UIF); un Supervisor del área Gestión de Requerimientos Legales que tiene bajo su cargo 11 colaboradores; una Unidad de Análisis de Información con 2 analistas; un equipo secretarial compuesto por 3 secretarías; una Unidad de Asesoría Jurídica, integrada con 2 profesionales y una Unidad de Apoyo en Sistemas compuesta por 3 ingenieros en sistemas. El total del personal asciende a 49 personas, compuesto por abogados y notarios, contadores públicos y auditores, ingenieros en sistemas, administradores de empresas y economistas, muchos de ellos con postgrados, el cual tiene experiencia en: supervisión de entidades financieras y aseguradoras, banca offshore, emisores de tarjetas de crédito, entidades bancarias, derecho tributario, económico y procesal penal entre otros. (ver Estructura Organizacional IVE a continuación)



179. Además del personal actual, la IVE preve contratar a un perito con experiencia del Ministerio Público que actuará como enlace entre la IVE y la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, mayormente para que éste pueda asistir a las audiencias y debates que fuere citado por el Ministerio Público en casos de LD y FT complejos. Sus funciones también incluirán coadyuvar con el personal técnico de la IVE en la elaboración de denuncias penales, así como analizar la documentación de soporte que se traslada al Ministerio Público. Finalmente, dará asesoramiento legal al Intendente de Verificación Especial, Director, Supervisores y Equipo de Analistas e Inspectores. La idea es que dicho funcionario desarrolle una pericia tanto en temas financieros como en los procesos judiciales de casos de LD-FT. De esta manera se supliría la necesidad que el Ministerio Público ha manifestado de

convocar, por medio de orden judicial, a oficiales de cumplimiento del sector bancario o a analistas de la IVE para que rindan declaraciones ante el juez.

180. Dicha medida prevista por la IVE podría ayudar a reforzar los casos de LD-FT, y a minimizar el riesgo de represalias hacia los testigos de parte de los acusados y sus allegados, que conlleva el exponer las identidades de los oficiales de cumplimiento y analistas si fuesen llamados a testificar en juicios verbales y públicos relacionados a casos de alto impacto. El beneficio esperado de designar a un perito único fue confirmado por el equipo evaluador durante entrevistas con representantes del Ministerio Público, del Órgano Judicial y oficiales de cumplimiento de instituciones bancarias. De hecho, ya hubo una experiencia anterior en la que un funcionario de la IVE, aún sin ser el oficial de cumplimiento que emitió un RTS relacionado ni haber conocido de primera mano las transacciones financieras en cuestión, logró explicar al Juez un caso complejo con tanta propiedad, que según el propio MP esta intervención fue determinante para lograr una sentencia condenatoria. También se pudo confirmar con al menos un Juez entrevistado que una buena ilustración de un caso financiero complejo por un perito tiene más peso probatorio ante un tribunal que la declaración de un oficial de cumplimiento que sólo conoce una parte de la información. El equipo evaluador también pudo constatar que debido a la inseguridad y al alto porcentaje de delitos contra la vida que quedan en la impunidad en el país, no es recomendable llamar a oficiales de cumplimiento a testificar en un tribunal de justicia. De hecho, varios oficiales de cumplimiento que fueron entrevistados expresaron su temor y desacuerdo con la posibilidad de ser convocados a declarar en juicio, aunque esto casi nunca haya pasado.⁶ Esto podría además causar que los oficiales de cumplimiento no aporten el detalle necesario en los RTS para así evitar ser llamados como testigos. Por ello la contratación de dicho perito por parte de la IVE aportaría muchos beneficios a la colaboración con el Ministerio Público.

Guías para el envío de ROS:

181. (c. 26.2): La Superintendencia de Bancos, a través de la IVE, mediante Oficio circular No. 2012del 13 de mayo de 2002, trasladó a las personas obligadas una lista de “Señales de Alerta Indicativas para la Detección de Transacciones Inusuales”, que constituyen ejemplos que podrían considerarse para detectar posibles transacciones inusuales o sospechosas. Sin embargo, cada persona obligada debe definir sus propias señales de alerta, considerando entre ellas las que a través de la emisión de oficios circulares, la IVE haga de conocimiento de ellas. Adicionalmente, la IVE ha ejercido su función de establecer los formularios obligatorios para el reporte de operaciones sospechosas, tal como las define el artículo 26 de la Ley ALD.

182. Mediante Oficio circular No. 529-2006 del 20 de abril de 2006 la IVE remitió a todas las personas obligadas, el formulario único IVE-RTS LD/FT denominado Reporte de Transacción Sospechosa de Lavado de Dinero y-o Financiamiento del Terrorismo (RTS LD/FT), el cual sustituye al formulario IVE-BA-04, Reporte de Transacción Sospechosa de Lavado de Dinero. Adicionalmente, el Artículo 16 del Reglamento de la Ley ALD, establece los procedimientos que las personas obligadas deberán observar en el envío de transacciones sospechosas tales como la obligación de los funcionarios que detecten una transacción inusual de comunicárselo al oficial de cumplimiento, quien a su vez debe determinar si ésta tiene el carácter sospechosa en un plazo no mayor de quince (15) días. Luego de transcurrido el plazo indicado, el oficial de cumplimiento debe anotar sus observaciones y las del funcionario que detectó la operación y proceder a notificar, dentro de los diez (10) días siguientes a la IVE, en los formularios establecidos y acompañando la documentación que en los mismos se indica.

⁶ Tan solo un mes después de finalizada la visita a Guatemala del equipo evaluador, el fiscal contra el lavado de dinero renunció a su cargo, según dijo, por haber recibido amenazas de muerte relacionadas con una de sus investigaciones. Ello es indicativo del nivel de riesgo al que podrían estar expuestos las personas llamadas a declarar. (“Fiscal contra el Lavado de Dinero, renuncia por amenazas”. Prensa Libre; Edición electrónica. 3/7/2009.)

183. Entre la documentación que la IVE exige enviar junto con los RTS se incluye: fotocopia de soporte del inicio de relaciones; y fotocopia de anverso y reverso de la documentación de soporte de la transacción reportada

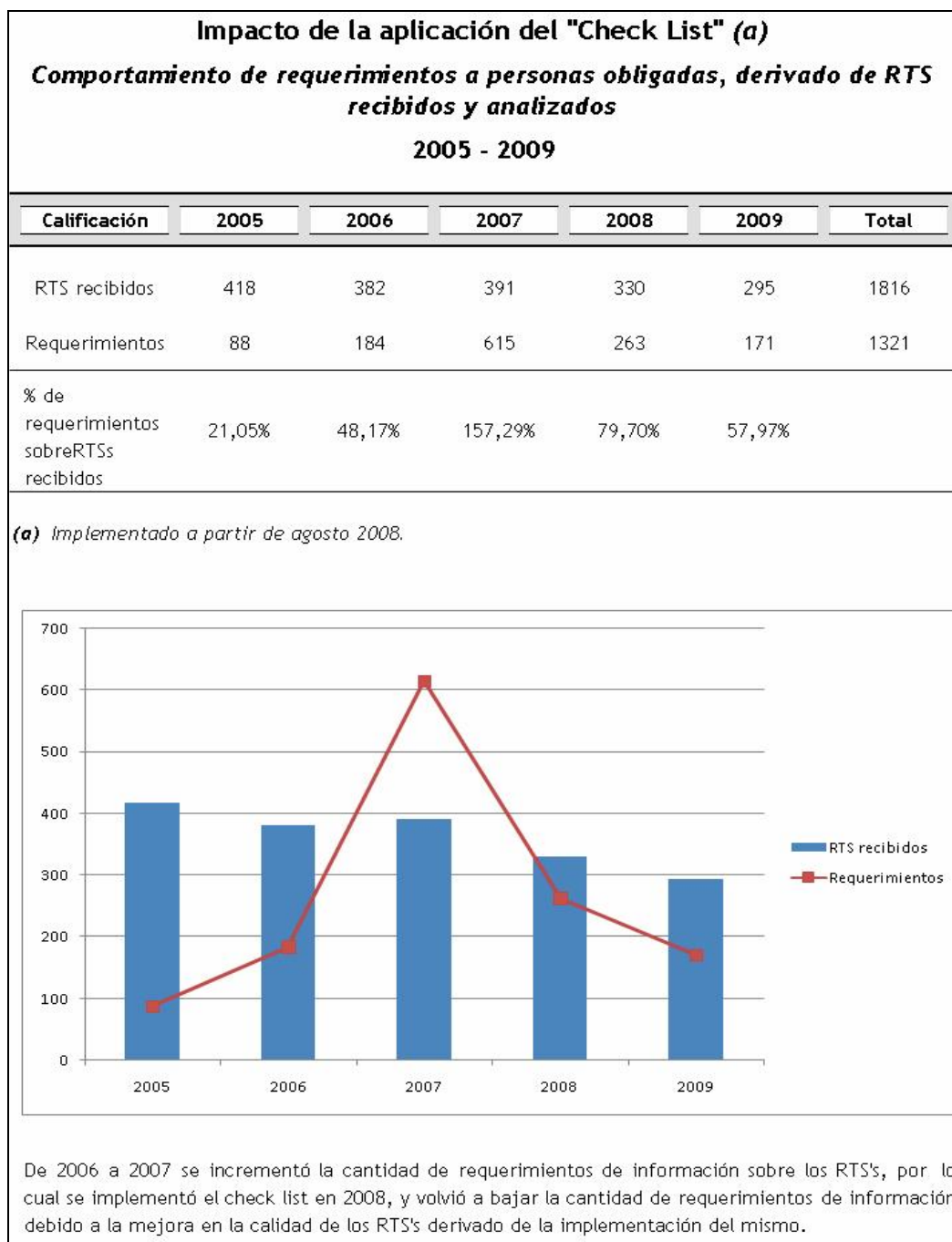
184. De acuerdo con la tabla siguiente el total de RTS recibidos en la IVE desde 2005 a 2008 asciende a 1,521, con un 67% de ellos provenientes del sector bancario.

Reportes de transacción sospechosa recibidos en la IVE, por Persona Obligada

Reportes de transacción sospechosa recibidos en la IVE, por Persona Obligada	2005	2006	2007	2008	Total	Porcentaje
Bancos	237	250	301	236	1024	67.3%
Empresas de Transferencias de fondos	104	57	26	34	221	14.5%
Cooperativas	54	47	37	32	170	11.2%
Tarjetas de crédito	9	9	12	12	42	2.8%
Bancos Off shore	9	11	5	6	31	2.0%
Aseguradoras	3	7	7	7	24	1.6%
Financieras	1	0	0	2	3	0.2%
Afianzadoras	1	0	1	0	2	0.1%
Casas de Bolsa	0	0	1	0	1	0.1%
Almacenadoras	0	0	0	1	1	0.1%
Casas de Cambio	0	1	0	0	1	0.1%
Empresas de Canje de Cheques	0	0	1	0	1	0.1%
Casas de Empeño	0	0	0	0	0	0.0%
Totales	418	382	391	330	1521	100.00%

185. Vale la pena destacar que el número de RTS recibidos de todas las personas obligadas ha venido disminuyendo gradualmente de 418 en 2005, a 330 en 2008, lo cual es atribuible según la IVE al mejoramiento en la calidad de los RTS que se reciben.

186. El equipo evaluador pudo constatar que, en efecto, la IVE ha desarrollado varias acciones tendientes a mejorar la calidad de los RTS, entre las cuales conviene mencionar un nuevo sistema de verificación rápida de datos mínimos y de la calidad de la información. Para la recepción y clasificación de los RTS, la IVE cuenta ahora con una metodología que incluye un sistema de realimentación a las personas obligadas con respecto a la calidad de los RTS remitidos llamado “*check list*” o “listado de chequeo” que reúne todos los elementos que debe contener un RTS al ser remitido a la IVE. Al recibir un RTS, un analista de la IVE efectúa un control rápido (de aproximadamente un día) de calidad de la información contenida en el mismo y si después de revisarlo la información está incompleta, el analista “rechaza” el RTS y notifica a la institución que lo remitió para que ésta lo complete y lo vuelva a remitir. Varias personas obligadas informaron estar satisfechas con dicha realimentación por parte de la IVE y confirmaron que han disminuido los casos reportados gracias a su mejor entendimiento de lo que un buen RTS debe de contener. En palabras de los propios oficiales de cumplimiento, se están viendo forzados a remitir RTS de mejor calidad y, por lo tanto, el número ha disminuido. La tabla siguiente también indica que los requerimientos adicionales que la IVE le ha tenido que hacer a las personas obligadas, para complementar la información, también han disminuido.



187. En diciembre de 2008, la IVE llevó a cabo una Encuesta de Satisfacción del Usuario (fiscales) en el Ministerio Público. Los encuestados que respondieron pertenecen a las Fiscalías: de Narcoactividad; Crimen Organizado y Bancos; Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos; Contra la Vida; Contra la Corrupción; Delitos Económicos, y UNILAT (Unidad Especializada Contra Organizaciones Criminales dedicadas a la Narcoactividad y/o Lavado de Dinero u Otros Activos y delitos contra el Orden Tributario). Calificaron el tiempo de respuesta a requerimientos; los formatos de la documentación enviada; organización de la información y la confiabilidad, calidad y utilidad de la misma; la atención recibida; y el nivel de satisfacción en general. El 32% de los encuestados respondió “muy satisfactorio”; el 59% “satisfactorio”; el 7% “nada satisfactorio”; y el 2% “no aplicable”. Las respuestas recibidas contenían comentarios positivos sobre la forma en que se recibe la información de la IVE, pero algunas también denotaban insatisfacción con los tiempos de respuesta.

Acceso a Información:

188. (c. 26.3, 26.4): La IVE tiene facultades para obtener de las personas obligadas la información necesaria para facilitar el análisis de transacciones financieras. De conformidad con el artículo 28 de la Ley ALD, las personas obligadas deberán proporcionar a la IVE la información que ésta les solicite en la forma y plazo establecidos en el reglamento. No podrá oponerse violación de confidencialidad de ninguna naturaleza, impuesta por ley o por contrato, de la información que las personas obligadas, deban proporcionar a las autoridades competentes en cumplimiento de esta ley o de las disposiciones que la reglamenten. Cuando los obligados a proporcionar la información no pudieren hacerlo dentro del plazo estipulado por la IVE, podrán solicitar una prórroga con la debida anticipación explicando los motivos que la justifiquen y ésta deberá resolverse antes de que concluya el plazo señalado originalmente.

189. La IVE cuenta con amplias facultades que le permiten tener un acceso a la información financiera administrativa y de otra índole para poder cumplir adecuadamente sus funciones. Para ese efecto el párrafo final del artículo 34 de la Ley ALD establece que todas las entidades públicas o privadas quedan obligadas a prestar la colaboración que les solicite la IVE para la realización de los objetivos de dicha ley. Por su parte, el artículo 35 establece que la IVE y cualquier otra autoridad competente, podrán prestar y solicitar asistencia administrativa a autoridades competentes de otros países con el fin de facilitar las actuaciones que deban realizar para dar cumplimiento a los objetivos de dicha ley.

190. El artículo 31 de la Ley ALD establece que las personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de dicha ley serán responsables por el incumplimiento de las obligaciones que ésta les impone y serán sancionadas por la autoridad administrativa competente, además de tener que cumplir con la obligación omitida El literal g) del artículo 33 de la misma Ley le asigna a la propia IVE la facultad de imponer estas sanciones (ver Acuerdo No. 43-2002 sobre Régimen Sancionatorio y análisis en la sección 3.10 de este informe).

191. El Área de Gestión de Requerimientos Legales de la IVE se dedica a atender los requerimientos de información hechos por el Ministerio Público, incluyendo la recepción y ponderación de cada requerimiento, la asignación de deberes, la búsqueda en bases de datos, la solicitud de información a personas obligadas y a UIF extranjeras, y la elaboración de respuestas. También realiza frecuentemente recopilación de información in-situ llegando a las oficinas de las instituciones financieras, en caso de consultas urgentes del Ministerio Público. Esta área especializada cuenta con 6 funcionarios dedicados a darle respuestas al Ministerio Público, lo cual parece excesivo comparado con los 12 analistas financieros dedicados a realizar la función misional de la IVE como unidad de inteligencia financiera. Si bien es cierto que esta área también es responsable de atender los requerimientos de información de UIFS extranjeras, gran parte de su tiempo se dedica a esperar en persona en las instalaciones de instituciones financieras por documentos que el Ministerio Público le ha solicitado a la IVE, o por decisión propia para ampliar la información de las denuncias. Es positivo que la IVE tenga la posibilidad de acudir directamente a las oficinas de una institución financiera cuando necesite información urgente, pero el hecho de que esta práctica tenga que utilizarse a veces para ejercer presión ante la institución y agilizar así la respuesta, denota una dificultad para obtener la información oportunamente y un uso ineficiente de recursos humanos. De un total de 56 requerimientos respondidos al Ministerio Público en los primeros seis meses de 2009, en aproximadamente 2 casos al mes la información ha sido obtenida personalmente mediante “requerimientos motorizados”, como se les conoce en la IVE.

192. De acuerdo a la tabla siguiente, desde enero de 2009 la IVE había respondido a un total de 56 requerimientos del Ministerio Público; tenía 23 pendientes; y había respondido parcialmente a 9,

haciendo un total de 88 requerimientos al 31 de mayo de 2009. Esta cifra representa un incremento de 70 requerimientos más al mes, lo cual denota un desgaste en los requerimientos. El equipo considera que la necesidad de hacer requerimientos en persona también se debe a que el MP y sus auxiliares tienen muy limitadas capacidades técnicas y legales para investigar delitos y por eso descargan en la IVE la labor de obtener información que el MP debería estar en capacidad de obtener por sí mismo (ver análisis de este problema en la sección 2.6).

AÑO	REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO A LA IVE (31/12/2009)			
	Pendientes	Parcialmente	Completamente	Total
2005	0	0	167	167
2006	0	0	166	166
2007	0	0	207	207
2008	0	0	216	216
2009	4	4	219	227
TOTAL	4	4	975	983

193. La IVE le solicita información para soporte de sus investigaciones mayormente al Registro de la Propiedad Inmueble, Registro Mercantil, Dirección General de Migración, Superintendencia de Administración Tributaria, Ministerio Público, Organismo Judicial, Contraloría General de Cuentas, y a otras entidades que considere necesarias en cada caso. Sin embargo, no solicita antecedentes penales a la Policía y ninguno de estos requerimientos son en línea. Debe remitir requerimientos por escrito y esperar a que la institución responda. Actualmente, la IVE está negociando un memorando de entendimiento para requerimientos de información con el Registro de la Propiedad Inmueble. El no tener acceso en línea causa demoras evitables en el acceso de información en casos en los que la información está digitalizada, y el no tener acceso rápido a antecedentes penales que pueda poseer la Policía debilita el desempeño apropiado de las funciones de la IVE.

Envío de casos al Ministerio Público:

194. (c. 26.5): En cuanto a la comunicación de los datos recabados por la IVE, el artículo 33 de la Ley ALD en el literal e) establece, entre las funciones de la IVE, que en caso de indicio de la comisión de un delito debe presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, señalar y aportar los medios probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder. El literal f) indica que debe proveer al Ministerio Público cualquier asistencia requerida en el análisis de información que posea la misma, y coadyuvar con la investigación de los actos y delitos relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos.

195. Algunos de los fiscales entrevistados durante esta evaluación se mostraron inconformes con el valor añadido del análisis de la IVE con respecto al trabajo que ellos hacen. Solamente se habían recibido en el Ministerio Público tres denuncias de la IVE en lo que va del principio del año 2009 a la fecha de esta evaluación. La última de esas denuncias se había recibido hacía solamente unos días antes de esta evaluación y tenía que ver con un RTS del año 2007. Esta situación se explica porque la IVE recibe RTS que por sus características nos son inmediatamente conformados dentro de una denuncia y pasan a un estado de “Monitoreo” en tanto surge nueva información que haga viable la determinación de elementos de la comisión del delito de LD para poder elaborar una denuncia que pueda ser trasladada al M.P., en algunas ocasiones ocurre que un RTS puede pasar en monitoreo hasta dos años

hasta que nueva información relevante es identificada y asociada al mismo para, hasta entonces, trasladar toda la información al MP. Sin embargo algunos fiscales entrevistados indicaron que el nivel de comunicación con la IVE no es idóneo. No hay discusiones o contacto entre el IVE y el MP antes que una denuncia sea enviada al Fiscal Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. Esto se debe a que la gestión de la Unidad de análisis del MP no esta relacionada con el tema de LD y por Ley solo es posible comunicarse a través de la Fiscalía de Lavado de Dinero, no obstante se han iniciado reuniones periodicas entre la IVE y la Fiscalía de Lavado de Dinero.

196. La Unidad de Análisis del Ministerio Público cuenta con ocho auditores y dos economistas altamente calificados. Ellos sirven como asesores de los Fiscales Especiales del Ministerio Público que conocen los casos de LD. El asesoramiento puede (o no) estar relacionado con denuncias de la IVE. Cuando se trata de casos por denuncias provenientes de la IVE, los fiscales pueden pedirle ayuda a dicha Unidad para obtener un entendimiento óptimo, especialmente de los casos complejos de LD. Los auditores y economistas de dicha Unidad del Ministerio Público amplían el mapeo y la información recibidos junto a las denuncias de la IVE, usando sus propios recursos de información ya existentes en el Ministerio Público, e información obtenida por medio de requerimientos de asistencia legal al extranjero. Algunas veces la información o análisis añadidos por la Unidad de Análisis del MP a las denuncias no es suficiente. Por lo tanto deben de requerirle a la IVE que amplíe lo remitido originalmente. Sin embargo, en la mayoría de los casos antes mencionados la IVE no tiene conocimiento de las propias ampliaciones que ha hecho el MP

Autonomía:

197. (c. 26.6): Siendo la IVE la encargada de velar por el objeto y cumplimiento de las normativas relacionadas con LD-FT, ésta fue creada dentro de la estructura de la SIB, entidad que goza de independencia funcional, para el cumplimiento de sus fines; según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de Supervisión Financiera, Decreto No. 18-2002 del Congreso de la República de Guatemala, y que es reconocida en el país por su naturaleza técnica y apolítica. Adicionalmente, el hecho de que la IVE esté creada por ley y que esta misma ley indique que deben asignársele recursos adecuados para el cumplimiento de sus funciones, le otorgan un grado especial de solidez, permanencia e independencia del cual no gozan las demás intendencias de la SIB.

198. Por su parte, al interior de la SIB la IVE cuenta en la práctica con los recursos y autonomía técnica necesarios para ejecutar sus funciones de inteligencia financiera apropiadamente. Ello se ve sustentado por el artículo 33 de la Ley ALD en el que se le asigna específicamente a la IVE, y no a la Superintendencia, la función de conocer, analizar y decidir sobre el destino de la información. Por lo tanto, si bien existe una subordinación jerárquica del Intendente de Verificación Especial hacia el Superintendente de Bancos para asuntos administrativos, para el control de desempeño y cumplimiento de planes estratégicos, y particularmente para las funciones de supervisión ALD/CFT sobre las instituciones financieras, esta subordinación no implica una ingerencia del Superintendente en las decisiones técnicas de la UIF de Guatemala.

199. El presupuesto de la IVE es remitido a la Junta Monetaria, que es la autoridad máxima del Banco de Guatemala y de la Superintendencia de Bancos, para su aprobación después que el Intendente de Verificación Especial remite sus requerimientos a ésta por medio del Superintendente de Bancos. La Junta está conformada por **varios ministros** del gobierno y representantes de sectores económicos, entre otros. Los recursos de la SIB, y por ende de la IVE, no dependen de una ley de presupuesto nacional sino que se derivan de las tasas que obligatoriamente deben pagar las instituciones vigiladas. En caso de ser insuficiente, la ley dispone que el Banco Central cubra el faltante. Por último, el Intendente de

Verificación Especial puede ser removido por el Superintendente de Bancos previa aprobación de la Junta Monetaria. Estos hechos también fortalecen la autonomía de la IVE.

Protección de la Información:

200. (c. 26.7): Las instalaciones de la SIB son razonablemente bien vigiladas. Al interior de ésta, la IVE dispone de un área exclusiva y separada de las otras oficinas que operan dentro de la Superintendencia de Bancos. Se utiliza un sistema biométrico (código y huella digital) para obtener el ingreso a la IVE, apoyado con cámara de circuito cerrado, y ningún otro funcionario de la SIB puede ingresar. No todos los empleados de la IVE tienen acceso a las mismas bases de datos, sino que se les asigna el acceso según sus funciones.

201. El área de trabajo de los analistas financieros quienes manejan el mayor volumen de documentos confidenciales, no está físicamente separada del resto de la IVE. Sin embargo, se ha limitado a cinco el número máximo de expedientes que cada analista mantiene abiertos en todo momento, y existen procedimientos escritos que obligan a no dejar ningún documento físico sobre el área de trabajo cuando un funcionario se ausenta de la oficina.

202. Las bases de datos de la IVE y toda su información electrónica es mantenida en su propio servidor que no hace parte ni está conectado con el sistema de cómputo del resto de la Superintendencia. Adicionalmente, se autoriza el acceso al Internet, al Sitio Seguro de Egmont (para el intercambio de información con unidades homólogas), y a discos externos “USB” a algunos empleados solamente, según lo requieran sus funciones y el nivel de seguridad que tengan.

203. La Ley de Bancos y Grupos Financieros establece en el artículo 63 que salvo las obligaciones y deberes establecidos por la normativa sobre lavado de dinero u otros activos, los directores, gerentes, representantes legales, funcionarios y empleados de los bancos, no podrán proporcionar información, bajo cualquier modalidad, a ninguna persona, individual o jurídica, pública o privada, que tienda a revelar el carácter confidencial de la identidad de los depositantes de los bancos, instituciones financieras y empresas de un grupo financiero, así como las informaciones proporcionadas por los particulares a estas entidades. Este artículo permite obtener información de las entidades bancarias y de las que forman un grupo financiero, cuando se trata de investigaciones conforme la normativa de lavado de dinero. También ayuda a proteger la confidencialidad de la información a la que tiene acceso la IVE. Sin embargo, para evitar filtraciones de información, sería conveniente que los RTS sean entregados directamente a personal de la IVE en vez de la SIB, aunque este último de todos modos está sujeto a obligaciones de confidencialidad. Con el mismo propósito de evitar filtraciones, debería procurarse que las denuncias trasladadas por la IVE lleguen directamente al despacho del Fiscal Contra Lavado de Activos

Informes públicos y membresía en EGMONT.

204. (c. 26.8): El literal c) del artículo 33 de la Ley ALD establece que entre las funciones de la IVE está elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones. La IVE ha dado a conocer datos estadísticos a través de diferentes presentaciones, en concordancia con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley ALD. Sin embargo, apenas acaba de iniciar la divulgación de boletines (que se espera sean trimestrales) para educar a las instituciones financieras del país, y el primero aún no está disponible en su página web. No hay evidencia que soporte la existencia de publicaciones de informes periódicos, estudios e información de sus actividades. No existe un historial de publicaciones por parte de la IVE.

205. En materia de análisis y publicación de tendencias y tipologías la IVE ha elaborado estudios a nivel nacional con información recabada de las personas obligadas en temas concernientes a la

narcoactividad, incluyendo: narcoproducción, narcoviolencia, y rutas de narcotráfico. Dichos estudios se han llevado a cabo individualmente con diversas personas obligadas con el fin de asistirles en la identificación de riesgos. Adicionalmente, la IVE participó recientemente en un estudio de tipologías regionales hospedado por el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), el cual aún no ha sido publicado.

206. (c. 26.9; 26.10): La IVE obtuvo membresía del Grupo Egmont durante la plenaria realizada por esa organización, en Sydney, Australia el 23 de julio de 2003.

207. Entre las funciones de la IVE, está la establecida en el literal d) del artículo 33 de la Ley ALD, que se refiere a la función de intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el análisis de casos relacionados con el lavado de dinero u otros activos, previa suscripción con dichas entidades de memorandos de entendimiento u otros acuerdos de cooperación. En los memorandos de entendimiento se establece que la información que se intercambie no puede ser utilizada para compartirse con otras entidades a menos que se cuente con la autorización escrita de la unidad de inteligencia o análisis que la proporciona. También se establece que la confidencialidad de la información está protegida por lo menos en la forma en que se protege la información relacionada con lavado de dinero en el país que la recibe.

208. De acuerdo a la tabla que sigue, la IVE ha firmado memorandos de entendimiento con 38 países hasta la fecha, entre los cuales se encuentran aquellos países que a juicio de los evaluadores son con los cuales puede haber una mayor necesidad de intercambio:

Memoranda de Entendimiento Firmados por la IVE

No.	País	UIF Nombre Oficial	Firmado por unidad homóloga	Firmado por IVE Guatemala	Lavado de Dinero	Financiamiento del Terrorismo
1.	El Salvador	Unidad de Investigación Financiera	8-May-2002	8-May-2002	SÍ	NO
2.	Panamá	Unidad de Análisis Financiero	16-May-2002	16-May-2002	SÍ	SÍ
3.	Montserrat	Money Laundering Reporting Authority	2-Aug-2002	2-Aug-2002	SÍ	NO
4.	Brasil	Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)	29-Aug-2002	29-Aug-2002	SÍ	NO
5.	Bolivia	Unidad de Investigaciones Financieras (UIF)	25-Sep-2002	25-Sep-2002	SÍ	NO
6.	Honduras	Unidad de Información Financiera	16-Oct-2002	16-Oct-2002	SÍ	NO
7.	España	Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias	15-Nov-2002	20-Nov-2002	SÍ	NO
8.	Venezuela	Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UIF)	11-Apr-2003	15-Apr-2003	SÍ	NO
9.	Argentina	Unidad de Información Financiera (UIF)	24-Jul-2003	7-Aug-2003	SÍ	NO
10.	Barbados	Financial Intelligence Unit	15-Aug-2003	22-Jul-2003	SÍ	NO
11.	Costa Rica	Instituto Costarricense sobre Drogas, Unidad de Análisis Financiero	16-Sep-2003	10-Sep-2003	SÍ	NO
12.	Comunidad de las Bahamas	Financial Intelligence Unit	15-Oct-2003	27-Oct-2003	SÍ	NO
13.	Bélgica	Financial Intelligence Processing Unit CTIF-CFI	3-Feb-2004	3-Feb-2004	SÍ	SÍ
14.	Corea	Korea Financial Intelligence Unit (KoFIU)	31-Aug-2004	7-Sep-2004	SÍ	NO

15.	Francia	TRACFIN-Traitement du Renseignement et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins	13-Oct-2004	25-Aug-2004	SI	SI
16.	Albania	General Directorate for Prevention of Money Laundering	5-Apr-2005	21-Mar-2005	SI	NO
17.	Haití	Unidad de Inteligencia Financiera (UCREF)	25-Apr-2005	25-Apr-2005	SI	NO
18.	Bermudas	Financial Investigation Unit (BPSFIU)	25-Apr-2005	25-Apr-2005	SI	SI
19.	San Vicente y las Granadinas	Financial Intelligence Unit	25-Apr-2005	25-Apr-2005	SI	SI
20.	Líbano	Special Investigation Commission	15-Jun-2005	8-Sep-2005	SI	SI
21.	Italia	Ufficio Italiano dei Cambi (UIC)	24-Jun-2005	27-Jun-2005	SI	SI
22.	Chile	Unidad de Análisis Financiero	27-Jun-2005	27-Jun-2005	SI	SI
23.	México	Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público	27-Jun-2005	27-Jun-2005	SI	SI
24.	Antillas Neerlandesas	MOT - Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Nederlandse Antillen	27-Jun-2005	27-Jun-2005	SI	SI
25.	Ucrania	State Committee for Financial Monitoring	3-Sep-2005	3-Sep-2005	SI	NO
26.	Rumania	National Office for the Prevention and Control of Money Laundering	5-Oct-2005	30-Sep-2005	SI	SI
27.	Bulgaria	Financial Intelligence Directorate State Agency for National Security	6-Oct-2005	10-Oct-2005	SI	SI
28.	Aruba	Unusual Transactions Reporting Office (Meldpunt Ongebruikelijke Transacties)	17-Jan-2006	30-Nov-2005	SI	SI
29.	Estados Unidos de América	Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)	9-Jun-2006	9-Jun-2006	SI	SI
30.	Canadá	FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada)	14-Jun-2006	9-Jun-2006	SI	SI
31.	Islas Caimán	Financial Reporting Authority (CAYFIN)	24-Oct-2006	24-Oct-2006	SI	SI
32.	República Dominicana	Unidad de Análisis Financiero	25-Oct-2006	25-Oct-2006	SI	SI
33.	Paraguay	UAF (Unidad de Análisis Financiero)	31-May-2007	25-May-2007	SI	SI
34.	Anguila	Money Laundering Reporting Authority	20-Nov-2008	20-Nov-2008	SI	SI
35.	San Cristóbal y Nieves	Financial Intelligence Unit (FIU)	20-Nov-2008	20-Nov-2008	SI	SI
36.	Perú	Unidad de Inteligencia Financiera del Perú	12-Dic-2008	20-Ene-2009	SI	SI
37.	Colombia	Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF)	22-Ene-2009	10-Feb-2009	SI	SI
38.	República de Macedonia	Money Laundering Prevention and Terrorism Financing Office	25-Feb-2009	23-Mar-2009	SI	SI
39.	Portugal	Unidade de Informação Financeira (Financial Intelligence Unit)	29-Jun-2009	28-Jul-2009	SI	SI

209. De los países que intercambian inteligencia con Guatemala que se les solicitó información acerca de su experiencia con ese país, ninguno le expresó al equipo evaluador haber tenido mayores inconvenientes cuando hizo requerimientos de información a la IVE. Uno de ellos expresó inconformidad con la falta de acceso de la IVE a los antecedentes judiciales de las personas. Por su

parte, la IVE llevó a cabo una “Encuesta de Satisfacción del Usuario” en 2008 dirigida a Argentina, Colombia, México, Venezuela, Estados Unidos y Panamá (Este último no respondió la Encuesta.). Calificaron el tiempo de respuesta a requerimientos; los formatos de la documentación enviada; organización de la información y la confiabilidad, calidad y utilidad de la misma; la atención recibida; y el nivel de satisfacción en general. El 52% de los encuestados respondió “muy satisfactorio”; el 40% “satisfactorio”; el 5% “nada satisfactorio”; y el 2% “no aplicable”. Las respuestas recibidas contenían comentarios positivos sobre los documentos de soporte que recibieron de la IVE, pero algunas también denotaban insatisfacción con el nivel de detalle y los formatos en que se presenta la información.

2.5.2. Recomendaciones

210. Hacer un mayor esfuerzo en comunicar al Ministerio Público los méritos de la contratación de un asesor legal para incrementar la cooperación y efectividad en la asistencia que se prevé dar a la Fiscalía Contra el Lavado de Activos.

211. Explorar posibles vías para reducir el esfuerzo dedicado a recopilar información para el MP y para trabajar más coordinadamente con el MP en la investigación de casos complejos.

212. Establecer la comunicación en medio electrónico de los RTS de las personas obligadas a la IVE, y de los casos que la IVE envía al Ministerio Público.

213. Firmar memoranda de entendimiento con más instituciones públicas, incluyendo la Policía, con el fin de mejorar el acceso rápido y seguro a información que pueda servir de apoyo a las investigaciones de la IVE.

214. Procurar comunicaciones más directas entre la IVE y el MP para minimizar el número de personas que tienen acceso a las denuncias que la IVE traslada al MP.

2.5.3. Cumplimiento de la Recomendación 26

	Calificación	Resumen de los factores afines a la s.2.5 que apoyan la Calificación general
R.26	MC	<ul style="list-style-type: none"> • La IVE no tiene acceso rápido a información policial • La IVE no recibe respuestas rápidas a los requerimientos de información que le hace a otras instituciones • Excesivo gasto de tiempo y recursos para tramitar consultas del MP, los cuales podrían asignarse a fortalecer el análisis de casos y la coordinación con el propio MP para investigación de casos complejos. • La Unidad de Análisis de Información de la IVE aún no ha dado a conocer públicamente suficientes informes periódicos con estadísticas, tipologías y tendencias, e información de las actividades de la IVE

2.6. Autoridades del orden, ministerio público y otras autoridades competentes (R.27 y 28) – marco para la investigación y procesamiento de delitos y para la confiscación y congelamiento

2.6.1. Descripción y Análisis

215. Resumen: El Ministerio Público (MP) recibe denuncias de la IVE, otras instituciones del Estado, o de los ciudadanos para luego proceder con la investigación de derecho correspondiente, con apoyo de La División de Investigaciones Criminalísticas, la Unidad de Análisis del Ministerio Público,

y la Policía Nacional Civil. Las operaciones encubiertas y entregas vigiladas son métodos especiales de investigación que existen en la legislación guatemalteca pero que aún no han sido implementadas, mientras que las intercepciones telefónicas apenas habían comenzado a ser implementadas dos meses antes de esta evaluación. El MP no puede levantar el Secreto bancario sin orden judicial, y la experiencia indica que no es posible mantener la confidencialidad de la investigación después de que se informa al juez. Sólo la fiscalía especializada de LD puede obtener esta información a través de la IVE. Para aliviar el problema las demás fiscalías especializadas abren al mismo tiempo una investigación por el delito precedente y otra por lavado, lo cual les permite pedirle al Fiscal contra LD que pida la información a la IVE. Por otro lado, el fuero de los alcaldes se ha convertido en una barrera para el MP (pues los tribunales que deciden la procedibilidad de una investigación están sometidos a demasiadas presiones políticas). Estas, y posiblemente otras deficiencias pueden ser factores contribuyentes a que no se estén logrando casos de LD de alto impacto y/o altos montos de dinero.

Autoridades Designadas y sus Competencias:

216. (c. 27.1) En Guatemala el Ministerio Público desarrolla la investigación en materia de lavado de activos, con base en el artículo 251 de la Constitución de la República de Guatemala, así como en la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto 90-40 del Congreso de la República de Guatemala, el cual establece en el primer párrafo del artículo que “el Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública; además de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país.”

217. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo No. 2-2002 el Consejo del Ministerio Público, con fundamento en lo considerado y lo que establece el artículo 18 inciso 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Decreto 90-94, del Congreso de la República de Guatemala, acuerda crear la Fiscalía de Sección Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que se encargará de conocer todos los procesos de hechos delictivos y acciones que tengan relación con actividades relativas al Lavado de Dinero u Otros Activos, a que se refiere el Decreto 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala. Dentro del Ministerio Público la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos es la unidad especializada para conocer los casos de LD/FT. Sin embargo, las Fiscalías de Corrupción, y de Crimen Organizado/Bancos también tienen la facultad de conocer e investigar el LD cuando surge de la investigación del delito precedente.

218. Muchos de los RTS que envían los sujetos obligados tiene que ver con corrupción, y se estima que un 50% de las denuncias de LD que recibe la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero también son por corrupción. En el año 2008 se incautaron entre \$4 millones y \$4.5 millones, y más de un millón de Euros por delitos de LD.

219. El Ministerio Público cuenta con un departamento específico denominado Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), establecido en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Los agentes del DICRI son utilizados para el levantamiento de evidencias en la escena del crimen. Cabe agregar que el MP también cuenta con una Unidad de Análisis que brinda asesoría en casos económicos a todas las fiscalías especiales que conocen casos de LD y FT. Este Ministerio tiene el apoyo operativo de la Policía Nacional Civil, de conformidad con el artículo 10 literal a) de la Ley de la Policía Nacional Civil, Decreto Número 11-97 del Congreso de la República, y artículo 309 del Código Procesal Penal. Sin embargo, esa institución no participa en la investigación y análisis de los casos de LD/FT por su falta de conocimiento y capacitación en el tema.

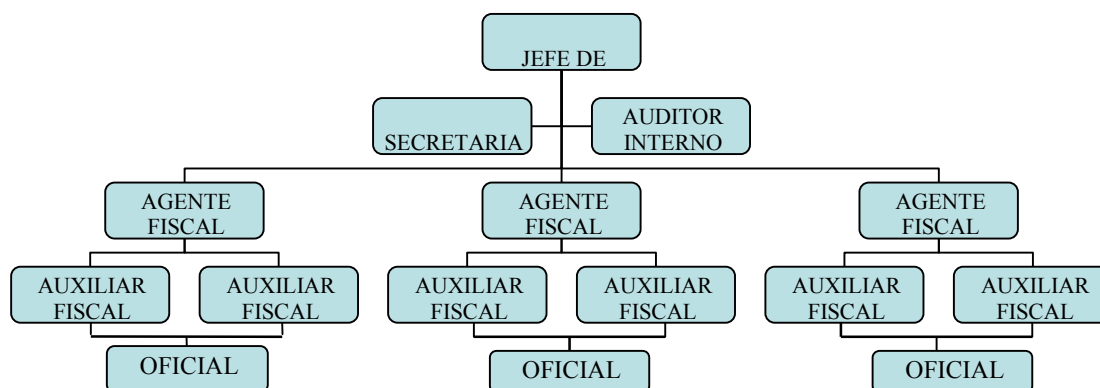
220. Para la investigación de LD y FT el Ministerio Público también cuenta con el apoyo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) (artículo 33 literal f) de la Ley ALD), a través de la cual puede acceder a cualquier información en poder de los sujetos obligados, aunque se trate de información protegida por secreto bancario, y sin necesidad de orden judicial (artículo 28). Para todas

las otras investigaciones, no relacionadas con LD o FT, el MP no puede obtener acceso directo a información protegida por el secreto bancario (artículo 24 de la Constitución Política). Sin embargo, existe una insuficiencia de personal auxiliar del MP para investigaciones que podrían aprovechar bien el producto de la IVE.

Estructura y Recursos de las autoridades de investigación:

221. La Fiscalía de Sección Contra el Lavado de Dinero está estructurada de la siguiente manera: un Fiscal Contra el Lavado, una Oficinista; tres Agentes Fiscales, los cuales cuentan con dos Auxiliares Fiscales respectivamente; y un Oficial por cada dos Auxiliares Fiscales (ver organigrama siguiente). El DICRI cuenta con aproximadamente 200 efectivos, quienes le dan a poyo a todo el Ministerio Público. Mientras que la Unidad de Análisis del MP cuenta con ocho auditores y con dos economistas para apoyar a los fiscales en casos financieros complejos. Existe deficiencia en la capacidad del Organo Judicial y de la Policía en el área de ALD/CFT.

ORGANIGRAMA DE FISCALIA CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y OTROS ACTIVOS



222. Dentro del Ministerio Público existe también una unidad especializada en la investigación de organizaciones criminales que se dediquen a la narcoactividad y/o lavado de dinero u otros activos y delitos contra el orden tributario, denominada UNILAT. Esta fue creada por medio del Acuerdo Gubernativo No. 40-2006. El artículo 3 de dicho acuerdo le asigna a la UNILAT las siguientes funciones: “llevar a cabo la investigación y persecución penal de ciertos casos de alto impacto, relacionados con la Narcoactividad y/o Lavado de Dinero u otros Activos y contra el orden tributario, cuando éstos estén relacionados en la actividad criminal de una organización delictiva del Crimen Organizado”. Su estructura organizativa esta conformada por: un Agente Fiscal encargado de la Unidad; un Agente Fiscal; dos Auxiliares Fiscales; y una Secretaria. Para el cumplimiento de las funciones descritas, la UNILAT puede requerir apoyo y asesoría de expertos en las materias de su competencia. Para este fin, la IVE tiene asignado a dos analistas quienes se reúnen semanalmente con el personal de la UNILAT y del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En caso de necesidad, la UNILAT le hace requerimientos de ampliación o de análisis de casos abiertos, los cuales son procesados en las oficinas de la IVE para después ser contestados, según sea necesario. Debido a la secretividad de este grupo, no se pudieron obtener estadísticas de casos pendientes, incautaciones, o sentencias por actuación de dicha unidad durante la evaluación.

223. Adicionalmente, a través de Acuerdo entre las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala, una Comisión Internacional contra la Impunidad, denominada CICIG, con facultades para auxiliar al Ministerio Público en casos de Alto Impacto, que se consideren producto de la actividad de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos, además de conductas ilegales de seguridad en donde pueda verse comprometida la imparcialidad. Existe la posibilidad dentro de su mandato, que la CICIG pueda investigar casos de LD.

224. El Acuerdo Gubernativo 203-2008 recientemente creó la Dirección General de Inteligencia Civil (DIGICI) para “asesorar al Ministerio de Gobernación (artículo 2) en la toma de decisiones y la formulación de políticas y planeamientos orientados a la prevención, control, y combate del crimen organizado y de la delincuencia común.” Cuenta con una estructura orgánica robusta que incluye: la Dirección Superior; Organos Sustantivos; Organos Administrativos; Organos de Apoyo Técnico; y Organos de Control. Debido a la naturaleza del DIGICI, cuyas actividades y procedimientos son considerados como asuntos de seguridad nacional y la cual es una institución cumplidora de la confidencialidad que ordena la ley, no se pudieron obtener estadísticas ni un número exacto de sus empleados, durante la visita a Guatemala. Sin embargo, se informó al equipo que la organización aún no cuenta con suficiente personal ni experiencia para colaborar efectivamente con otras agencias de inteligencia y del orden en investigaciones de LD/FT.

225. Corresponde al Organo Judicial la función de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política de la República. Esta función es cumplida a través de los jueces de paz, jueces de primera instancia, los tribunales de sentencia, las salas de la Corte de Apelaciones, la Corte Suprema de Justicia y los Jueces de Ejecución (artículo 43 del código procesal penal). La siguiente tabla, la cual fue proporcionada por el Ministerio Público denota que La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos solamente obtuvo 5 sentencias por LD en 2008, y 4 en 2007. El Órgano Judicial no ha asistido a capacitación de la IVE o de ninguna otra institución nacional directamente, en materia de ALD/CFT. Sus jueces solamente han participado en eventos conjuntamente con la IVE y el Ministerio Público.

226. Por otro lado, es mínima la capacitación y recursos de la policía y demás órganos auxiliares para investigar delitos financieros. Muchos de los agentes policiales y otros agentes sólo cuentan con un título de bachiller sin ninguna formación técnica y ponen en riesgo las investigaciones.

Sentencias condenatorias por delito de Lavado de Dinero u Otros Activos:	2005	2006	2007	2008	2009
Fiscalía Contra el Lavado de Dinero	0	4	4	7	11
Fiscalía Contra Delitos de Narcoactividad	0	0	0	0	0
Fiscalía Contra la Corrupción	1	1	2	0	0
Fiscalía Contra el Crimen Organizado	0	0	1	0	0
Total	1	5	7	7	11

227. El Ministerio Público, dentro de su mandato cuenta con autonomía para actuar en el ejercicio de sus funciones de manera independiente, por propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los Organismos del Estado ni autoridad alguna, salvo lo establecido en su ley orgánica (Art. 1 Ley Orgánica del Ministerio Público). En tal razón dentro de una investigación si se dieran las circunstancias del caso el fiscal competente podría tomar el criterio de posponer o suspender el arresto de alguna persona sospechosa o medidas cautelares para obtener una mayor información y alcanzar un efectivo resultado en la investigación, la cual pudiera ser de casos LD/FT todo ello respetando las leyes del país.

228. Adicionalmente, la Ley Contra la Delincuencia Organizada Decreto No 21-2006 del Congreso de la República, establece métodos especiales para investigar grupos delictivos organizados y delitos de grave impacto social. Así mismo, dicha ley contempla la figura del “colaborador” “derecho premial” contemplado en su artículo 90, que dispone la posibilidad que tiene el fiscal de dar a una persona que ha participado en un hecho delictivo, sea o no integrante de un grupo delictivo organizado, que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación y persecución de miembros de grupo delictivo organizado y a cambio podría recibir los beneficios otorgados en la ley antes referida. Dentro de los beneficios establecidos se tienen: a) El criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal; b) Durante el juicio oral y público y hasta antes de dictar sentencia, el sobreseimiento para los cómplices, o la rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia, para los autores y; c) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena. Además le exige al MP lo siguiente:

“Artículo 17. Alcances de la investigación. En los procesos relativos a los delitos a que se refiere esta Ley, la investigación también deberá extenderse al descubrimiento de las estructuras, formas de operación y ámbitos de actuación de los grupos delictivos organizados.”

229. En razón de lo antes señalado, se evidencia la existencia de disposiciones legislativas vigentes y positivas en Guatemala que permiten al Ministerio Público, como autoridad competente de investigación penal en casos de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del terrorismo, no solo posponer o suspender el arresto de personas sospechosas y/o de medidas cautelares, según las circunstancias del caso, y también la posibilidad de utilizar métodos especiales de investigación y de utilizar derechos penales premiales, a los sospechosos que quieran colaborar eficazmente en la investigación y persecución penal en el crimen organizado y delitos de impacto dentro de ellos casos de LD/FT de conformidad con la Ley citada.

Elementos adicionales:

230. (c. 27.3, c.27.4): La Ley Contra la Delincuencia Organizada, en el Título III, contempla los Métodos Especiales de Investigación. Ellos son: Operaciones Encubiertas (artículos del 21 al 34); Entregas Vigiladas (artículos del 35 al 47); e Interceptaciones Telefónicas y Otros Medios de Comunicación (artículos del 48 al 71). Sin embargo, ninguna institución en Guatemala ha hecho, hasta la fecha, uso de los primeros dos métodos antemencionados, y las Interceptaciones Telefónicas comenzaron a ser implementadas aproximadamente dos meses antes de esta evaluación. La falta de implementación de dichos Métodos Especiales de Investigación puede ser factor contribuyente para que la investigación de casos de LD de alto impacto y/o de altas montas de dinero no sea suficientemente efectiva.

231. (c. 27.5, c. 27.6): Durante la evaluación no se pudieron identificar grupos permanentes o temporales especializados en la investigación de activos del crimen, ni la existencia de investigaciones en conjunto con autoridades competentes de otros países. Tampoco existe coordinación entre las agencias del orden, la IVE y otras autoridades competentes para revisar los métodos, técnicas y tendencias de LD y FT. Lo que si se pudo determinar es que el Ministerio Público ha hecho un total de 111 solicitudes de asistencia legal a otros países en los últimos 4 años, y ha contestado un total de nueve solicitudes del extranjero.

232. (c. 28.1): La Constitución política de Guatemala estipula que el allanamiento será efectuado siempre con orden escrita de juez competente, y en el artículo 23 sobre la “Inviolabilidad de la vivienda” se indica que “nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia [...] De igual manera, el artículo 24 sobre la “Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros” dice que sólo

podrán revisarse o incautarse la correspondencia, sus documentos y libros en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales [...] Adicionalmente, la Ley ALD/CFT establece lo relacionado con las providencias cautelares y el comiso de bienes, relacionados al LD/FT. Por su parte la Ley Contra la Delincuencia Organizada, contempla en el Título cuarto, las medidas precautorias y el comiso de bienes está contenido en el artículo 89. Finalmente, el artículo 60 del Código Penal se refiere al comiso. La tabla siguiente denota que ha habido un incremento constante en las acusaciones, pruebas y allanamientos por delitos de LD entre 2006 y 2008.

ACUSACIONES Y ALLANAMIENTOS

	2005	2006	2007	2008	2009
Acusaciones planteadas Fiscalía Contra Lavado de Dinero	4	5	12	17	15
Allanamientos realizados Fiscalía Contra Lavado de Dinero	0	0	1	2	1
Acusaciones planteadas Fiscalía Contra Delitos de Narcoactividad	0	0	0	0	1
Allanamientos realizados Fiscalía Contra Delitos de Narcoactividad	0	0	0	0	0
Acusaciones planteadas Fiscalía Contra la Corrupción	1	1		2	5
Allanamientos realizados Fiscalía Contra la Corrupción	7	0	6	42	9
Acusaciones planteadas Fiscalía Contra el Crimen Organizado	0	0	1	0	7
Allanamientos realizados Fiscalía Contra el Crimen Organizado	0	0	3	1	1

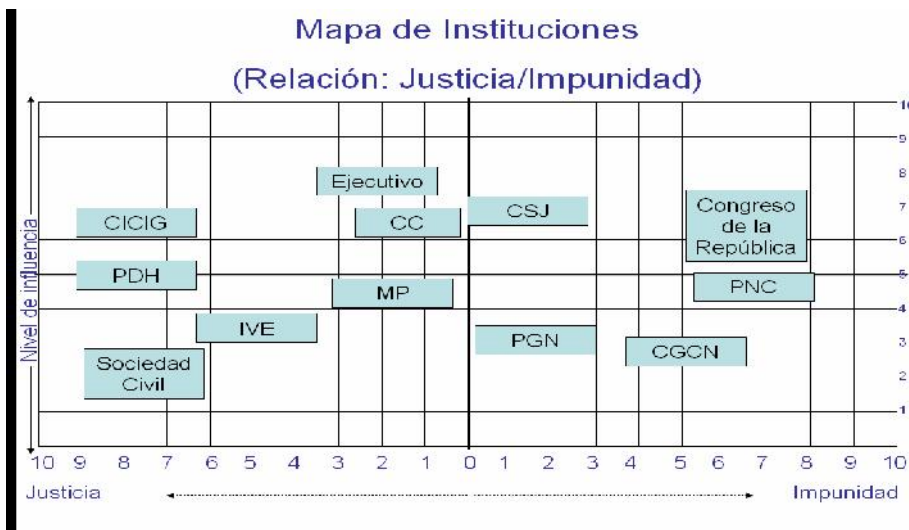
233. (c. 28.2): El Ministerio Público tiene la facultad de tomar declaraciones de los testigos, dentro de un proceso preparatorio, dentro de su investigación, de conformidad a los artículos 1, 2 y 49 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Dentro de un proceso, la toma de declaraciones, se basa principalmente en lo establecido en el Código Procesal Penal, en los artículos del 107 al 110 y del 207 al 224. En diferentes conversaciones con fiscales y analistas del MP varias veces resaltaron el valor del testimonio en un tribunal, de quien redacta un RTS y lo remite a la IVE (oficial de cumplimiento de persona obligada), y de quien lo analiza antes de ser incorporado en una denuncia destinada a La Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (analistas de la IVE). Según ellos, la declaración de esas personas le da mucha credibilidad a un caso por ser ellos quienes tuvieron “conocimiento del RTS de primera mano”. En contraste, los oficiales de cumplimiento de instituciones financieras que fueron entresvistados dijeron que temerían por su seguridad personal en caso de ser identificados públicamente al tener que comparecer y darle la cara a los sujetos de RTS. La IVE expresó que se trataba de una cuestión de roles dentro del sistemas. Es decir, se dijo que el rol de un oficial de cumplimiento debería ser solamente el de reportar transacciones sospechosas, y el de los analistas debería ser el de coadyuvar en el análisis e investigaciones de casos, no el de dar testimonio en juicios verbales y públicos. Con respecto a la credibilidad de los testimonios, después de indagar más a fondo sobre este asunto, se pudo constatar que lo que podría tener mayor importancia para un juez durante una audiencia, sería la posibilidad de contar con un perito que pudiese testificar con respecto a los hechos, y al mismo tiempo ilustrar con propiedad las complejidades técnicas de un dado caso de LD/FT. Tanto el MP, la IVE, como representantes de la industria bancaria citaron un caso en la que el testimonio de un perito financiero con respecto a un caso de LD, resultó en una sentencia condenatoria, razón por la cual la IVE tiene previsto contratar los servicios de un Profesional que, como se menciona anteriormente en este informe, se encargará de presentar informes periciales que apoyen la gestión del Ministerio Público al presentar evidencias a los Juzgados del País en caso de LD y FT

234. Se obtuvo información concreta en cuanto a que en los últimos 5 años ningún Oficial de Cumplimiento o analista de la IVE ha sido citado a declarar en Juicio. La poca probabilidad de que esta situación ocurra sumada a la incorporación del Perito experto, reducen considerablemente su impacto en la calidad del trabajo de Oficiales de cumplimiento y analistas. Como se dijo en la sección 2.3.1, todo lo relativo a procedimiento y providencias cautelares regulado en la Ley ALD, se hace extensivo a los casos de financiamiento del terrorismo, por expresa disposición del artículo 12 de la Ley CFT.

Problemas de Eficacia de la Justicia y las Fuerzas del Orden:

235. El World Bank Institute (WBI), elaboró un índice para medir la calidad del Estado de Derecho del que gozan los ciudadanos de un país. En este índice, un país con una calificación de 2.0 es un país en el que se respeta plenamente el Estado de Derecho. Por el contrario, un país con una calificación de -2.0 es un país en el cual se vive en la anarquía total. Para el caso de Guatemala, el WBI le otorga una calificación de -0.64 en términos de respeto al Estado de Derecho. Lo cual significa que se observa una tendencia más hacia la anarquía que al respeto absoluto de la ley. La débil institucionalidad del país, también es un factor de riesgo alto. Tiene que ver con la escasa aplicación de la ley y con la ausencia de certeza en el castigo.

236. En un estudio reciente se solicitó a un Panel de Expertos elaborar un mapa de las instituciones en el que se les pidió: a) identificar a las instituciones clave en la lucha por la justicia y combate de la impunidad, b) determinar si su labor se materializa en más justicia o en más impunidad, c) ponderar su nivel de influencia. El resultado es el siguiente:



237. Como se menciona anteriormente al momento de esta evaluación, la IVE tenía programado contratar a un perito con experiencia del Ministerio Público para que actuara como enlace entre la IVE y la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, mayormente para que éste pueda asistir a las audiencias y debates que fuere citado por el Ministerio Público en casos de LD y FT complejos. Dicha medida además de que podría contribuir significativamente tanto en la preparación y presentación de la denuncia como en fortalecer la confianza a los oficiales de cumplimiento para que éstos continúen reportando al mismo nivel y que sus RTS sigan teniendo la misma o mejor calidad al momento de remitírselos a la IVE, también contribuirá a ofrecer a los Fiscales y Jueces mayor claridad en la comprensión de casos complejos de LD.

238. Cuando se trata de casos por denuncias provenientes de la IVE, los fiscales pueden pedirle ayuda a la Unidad de Análisis propia del MP para obtener un entendimiento óptimo, especialmente de los casos complejos de LD. Los auditores y economistas de dicha Unidad del Ministerio Público amplían el mapeo y la información recibidos junto a las denuncias de la IVE, usando sus propios recursos de información ya existentes en el Ministerio Público, e información obtenida por medio de requerimientos de asistencia legal al extranjero. Algunas veces la información o análisis añadidos por la Unidad de Análisis del MP a las denuncias no es suficiente. Por lo tanto deben de requerirle a la IVE que amplíe lo remitido originalmente. Sin embargo, en la mayoría de los casos antes mencionados la IVE no tiene conocimiento de las propias ampliaciones del MP.

2.6.2. Recomendaciones

239. **R.27** Capacitar más activamente a miembros del Organo Judicial, del Ministerio Público, y de la DIGICI en temas de ALD/CFT.

240. Fortalecer a la Policía Nacional Civil y otras agencias en temas de ALD/CFT.

241. Formar grupos permanentes o temporales especializados en la investigación de LD/CFT con el fin de llevar a cabo investigaciones en conjunto con las autoridades competentes apropiadas de otros países.

242. Continuar con la implementación de los Métodos Especiales de Investigación en casos de LD/FT como las operaciones encubiertas, entregas vigiladas, e interceptaciones telefónicas con el fin de lograr la incautación de altas montas de dinero, la captura y enjuiciamiento de los principales actores detrás del crimen organizado.

243. Revisar dentro de un espíritu de colaboración la implementación de los métodos de investigación que usen las agencias del orden en casos de LD/FT con el fin de compartir y diseminar los hallazgos o estudios resultantes con los demás actores dentro del sistema de ALD/CFT.

244. Explorar medidas para prevenir fugas de información después de que los jueces hayan sido informados y para asegurarse que el fuero de los alcaldes no sea un obstáculo en las investigaciones de casos de LD y FT.

2.6.3. Cumplimiento de las Recomendaciones 27 y 28

	Calificación	Resumen de los factores afines a la s.2.6 que apoyan la Calificación general
R.27	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Problema de eficacia: las acciones penales en contra de lavadores de dinero son relativamente pocas y sin suficiente énfasis en los líderes de organizaciones criminales o corruptas. Las autoridades del orden responsables de la investigación del delito, especialmente la Policía Nacional Civil, no tienen capacidades técnicas ni humanas suficientes para apoyar al Ministerio Público en sus investigaciones por LD/CFT. • La experiencia indica que no es posible preservar la confidencialidad en la investigación de casos de LD/FT después que el juez haya sido informado. • El fuero del que disfrutaban los alcaldes puede ser, en algunos casos, un obstáculo para el MP en la investigación de casos de LD/FT.
R.28	C	

2.7. Declaración transfronteriza (RE. IX)

2.7.1. Descripción y Análisis

245. Resumen: En Guatemala existe el formulario denominado Declaración Jurada Aduanera de Ingreso o Egreso de Guatemala, el cual fue diseñado en forma conjunta por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). Se supone que dichos formularios deben estar a disposición del público por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en los puestos migratorios. La información resultante de estos formularios es mantenida en una base de datos de la IVE. Sin embargo, el control en los puestos migratorios terrestres es relajado.

246. (c. IX.1) El artículo 25 de la Ley ALD contempla adecuadamente el requisito de declarar el efectivo transfronterizo:

“Declaración. Toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera que transporte del o hacia el exterior de la República, por sí misma, o por interpósita persona, dinero en efectivo o en documentos, por una suma mayor a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, deberá reportarlos en el puerto de salida o de entrada del país en los formularios que para el efecto diseñará la Intendencia de Verificación Especial.”

247. Y el primer párrafo del artículo 8 de la Ley CFT establece una sanción penal en los siguientes términos:

“Trasiego de dinero. Comete el delito de trasiego de dinero quien omitiendo efectuar la declaración jurada correspondiente en el puerto de salida o de entrada del país, en los formularios establecidos por la Ley ALD, por sí misma o por interpósita persona, transporte del o hacia el exterior de la República dinero en efectivo o en documentos negociables al portador, por una suma mayor a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, o su equivalente en moneda nacional.”

248. Para estos efectos en el Aeropuerto Internacional La Aurora, la línea aérea o agencia de viajes se encarga de proporcionar al pasajero, el formulario de Declaración Jurada de Egreso de Guatemala; el delegado del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el área de rayos X de Seguridad Aeroportuaria, se encarga de recoger el formulario debidamente llenado, luego del control que realizan los agentes de la Policía. Posteriormente SAT clasifica los formularios, previo a su envío a la Sección de Operaciones de la Intendencia de Aduanas, quién se encarga de trasladar los que corresponde, a la IVE. Al ingresar el país, es un agente del SAT quien recibe el formulario de Declaración Jurada de Ingreso. Este determina en ese momento si debe revisar su equipaje. Si es detectado trasiego de dinero, el Ministerio Público es contactado inmediatamente.

249. No se pudo confirmar que lo mismo esté ocurriendo en las fronteras terrestres y puertos. La mayoría de la información obtenida con respecto a las fronteras y puertos durante entrevistas con funcionarios del SAT, fue relacionada al control de cargas. Esto denota una deficiencia en la detección del transporte físico transfronterizo de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador que están relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

250. Aparentemente, los formularios que los viajeros llenan cuando trasladan más de \$10.000, únicamente se están aplicando en los aeropuertos, dichos formularios no se han implementado efectivamente en puestos fronterizos terrestres y marítimos, que también son puntos vulnerables para el trasiego de dinero en efectivo. Se considera que las autoridades deben tomar medidas en este aspecto, ya que adicionalmente, el artículo 37 del Reglamento de la Ley ALD contiene lo siguiente:

“Declaración. La declaración jurada que con base en lo establecido en el artículo 25 de la Ley debe realizar la persona que transporte dinero en efectivo o en documentos representativos de efectivo, iguales o mayores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10,000.00) o su equivalente en moneda nacional, del o hacia el exterior de la República, se hará en el formulario que para el efecto diseñe la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia. Dichos formularios se pondrán a disposición del público por parte de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en los puestos migratorios.”

251. Para estos efectos, la IVE, en conjunto con la Superintendencia de Administración Tributaria, diseñaron el formulario denominado: Declaración Jurada Aduanera de Ingreso o Egreso de Guatemala. Adicionalmente, al momento de esta evaluación el equipo de expertos fue informado acerca de una declaración jurada única para toda Centroamérica, cuyo diseño e implementación están siendo discutidos por los gobiernos de la región.

252. (c. IX.2, IX.3, IX.4) Las autoridades de aduanas tienen competencia para requerir esta información a los viajeros, y para retener el dinero en caso necesario, tal como indica el artículo 25 de la Ley ALD:

“Declaración. [...] La autoridad competente podrá verificar la información proporcionada en la declaración jurada contenida en el formulario a que se refiere el párrafo anterior. En caso de existir omisión de la declaración o falsedad de la misma, el dinero o los documentos relacionados serán incautados y puestos a disposición de las autoridades para el proceso de investigación penal.”

253. El tercer párrafo del artículo 37 del Reglamento de la Ley de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos indica:

“Artículo 37. Declaración (...) Cuando se realice la incautación de dinero en efectivo o documentos, los mismos deberán ser entregados en forma inmediata al Ministerio Público, quien deberá auxiliarse de la Policía Nacional Civil, con el objeto de garantizar el resguardo de los mismos. Al momento de realizarse la entrega de los documentos o dinero incautados, deberá faccionarse un acta en la que se haga constar la realización de dicho acto (...)”

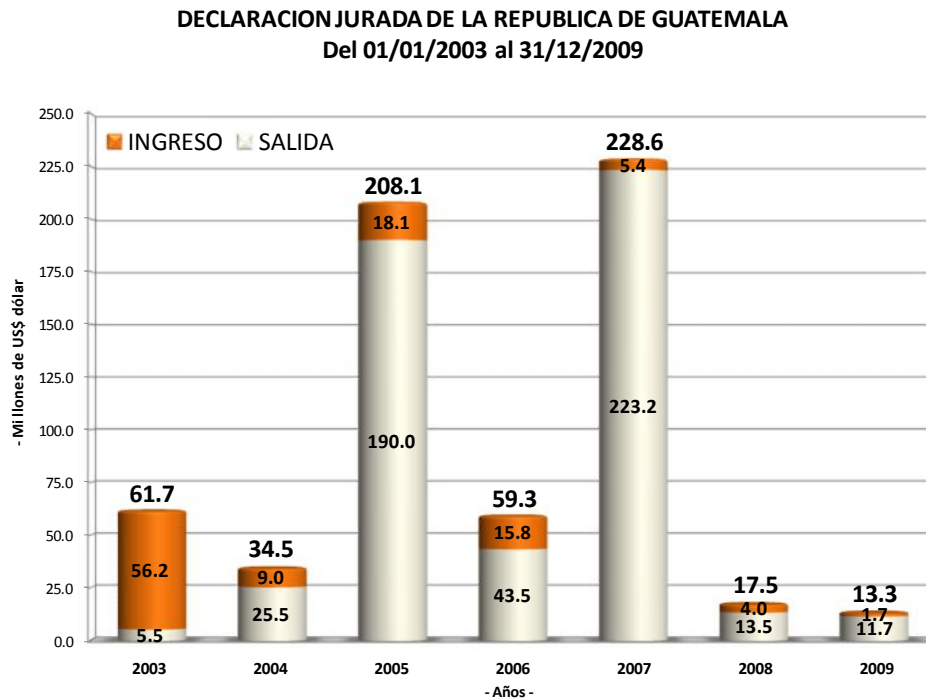
254. A continuación se presentan las estadísticas anuales del monto total del dinero y bienes incautados en los aeropuertos del país u otros los lugares, dentro del territorio nacional, relacionados con casos de investigación de LD-FT del 2005 a la fecha:

Dinero incautado en aeropuertos y otros lugares, relacionado con casos de investigación de LD-FT

	2005	2006	2007	2008	2009
Euros	16,990	0	17,070	2,300	10
Dólares	454,238	189,681	1,553,845	4,383,251	2,036,256
Quetzales	210	246,400	1,187,385	630,435	276,977
Pesos Colombianos	0	0	522,500	119,000	24,500
Pesos Mexicanos	46,000	0	0	10,000	229,380
Colones Costa Rica	0	0	0	55,000	0

255. (c. IX.4) Adicionalmente, según el artículo 37 del Reglamento de la Ley ALD *“La SAT elaborará un reporte mensual de las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, en el que incluirá la fecha de ingreso o egreso, el nombre del declarante y el monto declarado. Dicho reporte deberá remitirse a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, dentro del mes siguiente al que corresponda.”*

256. (c. IX.5) El Servicio de Administración Tributaria elabora un informe mensual de las declaraciones a que se refiere el párrafo anterior, en el que incluye la fecha de ingreso o egreso, el nombre del declarante y el monto declarado. Seguidamente, ésta remite dicho reporte a la IVE. Por su parte, la IVE mantiene esta información en una base de datos para su uso en el análisis estratégico y la investigación de casos y a disposición del Ministerio público.



(c. IX.6, c. IX.7): La Intendencia de Aduanas de la SAT mantiene cierta coordinación con el Servicio de Migración y la Policía. La Policía por medio del Ministerio de Gobernación lleva el control de explosivos, la trata de personas en las fronteras y han recibido capacitación CFT. La SAT, por su parte contacta al Ministerio Público cuando se detecta el trasiego de dinero. No se pudo confirmar que hubiese grupos de trabajo o mecanismos de coordinación entre SAT, el Ministerio de Gobernación y la IVE para detectar el LD/FT. La SAT firmó un convenio de cooperación aduanera con El Salvador con respecto al tránsito de personas, mercancías y dinero en efectivo en marzo de 2009, y actualmente se encuentra negociando uno similar con México. Sin embargo, no hay estadísticas disponibles con respecto a la cooperación llevada a cabo entre El Salvador y Guatemala hasta la fecha.

Sanciones:

257. (c. IX.8, IX.9): Existe la posibilidad de una sanción penal por violación de esta obligación (artículo 25 de la Ley ALD sobre trasiego de dinero, arriba citado), la cual cubriría situaciones en las que intencionalmente se viole la obligación de declarar. Si bien la pena aun en estos casos sería de sólo uno a tres años, esta no excluiría una investigación paralela por el delito de LD o FT propiamente dicho, con lo cual se cumple el objetivo de proporcionalidad.

258. Sin embargo, no se cuenta con sanciones administrativas de ningún tipo. Este régimen es por lo tanto insuficiente pues la sanción penal no es aplicable a las personas que omiten involuntariamente hacer la declaración, ni a las que lo omiten intencionalmente (por ejemplo por temor a ser asaltados) pero logran demostrar en juicio que el dinero era de origen lícito, como en efecto ha ocurrido. (IX.10).

La imposición de las penas correspondientes por la comisión de este delito de trasiego de dinero, se entenderán sin perjuicio de las providencias cautelares que procedan en caso de existir omisión de la declaración o cuando existiere falsedad en la misma. Si se condena por el delito de trasiego, la pena imponible es de prisión de uno a tres años.

259. (c. IX.11): No existe en Guatemala ningún mecanismo que le permita a las autoridades identificar, ni una norma que las obligue a controlar y retener, dinero en las fronteras que pudiera estar relacionado con personas listadas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

260. (c. IX.12): Derivado del artículo 3 del Ley Organica de la Superintendencia de Administración Tributaria, Guatemala puede cooperar, esto dependiendo de los tratados y convenios internacionales que la SAT haya celebrado en materia con otros países. No obstante, no existe una política establecida y eficaz para el control del movimiento transfronterizo inusual de oro, metales o piedras preciosas. Los agentes aduaneros no revisan a los joyeros y relojeros conocidos por ellos, a menos que su mercancía deje de ser joyas y relojes. Por ejemplo, de acuerdo a las autoridades solamente despertaría sospecha un joyero que ingrese al país con otra mercancía que no sea joyas. Esta práctica de control tan subjetivo puede hacer al país más vulnerable al lavado de dinero por medio del tráfico de oro, metales o piedras preciosas.

261. (c. IX.13): La IVE cuenta con una base de datos sobre la información contenida en los formularios de Declaración Jurada Aduanera de Ingreso o Egreso de Guatemala. Dicha información está salvaguardada a través de claves de análisis y consulta. Además es utilizada en investigaciones que llevan las autoridades competentes. Los formularios físicos son también guardados en el archivo general de la IVE (para un análisis sobre las medidas de seguridad de la IVE favor remitirse a la sección 2.5 de este informe).

262. (c. IX.14, c.IX.15) *[Estos criterios no son evaluados por GAFIC durante la Tercera Ronda de evaluaciones mutuas. En todo caso, no resultarían aplicables al caso Guatemalteco por no existir allí ninguna regulación supranacional que rija para el transporte de efectivo transfronterizo].*

Criterios Adicionales:

263. (c. IX.16, IX.16). El país no ha considerado implementar las medidas sugeridas en el documento de mejores prácticas para la R.E. IX. Sin embargo, al como se indicó arriba, Guatemala sí mantiene la información resultante de estas declaraciones en una base de datos administrada por al IVE, y utilizada por el MP y demás autoridades competentes.

2.7.2. Recomendaciones

264. Establecer sanciones administrativas por violación de las obligaciones de declaración del efectivo en frontera.

265. Establecer la obligación para las autoridades de aduanas, de controlar y retener dinero en las fronteras que pudiera estar relacionado con personas listadas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Establecer igualmente un mecanismo eficaz para poner en práctica esta obligación.

266. Asegurarse de que los Formularios de Declaración Jurada estén disponibles a todas las personas que ingresen al país y salgan de él no solamente por vía aérea, sino que por vía marítima y terrestre, y reforzar la capacidad de verificación en las fronteras terrestres.

267. Establecer e implementar medidas estrictas de control de movimiento de transfronterizo inusual de oro, metales y piedras preciosas, y procedimientos para avisar a las autoridades aduaneras correspondientes en otros países, cuando se detecten movimientos inusuales de este tipo de mercancías.

268. Crear mecanismos de cooperación bien definidos entre las autoridades aduaneras, de migración, policial, el Ministerio Público, y la IVE.

2.7.3. Cumplimiento de la RE IX

	Calificación	Resumen de los factores afines a la s.2.7 que apoyan la Calificación general
RE.IX	PC	<ul style="list-style-type: none"> • No existe un control efectivo del movimiento de personas y dinero en efectivo en las fronteras y en los puestos marítimos. • No existe una efectiva cooperación entre las autoridades competentes en ALD-CFT y el Servicio de Administración Tributaria-Aduanas. • No existe una política establecida y eficaz para el control del movimiento transfronterizo inusual de oro, metales o piedras preciosas. • No existe en Guatemala ningún mecanismo que le permita a las autoridades identificar, ni una norma que las obligue a controlar y retener, dinero en las fronteras que pudiera estar relacionado con personas listadas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. • No se pueden imponer sanciones administrativas por la violación de la obligación de declarar

3. MEDIDAS PREVENTIVAS – INSTITUCIONES FINANCIERAS

Diligencia Debida sobre el Cliente y Mantenimiento de Registros

3.1. Riesgo de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo

269. Las leyes y regulaciones Guatemaltecas no prevén una reducción o graduación de controles con base en el riesgo LD/FT. En este sentido, se observa que las disposiciones no permiten obviar ciertos requisitos para los casos de bajo riesgo y, por ejemplo, los mismos requisitos y formularios se aplican para la vinculación de un cliente de banca personal que para la apertura de una cuenta de nómina.

270. A pesar de lo anterior, Guatemala ha avanzado en el enfoque de riesgos al emitir en abril de 2009 (poco antes de la visita), la Guía para administración del riesgo LD/FT, la cual incluye pautas útiles que indican a las instituciones cómo identificar y administrar el riesgo, y establece que a mayor riesgo, mayores deben ser los controles a aplicar.

271. Esta Guía permite la adecuada discrecionalidad a cada institución para identificar sus riesgos dentro de ciertos parámetros mínimos, pero sería conveniente que también previera un mecanismo para modificar algunos controles en casos de demostrado bajo riesgo (por ejemplo la frecuencia de actualización de la DDC para cuentas inactivas). Esta guía aplica solamente a Bancos, Financieras y Offshore. La IVE informó al equipo evaluador que se tomó la decisión de iniciar la implementación de esta Guía con dichas entidades, con base en el Estudio de Riesgo País realizado con anterioridad a la visita, en virtud del cual se determinó que este grupo de entidades cubre el 92.8% del Sistema Financiero de Guatemala, conforme se observa en cuadro siguiente, y asimismo informaron que en una siguiente fase esta Guía se hará extensiva a las demás instituciones obligadas, o al menos a las otras actividades financieras relevantes.

PERSONAS OBLIGADAS	SUCURSALES			ACTIVOS		
	Central	Agencias	Total	Monto	Estructura	Acumulado
BAJO SUPERVISIÓN DE LA SIB	120	2,516	2,636	228,729.8	96.5%	
Bancos	20	2,516	2,536	193,054.1	81.5%	81.5%
Entidades Off-Shore	8	-	8	21,095.2	8.9%	90.4%
Sociedades Financieras	16	-	16	5,707.9	2.4%	92.8%
Otras ^{1/}	17	-	17	4,235.0	1.8%	94.6%
Compañías de Seguros	17	-	17	3,878.7	1.6%	96.2%
Compañías de Fianzas	11	-	11	493.8	0.2%	96.4%
Compañías Almacenadoras	15	-	15	197.8	0.1%	96.5%
Casas de Bolsa	15	-	15	57.4	0.0%	96.5%
Casas de Cambio	1	-	1	9.9	0.0%	96.5%
RESTO DE INSTITUCIONES	273	0	273	8,217.0	3.5%	
Cooperativas	251	-	251	5,352.7	2.3%	2.3%
Operadores de Tarjeta de Credito	2	-	2	1,376.7	0.6%	2.8%
Arrendadoras	5	-	5	1,002.7	0.4%	3.3%
Empresas de Transferencias de Fondos	13	-	13	438.5	0.2%	3.4%
Empresas de Canje de Cheques	1	-	1	32.8	0.0%	3.5%
Factoraje	1	-	1	13.5	0.0%	3.5%
TOTAL	393	2,516	2,909	236,946.8	100.0%	100.0%

272. En la práctica algunas instituciones destacaron que han aplicado un enfoque basado en riesgos LD/FT, desde antes de que se emitiera la guía, mostrando un alto compromiso de las personas obligadas con respecto a los esfuerzos ALD/CFT. Posiblemente como resultado de esto, un significativo número de los RTS provenientes del sector bancario se basa en la sospecha de posibles actos de corrupción, la cual constituye según las autoridades una de las principales fuentes de dinero de origen ilícito, junto con el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el secuestro.

273. La SIB está implementando un enfoque basado en riesgos para todas sus áreas de supervisión, y la IVE, que es la responsable de supervisión ALD/CFT, ha desarrollado con el apoyo del Fondo Monetario Internacional una Metodología de Supervisión Basada en Riesgo. Este modelo ya había sido utilizado en nueve entidades Bancarias antes de la visita de evaluación mutua, y se tiene proyectado continuar con la aplicación del mismo en todos los bancos del País durante el 2009, para luego dar seguimiento a los procesos de mejora de cada entidad supervisada.

274. Existen personas que, no están incluidas como personas obligadas en los temas ALD/CFT según la legislación guatemalteca y no son regulados por la IVE en esta materia, pese a que son consideradas por el GAFI como instituciones financieras a las cuales deben aplicarles las 40 recomendaciones. Tal es el caso de los intermediarios de seguros (agentes y corredores). Esta omisión puede representar un riesgo de LD/FT para el país.

3.2. Diligencia debida sobre el cliente, incluyendo medidas ampliadas o reducidas (R.5 a 8)

3.2.1. Descripción y Análisis

Recomendación 5: Debida Diligencia sobre el Cliente (DDC)

Cuentas anónimas (c. 5.1):

275. En Guatemala están prohibidas las cuentas anónimas o bajo nombres ficticios, en concordancia con los lineamientos del GAFI. El Artículo 20 de la Ley ALD establece que *“en ningún caso podrán las personas obligadas mantener cuentas anónimas ni cuentas que figuren bajo nombres ficticios o inexactos”*. Asimismo, las cuentas numeradas fueron prohibidas desde el 23 de mayo de 2003 por Resolución JM-68-2003 de la Junta Monetaria. Las autoridades e instituciones financieras entrevistadas aseguraron que no existen este tipo de cuentas.

DDC y verificación de la información (c. 5.2, c.5.3, 5.4):

276. Se exige a las instituciones financieras realizar medidas de DDC cuando se establecen relaciones comerciales habituales u ocasionales, sin importar su monto. El artículo 21 de la Ley ALD establece que *“las personas obligadas deberán llevar un registro especial en los formularios que para el efecto diseñará la Intendencia de Verificación Especial de las personas individuales o jurídicas con las que establezcan relaciones comerciales o relaciones del giro normal o aparente de sus negocios, sean éstas clientes ocasionales o habituales; y de las operaciones que con ellas se realicen, particularmente en lo que se refiere a la apertura de nuevas cuentas...”*. Las instituciones entrevistadas indicaron que al iniciar relaciones comerciales, obtienen los datos del cliente a través de los formularios elaborados por la IVE y el equipo evaluador encontró que en la práctica dichos formularios contienen la información mínima requerida en la normativa. El gremio bancario es crítico de que el formulario de identificación de clientes sea tan detallado para cualquier cliente, incluso los de bajo riesgo, y espera que con la nueva “Guía de Administración de Riesgos” la DDC se pueda simplificar en ciertos casos. Instituciones que envían transferencias indicaron que no registran a sus clientes ocasionales, haciendo esta tarea únicamente cuando se vuelven clientes frecuentes, agregando que no cuentan con el formulario para inicio de relaciones sino que recaban los datos en formularios de cliente frecuente.

277. Se exige a las instituciones tomar medidas de DDC cuando se realizan transferencias cablegráficas de cualquier monto. El artículo 17 de la Ley CFT y el artículo 9 de su Reglamento indican que en los casos de transferencias cablegráficas “las personas obligadas deberán recabar información adecuada y significativa respecto de la persona que origina la transferencia, dentro o fuera del territorio nacional, de conformidad con lo que establezca el reglamento” y que para tal efecto, deben utilizar un formulario diseñado por la IVE. La IVE indicó que para cumplir con este mandato se diseñó el formulario IVE-TF-21, el cual es un informe consolidado que las instituciones deben enviar electrónicamente en forma mensual, conteniendo las transferencias iguales o mayores a los \$2,000 o las menores a ese valor que hayan sido enviadas o recibidas por una persona y que en conjunto igualen esa cifra dentro del mes de reporte (Esto según lo indicado en el oficio Oficio IVE No. 1585-2008 y el instructivo para la elaboración del formulario). La cifra de \$2,000 se utiliza sólo para limitar el número de reportes enviados a la IVE, pero no limita a las instituciones a recabar la información de toda transferencia, esto debido a que para consolidar en el formulario IVE-TF-21 transferencias de bajo monto que en conjunto lleguen o superen los \$2,000, deberían recabar los datos de todas las transferencias pequeñas. En este sentido, las instituciones entrevistadas indicaron que solicitan los datos sin importar el monto de la transferencia y que dicha información como cualquier otra pertinente, esta a disposición de la IVE cuando sea requerida así sea por montos menores. Cabe mencionar que el formulario contiene campos básicos que permitirían identificar al ordenante como son nombre, tipo y número de identificación. Con respecto a las transferencias cablegráficas entrantes, las instituciones financieras indicaron que en ocasiones estas no contienen la información del ordenante, expresando algunos de sus representantes que la disponibilidad de estos datos no depende de las instituciones guatemaltecas sino de la institución ordenante extranjera.

278. Como medida de DDC cuando existe sospecha de LD/FT en cualquier transacción, la legislación prevé la detección de transacciones inusuales y la emisión de Reportes de Transacción Sospechosa. (aplica el mismo artículo 16 del Reglamento de la Ley Contra LD) La legislación prevé en el párrafo 3 del artículo 12 del Reglamento contra Lavado que no se deben realizar transacciones con personas que no provean oportunamente información o documentación. El artículo 20 del mismo Reglamento estipula que las instituciones deben “revisar y, en su caso, actualizar los datos del formulario” [de conocimiento del cliente], con lo cual se acata lo exigido por el criterio esencial 5.2 e) sobre revisar la DDC con los clientes cuando surja duda de la veracidad o idoneidad de los datos previamente aportados. Adicionalmente, la misma disposición obliga a actualizar la información como mínimo una vez al año.

279. Asimismo, el Artículo 21 indica que las personas obligadas “*deberán verificar fehacientemente la identidad, razón social o denominación de la persona, edad, ocupación u objeto social, estado civil, domicilio nacionalidad, personería, capacidad legal y personalidad de sus clientes*”. Las instituciones financieras indicaron realizar la verificación de los datos de sus clientes en el proceso de inicio de relación antes de ser registrados como clientes y adicionalmente tienen el deber de actualización de datos por lo menos una vez al año.

280. Es importante indicar que la identificación de los clientes se realiza a través de la presentación de la Cédula de Vecindad que era, hasta el momento de la visita, el documento de identificación oficial utilizado en Guatemala. Según fue informado por las instituciones financieras, este documento tiene varias deficiencias en cuanto a seguridad ya que puede ser falsificado fácilmente y además es emitido por las municipalidades, por lo que una persona puede tener más de una Cédula de Vecindad si se registra como vecino en más de una municipalidad. La Ley del Registro Nacional de las Personas (Decreto 90-2005 del Congreso de la República) en uno de sus considerandos confirma estos aspectos al establecer que este documento “*carece de confianza*” y que es administrado por los Registros de Vecindad que “*no efectúan controles sobre su expedición*”. El artículo 50 de esta ley (emitida el 23 de noviembre de 2005) establece que se emitirá un nuevo documento de identificación llamado

Documento Personal de Identificación (DPI), el cual según el artículo 2 sería emitido por el Registro Nacional de las Personas (RENAP). El artículo 92 indica que la sustitución de la Cédula de Vecindad por el DPI deberá realizarse en un plazo no mayor de dos años a partir del dos de enero de 2009. Según informaron las instituciones financieras, este cambio ya está en proceso y se prevé su culminación para el 31 de diciembre de 2010.

281. (c.5.4) Existen disposiciones tendientes a verificar que la persona que afirma estar actuando en nombre de una persona jurídica, esté autorizada para ello. Los formularios de inicio de relaciones para personas jurídicas contienen preguntas sobre el representante legal de las empresas y solicitan anexar el nombramiento del mismo. Los datos recabados deben ser verificados, en vista de que el formulario contiene un apartado en el que se debe consignar la firma y el código del empleado que realiza la verificación. Según lo informado por las instituciones entrevistadas, se cumple con la obtención de los datos y nombramiento del representante legal. El artículo 21 de la Ley ALD establece que la institución financiera debe llevar registro de las personas con las que establezcan relaciones comerciales particularmente en la realización de transacciones fiduciarias en los formularios que para ese efecto diseñe la IVE. El Fideicomiso en Guatemala es un Contrato Mercantil sin personalidad jurídica independiente, (artículo 768 del Código de Comercio) y únicamente los Bancos legalmente constituido en Guatemala pueden ser fiduciarios. Para la constitución de un fideicomiso deben identificarse plenamente en Escritura Publica tanto los fideicomitentes, como los fideicomisarios, y esta información y documentación pasa a ser parte del expediente respectivo de cada cliente, por lo que al abrir una cuenta Bancaria todos los participantes en el contrato serán identificados, partiendo del mismo Banco Fiduciario.

282. Se cumple con exigir la verificación del estatus legal de las personas jurídicas. Los formularios obligatorios de inicio de relación para personas jurídicas indican que éstas deben adjuntar la fotocopia de su escritura de constitución.

Beneficiario real (c. 5.5)

283. Existen disposiciones que obligan a las instituciones financieras a identificar al beneficiario real y verificar su identidad: artículos 21 y 22 del Decreto 67-2001 o Ley ALD, citados arriba, en concordancia con los formularios obligatorios para la vinculación de clientes que incluyen la pregunta expresa sobre si la persona que abre la cuenta está actuando en nombre de un tercero. A excepción del formulario para inicio de relaciones –persona o empresa individual– para Empresas de Tarjetas de Crédito, y para inicio de relaciones –persona jurídica– para Casas de Cambio, el resto de formularios ya contempla la pregunta en cuanto a si la persona que inicia la relación actúa en nombre propio.

284. El artículo 22 de la Ley ALD indica que *“las personas obligadas deberán adoptar las medidas necesarias para obtener, actualizar, verificar y conservar la información acerca de la verdadera identidad de terceras personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleve a cabo una transacción cuando exista duda acerca de que tales terceros puedan estar actuando en su propio beneficio o, a la vez, lo hagan en beneficio de otro tercero, especialmente en el caso de personas jurídicas que no lleven a cabo operaciones comerciales, financieras o industriales en el país o en el país donde tengan su sede o domicilio”*. Aunque no parece haber duda entre las instituciones financieras acerca de la obligación de identificar siempre al beneficiario real, la redacción del artículo se podría prestar para una interpretación restrictiva, según la cual la obligación surge únicamente “cuando surjan dudas”.

285. El posible vacío jurídico se resuelve mediante los formularios de vinculación de clientes que la SIB ha emitido, y que son de obligatorio cumplimiento para las entidades financieras. Estos incluyen la pregunta expresa acerca de si el cliente actúa en nombre de un tercero. Sin embargo, se presentan problemas de aplicación práctica, pues algunas instituciones financieras entrevistadas no tenían certeza

de si en sus formularios se incluye efectivamente el tema del beneficiario real, y otras manifestaron que los clientes a veces no entienden el alcance de esas preguntas, lo cual pone en duda su utilidad.

286. Se exige a las instituciones financieras que tomen medidas para entender la titularidad y estructura de control de una persona jurídica. Como se mencionó, según el artículo 21 de la Ley ALD las personas obligadas deben identificar a las personas jurídicas utilizando los formularios diseñados por la IVE. Se constató que el Formulario de Inicio de Relaciones para Persona Jurídica, dado a los Bancos incluye campos que conllevan a la identificación de los miembros del consejo de administración, junta directiva, administrador único o similar. No obstante, este formulario indica que se debe adjuntar el primer testimonio de escritura pública de constitución con lo cual se puede determinar la titularidad inicial de la persona jurídica, pero no los dueños actuales de la misma. Además, algunos de los formularios obligatorios diseñados por la IVE no incluyen la pregunta sobre si se está actuando en beneficio de un tercero, como es el caso de los formularios diseñados para Empresas de Tarjeta de Crédito y para inicio de relaciones –persona jurídica– para Casas de Cambio.

287. En la práctica todas las instituciones dicen obtener con facilidad la información de los accionistas de las empresas, pero algunas manifestaron que no en todas las ocasiones solicitan información sobre sus directores.

Naturaleza y propósito de la relación comercial (c. 5.6):

288. Dentro del formulario de inicio de relaciones, diseñado por la IVE existe un apartado denominado “Información Económico Financiera del Solicitante”, en donde el cliente declara información relacionada con los servicios que utilizará, con el rango en qué se manejarán dichos servicios y con la procedencia de los fondos a manejar. De lo anterior puede inferirse que existen los medios para dar cumplimiento al requerimiento del GAFI referente a que se debe exigir a las instituciones financieras que obtengan información adicional sobre el propósito y el carácter que se pretende dar a la relación comercial. La Nueva Guía de Administración del Riesgo LD/FT para bancos, financieras y entidades off shore (Oficio IVE No. 434-2009), dispone que la obtención del propósito y naturaleza de la relación comercial es uno de los “temas mínimos que las Personas Obligadas deben considerar al elaborar, modificar y/o actualizar su Programa de Cumplimiento”. Se observa que esta Guía toca el tema en una forma más clara que los formularios, a pesar de que el lenguaje utilizado no es imperativo.

289. Las instituciones, según comentarios dados al equipo evaluador durante las entrevistas, no indagan rutinariamente detalles adicionales sobre el uso que el cliente espera dar a la cuenta, o si anticipa hacer o recibir transferencias del exterior, etc. No obstante, esta información si es requerida en el formulario de inicio de relación.

DDC para Fideicomisos

290. Conviene aclarar que en Guatemala sólo pueden ser fiduciarios los bancos establecidos en el país conforme el artículo 768 del Código de Comercio y asimismo los artículos del 766 al 793 del mismo cuerpo legal establecen todo lo relacionado a este tipo de contrato así como la estructura y obligaciones de control del Fideicomiso en Guatemala. El fideicomiso es un servicio como cualquier otro prestado por un banco a su cliente (autorizado en el artículo 41, literal e) de la Ley de Bancos y Grupos Financieros). Por lo tanto, las mismas obligaciones de DDC aplican tanto para el servicio fiduciario como para cualquier otro servicio, sin excepción. Según las autoridades, clientes son todos los participantes en una estructura contractual como el fideicomiso. La IVE informó que en la práctica se exige lo siguiente con respecto a fideicomisos:

1. Que el fiduciario (es decir, el banco) solicite el llenado de formularios para inicio de relaciones con su respectiva documentación de respaldo, para los fideicomitentes y fideicomisarios
2. Adicionalmente, para aquellos casos en los cuales el contrato de fideicomiso conlleve la administración de alguna cartera crediticia, el fiduciario deberá solicitar que adicionalmente al fideicomitente y/o fideicomisario, cada uno de los que integra dicha cartera llene el respectivo formulario.
3. En aquellos casos en que por la naturaleza del fideicomiso se imposibilite para el banco llenar y documentar los formularios respectivos, deberá solicitar esta información al fideicomitente que estuviere aportando al fideicomiso la cartera correspondiente, a efecto de poder aplicar la política de conocimiento del cliente.

Actualización y DDC Continua del cliente (c. 5.7):

291. En materia de actualización de la información, existen disposiciones que obligan a las instituciones a mantener adecuadamente actualizada la información recabada en el proceso de DDC. El artículo 23 de la Ley ALD establece que los registros que deben ser mantenidos por las personas obligadas por dicha ley, *“deberán actualizarse durante la vigencia de la relación comercial, y conservarse como mínimo cinco años después de la finalización de la transacción o de que la cuenta haya sido cerrada”*. El artículo 20 del Reglamento de la Ley ALD establece que las personas obligadas deben revisar y, en su caso, actualizar los datos de los formularios de identificación diseñados por la IVE, como mínimo una vez al año, dejando constancia por escrito de la fecha en que se efectúe tal revisión y/o actualización.

292. Las instituciones financieras entrevistadas indicaron que la actualización de los datos de los clientes ha resultado ser una tarea difícil y algunos de sus representantes consideran que la medida es impráctica. Manifestaron que la actualización de estos datos ha sido mayor para cuentas activas que para las pasivas. El equipo evaluador considera aconsejable que, después de realizar un esfuerzo razonable de actualización, se permita a las instituciones financieras no continuar actualizando anualmente los datos de cuentas claramente inactivas, siempre y cuando tengan mecanismos estrictos para que, si el cliente vuelve a aparecer después de mucho tiempo, se le impida realizar cualquier transacción mientras no actualice su información. Esto sería acorde con el enfoque basado en riesgo reconocido en las recomendaciones del GAFI. Sin embargo, no parece posible bajo la actual regulación Guatemalteca.

293. Otra dificultad encontrada, con respecto a la actualización de los datos de los clientes, que preocupa principalmente al sector bancario es que debido al alto grado de evasión tributaria e informalidad del comercio y los servicios en Guatemala, muchos de sus clientes evitan dar información personal detallada, pues temen que esta información pueda acarrearles cargas tributarias.

294. El artículo 26 de la Ley ALD, indica que las instituciones deben prestar especial atención a todas las transacciones concluidas o no, complejas, insólitas, significativas, y a todos los patrones de transacciones no habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente, debiéndolo comunicar inmediatamente a la IVE. Si bien es cierto no se incluye expresamente la palabra “monitoreo” se infiere que este es necesario para dar cumplimiento a este artículo y por ende cubrir los principios básicos del criterio 5.7 de la metodología de evaluación del Gafi respecto de exigir una diligencia debida continua sobre la relación comercial. Las instituciones entrevistadas indicaron que sí utilizan sistemas tecnológicos y/o manuales para monitorear las actividades de sus clientes. Es importante hacer notar que la inclusión del examen de transacciones como una medida de DDC continua (criterio 5.7.1) es una Obligación Básica marcada con asterisco en la metodología, y en Guatemala se encuentra adecuadamente consagrada en la Ley ALD (art.26 ya citado). Por su parte, la nueva “Guía de Administración del Riesgo de LD/FT” emitida por la SIB en abril 24 de 2009, contempla la determinación del perfil de riesgo de cada cliente como uno de

los elementos necesarios para administrar el riesgo inherente de LD/FT de cada entidad, e indica que en los casos de mayor riesgo la institución financiera debe reforzar sus controles. También establece que el monitoreo de transacciones es uno de *“los temas mínimos que las Personas Obligadas deben considerar al elaborar modificar y/o actualizar su Programa de Cumplimiento”*. Por otra parte, la sección 4.4. de la Guía dice que el objetivo del “monitoreo del riesgo” es *“comparar la evolución del riesgo inherente con la del riesgo residual”* para lo cual la institución financiera debe *“establecer señales de alerta ... que indiquen potenciales fuentes de riesgo de LD/FT (...) analizar las transacciones inusuales y sospechosas que se detectaron con el objetivo de que, entre otros, se pueda establecer en dónde radicó la debilidad en la prevención”*.

Controles graduados según el riesgo (c. 5.8 a 5.12):

295. La “Guía de Administración del Riesgo de LD/FT” exige a bancos, sociedades financieras y entidades fuera de plaza (offshore) llevar a cabo una debida diligencia más profunda para categorías de clientes, relaciones comerciales o transacciones de mayor riesgo. Esta guía señala que la primera fase de la administración del riesgo es la identificación del riesgo y la tercera es el control del riesgo. Dentro de la fase de identificación, se incluyen algunos clientes o transacciones riesgosas como los servicios de banca privada nacional e Internacional, los servicios que inherentemente brindan más anonimato o que fácilmente pueden cruzar fronteras, tales como los fideicomisos, y las sociedades anónimas en las que sea muy difícil identificar al propietario final o el control de la misma. Dentro de la fase de control de riesgo se establece que *“Los programas, políticas, normas, procedimientos y controles internos establecidos deben enfocarse con mayor énfasis en aquellos segmentos de los factores de riesgo que fueron identificados como de riesgo inherente alto, con el propósito de reducir la probabilidad y el impacto.”*

296. Lo anterior indica que las medidas deben ser más estrictas para este tipo de clientes o transacciones, y deja a las instituciones financieras en libertad de decidir el tipo de medidas de DDC aumentadas que deberían aplicar en estos casos. Durante la visita, algunas instituciones entrevistadas indicaron haber identificado los clientes, productos o transacciones de alto riesgo por iniciativa propia aun antes de la expedición de la Guía. La mayoría indicó que, debido a que la misma fue recientemente emitida, están comenzando a implementarla o a acondicionar sus sistemas de riesgo existentes. Es importante indicar que algunas instituciones financieras manifestaron su inconformidad con que esta guía sea de aplicación inmediata y los exponga a sanciones durante el proceso de adaptación, pues la misma no establece un plazo prudencial para su aplicación.

297. Guatemala informó que *“legalmente no existen medidas simplificadas para la aplicación de la política conozca a su cliente”*, por lo que no existen lineamientos que regulen las ocasiones en las que pueden realizarse medidas simplificadas. No obstante, el sector asegurador indicó que en el formulario para identificación de clientes proporcionado por la IVE existen lineamientos que permiten realizar una DDC simplificada de acuerdo a los rangos de primas de las pólizas de seguro. Esto fue confirmado al revisar que existen dos formularios tanto para personas naturales como para personas jurídicas: uno para operaciones mayores a los \$10,000.00 en seguros de daños y \$5,000.00 en seguros de vida y otro para las transacciones menores a estos límites el cual contiene menos requisitos de identificación. En vista de que en efecto existe la posibilidad de medidas simplificadas en este sector, Guatemala debería dar lineamientos a las aseguradoras con respecto a cuándo pueden aplicar estos formularios simplificados y cuándo no. Esto en concordancia con el criterio 5.10 que indica que estas medidas no deben aplicar a clientes residentes en países que no apliquen las medidas del GAFI y de acuerdo con el criterio 5.11 que indica que estas medidas no deben aplicarse cuando haya sospecha de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo (En el formulario de medidas simplificadas no se encontró ninguna alusión a estos dos temas).

298. Es importante indicar que algunas instituciones entrevistadas mencionaron que sería deseable permitirles aplicar medidas de DDC simplificadas en algunos casos en los que el riesgo de LD/FT es menor. La no existencia de medidas simplificadas no afecta el resultado de esta evaluación, pero el equipo considera oportuno evaluar esta posibilidad a la luz del nuevo enfoque basado en riesgos que está empezando a introducir la IVE.

Tiempo para verificación de identidad (c. 5.13 a 5.17):

299. Los artículos 21 y 22 de la Ley ALD obligan a las instituciones financieras a verificar la identidad del cliente y beneficiario final, y artículo 12, párrafo 3° del Reglamento ALD establece que *“las personas obligadas no podrán realizar transacción alguna con clientes que no proporcionen oportunamente la información y documentación requeridas”*. El artículo 21 de la Ley ALD indica que las personas obligadas deberán llevar un registro en los formularios que para el efecto diseñará la IVE de las personas individuales o jurídicas con las que **establezcan** relaciones comerciales o relaciones del giro normal o aparente de sus negocios sean estos clientes ocasionales o habituales. Pese a que las normas citadas no son explícitas en cuanto al momento en el que la verificación debe realizarse, tanto las autoridades del País como los obligados tienen claro que el deber de registro y verificación de la información es al momento de establecer o iniciar la relación con los clientes. Los lineamientos del GAFI al respecto, establecen que esta verificación debe realizarse antes o durante el establecimiento de una relación comercial o de llevar a cabo transacciones para clientes ocasionales, salvo en contadas excepciones. La mayoría de instituciones entrevistadas señaló que esta verificación es efectuada antes de iniciar la relación, pero en algunas ocasiones las cuentas son activadas antes de verificar los datos del cliente, verificación que realizan durante un periodo de tiempo prudencial luego de abrir las cuentas, por lo que el criterio puede considerarse atendido.

300. La regulación de Guatemala indica en el artículo 12 del Reglamento de la Ley ALD que *“las personas obligadas no podrán realizar transacción alguna con clientes que no proporcionen oportunamente la información y documentación requeridas”*. Esta disposición indica que no se deben realizar transacciones cuando los clientes no proporcionen la información solicitada, sin embargo, no aborda los casos en que la institución haya obtenido del cliente la información requerida en tiempo y forma, pero no haya sido posible verificar la veracidad de esta información a través de las fuentes independientes disponibles.

301. Aunque , no se indica expresamente a las instituciones financieras que deben considerar elaborar un informe de transacción sospechosa cuando no puedan obtener o verificar esos datos, durante la visita, las instituciones financieras expresaron que no entablan relaciones con personas de las que no pueden obtener y verificar sus datos y la mayoría indicó que sí consideran enviar un RTS en estos casos.

302. (c.5.17) En cuanto a la DDC con clientes pre-existentes al momento en que se expidieron las regulaciones ALD, la regulación cumple con exigir a las instituciones que apliquen los requisitos de DDC a los clientes que ya existen. El artículo 21 de la Ley ALD indica que las personas obligadas deben llevar registros de las “personas individuales con las que establezcan relaciones comerciales o relaciones del giro normal o aparente de sus negocios”, el Artículo 20 del Reglamento de la Ley ALD obliga a revisar y si es necesario actualizar estos datos al menos una vez al año. La información mínima que debe mantenerse sobre cada cliente es precisamente la prevista en los formularios obligatorios diseñados por la SIB para el inicio de relaciones.

303. Durante la visita, algunas instituciones financieras informaron que efectivamente se realizan esfuerzos por lograr la actualización de toda la base de clientes, incluidos los más antiguos, y que se monitorean las cuentas de todos los clientes.

Recomendación 6: Personas Expuestas Políticamente (PEPs) (c. 6.1 a c.6.4):

304. El artículo 19 de la Ley ALD indica que las instituciones deben adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles idóneos para evitar el uso indebido de los servicios y productos en esquemas LD/FT. La IVE indicó que este artículo sirvió de base para emitir las disposiciones sobre PEP que se detallan a continuación.

305. La nueva Guía de Administración del Riesgo LD/FT establece obligaciones con respecto a PEPs para los bancos, financieras y entidades off-shore. Dice la sección 4.4.1 que *“la Persona Obligada determinará si un cliente en particular representa un alto riesgo [para lo cual] deben considerarse, entre otros, factores como ... Clientes que la Entidad determine que son Personas Expuestas Políticamente (PEP)”*.

306. Otras disposiciones relativas a la identificación de PEPs también son de reciente implantación en Guatemala y obligan a Financieras, Bancos (Incluyendo Bancos Offshore) y al Banco de Guatemala mediante oficios IVE No. 244-2009, IVE No. 245-2009 e IVE No. 303-2009 respectivamente, los cuales indican que las medidas deberán ser implementadas a partir del 1 de abril de 2009. La IVE informó que las disposiciones sobre PEPS se enviaron en una primera etapa a estas instituciones ya que estas fueron las más representativas del sector financiero según el Estudio de Riesgo País realizado por Consultores externos. Sin embargo, esta intendencia reconoce la necesidad de exigir al resto de las instituciones la implementación de estas medidas por lo que en su siguiente etapa serán implementadas en otros sectores obligados.

307. Estos oficios establecen claramente que *“La Persona Obligada deberá establecer mecanismos que le permitan determinar si las personas que solicitan el inicio de relaciones con la entidad son Personas Expuestas Políticamente”*. A su vez, los formularios para inicio de relaciones (IVE-FI-01 e IVE-BA-01), incluyen preguntas directas para indagar si el cliente potencial es un PEP, si es familiar de un PEP o si la persona actúa en nombre propio o de otra persona. Sería conveniente que los oficios dijieran explícitamente que las instituciones financieras deben adoptar mecanismos para determinar si el beneficiario final es un PEP (y no sólo “las personas que solicitan el inicio de relaciones”). Ello sería más acorde con la obligación prevista en el art. 22 de la Ley ALD, que también incluye a PEPs al decir que *“las personas obligadas deberán adoptar medidas necesarias para obtener, actualizar, verificar y conservar la información acerca de la verdadera identidad de terceras personas en cuyo beneficio se abra una cuenta o se lleve a cabo una transacción”*

308. Los oficios mencionados indican que se consideraran PEPS *“Quienes desempeñan o hayan desempeñado un cargo público relevante en Guatemala, los dirigentes de partidos políticos, los jefes y ministros de Estado de gobiernos extranjeros, que por su perfil están expuestos a riesgos inherentes a su nivel o posición jerárquica. Se consideran también Personas Expuestas Políticamente a los padres, hermanos, cónyuge e hijos de las mismas.”* Asimismo, aclaran que se entenderá por Dirigentes de partidos políticos al *“Secretario General, los Secretarios Generales Adjuntos y el Secretario de Actas, de los partidos políticos nacionales”*. La condición de PEP se mantiene mientras la persona permanezca en el cargo y durante los dos años posteriores a la entrega de dicho cargo.

309. Es importante mencionar que tanto la recomendación 6 como la definición de PEPS del GAFI se refieren a funcionarios de países extranjeros.. La definición dada por Guatemala incluye a los funcionarios extranjeros de mayor jerarquía como PEPS, pero excluye a otros, como por ejemplo militares de alto rango, que la Rec. 6 del GAFI sugiere incluir. Asimismo, el GAFI indica que no solo los familiares sino también los asociados cercanos de los PEPS representan un riesgo similar al de los mismos PEPS. Sin embargo las autoridades de Guatemala señalan que este extremo en particular queda atendido por el deber de vigilancia que deben tener los obligados ante operaciones inusuales o sospechosas en las que tras la verificación respectiva se identifique alguno de estos casos y por tanto se

deba remitir un informe de operación sospechosa. De acuerdo con la ley guatemalteca a muchos altos funcionarios, como el Superintendente de Bancos, se les reconoce rango ministerial y por eso es común que las instituciones le apliquen controles de PEPs no sólo a los Jefes de Estado y ministros.

310. La definición de PEPS de Guatemala propicia medidas de prevención ALD/CFT con respecto a las Personas Políticamente Expuestas del ámbito nacional lo cual se considera adecuado, ya que de esta forma se reduce el riesgo de que fondos ligados a actos de corrupción nacional ingresen al sistema financiero. Durante la visita, algunas de las instituciones a las que están dirigidas los oficios indicaron estar tomando medidas para determinar si sus clientes potenciales son PEPs, dentro de las cuales se encuentra la búsqueda en una lista de funcionarios nacionales proporcionada por la IVE e incluso algunas de estas instituciones indicaron realizar búsquedas en bases de datos que contienen PEPs internacionales en un sentido amplio.

311. Existen limitaciones relacionadas al tipo de operaciones a las que se aplican las disposiciones sobre PEPS. Los oficios IVE No. 244-2009, IVE No. 245-2009 e IVE No. 303-2009, instruyen a las entidades a las que van dirigidos a *“adoptar, desarrollar y ejecutar políticas, procedimientos y controles internos con respecto a las denominadas personas expuestas políticamente con quienes realicen operaciones activas (otorgamiento de financiamiento) o pasivas (depósitos y obligaciones financieras)”*. La Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto del Congreso No. 19-2002), en su artículo 41 establece que los bancos autorizados podrán efectuar operaciones pasivas, operaciones activas, operaciones de confianza, pasivos contingentes y prestar servicios. Aunque los oficios no hacen referencia a la obligación de aplicar las medidas relacionadas con las PEPS cuando la relación se enmarque en operaciones de confianza, pasivos contingentes y la prestación de servicios en la práctica estas operaciones no se llevan a cabo si antes el cliente no ha establecido relación de negocios con la Institución obligada a través de una cuenta activa o pasiva momento en el cual aplicaría la obligación establecida en los citados oficios. Adicionalmente se considera que el deber de especial atención sobre las operaciones inusuales o sospechosas que tienen los obligados, reforzado por los preceptos contenidos en la Guía de Administración de Riesgos sobre PEPS, permite cumplir razonablemente con el sentido intrínseco de esta recomendación. La Guía de Administración de Riesgo de LD/FT obliga a identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de todas las transacciones con clientes considerados de mayor riesgo, entre los que se contempla a las PEPs.

312. (c.6.2) Las disposiciones referentes a PEPS existentes, exigen a las instituciones financieras a las que van dirigidas, que obtengan la aprobación de un funcionario gerencial para establecer relaciones comerciales con una PEP. El *inciso 2.3 de los oficios IVE No. 244-2009, IVE No. 245-2009 indican que “El inicio de relaciones de negocios con Personas Expuestas Políticamente deberá contar con la autorización del funcionario gerencial que corresponda de acuerdo con las políticas de la Persona Obligada, aspecto que deberá verificar el Oficial de Cumplimiento”* Durante la visita, los representantes de algunas instituciones receptoras de estos oficios indicaron que el Oficial de Cumplimiento es el funcionario que autoriza el inicio de la relación con las PEPS.

313. No se exige a las instituciones financieras que obtengan la aprobación de un funcionario gerencial para continuar la relación comercial, cuando un cliente ha sido aceptado, y más tarde se descubre que el cliente o beneficiario real es una PEP, o luego pasa a ser una PEP, tal como lo establece el criterio 6.2.1 de la Metodología de Evaluación del GAFI. El apartado 4 del Anexo 2 de los oficios IVE No. 244-2009 y 245-2009 establece lo referente a los “Lineamientos Mínimos Sobre Personas Expuestas Políticamente cuya Relación de Negocios Se Inició Antes Del 1 De Abril De 2009”. En este apartado se indica que para las relaciones que ya estuvieran establecidas con anterioridad, *“durante el mes de abril de 2009, la Persona Obligada deberá identificar si dentro de sus clientes de operaciones activas y pasivas existen Personas Expuestas Políticamente conforme a la definición indicada en el oficio circular y asignarle el mecanismo de control correspondiente para el monitoreo de las*

transacciones”, indicando además que deberán aplicar los puntos 3.1 a 3.5 de dichos anexos. Sin embargo ninguno de estos puntos contempla la aprobación de la relación ya establecida por parte de un funcionario gerencial.

314. (c.6.3) Las disposiciones referentes a PEPS exigen tomar medidas razonables para definir la fuente de los fondos de los clientes y beneficiarios reales identificados como PEPS, y asimismo el origen de los recursos que manejará en la cuenta. Los formularios para inicio de relaciones enviados por la IVE a estas instituciones como anexos de los oficios relativos a las PEPS, incluyen en su apartado 8 denominado “Información Económico Financiera del Solicitante”, interrogantes sobre la fuente de sus ingresos pero se considera que dicho cuestionario podría solicitar más información relacionada con la fuente de su patrimonio.

315. (c.6.4) Se exige a algunas instituciones financieras que lleven a cabo una diligencia debida más profunda continua sobre la relación con PEPS. El inciso 3.1 del Anexo 2 de los oficios IVE No. 244-2009 e IVE No. 245-2009 y del anexo 1 del oficio 303 indican que las instituciones a las que van dirigidos estos oficios, deben *“monitorear permanentemente las operaciones realizadas en las cuentas activas y pasivas a nombre de Personas Expuestas Políticamente. Para ello deberá establecer si la naturaleza, volumen y frecuencia de sus operaciones se encuentran dentro del perfil declarado, y a su juicio requerir a la Persona Expuesta Políticamente información o documentación adicional que compruebe el origen de los fondos”*. La exigencia planteada indica a estas instituciones realizar un monitoreo continuo de las operaciones del cliente y contrastarlas contra su perfil, lo cual es aplicable para todos los clientes de las instituciones en vista de que la legislación de Guatemala no prevé medidas simplificadas de debida diligencia. Adicionalmente, la Guía de Administración del Riesgo LD/FT estipula que la condición de PEP de un cliente debe ser considerada como un elemento de mayor riesgo al que, por lo tanto, se deben aplicar controles intensificados. La Sección 4.1.1 indica que los PEPS representan un riesgo potencial de LD/FT, por lo que de acuerdo a la Sección 4.3, los programas, políticas, normas, procedimientos y controles internos establecidos deben aplicarles con mayor énfasis con el propósito de reducir la probabilidad y el impacto. Durante la visita, representantes de las instituciones financieras indicaron que en efecto las PEPS son consideradas en sus sistemas como clientes de alto riesgo por lo que les aplican medidas mas extensas de monitoreo. Cabe destacar que la IVE informó que las personas obligadas han presentado 56 RTS que relacionan PEPS nacionales durante el período 2005 – 2009, los que han originado que la IVE presente 50 denuncias ante el Ministerio Público.

316. Criterios adicionales: Como se explicó al principio, la normativa sobre PEPs se extiende a los PEPs nacionales con especial énfasis (c.6.5). Por otra parte, Guatemala indicó que ha ratificado e implementado la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (c.6.6).

Recomendación 7: Cuentas de Corresponsalía y Similares

317. Las disposiciones relacionadas a las medidas de prevención ALD/CFT con respecto a la banca corresponsal transfronteriza son de reciente emisión en Guatemala. Las mismas fueron establecidas en la Guía Básica de Prevención para Servicios de Banca Corresponsal, Sucursales de Bancos Nacionales en el Extranjero y Subsidiarias (en adelante Guía sobre Corresponsalía, Sucursales y Subsidiarias), emitida por la IVE durante el período de la visita mediante Oficio IVE No. 837-2009 del 17 de junio de 2009. Este oficio no está dirigido a la totalidad de las instituciones financieras, solamente a Bancos y entidades Offshore dado que en Guatemala solo ellos utilizan la banca corresponsal. Otros sectores en los que podrían en el futuro surgir relaciones de corresponsalía serían el sector de cooperativas financieras y el de empresas bursátiles, no obstante Guatemala no tiene actualmente un mercado de capitales muy desarrollado. la IVE indica que según su conocimiento, otras instituciones financieras en Guatemala no mantienen relaciones de corresponsalía con instituciones en el extranjero.

318. Es importante indicar que de acuerdo a lo informado por los representantes del sector bancario entrevistados, los bancos de Guatemala no son corresponsales de bancos extranjeros. Se indicó que algunos tienen relaciones de corresponsalía, pero no como intermediarios (“correspondent”) sino como banco ordenante o receptor de pagos (“respondent bank”) de bancos extranjeros. Por ello actualmente se considera bajo el riesgo en esta materia, aunque nada impide que en el futuro instituciones financieras domésticas le presten estos servicios a instituciones extranjeras, especialmente a nivel centroamericano teniendo en cuenta los procesos de integración que se están adelantando en los últimos años, razón por la cual es positivo que se haya emitido regulación al respecto.

319. (c.7.1) La Guía sobre Corresponsalía, Sucursales y Subsidiarias contiene varios puntos considerados apropiados para que los bancos y offshore conozcan a la institución ordenante (llamada “banco corresponsal cliente” en la Guía de la IVE). Se establece que se debe conocer la información sobre la ubicación, estructura de propiedad y de control, tipo de negocio, tipo de mercado objetivo, tipo de productos y servicios ofrecidos. Ello va acompañado de una obligación general de *“implementar programas, normas, procedimientos y controles internos para evitar el uso indebido de su servicio de Banca Corresponsal”* (sección 2.1) y el deber de *“considerar el tipo de negocio en el que se desenvuelve el Banco Corresponsal Cliente, así como el tipo de mercado objetivo”* (sección 2.2.3). Finalmente, *“las modificaciones que resulten de la implementación de la presente Guía deberán formar parte integral del Programa / Manual de Cumplimiento de la Persona Obligada”*.

320. Lo anterior se considera obligatorio y suficiente para cubrir los lineamientos del GAFI las instituciones financieras deben *“recopilar información suficiente sobre la institución ordenante, para comprender plenamente el carácter del negocio del respondedor”*.

321. La Guía mencionada establece la obligación de obtener el conocimiento respecto del corresponsal hasta que la entidad se sienta cómoda respecto de sus referencias. Adicionalmente en su apartado 3, establece que *“la persona obligada puede también apoyarse por medio de información publica disponible...para satisfacer sus requisitos de debida diligencia”*. El apartado 3.4 agrega que *“si la situación lo amerita, la persona obligada debe considerar el material disponible públicamente para asegurarse de que el banco corresponsal cliente no ha sido objeto de una acción legal, administrativa o penal adversa en el pasado”*

322. (c.7.2) No existe claridad sobre la obligatoriedad de la disposición que excita a algunas instituciones financieras (bancos y offshore), a evaluar los controles ALD/CFT de la institución ordenante. El apartado 3.5 de la Guía sobre Corresponsalía, Sucursales y Subsidiarias, indica que *“debe considerarse y evaluarse la naturaleza de los controles ALD y CFT y la manera en que son aplicados”*, sin embargo, el apartado 3 de la guía resta obligatoriedad al indicar que *“al realizar la diligencia debida de cualquier banco corresponsal cliente [banco responsal], se estima apropiado considerar los elementos que se indican a continuación”*, siendo uno de esos elementos el apartado 3.5.

323. (c.7.3) Existen disposiciones que obligan a algunas instituciones financieras (bancos y offshore) a obtener la aprobación de un funcionario gerencial antes de establecer nuevas relaciones corresponsales, tal como lo establece el criterio 7.3. La Guía sobre Corresponsalía, Sucursales y Subsidiarias indica en su apartado 2.1 que *“la relación de negocios de banca corresponsal deberá contar con la aprobación de un funcionario de alto rango”*.

324. (c.7.4) La Guía sobre Corresponsalía, Sucursales y Subsidiarias exige a algunas instituciones financieras (Bancos y Offshore), documentar sus relaciones de banca corresponsal.

325. (c.7.5) La Guía sobre Corresponsalía, Sucursales y Subsidiarias define las cuentas de pago garantizado (Payable Through Accounts o PTAs) en la sección de definiciones como Cuentas de Pagos en Otras Plazas, atendiendo de manera implícita la debida diligencia que debe tenerse con este producto

según la sección 3.3. Allí se refiere a la verificación que debe hacer la persona obligada sobre el negocio y la base de clientes del Banco Corresponsal con el que se mantenga relación de corresponsalía. Las demás obligaciones impuestas en esta Guía, especialmente la Sección 3, implican tácitamente que la institución guatemalteca no puede mantener cuentas de corresponsalía con entidades del exterior que no apliquen adecuados controles ALD/CFT. Sin embargo no existe la obligación expresa de *“tener la convicción de que el banco representado ha verificado la identidad y ha realizado el procedimiento de debida diligencia permanente de los clientes que tienen acceso directo a las cuentas del banco corresponsal y que está en condiciones de suministrar los datos de identificación de un cliente a pedido del banco corresponsal”* como lo pide la R.7 del GAFI. Como se indicó anteriormente, hasta el momento de la visita los bancos de Guatemala solo actúan como ordenantes en las relaciones de corresponsalía, por lo que no abren este tipo de cuentas, por lo cual se ve reducido el riesgo de que este producto sea usado para esquemas LD/FT

Recomendación 8 Riesgos de nuevas tecnologías

326. La Guía de Administración de Riesgo LD/FT, que obliga a Bancos, Financieras y Offshore, establece en la sección 4.1.2, que las personas obligadas *“deben estar conscientes del riesgo asociado con nuevos e innovadores productos o servicios que no son ofrecidos por la totalidad de las Personas Obligadas, pero que por las características de los mismos podrían ser útiles a clientes habituales u ocasionales cuya finalidad es la comisión del delito de LD y/o FT”*. Agregando que *“Para mitigar el riesgo inherente de LD/FT, se deben adoptar, desarrollar y ejecutar programas, políticas, normas, procedimientos y los controles internos idóneos respectivos”*. Se considera que el criterio esencial es mas amplio que la guía con respecto al alcance de las medidas de prevención ya que el mismo hace referencia a prevenir el uso indebido de los avances tecnológicos en los esquemas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, mientras que la guía hace alusión a la prevención del uso de nuevos e innovadores productos o servicios. Lo anterior, en el sentido de que pudrían existir avances tecnológicos susceptibles de ser utilizados para LD/FT que no necesariamente sean productos o servicios, como por ejemplo los sistemas de administración y transmisión de datos utilizados dentro de la institución, los cuales pueden ser susceptibles de manipulación de parte de los empleados o de personas externas.

327. (c.8.2) La Guía de Administración de Riesgos en su apartado 4.1.3, aborda el riesgo de los canales de distribución (medios utilizados para prestar, ofrecer y promover los servicios y productos), indicando que algunos de estos *“no necesariamente requieren la identificación del cliente”*, los cuales representarían medios que no requieren la presencia física de las partes. Se indica que entre los canales de distribución de mayor riesgo se encuentran los intermediarios o subagentes, kioscos, banca regional, cajeros automáticos, banca electrónica y banca móvil. Se observa que los tres últimos representan relaciones que no son cara a cara. El apartado 4.3 indica que *“para mitigar el riesgo inherente de LD/FT se deben adoptar, desarrollar y ejecutar programas, políticas, normas, procedimientos y los controles internos idóneos respectivos”*. Por lo que existen disposiciones que exigen a los bancos, financieras y offshore, contar con políticas y procedimientos para abordar riesgos asociados con relaciones o transacciones comerciales que no son cara a cara, a pesar de que la disposición formulada en el apartado 4.1.3 va orientada a los canales de distribución en general y no específicamente a este tipo de relaciones. Como se mencionó, la Guía es de reciente emisión y no aplica a la totalidad de personas obligadas. Algunas instituciones financieras indicaron tener políticas relacionadas con el uso de productos por Internet, las cuales fueron establecidas por iniciativa propia. El sector asegurador indicó que realizan colocación de pólizas via web, estos clientes son luego contactados por la aseguradora.

328. Según fue informado después de la visita a Guatemala, "el equipo de inspectores del Área de Supervisión Basada en Riesgos en todas las auditorías realizadas ha verificado y dado seguimiento a la implementación de la Guía antes indicada, considerando en sus verificaciones los riesgos geográficos,

de productos y canales de distribución, éste último ha permitido conocer de las entidades verificadas que ninguna entidad apertura cuentas a través de Banca Electrónica u otro medio donde no se verifique personalmente la identidad de sus clientes”.

3.2.2. Recomendaciones y Comentarios

Rec. 5

329. R.5. Incluir dentro de las personas obligadas a los intermediarios de seguros.
330. R.5. Exigir expresamente que se considere elaborar un RTS cuando no se pueda obtener o verificar los datos. Mejorar la confiabilidad del documento de identificación nacional, como en efecto se contempla mediante la expedición del nuevo Documento Personal de Identificación. Establecer mecanismos que faciliten a las instituciones financieras, la identificación de sus clientes con base en el DPI. Se sugiere promover convenios entre las instituciones financieras y las autoridades relacionadas con la emisión del nuevo documento de identificación a fin de que las últimas proporcionen información a las instituciones financieras para lograr la actualización de los datos de los clientes.
331. R5.4 Incluir la pregunta expresa sobre si se está actuando en beneficio de un tercero, en los formularios diseñados para Empresas de Tarjeta de Crédito y para Casas de Cambio en cuanto al inicio de relaciones con personas jurídicas
332. R.5.5. Exigir expresamente a las instituciones financieras que conozcan al beneficiario real en contratos de fideicomiso y verifiquen la información de todos los involucrados en dichos contratos.
333. R5.5 Dejar claro en la normativa que debe identificarse siempre al beneficiario real de una cuenta, con especial énfasis en las cuentas de Sociedades Anónimas con acciones al portador
334. R5.5 Establecer lineamientos claros que exijan a las instituciones financieras tomar medidas para determinar quiénes son las personas naturales que en última instancia son los que poseen o controlan una persona jurídica o empresa.
335. R5.7 Se sugiere realizar reuniones con las instituciones financieras a fin de encontrar soluciones a los problemas que dificultan la actualización de los datos de los clientes.
336. R5.8 Exigir a todas las instituciones financieras que lleven a cabo una diligencia debida más profunda para categorías de clientes, relaciones comerciales o transacciones de mayor riesgo. (La Guía de Administración de Riesgos podría ser aplicada al resto de las personas obligadas y no solamente a Bancos, Financieras y Offshore).
337. R5.8 Particularmente se recomienda incluir dentro de los clientes de alto riesgo a los clientes no residentes e incluir ejemplos de medidas de DDC aumentada a ser aplicadas por las personas obligadas en las relaciones u operaciones de alto riesgo.
338. R5.9 -12. Analizar la posibilidad de permitir a las personas obligadas, el establecimiento de medidas de DDC simplificadas de acuerdo a las recomendaciones del GAFI, para los casos en los que el riesgo sea menor.
339. R5.9 - R5.14) Establecer disposiciones para las instituciones financieras en las que se indique que las mismas pueden realizar la verificación de la identidad del cliente y beneficiario real luego del establecimiento de la relación comercial siempre que ésta tenga lugar tan pronto como sea razonablemente practicable, esta acción sea necesaria para no interrumpir la conducción normal del negocio o cuando los riesgos de LD/FT sean manejados con efectividad.

340. R5.14.1) Exigir a las instituciones financieras que adopten procedimientos de manejo del riesgo cuando permitan a sus clientes utilizar la relación comercial antes de que se efectúe la verificación de sus datos. Estos procedimientos deben incluir un grupo de medidas como la limitación del número, tipos y/o monto de transacciones que se pueden efectuar, y el monitoreo de transacciones grandes o complejas que se están realizando fuera de las normas esperadas para ese tipo de relación.

Rec. 6

341. R.6 Extender las disposiciones relativas a los PEPS a fin de que deban ser implementadas también por las Afianzadoras, Almacenadoras, Arrendadoras, Aseguradoras, Casas de Bolsa, Casas de Cambio, Casas de Empeño, Empresas de Canjes de Cheques, Cooperativas, Financiadoras, Empresas de Factoraje, Operadoras de Tarjeta de Crédito, Empresas de Transferencias de Fondos, Empresa de Tarjetas de Crédito y demás personas obligadas por las leyes ALD/CFT.

342. R.6 Modificar la definición de PEPS contenida en los oficios emitidos por la IVE, de forma que indique que se debe considerar PEP los individuos que desempeñen o hayan desempeñado funciones publicas destacadas en un país extranjero, así como sus familiares y asociados cercanos. Esto sin perjuicio de que se mantengan como PEPs los funcionarios u otras personas nacionales incluidas en la definición actual.

343. R6. Exigir a las instituciones financieras que obtengan la aprobación de un funcionario gerencial para continuar la relación comercial, cuando un cliente ha sido aceptado, y más tarde se descubre que el cliente o beneficiario real es una PEP, o luego pasa a ser una PEP.

Rec. 7

344. R7. Exigir a todas las instituciones que podrían al menos hipotéticamente establecer relaciones de corresponsalía o relaciones similares, aplicar las disposiciones emitidas con respecto a la banca corresponsal transfronteriza.

345. R7. Exigir en forma clara a las instituciones financieras que evalúen los controles ALD/CFT de la institución ordenante, y que precisen si estos son adecuados y efectivos.

346. R7. Exigir a todas las instituciones financieras que pudieran prestar servicios de corresponsalía u otros similares, que documenten las respectivas responsabilidades ALD/CFT de cada institución con respecto a la relación de corresponsalía. Guía

Rec. 8

347. R8. Exigir a todas las instituciones financieras que cuenten con políticas establecidas o que tomen las medidas que sean necesarias para prevenir el uso indebido de los avances tecnológicos en los esquemas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Esto se podría realizar enviando la Guía de Administración de Riesgos al resto de las personas obligadas.

348. R8. Exigir a todas las instituciones financieras que cuenten con políticas y procedimientos para abordar todo riesgo específico asociado con las relaciones o transacciones comerciales que no son cara a cara. Estas políticas y procedimientos deben aplicarse al establecer relaciones con el cliente y al efectuar la diligencia debida continua. Esto se podría realizar enviando la Guía de Administración de Riesgos al resto de las personas obligadas. Se recomienda considerar modificar la redacción de la Guía a fin de hacer mayor énfasis en las transacciones que no son cara a cara, para que las instituciones tengan mayor claridad sobre el tema.

3.2.3. Cumplimiento de las Recomendaciones 5 a la 8

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.5	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Algunas obligaciones que deberían estar plasmadas en ley o reglamento (criterios con asterisco 5.5.2.b y 5.4.a), están solo incluidas en circulares obligatorias de menor jerarquía • 5.3) Eficacia: La limitada confiabilidad de la Cédula de Vecindad puede representar dificultades para que las personas obligadas identifiquen a sus clientes apropiadamente tal como se requiere en el artículo 21 de la Ley ALD. • 5.5.2) Problemas de eficacia para que las instituciones financieras determinen la titularidad de una empresa jurídica pues el formulario de apertura de cuentas se centra excesivamente en una certificación del Registro Mercantil que no contiene información suficiente ni actualizada, y la existencia de acciones al portador limita el conocimiento acerca del tenedor de los títulos. • 5.7.2) Según las personas obligadas, los esfuerzos de actualización de datos no han sido completamente eficaces • 5.8) La Guía de Administración de Riesgos solo aplica a Bancos, Financieras y Offshore, por lo que no se ha exigido al resto de las instituciones financieras, realizar una diligencia debida más profunda para categorías de clientes, relaciones comerciales o transacciones de mayor riesgo. • 5.14) No se establecen límites referentes a los casos en que es permitido posponer la verificación de la identidad del cliente y beneficiario real tras el establecimiento de la relación comercial. Además, no se les indica a las instituciones financieras que establezcan procedimientos de manejo de riesgos cuando permitan esta situación. • 5.15) No se indica a las instituciones financieras que deben considerar elaborar RTS cuando no puedan obtener o verificar los datos del cliente o del beneficiario real o los datos referentes a la naturaleza de la relación
R.6	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Las disposiciones de debida diligencia sobre las PEPS no han sido requeridas a todas las instituciones financieras solo a Bancos, Financieras, y Offshore que concentran el mayor riesgo. • No se exige a las instituciones financieras que obtengan la aprobación de un funcionario gerencial para continuar la relación comercial ya establecida con una persona políticamente expuesta. • La definición de PEPs no es tan amplia como lo pide el GAFI ni incluye a las personas asociadas a estos
R.7	MC	<ul style="list-style-type: none"> • Las regulaciones no aplican a relaciones entre corredores de bolsa e hipotéticas contrapartes del exterior • No se han dado lineamientos más específicos sobre las medidas ALD/CFT que deben tomar las instituciones financieras en relación a las Payable Through Accounts.
R.8	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Las disposiciones específicas referentes a avances tecnológicos y relaciones que no son cara a cara son de reciente emisión por lo que no se pudo comprobar su efectividad (la Guía de Administración de Riesgos fue emitida unos cuantos meses antes de la visita). • La Guía de Administración de Riesgo emitida por la IVE en abril de 2009, que constituye el lineamiento que aborda en forma directa el tema de los productos y servicios innovadores, y el tema de los canales de distribución (dentro de los cuales podrían incluirse las relaciones que no son cara a cara)

		no ha sido completamente implementada y aplica solamente a Bancos, Financieras y Offshore, por lo que las demás personas obligadas están desprovistas de una instrucción clara y específica al respecto.
--	--	--

3.3. Terceros y negocios intermediados (R.9)

3.3.1. Descripción y Análisis

349. Resumen: Hasta el momento de la visita, de acuerdo a las entrevistas realizadas, las instituciones no habían utilizado los servicios de intermediarios u otros terceros para ejecutar procesos de DDC, y la interpretación que las autoridades dan a la normativa es que las instituciones no están autorizadas para delegar ningún aspecto de la DDC. Sin embargo, no existe una prohibición explícita.

350. El sector asegurador indicó que la mayor parte de sus negocios de venta de servicios (alrededor del 80%) es realizada a través de agentes independientes o corredores de seguros, los cuales no están cubiertos por la normativa ALD/CFT ya que no son sujetos obligados. Sin embargo, para propósitos de DDC estos intermediarios sólo son una forma de tercerizar (“outsource”) la labor venta y de recopilar documentos. Toda la información y documentación recabada por los corredores es trasladada de inmediato a las aseguradoras y son estas las que se encargan de verificar los datos y realizar la DDC antes de aceptar al cliente. A pesar de que al parecer no se delega esta función en terceros, la falta de una prohibición clara podría permitir que en el futuro las instituciones obligadas pudieran hacerlo.

351. En Guatemala, de acuerdo a los artículos 1 – 3 del Reglamento para Agencias y Agentes de Seguros y fianzas (Acuerdo Gubernativo M DE E 5-73), los agentes de seguros y fianzas, son los que promueven la venta de pólizas de seguro o de fianzas y pueden ser dependientes o independientes, en ambos casos deben celebrar contrato con la aseguradora o afianzadora. Representantes del sector de seguros indicaron que dentro de los contratos establecidos con los corredores no se incluyen cláusulas relacionadas con medidas ALD/CFT.

352. El sector de seguros indicó que promueven también negocios a través de los bancos (Banca Seguros). En este tipo de relación tanto el banco como la aseguradora realizan la DDC.

353. La obligación de identificar al cliente y verificar su información recae directamente sobre las personas obligadas por las leyes. El artículo 21 de la Ley ALD indica que las personas obligadas deben llevar un registro de sus clientes habituales u ocasionales y que deben verificar fehacientemente su información. Representantes del sector asegurador indicaron estar concientes de que la responsabilidad final de llevar a cabo la DDC recae sobre la compañía aseguradora y no sobre el corredor de seguros.

3.3.2. Recomendaciones y Comentarios

354. Emitir disposiciones que indiquen a las instituciones las medidas que deben guardar en caso de que se apoyen en un tercero para realizar elementos del proceso de DDC o para presentar negocios. Estas disposiciones deben ser acordes a lo dictado por la recomendación 9 del GAFI. En caso contrario, prohibir explícitamente esta posibilidad.

3.3.3. Cumplimiento de la Recomendación 9

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.9	MC	<ul style="list-style-type: none"> No existen lineamientos para los casos en que las instituciones deleguen algunos aspectos de la DDC, porque en opinión de las autoridades esto no está permitido, y en la práctica nunca se ha dado. Sin embargo, en opinión de los

		evaluadores, tal delegación no está claramente prohibida.
--	--	---

3.4. Secreto o confidencialidad de la institución financiera (R.4)

3.4.1. Descripción y Análisis

355. Resumen: Ninguna ley, norma o acuerdo sobre la confidencialidad o el secreto bancario en Guatemala inhibe la implementación de las Recomendaciones del GAFI. La Intendencia de Verificación Especial tiene acceso directo a información financiera y el Ministerio Público tiene acceso previa orden judicial. Ambos hacen uso de esas facultades.

356. (c. 4.1): El Artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla de la “inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros”, y que éstos “sólo podrán revisarse o incautarse, en virtud de resolución firme dictada por juez competente y con las formalidades legales [...]” Por otra parte, el secreto bancario está claramente desarrollado en el artículo 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, Decreto Número 19-2002 del Congreso de la República de Guatemala.

357. Los jueces de la República, en el ejercicio de sus competencias y de conformidad con la ley, tienen acceso irrestricto a cualquier información que esté en poder de instituciones y personas públicas o privadas. En materia penal de conformidad con el artículo 319 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público para solicitar información de personas individuales o jurídicas deberá solicitar autorización de Juez competente. Igualmente, los Fiscales que requieran información protegida por secreto, pueden solicitarla a través del Juez.

358. Adicionalmente, para casos de LD y FT la Fiscalía Especializada en Lavado de Dinero puede acceder a información secreta sin necesidad de orden judicial, simplemente solicitándola a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), la cual ejerce poderes especiales con respecto al acceso de información. El Artículo 28 de la Ley sobre la “obligación de informar”, dice que “las personas obligadas deberán proporcionar a la Intendencia de Verificación Especial la información que ésta les solicite en la forma y plazo establecidos en el reglamento [...]” Adicionalmente, el Fiscal Contra Lavado de Activos del Ministerio Público tiene acceso a información financiera previa orden judicial y por medio de la IVE en casos de posible LD/FT.

359. Otros fiscales especializados del Ministerio Público pueden solicitar información a la IVE por intermedio del Fiscal Especializado en LD, siempre y cuando en sus investigaciones sobre delitos precedentes se deriven actos de LD, caso en el cual la investigación de ambas conductas es llevada de manera conjunta.

360. Para obtener una orden judicial, el MP tiene que reunir los elementos suficientes para convencer a un juez que se la emitan, mientras que la IVE no tiene necesidad de una orden judicial para que se levante el sigilo bancario en casos de LD/FT. Por ello, pese a la facultad que tiene el MP de obtener una orden judicial en caso que fuese necesario, éste lo hace con más frecuencia por medio de los poderes de la IVE con fines de agilizar los procesos de investigación de casos. Ello ha sobrecargado innecesariamente el trabajo de la IVE (ver detalles en la sección 2.5).

361. El artículo 36 de la Ley ALD establece deber de reserva sobre las operaciones financieras de particulares que están siendo investigados por las autoridades. En su segundo párrafo ese mismo artículo permite la publicación de datos con fines estadísticos, esto con el fin que puedan ser usados como información estratégica que ayude a la administración de riesgos por parte de las personas obligadas.

Requerimientos a Personas Obligadas

Iniciales	Tipo de Persona Obligada	2005	2006	2007	2008	2009	2010
BA	Bancos	2777	1342	2121	1973	2300	173
FI	Financieras	755	528	558	931	1354	32
OS	Off Shore	582	353	193	350	571	8
TJ	Tarjetas de Crédito	239	36	406	290	137	
CB	Casas de Bolsa	150			27	47	
OT	Otros	3					
TF	Transferencias de Fondos	27	172	96	52	99	1
CP	Cooperativas	216	218	695		243	29
AF	Afiansadoras		1				
OP	Operadores de Tarjetas de Crédito			4	1		
AS	Aseguradoras				34	68	
AR	Arrendadoras					8	
CH	Empresas de Canje de Cheques					1	
CC	Casas de Cambio	71	31			2	
	Total	4,820	2,681	4,073	3,658	4,830	243

Fuente: Sistema IVE

3.4.2. Recomendaciones y Comentarios

362. Se debería buscar un balance entre los requerimientos de información que hace el Ministerio Público por medio de la IVE, y por medio de órdenes judiciales, con el fin de evitar un desgaste de requerimientos de ampliación del Ministerio Público hacia la IVE.

3.4.3. Cumplimiento de la Recomendación 4

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.4	C	[cumplida]

3.5. Mantenimiento de registros y Transferencias cablegráficas (R.10 y RE.VII)

3.5.1. Descripción y Análisis

363. Conforme los artículos 21 y 23 de la Ley ALD y artículo 13 del Reglamento a la Ley ALD, las instituciones financieras en Guatemala, están obligadas a mantener los archivos de sus clientes y transacciones durante un período de cinco años después de finalizada la transacción o la relación con el cliente, de manera que permitan la reconstrucción de transacciones y estén a disposición de las autoridades competentes. Esto incluye a las transacciones cablegráficas de fondos con la información puntual sobre originador, cuenta, monto y beneficiario, misma que debe mantenerse en toda la cadena de pago en atención al artículo 17 de la Ley CFT y artículo 9 del Reglamento a la Ley CFT. Cabe señalar que las instituciones financieras entrevistados expresaron que los productos con mayor riesgo LD/FT son los depósitos monetarios, las transferencias electrónicas y las remesas familiares. Los principales requisitos del GAFI sobre estos aspectos están cubiertos en el ordenamiento jurídico guatemalteco; sin embargo existen ciertas situaciones que afectan parcialmente su implementación efectiva.

Recomendación 10 – Mantenimiento de Registros

364. Las disposiciones más importantes en materia de mantenimiento de registro como parte de la labor de DDC que deben desarrollar los Sujetos Obligados, se encuentran contenidas en los artículos 21 y 23 de la Ley ALD y artículo 13 del Reglamento a la Ley ALD, los que respectivamente establecen:

“Artículo 21. Registros. Las personas obligadas deberán llevar un registro especial en los formularios que para el efecto diseñará la Intendencia de Verificación Especial de las personas individuales o jurídicas con las que establezcan relaciones comerciales o relaciones del giro normal o aparente de sus negocios, sean éstas clientes ocasionales o habituales; y de las operaciones que con ellas se realicen, particularmente en lo que se refiere a la apertura de nuevas cuentas, la realización de transacciones fiduciarias, arrendamiento de cajas de seguridad o la ejecución de transacciones en efectivo que superen el monto que establece el artículo 24 de la presente ley.”

“Artículo 23. Actualización y conservación de registros. Los registros a que se refieren los artículos 20, 21 y 22 de la presente ley, deberán actualizarse durante la vigencia de la relación comercial, y conservarse como mínimo cinco años después de la finalización de la transacción o de que la cuenta haya sido cerrada. De igual manera, las personas obligadas deberán mantener registros que permitan la reconstrucción de las transacciones que superen el monto señalado en el artículo 24 de la presente ley, como mínimo durante cinco años después de la conclusión de la transacción”

“Artículo 13. Actualización y conservación de registros. Los registros a que se refieren la Ley y este Reglamento, deberán ordenarse de acuerdo a un sistema adecuado de archivo, en documentos, medios magnéticos o cualquier otro dispositivo electrónico, de manera que puedan ser utilizados eficientemente por la entidad y permitan atender requerimientos de las autoridades competentes. Cuando se utilicen medios magnéticos o cualquier otro dispositivo electrónico, deberán conservarse copias de seguridad. Las personas obligadas deberán informar a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, como mínimo con un (1) mes de anticipación a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de los registros, por haber transcurrido el plazo mínimo de conservación establecido en la ley.”

365. Complementariamente se puede mencionar el art. 382 del Código de Comercio: *“ARTÍCULO 382. Documentación y Correspondencia. Todo comerciante debe conservar, en forma ordenada y organizada, durante no menos de cinco años, los documentos de su empresa, salvo lo que dispongan otras leyes especiales.”* Sin embargo, esta disposición no prevé que dicho plazo deba aplicarse después de concluida la relación con el cliente. Según el artículo 20 del Reglamento ALD, las instituciones financieras deben *actualizar la información sobre sus clientes durante la vigencia del contrato y como mínimo una vez al año. Los sectores obligados entrevistados por la Misión Evaluadora expresaron estar conscientes de que ciertas limitaciones en la actualización de la información del cliente dificulta la reconstrucción de transacciones, siendo algunos de esos factores la alta informalidad en el sector del comercio y de servicios, y la reticencia de éstos para proporcionar información.*

366. Las entidades entrevistadas señalaron ciertas dificultades en el proceso de actualización de archivos sobre clientes, entre éstas: 1) riesgos de falsedad, confiabilidad y duplicidad del documento oficial de identidad; 2) dificultades en la actualización y digitalización de registros de clientes antiguos, 3) información insuficiente de clientes del sector informal. Los bancos utilizan soluciones informáticas para el seguimiento transaccional de los clientes, están en proceso de modificar los Perfiles de Clientes haciendo diferenciaciones según el riesgo PLD/FT y fortaleciendo sus políticas de actualización de información. Es importante señalar que el Estado Guatemalteco está en proceso avanzado de implantar un documento nacional de identidad (DNI) que seguramente remediará los problemas que el actual sistema acarrea para una debida DDC, incluyendo el mantenimiento actualizado de registros.

367. Las instituciones financieras están obligadas a archivar datos sobre identificación del cliente y sus cuentas y transacciones, por al menos cinco años después de finalizada la relación con el cliente. Sobre los hallazgos, conclusiones escritas y expedientes de las transacciones detectadas como inusuales, el artículo 15 del Reglamento a la Ley ALD prevé su registro y el artículo 13 del mismo cuerpo legal

establece las condiciones de actualización y conservación de los registros a que se refieren la Ley y el Reglamento, por lo cual incluye a los expedientes de transacciones inusuales.

368. Conforme los artículos 21 y 23 de la Ley ALD y artículo 13 del Reglamento a la Ley ALD, las instituciones financieras en Guatemala, están obligadas a mantener los archivos de información sobre sus clientes y transacción a disposición de las autoridades competentes.

369. La labor de inspecciones in situ que desarrolla la IVE en esta materia es poco frecuente, no logra cubrir regularmente a todas las entidades. Con la Metodología actual de Supervisión Basada en Riesgos se plantean lineamientos específicos para la revisión in situ y de gabinete, de la implementación de controles, procedimientos y sistemas que aseguren la integridad, seguridad y actualización de los registros de información del cliente, sus transacciones y correspondencia, incluyendo el tema de las transacciones cablegráficas; Sobre los señalamientos e instrucciones para subsanar deficiencias conforme el art. 3, literal “c”, de la Ley de Supervisión Financiera la IVE señala que se entregará cédula de resultados a Juntas Directivas o Consejos de Administración. Al momento de la visita se había aplicado este modelo a 9 instituciones bancarias, estando pendiente de entregar la referida cédula. La IVE informó que sólo en el año 2009 se inició la práctica de reunirse con los consejos de administración de las entidades bancarias para presentarles verbalmente (en ese entonces), los hallazgos y fortalezas encontrados en las verificaciones in-situ realizadas a este tipo de entidades.

Recomendación Especial VII - Transferencias cablegráficas (VII):

370. En el art. 9 del Reglamento a la Ley CFT se establece la obligación de obtener y mantener información completa sobre el originador de una transferencia cablegráfica:

“Artículo 9. Transferencias de fondos. Para el cumplimiento de lo establecido en los artículos 17 y 20 de la Ley, las personas obligadas deben utilizar el formulario que para el efecto diseñará la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, el cual deberá contener, como mínimo, la información adecuada y significativa siguiente:

- a) Datos de identificación personal del ordenante;*
- b) Datos de identificación personal del beneficiario;*
- c) Monto de la transacción;*
- d) Número de cuenta y, en su ausencia, un número que identifique a la transferencia.*

Se deberá poner especial atención en los nombres y apellidos completos, dirección, lugar y fecha de nacimiento, y número de documento de identificación, tanto del ordenante como del beneficiario. La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, queda facultada para emitir instructivos u otro tipo de medidas complementarias, necesarias para el cumplimiento de lo estipulado en este artículo.”

371. En el art. 17 de la Ley CFT se establece la obligación de incluir información completa del originador de una transferencia cablegráfica transfronteriza:

“ARTÍCULO 17. Transferencias de fondos.

... recabar información adecuada y significativa respecto de la persona que origina la transferencia, dentro o fuera del territorio nacional,.... Dicha información debe permanecer con la transferencia o mensaje relativo a ella a través de la cadena de pago.

Las personas obligadas prestarán especial atención a las transferencias que no contengan toda la información a que se refiere el párrafo anterior y, en caso de considerarlas transacciones sospechosas, deberán reportarlas a la Intendencia de Verificación Especial.

El incumplimiento de esta disposición será sancionado de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de esta Ley....”

372. La obligación de incluir información completa del originador de una transferencia cablegráfica doméstica está desarrollada en el Formulario IVE-TF-21, que entró en vigencia en diciembre de 2008. Este obliga a Bancos, Financieras, Offshore, Remesadoras y Cooperativas federadas por FENACOAC a implementar un formulario para el *“Registro de Transferencia de Fondos Iguales o Mayores a US\$2,000.00, o su equivalente en otra moneda”*. Esta información es remitida mensualmente a la IVE dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente al que corresponda la transferencia. Según informó la IVE, dicha información se encuentra en sus bases de datos y sirve para consulta e intercambio de información con unidades homólogas y con el Ministerio Público.

373. La IVE informó que desde julio de 2005, las empresas de transferencias de fondos ya venían remitiendo información sobre operaciones iguales o superiores a US\$2,000, mediante los formularios IVE-TF-09 e IVE-TF-10 los cuales fueron sustituidos por el referido formulario IVE-TF-21. Este incluye también las transacciones múltiples que en su conjunto igualen o superen el monto establecido, realizadas por un ordenante o recibidas por un beneficiario localizado en el territorio nacional.

374. La estructura del reporte es muy detallada y abarca todos los datos requeridos por la R.E. VII. Incluye operaciones de cualquier monto menor que sumadas durante un mes calendario alcancen los \$2,000 Dichos registros quedan a disposición de la IVE aun cuando no alcancen el monto máximo a enviar en el formato electrónico mensual. Por otra parte, si bien las instituciones financieras ya estaban enviando estos formularios a la IVE, al momento de la evaluación la IVE no había iniciado la supervisión in situ del cumplimiento de estas obligaciones en las entidades de remesas y cooperativas de ahorro y crédito.

375. La obligación de incluir información completa del originador de una transferencia cablegráfica doméstica está prevista en los artículos 17 de la Ley CFT, y artículo 9 del Reglamento a la Ley CFT, integrados en formulario IVE-TF-21.

376. En el art. 17 de la Ley CFT, también se prevé que la *“(...) información debe permanecer con la transferencia o mensaje relativo a ella a través de la cadena de pago.”* Igualmente se prevé que *“Las personas obligadas prestarán especial atención a las transferencias que no contengan toda la información a que se refiere el párrafo anterior y, en caso de considerarlas transacciones sospechosas, deberán reportarlas a la Intendencia de Verificación Especial”* (art. 17 de la Ley CFT).

377. Algunas entidades entrevistadas manifestaron que cuando reciben del exterior transferencias que no vienen acompañadas de toda la información, adoptan algunas medidas como suspender temporalmente el pago hasta tanto se completa la información o en su defecto revierten la transacción.

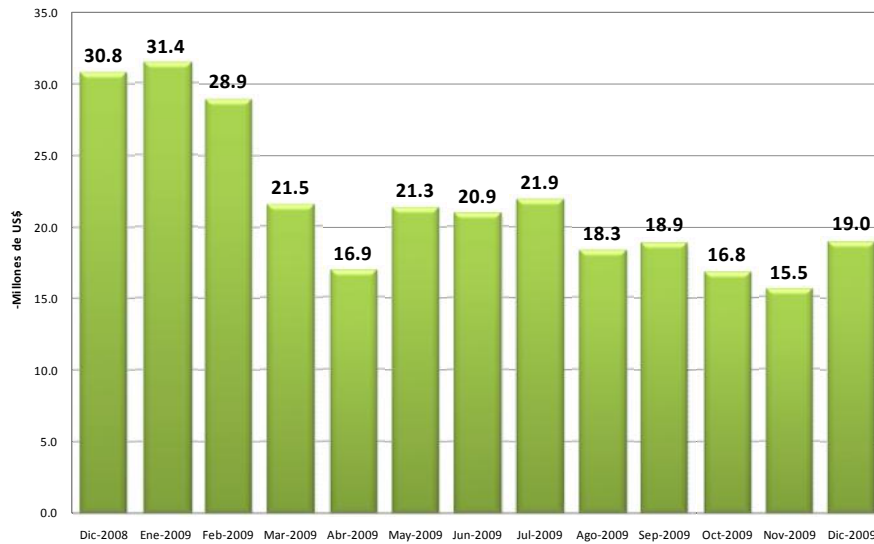
378. La IVE está facultada para monitorear el cumplimiento de parte de las instituciones financieras de las obligaciones relacionadas a la transferencia cablegráfica de fondos en cuanto a sus datos relevantes: originador, beneficiario, tipo de persona, monto, mantenimiento de información en la cadena de pago, etc; a través de la implementación del formulario IVE-TF-21. Sin embargo, al ser dicho formulario de expedición y vigencia reciente, la IVE aún no ha efectuado supervisión in situ al respecto en las entidades remesadoras y cooperativas de ahorro y crédito. La labor de inspecciones in situ que desarrolla la IVE no es lo suficientemente frecuente para algunas instituciones financieras, aunque actualmente aplican una nueva metodología de Supervisión Basada en Riesgos desarrollada con el apoyo del Fondo Monetario Internacional la cual señalan será implementada para todas las personas obligadas según sus características. La Misión Evaluadora no conoció sobre señalamientos e instrucciones escritas para subsanar deficiencias en este tema conforme lo establece el art. 3, literal “c”, de la Ley de Supervisión Financiera.

379. El incumplimiento de las obligaciones respecto a las transferencias cablegráficas (art. 17 de la CFT del año 2005) tiene previstos sanciones conforme el art. 19 de la Ley CFT, sin embargo, no se tienen establecidos rangos o gradualidades según la gravedad del caso tal como sí los hay para el LD a través del Acuerdo Número 43-2002 emitido por el Superintendente de Bancos en el año 2002. Las sanciones impuestas por la Superintendencia de Bancos en el tema LD/FT son escasas, y ninguna está referida a incumplimiento de las obligaciones en las transferencias de fondos.

380. Elementos adicionales: En Guatemala las obligaciones sobre DDC en transferencias cablegráficas no están sujetas a un umbral. El monto de \$2,000 al que se refieren las normas se usa únicamente para determinar qué transacciones se deben informar mensualmente a la IVE.

REMESAS MENSUALES MAYORES a \$2,000

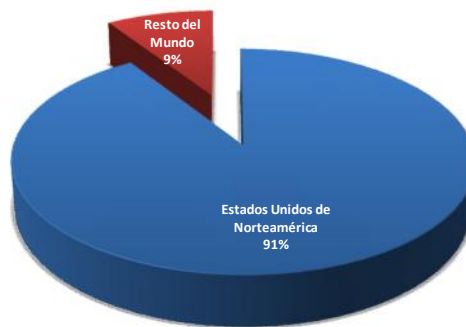
Del 01/12/2008 al 31/12/2009

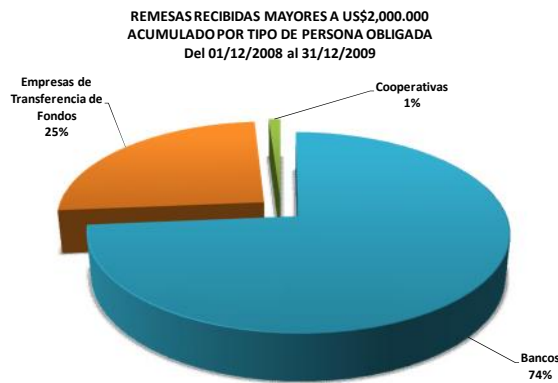


REMESAS RECIBIDAS MAYORES A US\$2,000.000

ACUMULADO POR PAÍS DE ORIGEN

Del 01/12/2008 al 31/12/2009





[Nota: la cifra correcta en el título debe ser 2,000 en vez de 200,000]

3.5.2. Recomendaciones y Comentarios

381. **Rec. 10:** Requerir a las personas obligadas, mantener planes de acción, designar recursos y plazos razonables de cumplimiento para completar y actualizar los datos, documentos y perfiles de los clientes antiguos.

382. Fortalecer la labor de supervisión de la Superintendencia de Bancos en general, y de la IVE en particular, sobre el cumplimiento de parte de todos los Sujetos Obligados de la obligación de mantenimiento seguro y actualizado de registros de sus clientes, conforme matrices y lineamientos previamente definidos, dejando soportes físicos y/o electrónicos (informes escritos y/o ayudas memorias) de los hallazgos de debilidades e incumplimientos, conforme el art. 3, literal “c”, de la Ley de Supervisión Financiera.

383. **R.E. VII:** Emitir guías sobre transferencias cablegráficas, que eviten posibles dudas sobre la obligación de identificar al cliente sin importar el monto de la transacción. Deben aplicarse mayores controles y lineamientos para los negocios de remesas a fin de disminuir los sectores informarles e integrarlos a los supervisados en PLD/FT.

384. La IVE debería revisar y actualizar, a tono con la gravedad de los incumplimientos, la gradualidad o escala de sanciones pecuniarias conforme los montos mínimos y máximos previstos en la Ley, respecto al tema de FT para el caso de las transferencias cablegráficas.

3.5.3. Cumplimiento de la Recomendación 10 y la Recomendación Especial VII

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.10	MC	<ul style="list-style-type: none"> Las normas no establecen de manera expresa desde qué momento se empieza a contar el plazo de cinco años para los registros de la correspondencia comercial de clientes que no esté relacionada con transacciones.
RE.VII	MC	<ul style="list-style-type: none"> Aunque la Ley y el Reglamento CFT establecen obligaciones acordes con la RE.VII, y el sector bancario las cumple en buena medida, podrían generarse dudas acerca del umbral a partir del cual se exige obtener información y monitorear transferencias cablegráficas.

		<ul style="list-style-type: none"> • Los factores que determinan la calificación de la Rec. 17 (sanciones) afectan el cumplimiento de esta recomendación.
--	--	--

Transacciones Inusuales y Sospechosas

3.6. Monitoreo de transacciones y relaciones (R.11 y 21)

3.6.1. Descripción y Análisis

Resumen:

385. En Guatemala, los Sujetos Obligados que constituyen instituciones financieras, están obligados a monitorear transacciones y relaciones con el propósito de detectar y analizar inusualidades de conformidad con parámetros y señales determinados en la ley, o en los instructivos emitidos por la IVE o en sus propios Manuales de PLD/FT; y deben dejar constancia escrita de esta labor a disposición de las autoridades competentes. Estas obligaciones se expresan en las siguientes disposiciones jurídicas: art. 26 de la Ley ALD, arts. 13, 15 y 17 del Reglamento de la Ley ALD, arts. 15 y 16 de la Ley CFT. Sin embargo, al ser poco frecuentes las inspecciones in situ desarrolladas por la IVE, no le permite a ésta cerciorarse regularmente de la calidad y efectividad del proceso de examen de antecedentes y propósitos, ni de la existencia de conclusiones por escrito, registro y expedientes de aquellas transacciones detectadas como inusuales pero que no son objeto de RTS. *No se establece expresamente la obligación de prestar atención especial a las relaciones comerciales y transacciones con personas de o en países que no apliquen las Recomendaciones del GAFI o que lo hagan de manera insuficiente.* En el caso de bancos, financieras y entidades off-shore, se les aplica la Guía de Administración de Riesgos LD/FT emitida por la IVE por Oficio No. 434-2009 de finales de abril del 2009 (un mes antes de la visita), por la cual estas entidades sí son responsables (aunque con un lenguaje no imperativo) de evaluar sus riesgos a partir del factor geográfico.

386. La IVE, a través de su reciente Guía de Administración de Riesgos LD/FT (punto 4.1.4), orienta a las instituciones bancarias, financieras y entidades off-shore, acerca de la medición del riesgo a partir del factor geográfico, nacional e internacional conforme información generada por organismos especializados y a los demás Sujetos Obligados está previsto incluirlos en una próxima etapa por lo que al momento de la visita no se les ha advertido sobre debilidades en sistemas ALD/CFT de otros países

Recomendación 11- Monitoreo de transacciones

387. La obligación de dar especial atención a las transacciones complejas e inusuales se establece en las siguientes disposiciones:

En la Ley ALD:

*“Artículo 26. Comunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales. Las personas obligadas **prestarán especial atención** a todas las transacciones, concluidas o no, complejas insólitas, significativas, y a todos los patrones de transacciones no habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, **que no tengan un fundamento económico o legal evidente, debiéndolo comunicar inmediatamente a la Intendencia de Verificación Especial.**”*

388. La obligación de analizar y examinar las transacciones detectadas como complejas e inusuales, y de plasmar por escrito las conclusiones sobre dicha labor, se establece en el Reglamento a la Ley ALD:

*“Artículo 15. Registro de transacciones inusuales. A través del oficial de cumplimiento, las personas obligadas **deberán examinar las transacciones inusuales** para determinar si las mismas tienen carácter de sospechosas, y abrirán expedientes, que podrán constar en documentos, medios*

magnéticos, o cualquier otro dispositivo electrónico, asignándoles números que servirán de identificación para trámites posteriores. En el expediente se conservará toda la documentación de soporte, independientemente de que se determine que la transacción no tiene la calidad de sospechosa y que no es necesario reportarla a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia.”

389. El artículo 16 de este mismo Reglamento establece que *“para efectos de detectar y prevenir la realización de transacciones sospechosas, cada persona obligada deberá definir señales de alerta, considerando entre ellas las que a través de la emisión de oficios circulares, la Superintendencia de Bancos haga de conocimiento”*

390. Adicionalmente la Guía de Administración de Riesgos LD/FT emitida por la IVE, aplicable a bancos, financieras y entidades off-shore, exige a éstas *“Establecer señales de alerta descriptivas y prospectivas que indiquen potenciales fuentes de riesgo de LD/FT.”* y orienta acerca del monitoreo, análisis, parametrización y documentación de las señales de alerta para la tarea de detectar transacciones inusuales (puntos VIII y IX de la Guía). No obstante, hasta el momento de la visita de Evaluación, la IVE comunicó únicamente documentos de señales de alerta de instrumentos internacionales como el documento de 100 casos de Grupo Egmont y recientemente brindó información a través de charlas de capacitación dictadas a los sujetos obligados y envió un boletín electrónico, con links a tipologías de GAFIC y GAFISUD.

391. Para propósitos de detección de posibles actos de financiamiento del terrorismo la Ley CFT dispone lo siguiente:

“Artículo 16. Reporte de Transacciones Sospechosas -RTS-. Las personas obligadas deberán reportar con prontitud y debida diligencia a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, toda transacción que no tenga al parecer una finalidad obviamente lícita, o cuando se sospeche o se tenga indicios razonables para sospechar que existen fondos vinculados con o que pueden ser utilizados para financiar el terrorismo. Para el efecto, las personas obligadas deberán aplicar los procedimientos establecidos al respecto en el reglamento de esta Ley, y en su defecto, en la normativa contra el lavado de dinero u otros activos, inclusive en lo relativo al registro de transacciones inusuales que no sean comunicadas a la autoridad competente.”

392. Existe obligación legal de las instituciones financieras para que mantengan los hallazgos y sus conclusiones a disposición de las autoridades competentes en la siguiente disposición:

Artículo 13 del Reglamento a la Ley ALD. “Actualización y conservación de registros. Los registros a que se refieren la Ley y este Reglamento, deberán ordenarse de acuerdo a un sistema adecuado de archivo, en documentos, medios magnéticos o cualquier otro dispositivo electrónico, de manera que puedan ser utilizados eficientemente por la entidad y permitan atender requerimientos de las autoridades competentes. Cuando se utilicen medios magnéticos o cualquier otro dispositivo electrónico, deberán conservarse copias de seguridad. Las personas obligadas deberán informar a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, como mínimo con un (1) mes de anticipación a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de los registros, por haber transcurrido el plazo mínimo de conservación establecido en la ley.”

393. El artículo 15 Reglamento de la Ley ALD antes citado prevé que las instituciones financieras deben mantener registros de los hallazgos, análisis, conclusiones escritas y expedientes de las transacciones detectadas como inusuales, sean o no objeto de un RTS y por su parte el artículo 13 del mismo cuerpo legal establece las disposiciones de actualización y conservación de todos los registros a

que se refiere la Ley y su reglamento, lo cual incluye los registros de operaciones inusuales La labor de inspección in situ en PLD/FT que ejecuta la IVE, no logra cubrir a todas las instituciones financieras no bancarias (incluso por varios años), lo que no le permite cerciorarse regularmente de la calidad y efectividad del proceso de examen de antecedentes y propósitos, ni de la existencia de conclusiones por escrito, registro y expedientes de aquellas transacciones detectadas como inusuales pero que no son objeto de RTS, en cumplimiento del art. 26 de la Ley ALD, de los arts. 13 y 15 del Reglamento a la Ley ALD y del art. 15 (segundo párrafo) de la Ley CFT, en este tipo de entidades.

394. Con respecto a la aplicación práctica del monitoreo de transacciones por parte de los sujetos obligados, podemos anotar que la mejoría en la calidad de los RTS informada por la IVE (ver R.13) es en parte el resultado de una mejor actividad de seguimiento a las transacciones por parte de los sujetos obligados.

Recomendación 21- Atención a Países de alto riesgo

395. La Guía de Administración del Riesgo de LD/FT (punto 4.1.4), emitido por la IVE a finales de abril del 2009 (un mes antes de la visita) y aplicable a instituciones bancarias, financieras y entidades off-shore dispone, que las instituciones financieras son responsables de evaluar sus riesgos a partir del factor geográfico y ejecutar medidas de monitoreo sobre jurisdicciones de alto riesgo en LD/FT conforme información generada por organismos especializados. También les señala sitios disponibles en internet para que las Personas Obligadas consulten cuál es el estatus en cuanto a cumplimiento de estándares internacionales en materia de combate de LD/FT de los países sobre los que deseen obtener información. Sin embargo, no se puede determinar la implementación efectiva de dicha Guía por ser de muy reciente emisión. Los demás Sujetos Obligados no están obligados expresamente por las leyes y reglamentos en materia PLD/FT, a prestar atención especial a las relaciones comerciales y transacciones con personas (incluyendo personas jurídicas y otras instituciones financieras) provenientes de o ubicadas en países que no apliquen las Recomendaciones del GAFI, o que lo hagan de manera insuficiente, sin embargo como quedo señalado anteriormente de momento se ha cubierto con esta Guía al 92.8 del sector financiero del País.

396. En cuanto a informar acerca de preocupaciones, debilidades o advertencias sobre sistemas ALC/CFT de otros países, la IVE informó que cada vez que se recibe u obtiene información en la IVE sobre este tema se remiten oficios a Bancos, Sociedades Financieras, Aseguradoras y Offshore, así como Cooperativas de ahorro y crédito y otros obligados financieros, para que tomen las medidas pertinentes, habiendo puesto a la vista de esta misión copia de varios oficios al respecto. También mediante oficio IVE No. 837-2009 (coetáneo a la visita de Evaluación) se trasladó a Bancos, Financieras y Offshore la “Guía Básica de Prevención para Servicios de Banca Corresponsal, Sucursales de Bancos Nacionales en el Extranjero y Subsidiarias”, en la que se indica que las entidades deberán implementar medidas para protegerse de riesgos de este tipo y se les recomiendan diferentes medidas de control y administración de riesgos.

397. Los artículos 19, literal “d”, y 21 de la Ley ALD tratan sobre los Programas de Prevención que deben ejecutar las instituciones financieras incluye aspectos sobre clientes extranjeros. Si esas transacciones no tienen un propósito económico aparente o lícito visible, deben examinarse, en la mayor medida posible, los antecedentes y el objetivo de dichas transacciones, y las conclusiones por escrito deben estar disponibles para ayudar a las autoridades competentes (ej.: supervisores, agencias del orden público y la UIF).

398. Las obligaciones de analizar y examinar las transacciones detectadas como complejas e inusuales, de plasmar por escrito las conclusiones sobre dicha labor y que esta información esté a disposición de autoridad competente, se encuentran establecidas en los citados artículos 15 del Reglamento a la Ley ALD y 16 (segundo párrafo) de la Ley CFT;

399. De manera general y complementaria se puede citar el artículo 6 del Reglamento a la Ley ALD:

“ARTÍCULO 6. Agencias, sucursales, subsidiarias y oficinas en el extranjero. Las personas obligadas velarán porque sus agencias, sucursales, subsidiarias u oficinas constituidas en el extranjero, cumplan las disposiciones legales del país anfitrión, en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos.”

400. Sin embargo, no se conocen otras disposiciones y/o instrucciones sobre contramedidas ante casos de países que sigan sin aplicar, o apliquen de manera insuficiente, las Recomendaciones del GAFI. Según se informó a esta misión, esto se considera cubierto mediante la Guía de Administración de Riesgos de LD y FT, que se refiere al cuidado que debe tenerse con el Riesgo Geográfico.

3.6.2. Recomendaciones y Comentarios

401. **R.11:** Fortalecer la labor de supervisión de la Superintendencia de Bancos en general, y de la IVE en particular, para poder cubrir regularmente a todos los Sujetos Obligados conforme a períodos razonables, y cerciorarse de la calidad y efectividad del proceso de examen y conclusiones por escrito, registro y expedientes de aquellas transacciones detectadas como inusuales cuando no concluyen en un RTS.

402. Disponer en la legislación y/o en las circulares y normativas de la materia, la obligación para las instituciones financieras (distintas a Bancos, Financieras y OffShore) de prestar atención especial a las relaciones comerciales y transacciones con personas de o en países que no apliquen las Recomendaciones del GAFI o lo hagan de manera insuficiente.

403. **R.21:** Modificar la Guía sobre Administración de Riesgos de LD/FT para dotarla de un lenguaje más imperativo.

404. Establecer obligaciones para los intermediarios de seguros sobre el monitoreo, detección y análisis de operaciones inusuales a tono con las Rec. 11 y 21

3.6.3. Cumplimiento de las Recomendaciones 11 y 21

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.11	MC	<ul style="list-style-type: none"> Los intermediarios de seguros, como instituciones financieras, no están obligados a la Prevención LD/FT, ni al monitoreo, detección y análisis de operaciones inusuales.
R.21	MC	<ul style="list-style-type: none"> Las Guías que recientemente incluyeron medidas de prevención e información sobre países de alto riesgo tienen las siguientes deficiencias: a) sólo aplican a bancos, compañías financieras y entidades off-shore (sector de mayor riesgo según estudio hecho por Guatemala), y no a las demás instituciones financieras tales como casas de bolsa que no pertenezcan a grupos financieros, y cooperativas de ahorro y crédito (estas últimas tienen casi la misma cantidad de activos que las compañías financieras); b) se expresan en un lenguaje que no deja clara su obligatoriedad.

3.7. Informes sobre transacciones sospechosas y otros reportes (R.13-14, 19, 25 y RE.IV)

3.7.1. Descripción y Análisis ⁷

Resumen:

405. En el ordenamiento jurídico guatemalteco, se recoge expresamente la obligación de presentar Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS) por parte de los Sujetos Obligados a prevenir el LD y el FT, y las disposiciones más relevantes en esta materia se expresan en los siguientes cuerpos legales: art. 26 de la Ley ALD, arts. 16 y 17 del Reglamento a la Ley ALD, art. 16 de la Ley CFT y arts. 7 y 8 del Reglamento de la Ley CFT. A su vez están obligados a presentar Reporte de Transacción en Efectivo (RTE) a partir del umbral definido en el art. 24 de la Ley ALD y en el art. 14 del Reglamento a la Ley ALD. En la práctica la abrumadora mayoría de RTS y RTE son enviados por bancos. Por otra parte, los Sujetos Obligados, sus propietarios y funcionarios, están protegidos legalmente de cualquier responsabilidad penal, civil y administrativa que se pudiera derivar en ocasión de la presentación de los referidos reportes conforme el art. 30 de la Ley ALD. La prohibición de infidencia por alertar sobre la presentación de un ROS está recogida en los arts. 27 y 36 de la Ley ALD, en el art. 26 del Reglamento de la Ley ALD y en el art. 63 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros. La tarea de realimentación que deben recibir los Sujetos Obligados de parte de las autoridades competentes, en especial la IVE en su rol de UIF, se prevé en el art. 25 del Reglamento de la Ley ALD.

Recomendación 13 y RE IV- reporte de operaciones sospechosas

406. La UIF de Guatemala la constituye la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que opera adscrita a la Superintendencia de Bancos. Los Sujetos Obligados, tanto las instituciones financieras como las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD), están obligados expresamente a presentar Reportes de Transacciones Sospechosas por LD y FT ante la IVE conforme las siguientes disposiciones:

407. En la Ley ALD:

“Artículo 26. Comunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales. Las personas obligadas prestarán especial atención a todas las transacciones, concluidas o no, complejas insólitas, significativas, y a todos los patrones de transacciones no habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente, debiéndolo comunicar inmediatamente a la Intendencia de Verificación Especial.”

408. En el Reglamento de la Ley ALD:

“Artículo 16. Comunicación de transacciones sospechosas. Las personas obligadas deberán comunicar a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, las transacciones que detecten como sospechosas, aplicando el procedimiento que se describe a continuación (...):

409. En la Ley CFT:

“Artículo 2: [...] d) Transacción sospechosa: es aquella transacción inusual debidamente examinada y documentada por la persona obligada, que por no tener un fundamento económico o legal evidente, podría constituirse en ilícito penal”

“Artículo 16. Reporte de Transacciones Sospechosas -RTS-. Las personas obligadas deberán reportar con prontitud y debida diligencia a la Superintendencia de Bancos, a través de la

⁷ La descripción del sistema para el reporte de transacciones sospechosas en la s.3.7 está integralmente ligada a la descripción de UIF en la s.2.5, y los dos textos tienen que complementarse y no duplicarse.

Intendencia de Verificación Especial, toda transacción que no tenga al parecer una finalidad obviamente lícita, o cuando se sospeche o se tenga indicios razonables para sospechar que existen fondos vinculados con o que pueden ser utilizados para financiar el terrorismo.

Para el efecto, las personas obligadas deberán aplicar los procedimientos establecidos al respecto en el reglamento de esta Ley, y en su defecto, en la normativa contra el lavado de dinero u otros activos, inclusive en lo relativo al registro de transacciones inusuales que no sean comunicadas a la autoridad competente.”

410. En el Reglamento de la Ley CFT:

“Artículo 7. Reporte de Transacciones Sospechosas de Financiamiento del Terrorismo –RTS/FT–. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Ley, las personas obligadas que indican los artículos 15 y 18 de la misma, deben aplicar el formulario diseñado por la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, y observar los plazos y procedimientos establecidos en el artículo dieciséis 16 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.(....)

“Artículo 8. Ampliación. En los casos en que la información contenida en un Reporte de Transacciones Sospechosas de Financiamiento del Terrorismo, sea incompleta, confusa, ambigua o contradictoria, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, podrá solicitar a la persona obligada de que se trate, las ampliaciones correspondientes a dicho reporte y los documentos que sean necesarios.”

411. Existe un formulario emitido por la IVE denominado IVE-RTS- LD/FT “*REPORTE DE TRANSACCIÓN SOSPECHOSA DE LAVADO DE DINERO Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -RTS LD/FT*”, utilizado por las personas obligadas para reportar transacciones sospechosas, el cual incluye los siguientes aspectos:

- Datos de la persona obligada reportante
- Información de las personas relacionadas en la transacción sospechosa
- Información de la transacción sospechosa
- Documentación que se debe anexar a la transacción sospechosa
- Descripción de la transacción sospechosa y señales de alerta detectadas.

412. Las estadísticas presentadas por la IVE sobre RTS son las siguientes:

Reportes de transacción sospechosa recibidos en la IVE, por Persona Obligada

Reportes de transacción sospechosa recibidos en la IVE, por Persona Obligada	2005	2006	2007	2008	Total	Porcentaje
Bancos	237	250	301	236	1024	67.3%
Empresas de Transferencias de fondos	104	57	26	34	221	14.5%
Cooperativas	54	47	37	32	170	11.2%
Tarjetas de crédito	9	9	12	12	42	2.8%
Bancos Off shore	9	11	5	6	31	2.0%
Aseguradoras	3	7	7	7	24	1.6%
Financieras	1	0	0	2	3	0.2%
Afianzadoras	1	0	1	0	2	0.1%
Casas de Bolsa	0	0	1	0	1	0.1%
Almacenadoras	0	0	0	1	1	0.1%
Casas de Cambio	0	1	0	0	1	0.1%
Empresas de Canje de Cheques	0	0	1	0	1	0.1%
Casas de Empeño	0	0	0	0	0	0.0%
Totales	418	382	391	330	1521	100.00%

Denuncias presentadas y número de RTS que las originaron

	2005	2006	2007	2008	Total
Denuncias	8	32	32	21	93
RTS enviados	68	113	90	48	319

Reportes de transacción sospechosa recibido en la IVE, por tipo de cuenta o servicio

Tipo de Cuenta	2005	2006	2007	2008	Cantidad de RTS	Porcentaje
Cuenta de Monetarios	195	180	241	185	801	52.66%
Cuenta de Ahorro	61	80	64	51	256	16.83%
Remesas	122	23	10	23	178	11.70%
Clientes sin tipo de cuenta					-	0.00%
Transferencias	6	45	22	24	97	6.38%
Tarjeta de Crédito	9	12	16	10	47	3.09%
Sin tipo de cuenta (no cliente)			6	3	9	0.59%
Depósitos a largo plazo	10	12	16	4	42	2.76%
Préstamos	9	12	4	9	34	2.24%
Pólizas	3	7	8	5	23	1.51%
Otras	1	5	3	13	22	1.45%
Compra y/o cobro cheque de caja		5	1	2	8	0.53%
Compra/Venta de divisas	2	1		1	4	0.26%
	418	382	391	330	1,521	100.00%

No. de personas incluidas en los RTS

	2005	2006	2007	2008	Total
RTS recibidos	418	382	391	330	1,521
Personas involucrados en los RTS	1,159	1,337	1,708	1,651	5,855

413. A partir de la estadísticas se nota una reducción en el número de RTS presentados en el año 2008 respecto al anterior, de 389 en 2007 a 329 en 2008; además del mínimo de RTS's presentados por instituciones financieras no bancarias, tales como financieras, aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, casas de cambio, almacenadoras y empresas de canje de cheques. Sin embargo, en el caso de las empresas de remesas se refleja un aumento de RTS de 26 en 2007 a 34 en 2008. Es mínimo el número de RTS por el tema FT (la IVE ha recibido dos reportes en los que la institución reportante sospechaba de posible financiamiento de terrorismo).

414. Se encontró falta de efectividad en el proceso de judicialización de los RTS a partir del número de denuncias presentadas ante el Ministerio Público.

415. Algunos Oficiales de Cumplimiento de instituciones financieras y algunas autoridades entrevistadas, expresaron preocupación ante la posibilidad de que los Oficiales de Cumplimiento sean llamados por los Tribunales, en calidad de testigos o peritos especializados, en ocasión de la judicialización de casos de gran impacto. Conforme se estableció por información de las autoridades esto no ha ocurrido en los últimos años, pero sigue siendo una preocupación para los Oficiales de Cumplimiento. Con el afán de apoyar y proteger a los Oficiales de Cumplimiento la IVE prevé contratar a un perito con experiencia del Ministerio Público que actuará como enlace entre la IVE y la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público, mayormente para que éste pueda asistir a las audiencias y debates que fuere citado por el Ministerio Público en casos de LD y FT complejos. Sus funciones también incluirán coadyuvar con el personal técnico de la IVE en la elaboración de denuncias penales, así como analizar la documentación de soporte que se traslada al Ministerio Público, esta plaza ya está aprobada y presupuestada y la persona elegida a la fecha de la visita ya había superado todos los filtros de selección para ser incorporado a la IVE.

416. A pesar del posible temor o desestímulo a reportar, las estadísticas reflejan actividades de reporte constantes. Sin embargo, la labor de inspección in situ en PLD/FT que ejecuta la IVE, en ocasiones no logra cubrir a todas las instituciones financieras no bancarias (incluso por varios años) lo cual no le permite cerciorarse del número de operaciones detectadas como inusuales pero que al final no son objeto de RTS, ni de la calidad de su análisis, ni de la calidad de sus soportes y archivos en ese tipo de entidades.

417. Los RTS se presentan en medio físico, sin importar la cantidad o el tipo de transacción que involucren. Las instituciones financieras, a nivel gremial, comparten información sobre tipologías en RTS. No ha habido casos de infidencia en ocasión de un RTS.

418. Respecto de las denominadas Personas Obligadas bajo Régimen Especial o "PORES" (APNFD) que son Sujetos Obligados desde el año 2005, es hasta abril del 2009 que han iniciado su proceso de registro en la IVE a fin de verificar que cumplan con las obligaciones establecidas en la Ley CFT. A las profesiones liberales (notarios, contadores y auditores), que son Sujetos Obligados conforme el art. 18 de la Ley CFT, no se les exige presentar RTS, ni por LD ni por FT ya que la posibilidad de reportar transacciones sospechosas queda a discreción y voluntad de dichos profesionales. Los Abogados no son Sujetos Obligados en Guatemala.

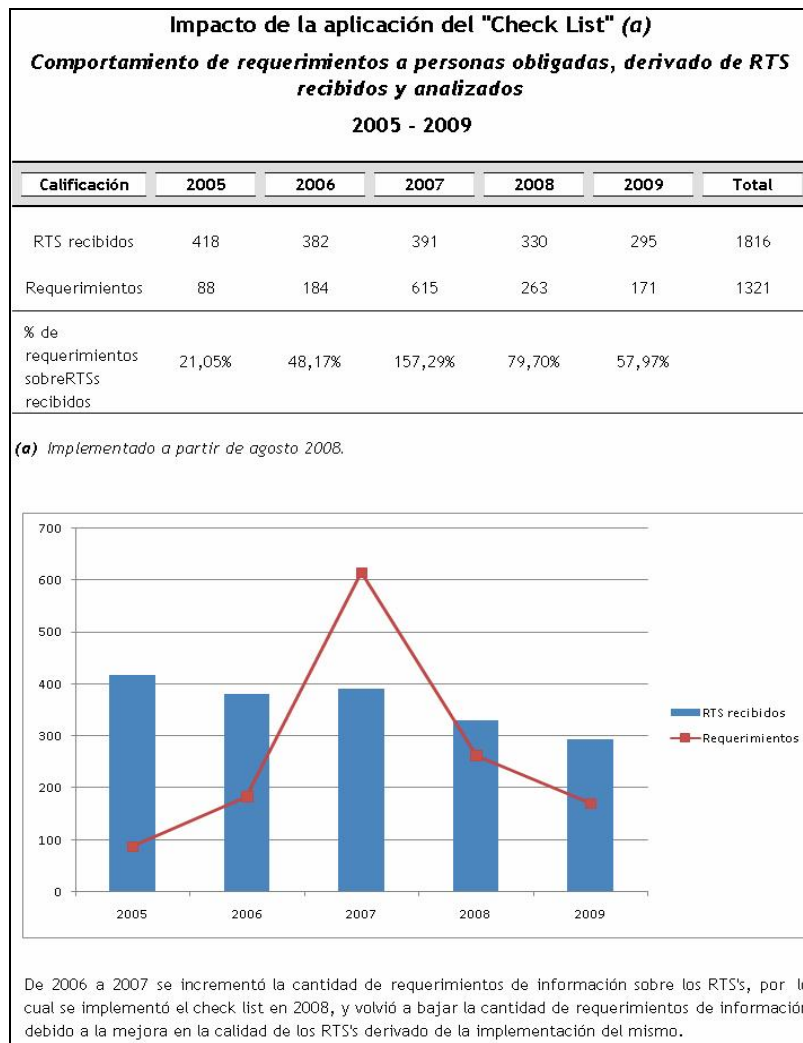
419. La obligación de presentar RTS relacionados al Terrorismo y su Financiamiento (c. 13.2), está recogida en los citados art. 16 de la Ley CFT y arts. 7 y 8 del Reglamento de la Ley CFT; y además en el formulario emitido por la IVE denominado IVE-RTS- LD/FT . Por su parte, el art. 26 de la Ley ALD vincula esta obligación también a las operaciones intentadas (c. 13.3) e independientemente de su monto. La IVE confirmó que ha recibido solo algunos RTS basados en operaciones intentadas.

420. En cuanto a la obligación sobre el requisito de presentar un RTS independientemente de que se piense o no que las transacciones están relacionadas con cuestiones tributarias cabe señalar que la

defraudación tributaria es delito en Guatemala (art. 358 del Código Penal) y los sujetos obligados deben reportar la sospecha de lavado de activos derivados de cualquier delito.

421. Elemento adicional (c. 13.5) – Reporte de cualquier acto criminal. La obligación de reportar operaciones sospechosas no se limita a actos de posible LD o FT, sino que se extiende a todo tipo de “transacciones, ... complejas insólitas, significativas, y a todos los patrones de transacciones no habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente” (art. 26 de la Ley ALD).

422. Según la Unidad Especializada en LD/FT del Ministerio Público, los RTS presentan deficiencias de calidad y contenido. Sin embargo la IVE con el propósito de mejorar la calidad de los RTS y su respectivo análisis, instruyó a partir de julio 2008 la implementando un Check List (lista de chequeo) para la admisibilidad de los RTS, y ha reforzado su área de analistas especializados. Aunque son pocos los RTS que han sido rechazados por la IVE por no cumplir con los requisitos del Check List, este filtro ha logrado que haya menos RTS reactivos, y mayor calidad de éstos, apreciación que fue confirmada por varios oficiales de cumplimiento y que se evidencia en la tabla siguiente.



Recomendación 14- Protección por reportar y prohibición de alertar

423. En el ordenamiento jurídico guatemalteco, la disposición más relevante en cuanto a la protección de las instituciones financieras y sus funcionarios de no tener responsabilidades penales ni civiles en ocasión de presentar RTS, es el art. 30 de la Ley ALD:

“Artículo 30. Exención de responsabilidad.

Se exime expresamente de responsabilidad penal, civil o administrativa, y de cualquier tipo a las personas obligadas, sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, representantes legales y empleados debidamente autorizados que hubieren proporcionado la información en cumplimiento de esta ley.”

424. Las disposiciones que Guatemala presenta como más relevantes acerca de la prohibición de revelar que un RTS está siendo presentado, son las siguientes:

425. En la Ley ALD:

“Artículo 27. Reserva de la información solicitada. Las personas obligadas no podrán hacer del conocimiento de persona alguna, salvo a un Tribunal o al Ministerio Público, que una información le ha sido solicitada o la ha proporcionado a otro tribunal o autoridad competente.”

“Artículo 36. Reserva. Con el objeto de garantizar la reserva de las operaciones financieras, las personas que integran la Intendencia de Verificación Especial y cualquier otra persona que por razón del cargo conozca o tenga acceso a la información relacionada en esta ley, están obligadas a mantenerla en reserva, aún después de haber cesado en el cargo.”

426. En la Ley de Bancos y Grupos Financieros:

“Artículo 63. Confidencialidad de operaciones. Salvo las obligaciones y deberes establecidos por la normativa sobre lavado de dinero u otros activos, los directores, gerentes, representantes legales, funcionarios y empleados de los bancos, no podrán proporcionar información, bajo cualquier modalidad, a ninguna persona, individual o jurídica, pública o privada, que tienda a revelar el carácter confidencial de la identidad de los depositantes de los bancos, instituciones financieras y empresas de un grupo financiero, así como las informaciones proporcionadas por los particulares a estas entidades.”

427. A nivel gremial, las instituciones financieras no comparten información sobre RTS específicos, únicamente sobre tipologías. Según se informó, no han tenido problemas de infidencia en ocasión de un RTS. Las instituciones bancarias implementan medidas de seguridad de los RTS, los cuales se presentan en papel.

428. Aunque existe el deber de reserva por parte de funcionarios de la IVE respecto de la información que conoce en el ejercicio de su cargo No existe expresamente disposición o medida que asegure que los nombres y los detalles personales de los funcionarios de los Sujetos Obligados que estructuran y presentan un RTS, serán mantenidos en la IVE bajo confidencialidad en el caso de que esta información sea solicitada por el MP o Juzgado competente.

Recomendación 19 – Reportes basados en Umbrales

429. Guatemala optó por establecer un reporte de transacciones en efectivo superiores a \$10,000:

“Artículo 24 de la Ley ALD. Obligación de registros diarios. Las personas obligadas deberán llevar un registro diario, en los formularios que para el efecto diseñe la Intendencia de Verificación Especial de todas las transacciones que lleven a cabo en efectivo, sean éstas

ocasionales o habituales, en moneda nacional o extranjera y que superen el monto de diez mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. Las transacciones múltiples en efectivo tanto en moneda nacional o extranjera que en su conjunto superen el monto establecido en este artículo serán consideradas como una transacción única si son realizadas por o en beneficio de la misma persona durante un día.”

430. El art. 14 del Reglamento de la Ley ALD:

“Artículo 14 del Reglamento de la Ley ALD. Registros diarios. La información del registro de operaciones diarias que en cumplimiento del artículo 24 de la Ley deben mantener las personas obligadas, se remitirá a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, mensualmente, en la forma y condiciones que ésta determine. Dicha información deberá presentarse dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente al que corresponda. Si durante un mes no se realizan transacciones en efectivo a las que se refiere el párrafo anterior, deberá informarse de ello a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, en el mismo plazo.”

431. Derivado de la obligación establecida en la Ley y su Reglamento, la IVE diseñó los formularios siguientes: 1) IVE-BA-05: “Archivo Electrónico para el Resumen Mensual de Transacciones en Efectivo Mayores a US\$10,000.00 o su Equivalente en Moneda Nacional a la Superintendencia de Bancos”; y 2) IVE-BA-03: “Registro de Transacciones en Efectivo Superiores a US\$10,000.00 o su Equivalente en Moneda Nacional”. Las letras iniciales del reporte como “BA” varían dependiendo la persona obligada a la que se refiera. Además, es importante señalar en este tema, que mediante Oficio No. 1585-2008, se notificó a las Personas Obligadas (Bancos, Financieras, Cooperativas y Empresas de transferencias de fondos), que el formulario IVE-TF-21: “REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS IGUALES O MAYORES A US\$2,000.00” será de observancia obligatoria a partir del 1 de diciembre de 2008, y deberá remitirse mensualmente a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial. Los RTE se presentan de manera electrónica, y la IVE lleva estadísticas, incluyendo montos totales por tipo de entidad.

432. El umbral en Guatemala es de US\$ 10,000. en un 1 día. Para Guatemala dicho monto parece razonable, especialmente teniendo en cuenta que también se deben registrar operaciones fraccionadas que alcancen esa cifra. No hay clientes excepcionados del RTE.

433. Elemento adicional—Base de datos (c. 19.2): La información remitida por transacciones en efectivo es recibida en medio magnético por la IVE y alimenta una base de datos que se encuentra disponible para otras autoridades competentes que la requieran.. Con esta información la IVE está empezando a hacer análisis estratégicos incluyendo el uso de software ARGIS georeferencial ya en uso que apoyen su labor de análisis operativo y el estudio de tipologías.

Recomendación 25 – Guías y Realimentación acerca de RTSs y otros reportes.

434. Sobre la realimentación y guías que deben recibir las instituciones financieras de parte de las autoridades competentes, en especial de la IVE, en relación a los RTS, hay que tener en cuenta las siguientes disposiciones:

435. El segundo párrafo del art. 36 de la Ley ALD:

“Artículo 36. Reserva. (...) Sin embargo, se autoriza la publicación de datos con fines estadísticos, siempre que se realice de manera que no puedan ser identificadas directa o indirectamente, en forma individual, las personas o entidades relacionadas.”

436. El art. 25 del Reglamento de la Ley ALD:

“Artículo 25. Comunicación de nuevos patrones de lavado de dinero u otros activos. En los casos en los que, derivado del análisis de la información obtenida, de los patrones internacionalmente conocidos y de comunicaciones recibidas de instituciones especializadas, se determine la existencia de patrones de lavado de dinero u otros activos, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, deberá comunicar a las personas obligadas, por los medios que estime conveniente, las nuevas formas de operar en el lavado de activos, para que éstas tomen las medidas preventivas correspondientes.

Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, podrá instruir a las personas obligadas, en la forma que considere pertinente, acerca de nuevas medidas que deberán implementar, dentro del ámbito de la legislación aplicable, para prevenir que su institución sea utilizada en el lavado de dinero u otros activos.”

437. La IVE es la única entidad estatal que ha emitido lineamientos que ayudan a los Sujetos Obligados (particularmente a las instituciones financieras), a implementar y cumplir algunos de los requisitos ALD/CFT. Dentro de estos esfuerzos se pueden mencionar los siguientes Oficios:

- En Oficios IVE No. 247-2003, sobre Medidas de Prevención Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
- Oficio IVE No. 1585-2008, sobre la Elaboración del Archivo Electrónico para el Reporte Mensual de Transferencia de Fondos Mayores o Iguales a US\$2,000.00 o su Equivalente en otra Moneda,
- Oficio IVE No. 13-2009, sobre Lineamientos para el mantenimiento de cuentas a Sociedades u Otras Entidades en Formación.
- Oficio IVE No. 180-2009, sobre la Elaboración del Archivo Electrónico para el Reporte Mensual de Compra y Venta de Moneda Extranjera en Efectivo.
- Oficio IVE No. 181-2009, sobre la Elaboración del Archivo Electrónico para el Reporte Mensual de Ingreso y Egreso de Efectivo en Moneda Nacional.
- Oficios IVE No. 244-2009, IVE No. 245-2009 e IVE 303-2009, sobre Aceptación y Mantenimiento de Relaciones con Personas Expuestas Políticamente (PEP's) por parte de las Personas Obligadas.
- Oficio IVE No. 424-2009, para las Personas Obligadas Bajo Régimen Especial en cuanto a Reportes de Transacciones en Efectivo y Reportes de Transacciones Sospechosas.
- Oficio IVE No. 434-2009, o Guía para la Administración del Riesgo de Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo LD/FT,
- Oficio IVE NO. 837-2009, Guía Básica de Prevención para Servicios de Banca Corresponsal, Sucursales de Bancos Nacionales en el Extranjero y Subsidiarias.
- Oficio IVE NO. 838-2009, Guía Básica sobre medidas a adoptar por las Personas Obligadas, en caso de Activos o Bienes que puedan o estén relacionados con Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y otros actos relacionados.

438. La IVE informó a la Misión Evaluadora que durante el mes de abril de 2009 se hizo llegar a las personas obligadas el primer boletín informativo, en el cual se incluye información sobre sitios de interés que se pueden consultar, como por ejemplo sitios de listados de terroristas, además se incluye estadísticas de RTS, de los MOU's que Guatemala ha firmado, así como indicándoles que visiten la

página web de la Superintendencia de Bancos en donde encontrarán documentos sobre tipologías de LD y FT.

439. Es mínimo el número de RTS's (cerca del 2% del total) presentados por instituciones financieras no bancarias, tales como financieras, aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, casas de cambio, almacenadoras y empresas de canje de cheques; sin embargo es importante recalcar en el hecho que el sector de bancos, financieras y off-shore constituye 92.8% del sector financiero del País, aunque esto no obsta para que se realicen esfuerzos de la SIB e IVE para concienciar y aportar guías sobre la necesidad del monitoreo, detección temprana y reporte de operaciones sospechosas.

440. Como se mencionó, la IVE tiene implementada una Guía o *Check List* para control de calidad de los RTS presentados por los Sujetos Obligados, la cual ha resultado ser una forma eficaz de realimentación a las instituciones financieras reportantes sobre la calidad de los reportes remitidos a la IVE.

441. En la práctica no existe realimentación de parte de la IVE, ni de ninguna autoridad reguladora y/o supervisora, hacia las instituciones financieras sobre las decisiones y resultados alrededor de un RTS: por ejemplo si prestó mérito para una subsecuente investigación y/o judicialización; o si del análisis se concluyó que la transacción reportada era lícita.

442. La IVE está autorizada para presentar ejemplos en limpio de casos reales de Lavado de Dinero conforme el citado art. 25 del Reglamento a la Ley ALD y el segundo párrafo del art. 36 de la Ley ALD: *"(...) se autoriza la publicación de datos con fines estadísticos, siempre que se realice de manera que no puedan ser identificadas directa o indirectamente, en forma individual, las personas o entidades relacionadas."* La Misión Evaluadora solo conoció sobre divulgación de tipologías a través del Boletín antes indicado.

3.7.2. Recomendaciones y Comentarios

443. **R. 13:** Tomar las medidas pertinentes sobre los siguientes aspectos:

- Continuar superando las deficiencias de calidad y contenido presentes en los RTS.
- Verificar regularmente el cumplimiento por parte todos los Sujetos Obligados conforme a períodos razonables, y cerciorarse de la calidad y efectividad del proceso para determinar y presentar RTS.

444. **R. 13:** Establecer de la mejor forma posible, protección o medidas alternas para que el Oficial de Cumplimiento no se vea expuesto a llamamientos judiciales en calidad de expertos o testigos durante el enjuiciamiento de casos reportados por ellos, procediendo a la incorporación del Perito experto por parte de la IVE para asistir a debates.

445. **R.25** Fortalecer la labor de la IVE en cuanto a realimentación hacia las instituciones financieras sobre temas RTS respecto al seguimiento de los mismos.

3.7.3. Cumplimiento de las Rec. 13, 14, 19 y 25 (criterio 25.2), y la RE.IV

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.13	MC	<ul style="list-style-type: none"> • Es mínimo el número de RTS's (cerca del 2% del total) presentados por instituciones financieras no bancarias, tales como financieras, aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, casas de cambio, almacenadoras y empresas de canje de cheques

		<ul style="list-style-type: none"> • Los RTS presentan ciertas deficiencias de calidad y contenido. • Existe temor entre algunos Oficiales de Cumplimiento de ser llamados en calidad de testigos o peritos ante los Tribunales en relación con la operación reportada.
R.14	C	
R.19	C	
R.25 (c.25.2 – RTS)	MC	<ul style="list-style-type: none"> • Limitada y reciente realimentación hacia las instituciones financieras. • Solamente el 2% del total de RTSs son presentados por instituciones financieras no bancarias, tales como financieras, aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, casas de cambio, almacenadoras y empresas de canje de cheques. Esto podría deberse a falta de guía y concienciación adecuadas en estos sectores.
RE.IV	MC	<ul style="list-style-type: none"> • La obligación de presentar RTS en materia FT prevista en el art. 16 de la Ley CFT, no hace referencia expresa a las operaciones intentadas o no concluidas. • <p>Los mismos factores de la Rec. 13 afectan la Rec.</p>

Controles internos y otras medidas

3.8. Controles internos, cumplimiento, auditoría y sucursales extranjeras (R.15 y 22)

3.8.1. Descripción y Análisis

Recomendación 15- Políticas, Procedimientos y Controles Internos

446. La Ley ALD en su Artículo 19, exige a las instituciones financieras *“adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos idóneos para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos”*, indicando que estos deben cubrir como mínimo, temas referentes a la integridad de los empleados, capacitación a empleados sobre las obligaciones legales relevantes, auditoría e identificación y conocimiento de los clientes. También exige la designación de funcionarios gerenciales encargados de la función de cumplimiento en esta materia. Por otra parte, la Guía de Administración de Riesgos LD/FT para bancos, financieras y entidades off-shore exige incluir en los manuales de control interno de las instituciones todos los temas reseñados en el criterio 15.1 de la Metodología.

447. El artículo 22 del Reglamento de la Ley ALD, indica que el Oficial de Cumplimiento debe, entre otras funciones, *“hacer del conocimiento del personal de la persona obligada todas las disposiciones legales y reglamentarias, así como los procedimientos internos existentes en materia de prevención y detección de lavado de dinero u otros activos”*.

448. Existen disposiciones que obligan a las instituciones financieras a designar un oficial de cumplimiento ALD/CFT a nivel administrativo. El artículo 19 de la Ley ALD establece que *“las personas obligadas deberán designar funcionarios gerenciales encargados de vigilar el cumplimiento de programas y procedimientos internos, así como el cumplimiento de las obligaciones que [esa ley]*

imponer”. Asimismo, el artículo 15 de la Ley CFT indica que estos funcionarios “*deberán extender sus funciones y atribuciones al cumplimiento de la normativa contra el financiamiento del terrorismo*”. Fue informado por las autoridades que las instituciones financieras han designado estos funcionarios, los cuales en algunas instituciones están dedicados exclusivamente a la labor de cumplimiento. Las instituciones financieras entrevistadas indicaron que cuentan con un oficial de cumplimiento encargado de la prevención del LD y FT. La ubicación del oficial de cumplimiento dentro de la organización y su relación de dependencia varía en las diferentes instituciones.

449. Según lo establecido en el artículo 21 del Reglamento ALD, las personas obligadas deben informar a la IVE sobre los nombramientos de sus oficiales de cumplimiento, en un plazo de 10 días posteriores a la designación, adjuntando el curriculum vitae del funcionario.

450. El artículo 22 del Reglamento ALD establece las atribuciones del oficial de cumplimiento, siendo estas las siguientes: Proponer los programas, normas, procedimientos y controles internos ALD; comunicar al personal las disposiciones legales y los procedimientos internos ALD; coordinar con otras instancias de la entidad, la implementación de los programas, normas, procedimientos y controles internos; preparar y documentar los reportes de transacciones sospechosas y otros que mande la ley, remitiéndolos a la IVE; Mantener una constante actualización técnica y legal sobre el tema ALD, así como establecer canales de comunicación y cooperación con los oficiales de cumplimiento en otras personas obligadas, en lo relativo a capacitación y patrones de LD; Organizar la capacitación del personal en los aspectos ALD debiendo remitir a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, un reporte semestral de dicha capacitación; Documentar los esfuerzos realizados por la institución, en materia ALD; Presentar informes trimestrales al órgano de Administración de la persona obligada sobre la eficacia de los mecanismos de control interno ejecutados en su institución, relacionados con el programa de cumplimiento; y Otras que señalen las leyes en la materia.

451. No existen disposiciones que indiquen específicamente que el oficial de cumplimiento ALD/CFT debe tener acceso, a tiempo, a los datos sobre la identificación del cliente y otra información de la DDC, records de transacciones y demás información relevante. Sin embargo esto se deduce del conjunto de normas que rigen la actividad del oficial de cumplimiento, y especialmente el artículo 22 del Reglamento ALD, según el cual este funcionario prepara y documenta toda la información que debe enviarse a la SIB en cumplimiento de la Ley ALD, incluyendo los reportes de transacciones sospechosas (literal d del art.22) y vela porque las normas, procedimientos y controles internos se cumplan (literal c). Además, según lo indicado por la IVE y por las instituciones entrevistadas, en la práctica, este funcionario tiene acceso a tiempo a esta información.

452. (c.15.2) Se exige a las instituciones financieras que mantengan una función de auditoría para comprobar el cumplimiento del sistema ALD/CFT. El artículo 19 de la Ley ALD indica que las personas obligadas por esa ley deben “*adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos idóneos para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos*” y que estos deben incluir “*el establecimiento de un mecanismo de auditoría para verificar y evaluar el cumplimiento de programas y normas*”. Los artículos 11 del Reglamento de la Ley ALD y 11 del Reglamento de la Ley CFT obligan a las instituciones financieras a incluir el componente ALD/CFT dentro de sus procedimientos de auditoría interna y a incorporarlo en sus contratos de auditoría externa. Durante la visita, las instituciones entrevistadas indicaron que dentro de su programa de auditoría interna y externa se incluye la revisión de los programas ALD/CFT y el cumplimiento con la normativa.

453. (c.15.3) Existen disposiciones que exigen a las instituciones financieras capacitar continuamente a los empleados en los temas ALD y CFT. El artículo 19 de la Ley ALD establece que las personas obligadas por esa ley deben realizar una capacitación permanente al personal e instruirlos

“en cuanto a las responsabilidades y obligaciones que se derivan de esta ley”. Asimismo indica que *“la capacitación también deberá abarcar el conocimiento de técnicas que permitan a los empleados detectar las operaciones que puedan estar vinculadas al [LD] y las maneras de proceder en tales casos”.* El artículo 15 de la Ley CFT hace extensivas las labores de capacitación al tema del FT, ya que establece que a las personas obligadas por esa ley, dentro de las que se encuentran las instituciones financieras, *“les será aplicable el mismo régimen, deberes, obligaciones, políticas para conocimiento de sus clientes y prohibiciones que establezca [la Ley ALD]”.* Las instituciones financieras informaron que brindan capacitación a sus empleados en relación a las obligaciones derivadas de la Ley ALD y de la Ley CFT, así como capacitaciones relacionadas con métodos de LD y FT.

454. (c.15.4) Se exige a las instituciones financieras instaurar procedimientos de investigación de antecedentes para asegurar elevados patrones a la hora de contratar a los empleados. El artículo 19 de la Ley ALD indica que las personas obligadas deben *“Adoptar, desarrollar y ejecutar programas, normas, procedimientos y controles internos idóneos para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero u otros activos”* dentro de los cuales se deben incluir *“procedimientos que aseguren un alto nivel de integridad del personal y de conocimiento de los antecedentes personales, laborales y patrimoniales de los empleados”.* Durante la visita se encontró que no todas las instituciones entrevistadas consultan los antecedentes penales de los candidatos, pero sí cuentan con diversos programas de conocimiento de sus empleados, los cuales incluyen entre otros verificación de referencias y visitas a sus domicilios.

(c.15.5) Elemento adicional- independencia del oficial de cumplimiento: Dado que el Reglamento de la Ley CLD establece que el Oficial de Cumplimiento debe ser un funcionario gerencial que sirva de enlace entre la entidad y la IVE además de designarle funciones de alta importancia como presentar informes trimestrales al órgano de administración de la entidad, esto permite inferir que el oficial de cumplimiento ALD/CFT puede actuar de manera independiente y reportar a la administración superior.

Recomendación 22 - Sucursales y Subsidiarias en el exterior

455. No se exige a las instituciones financieras asegurarse de que sus sucursales y subsidiarias extranjeras observen como mínimo las medidas ALD/CFT de su país de origen (Guatemala). El artículo 6 del Reglamento de la Ley ALD establece el principio inverso: que *“las personas obligadas velarán porque sus agencias, sucursales, subsidiarias u oficinas constituidas en el extranjero, cumplan las disposiciones legales del país anfitrión, en materia de prevención de lavado de dinero u otros activos”.* La SIB expidió el 17 de junio de 2009 una circular aplicable únicamente a bancos y entidades off-shore denominada *“Guía Básica de Prevención para Servicios de Banca Corresponsal, Sucursales de Bancos nacionales en el extranjero y Subsidiarias”.* Allí se corrige la obligación expresada en el reglamento ALD al decir que *“Las Personas Obligadas deberán exigir y velar porque sus sucursales y subsidiarias en el extranjero observen y cumplan medidas Anti Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (Diligencia Debida, Diligencia Debida Adicional, Programas de Prevención, Monitoreo, Auditorías, etc.) en concordancia con las normativas contra el lavado de dinero u otros activos y para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo”* (sección 2.2 de la Guía).

456. Dicha Guía indica además que las Personas Obligadas deberán prestar especial atención a que sus sucursales y subsidiarias en el extranjero cumplan con las medidas ALD/CFT de Guatemala, cuando éstas se localicen en países o jurisdicciones no-cooperantes, cumpliendo con el criterio 22.1.1 del GAFI para Bancos y Offshore. Sin embargo, no se les ha dado este lineamiento a las casas de bolsa que pudieran establecer sucursales y subsidiarias en el extranjero. Al respecto se debe tener en cuenta que la apertura de sucursales u oficinas en el extranjero debe ser previamente autorizada por la SIB y esta autorización sólo se otorga cuando en el país anfitrión exista supervisión de acuerdo con estándares internacionales que permita realizar supervisión consolidada. Al momento de la visita sólo un banco tenía una sucursal en el exterior. Esto prácticamente imposibilita que se autorice el establecimiento de

sucursales y subsidiarias en países no cumplidores, sin embargo, la condición del país anfitrión puede cambiar de cumplidor (al momento de la autorización de la sucursal o subsidiaria) a incumplidor, por lo que se considera apropiado que se exija directamente el cumplimiento con este principio a las personas obligadas susceptibles de establecer este tipo de entidades. Lo cual quedaría atendido a través de la Guía antes indicada.

457. La Guía Básica de Prevención para Servicios de Banca Corresponsal, Sucursales de Bancos nacionales en el extranjero y Subsidiarias indica a los Bancos y Offshore, que deben instruir a sus sucursales y subsidiarias en el extranjero, a aplicar el estándar más alto, cuando los requisitos mínimos ALD/CFT de Guatemala y del país en el que se encuentra la sucursal o subsidiaria difieren, lo anterior, en la medida en que las leyes y regulaciones del país extranjero se lo permitan. No se ha dado este lineamiento al resto de las instituciones que pudieran establecer sucursales o subsidiarias en el extranjero como es el caso de las casas de bolsa únicamente.

458. (c.22.2) La Guía Básica de Prevención para Servicios de Banca Corresponsal, Sucursales de Bancos nacionales en el extranjero y Subsidiarias indica a Bancos y Offshore que deben informar al órgano supervisor(Superintendencia de Bancos a través de la IVE), cuando se de el caso de que una sucursal o subsidiaria extranjera no pueda observar las medidas ALD/CFT apropiadas, debido a que lo prohíben las leyes, regulaciones y otras medidas locales del país en donde se encuentra la sucursal o subsidiaria.

3.8.2. Recomendaciones y Comentarios

459. R15. Recomendar a las instituciones financieras que verifiquen los antecedentes penales de los empleados a contratar.

460. R22. Exigir además de Bancos nacionales y Off-Shore, a las casas de bolsa , que aseguren que sus sucursales y subsidiarias extranjeras observen las medidas ALD/CFT en concordancia con los requisitos de Guatemala y las Recomendaciones del GAFI, en la medida en que las leyes y regulaciones del país extranjero lo permitan, en particular con respecto a sus sucursales y subsidiarias ubicadas en países que no aplican las Recomendaciones del GAFI o lo hacen de manera insuficiente. Se recomienda también cambiar la redacción del Artículo 6 del Reglamento ALD a fin de lograr consistencia entre la legislación y la Guía sobre Sucursales y Subsidiarias, así como los otros criterios incluidos en la Guía en mención

3.8.3. Cumplimiento de las Recomendaciones 15 y 22

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.15	C	
R.22	PC	<ul style="list-style-type: none"> • A las personas obligadas diferentes de bancos y offshore se les indica que se aseguren de que sus sucursales y subsidiarias cumplan con las disposiciones ALD del país anfitrión, lo cual es el principio inverso al requerido por el GAFI. Además no se les exige que estos establecimientos apliquen los requisitos de Guatemala en especial cuando el país anfitrión es un país no cooperante. • No se les exige a las instituciones financieras diferentes de bancos y offshore a que instruyan a sus sucursales y subsidiarias en el extranjero a aplicar el estándar más alto cuando hay diferencias entre los requisitos de Guatemala y los del país extranjero. • No se exige a las instituciones financieras diferentes de bancos y offshore,

		<p>informar a la SIB sobre dificultades que sus sucursales o subsidiarias extranjeras encuentre al intentar cumplir con las medidas ALD/CFT debido a impedimentos del país extranjero.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aunque no es posible abrir una sucursal bancaria sin autorización de la SIB Supervisión la Guía específica sobre sucursales aplicable a bancos, es muy reciente y no se pudo verificar su eficaz aplicación (fue emitida al final de la visita del equipo evaluador).
--	--	--

3.9. Bancos ficticios (R.18)

3.9.1. Descripción y Análisis

461. (c.18.1) El procedimiento para la autorización de bancos nacionales y sucursales de bancos extranjeros, establecido en la Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto 19-2002 del Congreso de la República), incluye lineamientos que pueden colaborar en la prevención del establecimiento de bancos ficticios. El artículo 7 de la ley indica que la Junta Monetaria es la encargada de otorgar o denegar la autorización para constituir bancos nacionales o el establecimiento de sucursales de bancos extranjeros. Asimismo contempla que la Junta Monetaria no puede autorizar la constitución de un banco nacional o el establecimiento de sucursales de bancos extranjeros sin dictamen previo de la Superintendencia de Bancos, agregando que para emitir el dictamen, esta superintendencia debe realizar investigaciones que conlleven a comprobar la existencia de un adecuado estudio de factibilidad, un apropiado origen y monto del capital, la solvencia económica, seriedad, honorabilidad y responsabilidad de los socios fundadores, de los miembros del consejo de administración y de los administradores propuestos y que las relaciones de la institución no representen riesgos para la entidad ni para la supervisión de la misma. Se indica que con respecto a la autorización del establecimiento de sucursales de bancos extranjeros, adicionalmente al dictamen de la Superintendencia de Bancos, la Junta Monetaria debe considerar *“que en el país del banco matriz exista supervisión de acuerdo con estándares internacionales; que el supervisor del banco matriz otorgue su consentimiento para el establecimiento en el país de la sucursal que corresponda, y que pueda efectuarse intercambio de información institucional entre los supervisores de ambos países”*.

462. El artículo 9 de esta ley, indica que los bancos nacionales y las sucursales de bancos extranjeros autorizados por la Junta Monetaria, deben iniciar operaciones dentro de los seis meses siguientes a esta autorización, plazo que puede ser prorrogado hasta por igual plazo ante solicitud razonada. Además el artículo indica que la falta de inicio de operaciones dentro del plazo establecido hará caducar automáticamente la autorización otorgada.

463. Todo lo anterior, conlleva a concluir que para lograr el establecimiento de bancos nacionales o sucursales de bancos extranjeros, se cuenta con un procedimiento sujeto al buen juicio de la Superintendencia de Bancos, la cual debe hacer un análisis de la documentación presentada por la entidad a fin de verificar su idoneidad. Se observa que existen lineamientos para asegurar que estos bancos o sucursales autorizados operen luego de un periodo prudencial de organización.

464. Durante la visita, las autoridades de la Superintendencia de Bancos indicaron que no operan bancos ficticios en Guatemala y que el establecimiento de los mismos se vería prácticamente impedido por el procedimiento de constitución.

465. El artículo 96 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros señala: *“Delito de intermediación financiera. Comete delito de intermediación financiera toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, que sin estar autorizada expresamente de conformidad con la presente ley o leyes*

específicas para realizar operaciones de tal naturaleza, efectúa habitualmente en forma pública o privada, directa o indirectamente, por sí misma o en combinación con otra u otras personas individuales o jurídicas, en beneficio propio o de terceros, actividades que consistan en, o que se relacionen con, la captación de dinero del público o de cualquier instrumento representativo de dinero, ya sea mediante recepción de especies monetarias, cheques, depósitos, anticipos, mutuos, colocación de bonos, títulos u otras obligaciones, incluyendo operaciones contingentes, destinando dichas captaciones a negocios de crédito o financiamiento de cualquier naturaleza, independientemente de la forma jurídica de formalización, instrumentación o registro contable de las operaciones. En el caso de personas jurídicas son responsables de este delito los administradores, gerentes, directores y representantes legales. El o los responsables de este delito serán sancionados con prisión de cinco a diez años inmutables, la cual excluye la aplicación de cualesquiera de las medidas sustitutivas contempladas en el Código Procesal Penal, y con una multa no menor de diez mil ni mayor de cien mil “unidades de multa”, la cual también será impuesta por el tribunal competente del orden penal. Simultáneamente a la imposición de la multa indicada, dicho tribunal ordenará la cancelación de la patente de comercio de las personas individuales, así como la liquidación de las personas jurídicas a que se refiere este artículo conforme al procedimiento establecido en ley; en este último caso, una vez concluida su liquidación, ordenará al Registro Mercantil la cancelación de la inscripción respectiva.”. Lo anterior también contribuye a considerar prohibidos los Bancos Pantalla o Bancos sin autorización expresa de la Ley

466. (c.18.2) El apartado 3.6 de la Guía sobre Corresponsalia, Sucursales y Subsidiarias, enviada a Bancos y Offshore mediante Oficio IVE No. 837-2009, emitido el 17 de junio de 2009, exige a estas instituciones financieras “*abstenerse de tener relaciones con bancos pantalla*”. Esto es consecuente con los lineamientos de la Recomendación 18 del GAFI que establecen que no debe permitírsele a las instituciones financieras que entren en, o continúen, relaciones de banca corresponsal con bancos ficticios. Debido a que la guía es de reciente emisión, no se pudo corroborar la implementación de la misma por parte de las instituciones obligadas. Como se mencionó anteriormente, la Guía solo está dirigida a Bancos y Offshore por lo que no se le ha dado este lineamiento a las casas de bolsa, quienes podrían tener relaciones de corresponsalia con bancos del exterior. Otras categorías de sujetos obligados están imposibilitados por Ley a dar servicio de Corresponsalia bancaria al no estar autorizados para ello en normas específicas.

467. (c.18.3) El apartado 3.6 de la Guía sobre Corresponsalia, Sucursales y Subsidiarias, indica que los Bancos y Offshore “deberán confirmar que el banco corresponsal cliente ([responsal]), no utilizará sus productos y servicios para realizar operaciones con bancos pantalla”. Esto concuerda con lo establecido en el criterio esencial 18.3 del GAFI que indica que se debe exigir a las instituciones financieras que se aseguren de que las instituciones financieras ordenantes en otro país, no permitan que sus cuentas sean utilizadas por bancos ficticios. Debido a que la guía es de reciente emisión, no se pudo corroborar la implementación de la misma por parte de las instituciones obligadas aunque las autoridades y las entidades entrevistadas aseguraron no tener relaciones con bancos pantalla.

3.9.2. Recomendaciones y Comentarios

468. R18. Regular el tema con Casas de Bolsa aunque no tengan actualmente relaciones de Corresponsalia exigiéndoles que en caso de que ello ocurra quedarán sujetas a las mismas obligaciones sobre corresponsalia impuestas a los bancos.

3.9.3. Cumplimiento de la Recomendación 18

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.18	MC	• No se prohíbe a Casas de Bolsa , tener relaciones de corresponsalia con

		bancos ficticios en el extranjero. • La Guía sobre Bancos Corresponsales, Sucursales y Subsidiarias fue emitida durante el período de la visita por lo que no fue posible verificar su implementación indagando sobre la misma al sector financiero.
--	--	---

Regulación, supervisión, monitoreo y sanciones

3.10. Supervisión y vigilancia –Autoridades y Autorreguladores (R. 23, 29, 17& 25).

3.10.1. Descripción y Análisis

469. Resumen: La IVE realiza la labor de supervisión ALD/CFT a las instituciones financieras. Sin embargo, debido a la falta de recursos humanos, la labor de verificación in situ ha podido cumplirse solamente en forma parcial ya que no se supervisa con la frecuencia ideal a la totalidad de las entidades que forman parte de los sectores obligados. La IVE no notificaba los resultados de la auditoría por escrito a las personas obligadas y no daba un seguimiento de las recomendaciones emitidas antes de la reciente implementación de la nueva Metodología de Supervisión Basada en Riesgos.

Recomendación 23- Regulación & Supervisión de instituciones financieras.

470. (c. 23.1, 23.2) La supervisión en materia ALD/CFT es llevada a cabo por la IVE. Para esta actividad la IVE cuenta con el Área de Supervisión de Riesgos de LD/FT (en adelante Área de Supervisión), la cual depende del Intendente y está compuesta por el Director de la IVE, un Supervisor de Área, 10 Inspectores y un Técnico, para un total de 13 funcionarios. Este personal parece insuficiente para cubrir con verificaciones presenciales a las 400 instituciones financieras registradas. Este problema se verá incrementado al incluir dentro de los programas de auditoría a las APNFDS, de las cuales se habían registrado 429 al momento de la visita. La mayoría de las auditorías practicadas se realizan en la Ciudad de Guatemala, debido a la escasez de recursos humanos. En cuanto a los recursos logísticos con los que cuenta el personal actual, se consideran adecuados. Otro factor que ha incidido en el número de auditorías realizadas, particularmente en los años 2006 - 2007, era la utilización de los recursos humanos del Área de Supervisión en las labores de respuesta a los requerimientos realizados por el Ministerio Público, tema que ha quedado resuelto a partir del 2008 por la re estructuración funcional de la IVE.

471. El siguiente cuadro estadístico refleja las auditorías practicadas por el Área de Supervisión durante el período 2003 – 2007. En este se indica que esta área realizó un total de 127 auditorías, de las cuales el 30.7% fueron practicadas a bancos, el 19.7% a bancos offshore, el 12.6% a casas de bolsa, el 11% a empresas de transferencias de fondos y el 26% restante fueron realizadas a empresas Afianzadoras, Almacenadoras, Aseguradoras, Casas de Cambio, Cooperativas, Financieras y de Tarjetas de Crédito. Se observa que varias personas obligadas no fueron auditadas durante este periodo y que durante el 2007 solamente se practicaron auditorías a bancos y a una casa de bolsa.

ENTIDADES		AÑOS					TOTALES POR
COD.	TIPC	2003	2004	2005	2006	2007	
AF	AFIANZADORA		3		1		4
AL	ALMACENADORA		1	2			3
AR	ARRENDADORAS						0
AS	ASEGURADORAS		3	1	1		5
BA	BANCOS	5	2	6	5	21	39
CB	CASAS DE BOLSA	6	1	5	3	1	16
CC	CASAS DE CAMBIO	3	3	1			7
CF	CASAS DE EMPPEÑO						0
CH	EMPRESAS DE CANJE DE CHEQUES						0
CP	COOPERATIVAS		3	1	1		5
FI	FINANCIERAS		1	4	1		6
FN	FINANCIADORAS						0
FP	ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES						0
FT	FACTORAJE						0
OP	OPERADORES DE TARJETA DE CREDITO						0
OS	BANCOS OFF-SHORE	13	8	3	1		25
OT	OTRAS INSTITUCIONES						0
TF	EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS		6	6	2		14
TJ	TARJETA DE CREDITO			1	2		3
TOTALES POR AÑO		27	31	30	17	22	127

472. Durante el año 2008 y el primer semestre de 2009 se realizaron 35 auditorías con un enfoque basado en el riesgo LD/FT. De estas solamente 5 fueron realizadas en 2008. El 60% de las auditorías fueron practicadas a bancos, realizándose un total de 21 auditorías a este sector. También fueron evaluadas Aseguradoras, Cooperativas, Financieras, Bancos Offshore, Empresas de Transferencias de Fondos y Tarjetas de Crédito. Se observa que durante este periodo no fueron auditados varios tipos de instituciones y que se descontinuaron las auditorías presenciales en sectores que se habían incluido en los programas de años anteriores tales como las Afianzadoras, Almacenadoras, Casas de Bolsa y Casas de Cambio. El siguiente cuadro estadístico contiene las auditorías practicadas durante este periodo.

473. Se observa que desde 2003 a la fecha de la visita (junio 2009), y a pesar de que existen entidades de estos tipos registradas (como se muestra en el cuadro inferior), no se han realizado auditorías presenciales a Arrendadoras, Empresas de Canje de Cheques, Factoraje y Operadores de Tarjeta de Crédito, las cuales son obligadas en forma directa por el artículo 18 de la Ley ALD. Otras instituciones de las que no se ha reportado supervisiones presenciales o In-Situ y que son personas obligadas por ser supervisadas por la SIB (de acuerdo al artículo 18 de la ley ALD y el artículo 1 de la Ley de Supervisión Financiera) son las instituciones de crédito (entre las que pueden incluirse a las casas de empeño y financiadoras), los Grupos Financieros y Empresas Controladoras de Grupos Financieros. El siguiente cuadro presenta un resumen de las auditorías practicadas y contiene datos sobre la cantidad de instituciones registradas al 16 de junio de 2009. Se observa que la cantidad de auditorías in situ practicadas en algunos sectores es baja en comparación a la cantidad de instituciones registradas lo cual se evidencia principalmente en las cooperativas.

ENTIDADES		AUDITORÍAS		
TIPO	CANTIDAD AL 16/06/2009			TOTAL
		2003 - 2007	2008 - 2009	
AFIANZADORA	11	4	0	4
ALMACENADORA	13	3	0	3
ARRENDADORAS	8	0	0	0
ASEGURADORAS	17	5	2	7
BANCOS	19	39	21	60
CASAS DE BOLSA	22	16	0	16
CASAS DE CAMBIO	1	7	0	7

CASAS DE EMPENO	1	0	0	0
EMPRESAS DE CANJE DE CHEQUES	1	0	0	0
COOPERATIVAS	254	5	2	7
FINANCIERAS	16	6	4	10
FINANCIADORAS	1	0	0	0
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES	-	0	0	0
FACTORAJE	1	0	0	0
OPERADORES DE TARJETA DE CREDITO	2	0	0	0
BANCOS OFFSHORE	8	25	4	29
OTRAS INSTITUCIONES	1	0	0	0
EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS	14	14	1	15
TARJETA DE CREDITO	10	3	1	4
TOTALES	400	127	35	162

474. Las auditorías realizadas por el Área de Supervisión a partir de mediados del 2008 se basan en la Nueva Metodología de Supervisión Basada en Riesgos con estándares internacionales, y al momento de la evaluación se habían concluido 9 procesos completos en bancos del sistema. Antes de esto la Supervisión se basaba en el cumplimiento de la normativa ALD/CFT Guatemalteca y no en los estándares internacionales.

475. Durante la visita se revisaron expedientes de auditorías practicadas a las instituciones financieras, observándose que estos contienen papeles de trabajo en los que se revisan aspectos relacionados con el involucramiento de la administración, la política conozca a su cliente, el programa de monitoreo, la gestión del oficial de cumplimiento, la capacitación del personal, los programas de auditoría interna y la administración de riesgo LD/FT. La labor de inspecciones in situ que desarrolla la IVE tiene lineamientos específicos para la verificación de algunos controles. Por ejemplo, procedimientos y sistemas que aseguren la integridad, seguridad y actualización de los registros de información del cliente, sus transacciones y correspondencia, incluyendo el tema de las transacciones cablegráficas.

476. El procedimiento Metodológico utilizado incluye requerir a la entidad lo siguiente:

- a) Productos: Productos activos y pasivos (integración, cantidad, saldo en el balance general y porcentaje de participación en el mismo).
- b) Servicios: Tipo, cantidad de operaciones y monto durante cierto período.
- c) Clientes: Tipo, integración y cantidad.
- d) Canales de distribución: Canales de distribución y cantidad.
- e) Ubicación o localización geográfica: Departamento, municipio, No. de agencias, No. ATM'S, otros.

477. Como segundo punto se prepara la matriz evaluación del riesgo LD/FT, que contempla entre sus etapas el establecimiento del riesgo inherente; en esta etapa, se ingresa en un formato específico toda la información proporcionada por el banco relacionada con los factores de riesgo y sus variables, adicionalmente se agrega a cada variable una ponderación inicial que va de 1 a 5, dependiendo del nivel de riesgo que represente; la ponderación se realiza con base a las siguientes premisas: Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), antecedentes de haber sido utilizados en casos de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo y vulnerabilidades que presentan para ser utilizados en la comisión de dichos ilícitos.

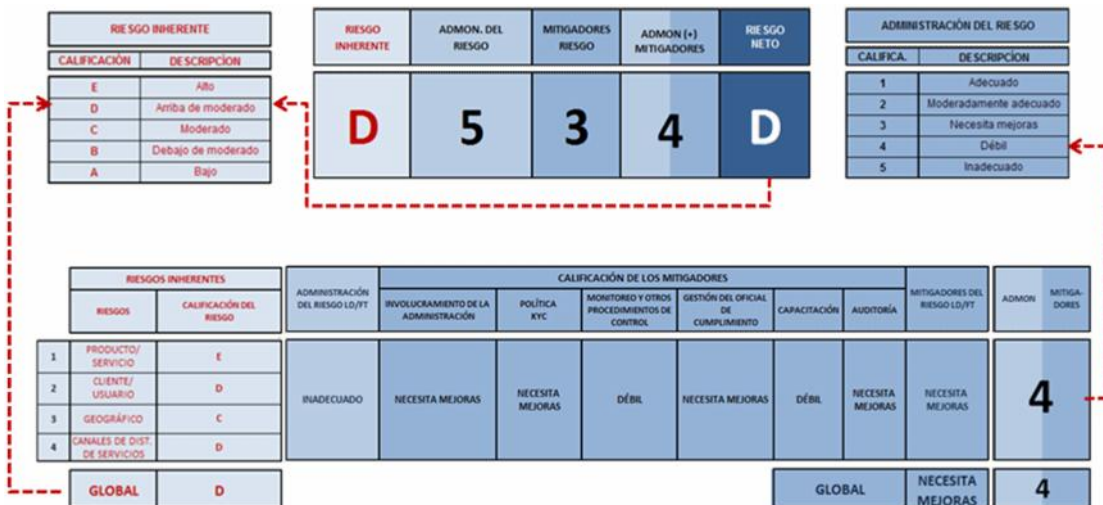
478. Posteriormente, la información referente a los niveles de riesgo inherente de los distintos factores de riesgo y el nivel de riesgo inherente del banco, es trasladada a la etapa "Visión General" de la matriz de evaluación del riesgo LD/FT, para ser comparada con la información de los

mitigadores del riesgo establecidos por el banco, dando como resultado el riesgo neto o residual del banco.

479. Con el propósito de verificar el cumplimiento de las normativas contra el LD/FT, se desarrollaron los procedimientos para evaluar las áreas que se describen a continuación:

- a) Involucramiento de la administración.
- b) Política conozca a su cliente.
- c) Programas de monitoreo.
- d) Gestión del oficial de cumplimiento.
- e) Capacitación del personal.
- f) Programas de auditoría.

480. El producto de la Supervisión Basada en Riesgos, permite obtener una calificación Global como la del siguiente ejemplo:



481. Al momento de la visita de evaluación a Guatemala las personas obligadas no recibían de la IVE un informe escrito de los hallazgos de la auditoría ni se les comunicaba en esta forma las recomendaciones sobre las mejoras que debían implementar. Estas comunicaciones eran realizadas en forma verbal y luego la IVE les solicita que manden por escrito su plan de acción para implementar las medidas correctivas. La IVE explicó que esta práctica ya no es la que aplicará con el nuevo modelo de Supervisión Basada en Riesgos, pues se tiene previsto entregar una cedula de resultados y con base en las falencias o debilidades encontradas requerir un plan inmediato de mejora a los obligados ya que se considera que se contribuye de una mejor forma en el mejoramiento integral de los sistemas de prevención de LD y FT dialogando con las instituciones obligadas.⁸ Según algunas instituciones

⁸ En fechas posteriores a la visita la IVE informó que ha dado a los Consejos de Administración de las entidades bancarias auditadas, una presentación sobre el riesgo inherente determinado en su entidad en trabajo extra-situ y los mitigadores establecidos en el trabajo in-situ, estos últimos relacionados con el cumplimiento de la normativa ALD/CFT. Poco después de la visita de evaluación la IVE inició también la práctica de enviar a las entidades inspeccionadas las Cédulas de Resultados en que se informan los hallazgos y se le da a la institución financiera un

financieras, existe tardanza para recibir los señalamientos, realimentación o instrucciones por parte del supervisor en ocasión de su labor de inspección y de los hallazgos derivados.

482. En tal sentido fue informado tanto por las personas obligadas como por la IVE, que ésta no realizaba una labor de seguimiento de las recomendaciones dadas al finalizar la auditoría. Apenas en el año 2009 la IVE inició la práctica, únicamente con entidades bancarias, de hacer reuniones con los consejos de administración al final de las verificaciones in-situ, con el fin de presentarles sus hallazgos y las debilidades que requieren atención.

483. La IVE es la autoridad responsable de cerciorarse de que las instituciones financieras cumplan adecuadamente con los requisitos LD/FT. El artículo 32 de la Ley ALD crea la IVE como parte de la SIB y establece que esta *“será la encargada de velar por el objeto y cumplimiento de esta ley y su reglamento, con las funciones y atribuciones que en los mismos se establece”*. Por su parte, el artículo 20 de la Ley CFT establece que la IVE *“será el ente encargado de velar, dentro del ámbito estrictamente administrativo, por el cumplimiento del objeto de la presente Ley; para el efecto tendrá las mismas facultades, funciones y atribuciones que le confieren la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, su reglamento, y otras disposiciones relativas a dicha materia”*. Dentro de esas otras disposiciones se encuentra el Acuerdo del Superintendente de Bancos No. 15-2008 del 16 de mayo de 2008 que establece que la función del Área de Supervisión de Riesgos de LD/FT de la IVE es realizar supervisiones efectivas a las personas obligadas para verificar la eficiente prevención del LD y FT, en cumplimiento de las leyes ALD y CFT y sus reglamentos.

484. Además de estas disposiciones específicas en materia de supervisión ALD/CFT, existen otras normas generales que asignan a la SIB la responsabilidad de cerciorarse de que las instituciones financieras cumplan las leyes. El artículo 1 de la Ley de Supervisión Financiera (Decreto del Congreso No. 18-2002) indica que la SIB *“ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades, financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás entidades que otras leyes dispongan”*. El artículo 2 de esta ley indica que el objeto de la supervisión realizada por la SIB a estas entidades es que las mismas adecuen sus actividades y funcionamiento a las normas legales, reglamentarias y a otras disposiciones que les sean aplicables, como es el caso de las leyes ALD y CFT.

485. A efecto de cumplir con las disposiciones antes señaladas, existen mecanismos de verificación mas allá de las visitas presenciales o In-Situ. Tal es el caso de los medios de verificación extra-situ o de “Gabinete”, en ese sentido las IVE ha desarrollado metodologías de análisis sobre la información requerida a Personas obligadas relacionada con sus clientes, productos y servicios, canales de distribución y ubicación geográfica, con lo cual se determina el riesgo inherente de las entidades obligadas y toma en consideración sus mecanismos mitigadores, asimismo a través de la información objetiva que mensualmente las entidades remiten a la IVE, como operaciones en efectivo, compra venta de moneda extranjera, venta de cheques de caja o gerencia, y otros informes de carácter regulatorio, es posible determinar la calidad de la información enviada, puntualidad en la entrega de datos, y por ende esto permite consideraar la gestión optima del Oficial de Cumplimiento, esto sumado a la verificación de la calidad y oportunidad de los informes de Transaccion Sospechosa enviados a la Intendencia, a través de los cuales se verifica la eficiencia en la aplicación de los modelos de monitoreo y detección que cada entidad aplica según sus propios programas de cumplimiento. Adicionalmente los programas de Auditoria Interna de cada entidad son otro instrumento para que la IVE pueda mantener control de la gestión integral de los controles y programas de cumplimiento. También han referido que de acuerdo

plazo de 30 días para presentar a la IVE un plan de mejora, el cual debe completarse en un lapso de seis meses (salvo circunstancias excepcionales).

con el instructivo Sobre Medidas de Prevención contra el LD emitido en oficio IVE No. 43-2002, se obliga a los Auditores informar de cualquier deficiencia encontrada en las evaluaciones que se hagan al área de cumplimiento, dentro del plazo de 10 días contados a partir de la fecha de entrega del informe respectivo y como una alternativa adicional de control se extiende esta obligación a los Auditores externos que sean contratados por la Persona Obligada, quienes deben emitir opinión acerca del cumplimiento de la normativa ALD y CFT.

486. (c.23.3) Existen disposiciones legales que impiden que los criminales o sus asociados tengan una participación mayoritaria o posean una función administrativa en Bancos, Financieras, Compañías de Seguros y Casas de Cambios y en general, todas las instituciones bajo supervisión de la SIB, según la ley respectiva para cada sector. Además todos los sujetos obligados (incluso los que no están bajo competencia de la SIB) tienen obligación de registrarse ante la IVE (artículo 7 del Reglamento ALD) usando un formulario que incluye toda la información relativa a la propiedad accionaria, conformación de órganos de dirección, actividades económicas, información financiera, estados de resultados, inscripción a Registros Mercantil y Tributario, recibos de servicios que corroboren la dirección reportada y datos adicionales de las personas individuales y Jurídicas que conformen la entidad, procediendo la IVE a realizar un trabajo de verificación de dicha información previo a su registro formal.

487. En cuanto los bancos, el artículo 7 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros indica que para la aprobación de un Banco, la SIB debe emitir un informe en el que se considere la honorabilidad de los socios fundadores, consejo de administración y administradores propuestos. El Artículo 8 agrega que los interesados en establecer un banco *“deberán proporcionar a la Superintendencia de Bancos la nómina de los accionistas individuales que posean más del cinco por ciento del capital”*. El artículo 19 prevé la identificación a futuro de los accionistas, al indicar que *“las personas que adquieran directa o indirectamente una participación igual o mayor al cinco por ciento (5%) del capital pagado de un banco, deberán contar con la autorización de la Superintendencia de Bancos, quien verificará el cumplimiento de los requisitos para accionistas de nuevas entidades bancaria”* agregando que esto aplica para accionistas que quieran aumentar su participación, alcanzando el porcentaje mencionado. Además indica que *“los bancos deberán presentar en el mes de enero de cada año a la Superintendencia de Bancos, la información que contenga la integración de sus accionistas”* y que *“los nombres de los integrantes de las juntas directivas o consejos de administración y gerencias de las entidades bancarias deberán ser publicados por éstas, en medios de divulgación disponibles al público en general”* y finaliza indicando que *“Las entidades bancarias deberán llevar un registro de acciones nominativas que permita identificar, en todo momento, quiénes son los socios de la entidad”*. Por último el artículo 20 indica que los miembros del Consejo de Administración y los Gerentes Generales deben ser personas solventes, honorables y con conocimientos y experiencia en el sector y que los cambios deben ser notificados a la SIB para que ésta pueda evaluar estos nombramientos y verificar que los nuevos miembros o los nuevos gerentes cumplan las características antes citadas y que en caso de que no reunan estos requisitos, la SIB debe ordenar al banco que proceda a realizar nuevos nombramientos.

488. Con respecto a las Sociedades Financieras, el artículo 3 de la Ley de Sociedades Financieras Privadas indica que *“para la constitución de las Sociedades Financieras se llenarán los requisitos prescritos en la Ley de Bancos y Grupos Financieros, y para su autorización deberán seguirse los procedimientos que dicha ley señala para la creación de nuevos bancos”*. Esta ley no contiene disposiciones para conocer en todo momento (posterior al otorgamiento de la licencia) a los accionistas y a las personas que tienen participación en la administración de la entidad.

489. En relación a las Empresas de Seguros, el artículo 6 de la Ley de Empresas de Seguros indica que las personas que deseen establecer una de estas empresas deben proporcionar a la SIB el “proyecto

de escritura social y de estatutos; nómina de accionistas fundadores y promotores de la empresa”, el artículo 7 indica que la SIB “debe establecer la seriedad, honorabilidad y responsabilidad de los socios fundadores y promotores de la empresa”. En cuanto a los administradores y responsables de la entidad de Seguros, el Reglamento de la Ley de Constitución y Organización de Empresas de seguro establece en el Artículo 20: *“Los cambios de Directores y Funcionarios Ejecutivos, que ocurran con posterioridad a la iniciación de operaciones, deben ser comunicados a la Superintendencia de Bancos, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la designación, para que ésta compruebe si las personas designadas reúnen las calidades exigidas ... la Superintendencia de Bancos, ...[podrá] ordenar a la empresa la substitución del Director o Funcionario de que se trate.”* En cuanto a los Accionistas, la Ley actual no contiene disposiciones especiales para obligar la notificación de cambio de propiedad de estos títulos por debajo del 5% de participación.

490. El Reglamento para la autorización y funcionamiento de Casas de Cambio está contenido en la resolución JM-131-2001 de la Junta Monetaria. El artículo 5 se refiere a la solicitud de autorización para operar como Casa de Cambio, indicando que ésta *“se presentará a la Superintendencia de Bancos, acompañada de la información relativa a la honorabilidad, solvencia y experiencia de cada uno de los socios, organizadores, miembros del Consejo de Administración y funcionarios ejecutivos”*. Esta resolución no contiene disposiciones que le exijan a la casa de cambio enviar esta misma información a la SIB, respecto de personas que adquieren acciones cuando ya la casa de cambio ha sido autorizada.

491. Con respecto a todos los sujetos obligados, es conveniente anotar que el artículo 7 del Reglamento ALD indica que éstos deben proporcionar a la IVE los datos generales que esta intendencia les solicite y que deben notificar las posteriores modificaciones a esos datos. El formulario diseñado para esto es el IVE-R-01. Los apartados 4 y 5 solicitan información sobre el Consejo de Administración y los órganos gerenciales, mas no sobre los accionistas. El Reglamento ALD tampoco indica claramente que se deba evaluar a dichas personas, sino que solamente solicita que estos nombramientos consumados sean notificados a la IVE.

492. (c.23.4) Con respecto a las instituciones financieras sujetas a los principios centrales se observa que se cumple con los lineamientos del GAFI en referencia a que estos deben obtener licencia. Los bancos, aseguradoras y casas de bolsa deben ser autorizadas según los artículos 7 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, 12 de la Ley de Empresas de Seguros y 23 de la Ley de Mercado de Valores y Mercancías.

493. Con respecto a la supervisión continua de las instituciones sujetas a principios centrales, como se menciono anteriormente, se han realizado auditorías al sector bancario, asegurador y de valores. El sector mas auditado es el bancario, en el cual la cantidad de auditorías realizadas sobrepasa la cantidad de bancos registrados, contrario al caso de las aseguradoras y las casas de bolsa, lo que muestra que algunas de estas instituciones (seguros y valores) no se han supervisado por medio de visitas In Situ.

494. Existen disposiciones para que se realice una supervisión global consolidada. El artículo 27 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros indica que *“todas y cada una de las empresas integrantes de los grupos financieros estarán sujetas a supervisión consolidada por parte de la Superintendencia de Bancos”*

495. Se reitera que los corredores de seguros no son sujetos obligados por la ley en materia ALD/CFT y si son definidos como instituciones financieras según la metodología de evaluación del GAFI. Por lo anterior, la IVE no está facultada para monitorear, para inspeccionar y para requerir información a los intermediarios de seguros.

496. (c.23.5, c.23.7) Existen disposiciones que exigen a las personas obligadas, registrarse ante la IVE. Esta intendencia mantiene registros de personas que realizan cambio de dinero o moneda y de las

que realizan transferencia de dinero o valor. Asimismo se registran otras instituciones financieras que no están sujetas a principios centrales. Como se menciono anteriormente, están sujetas a supervisión sin embargo ésta ha sido en ocasiones escasa y la misma presenta algunas deficiencias mencionadas anteriormente

497. Las personas naturales y jurídicas que prestan un servicio de transferencia de dinero o de valor, o de cambio de dinero o moneda, así como otras no sujetas a principios centrales, están obligados a registrarse ante las autoridades. La Ley ALD en su Artículo 18 inciso 5 indica que las personas individuales o jurídicas que realicen transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos y/o movilización de capitales y los que realicen compra venta de divisas están obligados por esta ley. Asimismo, la ley incluye como personas obligadas a instituciones financieras no sujetas a principios centrales. El Artículo 7 del Reglamento de la Ley ALD, exige que las personas obligadas remitan a la SIB, a través de la IVE, *“por única vez, la información general de las mismas que éste última les requiera, en los formularios que para el efecto diseñará. Las personas obligadas tendrán un (1) mes calendario, contado a partir de la vigencia del Reglamento, para remitir la información indicada”*. Asimismo, indica que cuando existan modificaciones, las personas obligadas deben notificarlo a la IVE.

498. Para las personas obligadas, creadas después de la emisión del Reglamento, el inciso 1.a del Oficio IVE No. 247-2003, establece que las mismas deben enviar la información dentro de los 15 días posteriores al inicio de operaciones. Cabe mencionar que este oficio no está dirigido a personas que realizan transferencias de fondos.

499. Durante la visita, pudo constatarse que la IVE mantiene un registro de las personas obligadas, el cual incluía a junio de 2009 una Casa de Cambio y 14 Empresas de Transferencias de Fondos. Es importante mencionar que en Guatemala, es libre la compra y venta de divisas, lo cual está establecido en La Ley de Libre Negociación de Divisas (Decreto 94-2000 del Congreso de la República). En relación con los cambistas, mediante Oficio IVE No. 911-2007 del 19 de junio de 2007, se estableció la forma IVE-BA-07 Registro Mensual de Cambistas y el Total de sus Operaciones de Compra de Moneda Extranjera en Documentos y Efectivo. Dicho formulario tiene como objeto la creación de un registro de información de las personas, cuyo perfil haya sido definido por la persona obligada como cambista, con las que realicen operaciones de compraventa de divisas.

500. El registro de personas obligadas de la IVE incluye instituciones financieras no sujetas a principios centrales. A continuación se presentan las cantidades de personas obligadas registradas por tipo de institución. Algunos de estos sectores no han sido supervisados por la IVE y en otros la cantidad de auditorías realizadas es mucho menor al número de instituciones registradas.

TIPO	CANTIDAD 16/06/2009
AFIANZADORA	11
ALMACENADORA	13
ARRENDADORAS	8
CASAS DE CAMBIO	1
CASAS DE EMPENO	1
EMPRESAS DE CANJE DE CHEQUES	1
COOPERATIVAS	254
FINANCIERAS	16
FINANCIADORAS	1
ADMINISTRADORAS DE FONDO DE PENSIONES	-
FACTORAJE	1
OPERADORES DE TARJETA DE CREDITO	2
OTRAS INSTITUCIONES	1
EMPRESAS DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS	14
TARJETA DE CREDITO	10
TOTALES	334

501. (c.23.6) Las personas naturales y jurídicas que prestan un servicio de transferencia de dinero o de valor, o de cambio de dinero o moneda, por ser personas obligadas de acuerdo a las leyes ALD y CFT, han estado sujetas a la supervisión de la IVE en estos temas. Esta intendencia informó que durante el periodo 2003 a junio de 2009 ha realizado 7 auditorías ALD y/o CFT a Casas de Cambio y 15 a Empresas de Transferencias de Fondos. La cantidad de auditorías realizadas muestra que se ha auditado una parte significativa de las instituciones registradas. No es posible determinar si existen remesadoras que den servicios y no estén registradas en la IVE.

Recomendación 25 – Guías y Realimentación

502. (c.25.1 y c.25.2) El artículo 25 del Reglamento de la Ley ALD, obliga a la IVE a comunicar a las personas obligadas las nuevas formas de operar en el LD, lo cual apoya la implementación de la recomendación 25 del GAFI que indica que las autoridades deben establecer lineamientos sobre técnicas y métodos de LD/FT a fin de ayudar a las instituciones financieras y APNFDS a implementar y cumplir con sus requisitos ALD/CFT. Durante la visita, la IVE informó que ha brindado capacitaciones sobre tipologías a las personas obligadas, específicamente a las APNFDS (indicando que durante 2009 se realizaron seis capacitaciones que incluyeron tipologías y casos, capacitándose 300 personas representantes de las APNFDS. Se solicitaron informes sobre divulgación de tipologías, sin embargo, hasta el momento se proporcionó un Boletín emitido por la IVE que hace referencia al sitio de la SIB en el que se encuentran tipologías internacionales, pero un documento con tipologías nacionales no fue proporcionado.

503. Al respecto, fue informado por la IVE que su Unidad de Análisis de Información ha elaborado un primer Boletín Informativo que fue enviado vía correo electrónico a todos los funcionarios de cumplimiento y que esta práctica se realizará en forma trimestral. Este primer boletín invita a las personas obligadas a visitar la página Web de la SIB en la que se encuentran los Informes de Tipologías emitidos por GAFIC y GAFISUD. La IVE participó como miembro del GAFIC en la elaboración del Informe Tipológico del GAFIC, aportando tres tipologías. Fue informado por esa intendencia que dichas tipologías fueron notificadas a las personas obligadas mediante el envío del boletín mencionado anteriormente el cual está disponible en la página de la SIB. Durante las entrevistas, las instituciones financieras ofrecieron diversos puntos de vista en cuanto a la retroalimentación de la IVE con respecto a tipologías de LD/FT, indicando algunas que la IVE les ha brindado capacitaciones sobre este tema y otras, que no han recibido lineamientos de esta intendencia con respecto a métodos LD/FT.

504. Con respecto a proporcionar estadísticas a las personas obligadas, el boletín mencionado (marzo de 2009) recoge algunas estadísticas sobre RTS presentados. Por lo que es conveniente que se continúe con esta práctica a fin de brindar a las personas obligadas estadísticas sobre RTS y otros temas relevantes.

505. Con respecto al establecimiento de otras medidas para asegurar que las medidas ALD/CFT implantadas por las personas obligadas sean efectivas (criterio 25.1 inciso ii), Guatemala ha realizado lo siguiente: 1) El artículo 25 del Reglamento de la Ley ALD le da la facultad a la IVE, para instruir a las personas obligadas acerca de nuevas medidas que deben implementar para prevenir su utilización en el LD. Guatemala informó que “a las instituciones financieras, se les proporcionó un documento denominado “Instructivo sobre medidas de prevención contra el lavado de dinero u otros activos”, mediante Oficio IVE No. 247-2003 del 19 de mayo de 2003” y que “este documento también se les brinda a todas las personas obligadas al momento de inscribirse a la intendencia”. Este documento compila diversas obligaciones dictadas por la Ley ALD y su reglamento y agrega lineamientos adicionales para su cumplimiento, sin embargo no abarca temas referentes al FT. Asimismo, se indicó que “mediante oficio IVE No. 424-2009, se les está informando a las Personas del Régimen Especial, de las que en su mayoría se pueden considerar [APNFDS], las obligaciones que deben observar respecto

al cumplimiento de las normativas contra LD/FT (Registro ante la IVE, Operaciones en efectivo superiores a US\$10,000, Reporte de Transacciones Sospechosas, etc.)”. 2) La IVE ha remitido a las personas obligadas, lineamientos, instructivos, Guías y boletines y realizado talleres sobre temas específicos con el fin de que éstas cumplan con sus obligaciones, entre estos se destacan el oficio 247-2003 mencionado, los Lineamientos para Mantenimiento de Cuentas a Sociedades u Otras entidades en formación, el Instructivo para la Elaboración del Archivo Electrónico para el Reporte Mensual de Ingreso y Egreso de Efectivo en Moneda Nacional entre otros. Según informó la IVE, para implementar cada una de las Guías, lineamientos e instructivos se realizaron 10 talleres de capacitación, lográndose capacitar alrededor de 400 representantes de las entidades obligadas.

Recomendación 29 - Facultades del Supervisor

506. (c.29.1) La Intendencia de Verificación Especial (IVE), además de ser la UIF de Guatemala, es la autoridad encargada de monitorear, evaluar y velar el cumplimiento de los Programas de Prevención LD/FT (art. 19 de la Ley ALD, art. 9 del Reglamento de la Ley ALD y art. 20 de la Ley CFT) en las instituciones financieras y demás entidades obligadas.

507. La IVE tiene facultades explícitas para exigir la presentación de cualquier información y/o tener acceso a ella; y para imponer sanciones administrativas pecuniarias por incumplimientos. La base legal de estas facultades es la siguiente: Artículos 19 (parte final del último párrafo), 25, 28, 29, 32 y 33 (literales “g” y “h”) de la Ley ALD; Artículos 9, 13, 14, 16, 17, 18 y 19 del Reglamento a la Ley ALD; Artículos 18 (primer párrafo) y 20 de la Ley CFT; Artículos 5 y 11 (último párrafo) del Reglamento a la Ley CFT; y Artículo 3 (literal “d”) de la Ley de Supervisión Financiera.

Facultad para Inspecciones in-situ

508. (29.2) La facultad de realizar inspecciones in situ por parte de la IVE no está explícitamente mencionada en las leyes y reglamentos arriba citados. Se deriva de la Ley de Supervisión Financiera (Decreto del Congreso No. 18 de 2002), que en su artículo 2 define el objeto de la supervisión ejercida por la SIB como “la vigilancia e inspección de las entidades a que se refiere el artículo anterior, realizada por la Superintendencia de Bancos, con el objeto de que las mismas adecuen sus actividades y funcionamiento a las normas legales, reglamentarias y a otras disposiciones que les sean aplicables”. Adicionalmente, el artículo 3 le otorga claras facultades a la SIB para realizar inspecciones in situL

“Para cumplir con su objeto la Superintendencia de Bancos ejercerá, respecto de las personas sujetas a su vigilancia e inspección, las funciones siguientes:

e)Ejercer vigilancia e inspección con las más amplias facultades de investigación y libre acceso a todas las fuentes y sistemas de información de las entidades supervisadas, incluyendo libros, registros, informes, contratos, documentos y cualquier otra información, así como a los comprobantes que respaldan las operaciones de las entidades supervisadas.”

509. Dado que la IVE es parte integral de la Superintendencia (artículo 32 de la Ley ALD), la facultad que la Superintendencia tiene para hacer inspecciones in situ se extiende también a la IVE. Adicionalmente, el Acuerdo del Superintendente de Bancos que define la estructura orgánica de la Superintendencia y las funciones de sus distintas Intendencias, establece que la IVE es la responsable de “supervisar” el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos en materia ALD/CFT.

510. En cuanto a la facultad supervisora de la IVE sobre entidades obligadas que no están bajo jurisdicción de la SIB, se hace referencia al artículo 19 de la Ley CLD que se refiere a la obligación de las personas obligadas de contar con Programas, normas y procedimientos idóneos para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de lavado de dinero, mismo que en su último párrafo indica que será la SIB a través de la IVE quien deberá velar por el cumplimiento de dichas

obligaciones. Lógicamente la supervisión es el medio para velar por el cumplimiento. Sin embargo, el evaluador considera que podría ser mas específica esta facultad de supervisión.

Poder para exigir la entrega de documentos

511. (c. 29.3) Una de las principales facultades que tiene la IVE para cumplir con sus funciones de supervisor, es la de tener acceso y/o compeler a las instituciones financieras y demás entidades obligadas, sin necesidad de orden judicial, a la presentación de todos los récords y documentos relacionados con cuentas, relaciones comerciales y transacciones, y toda información que sea relevante para monitorear el cumplimiento de sus respectivos Programas en PLD/FT. Entre las principales disposiciones jurídicas, se pueden citar las siguientes:

“ARTÍCULO 28. Obligación de informar:

Las personas obligadas deberán proporcionar a la Intendencia de Verificación Especial la información que ésta les solicite en la forma y plazo establecidos en el reglamento, en relación a datos y documentación a que se refieren los artículos anteriores para los propósitos de esta ley.

Cuando los obligados a proporcionar la información no pudieren hacerlo dentro del plazo estipulado por la Intendencia de Verificación Especial, podrán solicitar una prórroga con la debida anticipación explicando los motivos que la justifiquen y ésta deberá resolverse antes de que concluya el plazo señalado originalmente.

No podrá oponerse violación de confidencialidad de ninguna naturaleza, impuesta por ley o por contrato, de la información que las personas obligadas, deban proporcionar a las autoridades competentes en cumplimiento de esta ley o de las disposiciones que la reglamenten.”

“ARTÍCULO 29. Copia de registros.

Las personas obligadas deberán enviar copia de los registros a que se refieren los artículos 21, 22, y 24 de esta ley, en la forma y tiempo que señale el reglamento, a la Intendencia de Verificación Especial cuando ésta lo requiera.”

“ARTÍCULO 33. FUNCIONES.

Son funciones de la Intendencia de Verificación Especial, las siguientes:

a) Requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos.”

512. Además de lo anterior, está toda la información presentada en forma de Reporte de Transacciones Sospechosos (RTS) conforme el siguiente articulado: Art. 26 de la Ley ALD, Arts. 15, 16 y 17 del Reglamento a la Ley ALD, Art. 16 de la Ley CFT y Arts. 7 y 8 del Reglamento a la Ley CFT.

513. En el régimen jurídico no está expresamente previsto que la IVE tenga acceso a los expedientes de análisis de casos detectados como inusuales, se hayan o no presentado como sospechosos, conforme el Art. 15 del Reglamento a la Ley ALD y Art. 16 (segundo párrafo) de la Ley CFT;. Sin embargo, las disposiciones generales citadas anteriormente permiten interpretar que este tema sí está cubierto dentro de su amplia facultad de acceso a información de las entidades obligadas. En la práctica, se observó que la IVE sí puede obtener esta información durante las visitas de inspección.

514. Existe un mecanismo que implementa la IVE para la obtención de información urgente, que se materializa a través de los denominados requerimientos urgentes o “motorizados”. Estos son funcionarios de la IVE que se dirigen personalmente a la institución financiera, solicitan la información que necesitan y esperan hasta que les entreguen la información (a veces durante un día entero o más). Si

bien la IVE lo considera un recurso útil para casos de urgencia, el equipo evaluador considera que el hecho de necesitar ejercer esa presión (y desgaste de recursos) sobre la institución financiera genera dudas sobre la efectividad de la facultad que tiene la IVE de requerir y compeler a que le remitan cualquier información que sea necesaria en el plazo que ella instruya.

Poder para sancionar (c. 29.4):

515. La IVE tiene facultad para aplicar sanciones administrativas (pecuniaria) a las instituciones financieras por hallazgos de incumplimientos a partir de inspecciones in situ o de seguimientos extra situ sobre los Programas de Prevención LD/FT, conforme los arts. 19, 31, 32 y 33 (literal “g”) de la Ley ALD y el art. 3, literal “d”, de la Ley de Supervisión Financiera. Sin embargo, las únicas sanciones que se han aplicado al momento de la visita de Evaluación: 10 multas en 6 años (entre 2003 y 2008), no han sido producto de hallazgos por inspecciones in situ, sino por faltas a requerimientos de información:

“ARTÍCULO 33. FUNCIONES.

Son funciones de la Intendencia de Verificación Especial, las siguientes (...):

a) Imponer a las personas obligadas las multas administrativas en dinero que corresponda por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta ley”

Recomendación 17 - Disponibilidad de Sanciones

516. En general, en el tema ALD/CFT, la legislación guatemalteca prevé amplias sanciones tanto de carácter penal (principales y accesorias), como civiles y administrativas, aplicables en ocasión de incumplimientos de determinadas obligaciones en la materia, incluyendo agravantes, y se designan a las autoridades responsables de imponerlas según la naturaleza del requisito incumplido. En general, entre las medidas sancionadoras se destacan las siguientes, según el caso sea penal, civil o administrativo: prisión, multa, comiso de bienes, pago de costas procesales, publicación de sentencia, expulsión del territorio e inhabilitación especial. Sin embargo, no ha sido disuasiva la aplicación real de las sanciones, ni adecuada ni proporcional su gradualidad, ni efectiva su implementación.

517. En Guatemala, está disponible una amplia gama de sanciones. En la Ley ALD están previstas en las siguientes disposiciones:

- Artículo 4. Personas Individuales.
- Artículo 5. Personas Jurídicas.
- Artículo 6. Otros Responsables.
- Artículo 7. Agravación Específica.
- Artículo 8. Del Comiso de Bienes.
- Artículo 31. Procedimiento y Sanciones.

518. En la Ley CFT están previstas en las siguientes disposiciones:

- Artículo 4. Del Delito De Financiamiento Del Terrorismo.
- Artículo 5. Agravante Especial.
- Artículo 7. Responsabilidad Penal De Personas Jurídicas.
- Artículo 8. Trasiego De Dinero.
- Artículo 9. Comiso De Bienes.
- Artículo 10. Comiso Civil De Bienes.
- Artículo 11. Otros Grados De Comisión.
- Artículo 19. Sanciones.

519. El alcance del primero y último párrafo del art. 5 de la Ley ALD aún no se ha aplicado a ningún caso.

520. El procedimiento sancionatorio está previsto en el art. 31 de la Ley ALD, en los arts 33, 34 y 35 del Reglamento de la Ley ALD y en el art. 12 del Reglamento a la Ley CFT.

521. La autoridad para imponer sanciones por incumplimiento de obligaciones ALD/CFT está asignada a la Superintendencia de Bancos, unas veces (Reglamento ALD, artículos 32), y a la IVE en otras ocasiones (Ley ALD art. 33, literal “g” y 33 del Reglamento de la Ley). Sería deseable eliminar esta aparente contradicción para evitar riesgos jurídicos. Sin embargo se observó que para las autoridades y para las instituciones vigiladas no existe duda alguna, pues el artículo 32 de la Ley ALD y el artículo 24 del Reglamento ALD claramente dicen que la IVE *“será la encargada de velar por el objeto y cumplimiento de esta ley y su reglamento”* y que *“forma parte de la estructura orgánica de la Superintendencia de Bancos”*.

522. Conforme el citado art. 32 del Reglamento de la Ley ALD que mandata definir parámetros de la gravedad de los hechos para determinar la sanción a aplicar, el Superintendente de Bancos emitió el Acuerdo Número 43-2002 que prevé la siguiente escala:

ESCALA PARA EL RÉGIMEN SANCIONATORIO ALD

N o.	Infracción	Sanción EU\$
1.	Incumplimiento a lo establecido en el inciso a) del Artículo 19 de la Ley.	10,000
2.	Incumplimiento a lo establecido en el inciso b) del artículo 19 de la Ley.	10,000
3.	Incumplimiento a lo establecido en el inciso c) del artículo 19 de la Ley.	10,000
4.	Incumplimiento al artículo 20 de la Ley.	10,000
5.	Incumplimiento en la actualización de los registros a que se refiere el artículo 23 de la Ley.	10,000
6.	Incumplimiento a cualquier requerimiento de información por parte de la Superintendencia de Bancos, a través de la IVE, sea este ocasional o periódico, de conformidad con el artículo 28 de la Ley.	10,000
7.	Incumplimiento del primer párrafo del artículo 21 de la Ley, por no llevar los registros establecidos.	20,000
8.	Incumplimiento del artículo 23 de la Ley por no conservar los registros a que se refiere.	20,000
9.	Incumplimiento del registro diario a que se refiere el artículo 24 de la Ley.	20,000
10.	Incumplimiento de comunicación de transacciones que deben reportarse como sospechosas, de conformidad con el artículo 26 de la Ley.	20,000
11.	Incumplimiento de cualquiera de las medidas para conocer e identificar a los clientes, a que se refieren los artículos 19, inciso d); 21, segundo párrafo y 22 de la Ley.	25,000
12.	Por no efectuar el nombramiento del oficial de cumplimiento o de quien haga sus veces, de conformidad con el último párrafo del Artículo 19 de la Ley.	25,000
13.	Cualquier otro incumplimiento no contemplado en la presente tabla.	10,000

523. El equipo evaluador observó que las sanciones pecuniarias han sido muy escasas: 10 multas en 6 años (entre 2003 y 2008) y se han aplicado únicamente en el sector bancario y a una Casa de Cambio.

524. Es necesario anotar que la IVE considera que la tabla de sanciones arriba citada establece un monto mínimo para las multas imponibles en cada caso, y no un límite máximo. Según la IVE, el monto máximo de multa es el de \$50,000 previsto en la Ley ALD. Sin embargo, el equipo evaluador considera que el texto del Acuerdo 43-2002 del Superintendente impide imponer el monto máximo de multa que el legislador previó.

525. En la legislación guatemalteca no se prevén sanciones administrativas sobre el tema ALD/CFT aplicables a directores y a la administración y gerencia superior de las instituciones financieras.

526. La IVE no tiene facultad para retirar, restringir o suspender licencia por el tema ALD/CFT a los Sujetos Obligados que no son instituciones financieras.

3.10.2. Recomendaciones y Comentarios

527. R23. Mejorar la cantidad y calidad de las auditorías in situ de ALD/CFT practicadas por el Área de Supervisión de la IVE. Para esto es de vital importancia que se brinde un mayor apoyo a esta área a fin de que cuente con más personal que le permita realizar más auditorías a las instituciones financieras y demás obligados.

528. R23. Se sugiere establecer convenios de cooperación con organismos sectoriales que realizan auditorías, a fin de que estos contribuyan con la IVE en la supervisión ALD/CFT de las personas obligadas. En este sentido, fue notificado por la Inspección General de Cooperativas (INGECOP), que esta organización realiza supervisiones ALD/CFT al sector cooperativo y que en 2008 realizó 108 auditorías que cubrieron los temas LD/FT. Estos convenios podrían reducir la carga de trabajo de la IVE o al menos podrían proporcionarle elementos útiles que le faciliten la labor de supervisión.

529. R23. Ampliar la aplicación del Modelo de Supervisión Basada en Riesgos para todos los sectores obligados.

530. R23. Proporcionar oportunamente a las personas obligadas los hallazgos de las auditorías ALD/CFT realizadas por el Área de Supervisión.

531. R23. Dar seguimiento a la corrección de las deficiencias identificadas en los informes de supervisión ALD/CFT.

532. R23. Otorgar facultades a la SIB para revisar en todo momento, y no sólo al momento de autorizar el funcionamiento de una institución, la idoneidad de quienes adquieran una participación accionaria significativa o una función administrativa en instituciones financieras distintas de Bancos, Aseguradoras y entidades pertenecientes a grupos financieros (para estas ya existe esta obligación). Especial prioridad debería darse a cooperativas y remesadotas.R23.

533. Dar lineamientos para que el sector asegurador y de valores maneje el riesgo LD/FT.

534. R25. Brindar a todas las personas obligadas realimentación sobre las técnicas y métodos del LD y el FT en Guatemala.

535. R. 29- Se sugiere hacer explícita la facultad y función de la IVE para realizar inspecciones in situ en materia ALD/CFT sobre las instituciones financieras que operan fuera del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Bancos.

536. R.17- Establecer en la legislación:

- Sanciones administrativas en el tema PLD/FT para directores y para la administración superior de las instituciones financieras.
- El retiro, suspensión o restricción de la licencia para operar de todo los Sujetos Obligados, como sanciones en el tema PLD/FT.

537. R.17- Revisar y actualizar, a tono con la gravedad de los incumplimientos, la gradualidad o escala de sanciones pecuniarias conforme los montos mínimos y máximos previstos en la Ley.

538. Incluir en la legislación, como Sujetos Obligados, a los intermediarios de seguros.

3.10.3. Cumplimiento de las Recomendaciones 23, 29, 17 & 25

	Calificación	Resumen de los factores afines a la s.3.10 que apoyan la Calificación general
R.17	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Solo 10 multas en 6 años (entre 2003 y 2008), todas concentradas en Bancos, salvo 1 para una Casa de Cambio. • La escala de sanciones pecuniarias establecida por la Superintendencia limitó la sanción máxima muy por debajo de lo previsto en la Ley, lo cual podría impedirle a la SIB imponer multas ejemplarizantes o proporcionales a la gravedad de ciertas infracciones • La gama de sanciones ALD/CFT es limitada: No se prevén sanciones a directores y a la administración superior No existe facultad para retirar, restringir o suspender licencia por incumplimientos PLD/FT a los Sujetos Obligados que no son instituciones financieras.
R.23	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Recurso humano muy insuficiente para poder supervisar a todos los sujetos obligados del país. • Un esquema moderno de supervisión basada en riesgos se implementó poco antes de la visita. Antes de eso la IVE no daba informes escritos a las instituciones supervisadas, no realizaba seguimientos de rutina a las recomendaciones de mejorar y era demorada la en comunicar al menos verbalmente sus conclusiones de inspección a la institución financiera. • No se han hecho suficientes visitas de inspección in situ a instituciones del sector de seguros y valores, y aun menos a las instituciones no sujetas a principios centrales (como empresas remesadoras). .
R.25	MC	<ul style="list-style-type: none"> • Limitada y reciente realimentación hacia las instituciones financieras. • Solamente el 2% del total de RTSs son presentados por instituciones financieras no bancarias, tales como financieras, aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, casas de cambio, almacenadoras y empresas de canje de cheques. Esto denota falta de guía y concienciación adecuadas en estos sectores. • Existen lineamientos que indican que se debe brindar a las instituciones financieras información sobre métodos y técnicas LD, sin embargo, no se pudo comprobar que las autoridades den esta información a las instituciones obligadas
R.29	MC	<ul style="list-style-type: none"> • Ni la Superintendencia ni la IVE tienen facultad expresa para sancionar a directores y miembros de la alta gerencia de las instituciones financieras por incumplimientos del régimen ALD/CFT. Sólo pueden hacerlo indirectamente emitiendo instrucciones a la institución financiera.

3.11. Servicios de transferencia y envío de fondos (SR.VI)

3.11.1. Descripción y Análisis

539. Resumen: Las personas naturales o jurídicas que se dedican a la actividad de transferencia de fondos y/o movilización de capitales son consideradas personas obligadas, lo cual significa que están sujetas a dar cumplimiento a la Leyes ALD/CFT. También están obligadas a registrarse ante la IVE, a quien se le asigna la función de supervisarlas.

540. (c. VI.1): En Guatemala no existe un régimen de licenciamiento específico para las personas que se dedican a la actividad de transferencia sistemática de fondos y/o movilización de capitales (remesadoras). Sin embargo, el literal 5-c) del artículo 18 de la Ley ALD establece que las personas que se dedican a esta actividad quedan sometidas al régimen de personas obligadas, mismas que están sujetas a los controles previstos en esa Ley, así como a la Ley CFT (por lo indicado en su artículo 15).

541. Para cumplir con lo indicado en el párrafo anterior, las personas obligadas que se dediquen al servicio de transferencia de dinero o valor deberán proporcionar su información general a la IVE, para quedar registradas como personas obligadas. Adicionalmente, el artículo 7 del Reglamento de la Ley ALD establece:

“Datos generales de personas obligadas. Las personas obligadas deberán remitir a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, por única vez, la información general de las mismas que ésta última les requiera, en los formularios que para el efecto diseñará. Las personas obligadas tendrán un (1) mes calendario, contado a partir de la vigencia del Reglamento, para remitir la información indicada. Cuando haya modificaciones en los datos generales reportados, las personas obligadas deberán hacerlo del conocimiento de la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, en un plazo de quince (15) días después de efectuado el cambio correspondiente.”

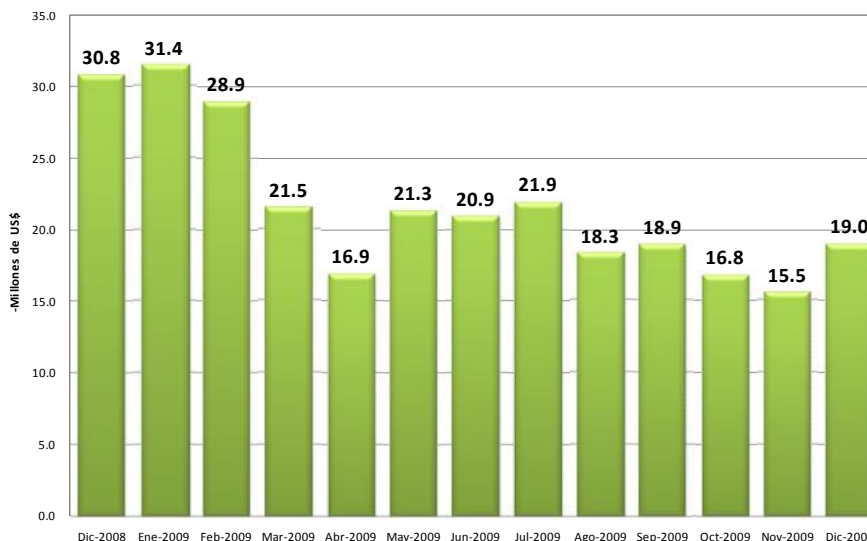
542. Dicho formulario deberá ser enviado por la persona obligada adjuntando la información de soporte, la cual será ingresada a la base de datos de la IVE, quien posteriormente le asigna un código de registro, el cual le indica que la misma queda registrada ante la IVE.

543. El registro de las empresas de transferencias de fondos (remesadoras) ante la IVE se inició desde el año 2002. El cuadro siguiente muestra las que se han inscrito desde entonces:

Listado de remesadoras y su fecha de registro		Listado de remesadoras y su fecha de registro	
CODIGO	FECHA REGISTRO	CODIGO	FECHA REGISTRO
TF-2	24/05/2002	TF-21	31/03/2004
TF-3	03/05/2002	TF-22	20/04/2004
TF-4	09/05/2002	TF-24	24/05/2004
TF-5	29/08/2002	TF-25	07/09/2004
TF-6	31/10/2002	TF-26	22/09/2004
TF-7	05/11/2002	TF-27	23/09/2004
TF-1	07/11/2002	TF-28	14/10/2004
TF-13	08/11/2002	TF-29	22/12/2004
TF-8	07/01/2003	TF-30	11/08/2005
TF-11	10/01/2003	TF-31	31/08/2005
TF-10	14/01/2003	TF-32	05/09/2005
TF-9	14/01/2003	TF-33	07/11/2005
TF-12	23/01/2003	TF-34	21/02/2006
TF-15	12/03/2003	TF-35	22/06/2006
TF-16	16/03/2003	TF-36	13/10/2006
TF-14	19/03/2003	TF-37	09/11/2006
TF-17	17/07/2003	TF-38	09/11/2006
TF-19	19/09/2003	TF-39	11/06/2009
TF-18	05/10/2003	TF-40	02/07/2009
TF-20	15/10/2003	TF-41	15/12/2009

544. Se observa que desde el 2002 se han registrado apenas 41 remesadoras ante la IVE, algunas de las cuales ya no están en operación. Estas reportaron haber movilizado US\$93.5 millones en operaciones mayores o iguales a US\$2,000 durante el año 2009 que representan una parte del total recibido durante el año. Es posible que existan varias remesadoras funcionando sin haberse registrado en la IVE. Sin embargo los datos del Banco Central sobre transferencias por remesas familiares recibidas del extranjero indican que la mayor parte de este dinero está entrando al país por vía bancaria. La IVE ha aumentado recientemente sus esfuerzos para educar a los negocios de remesas acerca de su obligación de registrarse, y los más grandes de ellos ya están registrados.. Esta estrategia se hizo en cooperación con el Registro Público Mercantil y con base en un análisis del objeto social declarado por las empresas registradas. (c. VI.2): Al quedar sujetas, las remesadoras a la obligación legal de cumplir con registrarse ante la IVE como personas obligadas, deben cumplir con lo estipulado en las normativas de LD/FT del país. Dichas normativas recogen las 40 + 9 Recomendaciones del GAFI, existen RTSs de calidad enviados por entidades remesadoras lo que evidencia que estas reconocen su responsabilidad de monitoreo e identificación de operaciones inusuales y reporte de transacciones sospechosas

545. No obstante lo anterior, aun la IVE no ha expedido un instructivo para remesadoras que abarque todos los controles previstos por la RE.VI del GAFI. Se han sostenido reuniones de capacitación sobre identificación de operaciones inusuales y envío de RTSs, pero en cuanto a normas complementarias de carácter prudencial únicamente aplica para ellas el oficio IVE No. 1585-2008 sobre Registro y comunicación a la IVE de las transferencias de fondos iguales o mayores a US\$2,000 (dicho formulario sustituyó a los Formularios IVE-TF-09 e IVE-TF-10 sobre el mismo asunto).

Remesas Mensuales mayores a US\$2,000; Del 01/12/2008 al 31/12/2009

546. En dicho reporte las personas obligadas comunican las transferencias de fondos enviadas o recibidas por el monto antes indicado, así como las transacciones múltiples que en su conjunto igualen o superen el monto establecido, realizadas por un ordenante o recibidas por un beneficiario localizado en el territorio nacional. Como esta medida fue tomada tan recientemente y la IVE no ha realizado visitas de supervisión al respecto, aún no es posible evaluar la efectividad de la misma, no obstante si han cumplido con enviar puntualmente el reporte electrónico de transferencias, el cual es recibido a través de un validador que determina la calidad de la información enviada por el obligado.

547. (c. VI.3): Adicionalmente, la IVE, cuenta con un área encargada de velar por el cumplimiento de la normativa contra el lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo, dicha área se encarga de realizar evaluaciones de gabinete y visitas in-situ a cada una de las instituciones obligadas para revisar el grado de cumplimiento de la normativa aplicable. A la fecha de la evaluación la IVE había realizado 15 auditorías a empresas de transferencias de fondos (remesadoras), de un total de 39 registradas. Solo 14 de ellas estaban activas pues esta actividad ha disminuido mucho debido a la bancarización de este servicio en Guatemala (ver párrafo 496 del presente informe). También se verificaba extra situ el cumplimiento de la obligación de reportar toda transferencia basada en el umbral de \$2,000.

548. (c. VI.4): En conformidad con el artículo 28 de la Ley ALD una lista actualizada de los agentes de los servicios de transferencia de dinero registrados como personas obligadas, puede ser requerida y dichas entidades tienen la obligación de enviarla a la IVE. De hecho, se ha requerido información relacionada, por ejemplo, en enero de 2006 bajo Oficio IVE No. 86-2006, la IVE requirió información sobre las empresas remesadoras de dinero con las cuales tengan contrato de prestación de servicios, el país de donde proceden las remesas y el servicio que prestan a través de ellos si es de recepción o de envío de dinero.

549. (c. VI.5): De la misma forma, el literal g) del artículo 33 sobre las funciones de la IVE de la Ley ALD, faculta a esa institución a imponer a las personas obligadas las multas administrativas en dinero que corresponda por las omisiones en el cumplimiento de las obligaciones que les impone dicha ley.

550. (c. VI.6): La mayoría de las buenas prácticas sobre la RE.VI aplicadas a bancos y cooperativas han iniciado su implantación al sistema Guatemalteco recién en el 2008.

3.11.2. Recomendaciones

551. Expedir un instructivo obligatorio para remesadoras, que les permita poner en práctica todos los controles previstos en la Ley.

552. Llevar a cabo una campaña de concienciación acerca de las responsabilidades de las empresas de remesas con respecto al cumplimiento de reportes y las leyes de ALD/CFT.

3.11.3. Cumplimiento de la Recomendación Especial VI

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
SR.VI	MC	<ul style="list-style-type: none"> La IVE no ha expedido un instructivo para remesadoras que permita poner en práctica todos los controles previstos en la Ley.

4. MEDIDAS PREVENTIVAS – ACTIVIDADES Y PROFESIONES NO FINANCIERAS DESIGNADAS

4.1. Diligencia debida sobre el cliente; registros (R.12) (R.5, 6, 8 a 11 & 17)

4.1.1. Descripción y Análisis

553. Resumen: La Recomendación 12 del GAFI establece que las medidas de prevención LD-FT deben aplicarse no solo por las entidades del sector financiero, sino también por las actividades y profesiones no financieras; en ese sentido el artículo 18 de la Ley CFT, en adición a las personas obligadas establecidas en Ley ALD, crea un régimen especial de personas obligadas constituido por: a) Actividades de promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles; b) Actividades de compraventa de vehículos automotores; c) Actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos; d) Actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades; e) Notarios, Contadores Públicos y Auditores y Contadores; y, f) Cualquier otra actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizada para el financiamiento del terrorismo. Hay negocios que están previstos como APNFD en los estándares internacionales, sin embargo no están como Sujetos Obligados en la legislación guatemalteca; tal es el caso de los proveedores de servicios de societarios y de los casinos.

554. Las APNFD en Guatemala, sólo están obligadas en el ámbito de la Prevención FT y no en el ámbito de la Prevención PLD, y tampoco quedan sujetas por Ley a la implementación de la política conozca a su cliente, a las medidas sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP's), ni a la conservación de registros, ni están obligados a presentar RTS sobre LD, ni a monitorear relaciones contractuales para detectar inusualidades tendientes a determinar patrones de LD. Hasta el momento el sector de las APNFD no cuenta con Programas de Prevención LD/FT que incluyan políticas y controles internos para monitorear riesgos, capacitación y auditorías. Por otro lado, al estar iniciando el proceso de registro y primeros contactos con ciertos sectores de las APNFD, la IVE no puede aún cerciorarse sobre la implementación y efectividad de las políticas PLD/FT, ni hacer supervisión y seguimientos al respecto. Los notarios, contadores y auditores aún no han sido registrados ante la IVE para fines de PLD/FT. Los Abogados y los proveedores de servicios de sociedades y de fideicomisos no son Sujetos Obligados en Guatemala.

555. Los Sujetos Obligados en Guatemala se pueden graficar en el siguiente cuadro referencial:

Sujetos Obligados en Guatemala			
Por Lavado de Dinero		Por Financiamiento al Terrorismo	
Ley ALD del año 2001		Ley CFT del año 2005	
Art. 18	ARTÍCULO 18. DE LAS PERSONAS OBLIGADAS Para los efectos de la presente ley se consideran personas obligadas, las siguientes: 1) Las entidades sujetas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. 2) Las personas individuales o jurídicas que se dediquen al corretaje o a la intermediación en la	Art. 15	ARTÍCULO 15. Régimen de personas obligadas. Para los efectos de la presente Ley, se considerarán personas obligadas las establecidas en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, en su reglamento, y otras disposiciones relativas a dicha materia. Para el efecto, les será aplicable el mismo régimen, deberes, obligaciones, políticas para conocimiento de sus clientes y prohibiciones que establezca dicha normativa.

<p>negociación de valores.</p> <p>3) Las entidades emisoras y operadoras de tarjetas de crédito.</p> <p>4) Las entidades fuera de plaza denominadas off-shore que operan en Guatemala, que se definen como entidades dedicadas a la intermediación financiera constituidas o registradas bajo las leyes de otro país y que realizan sus actividades principalmente fuera de la jurisdicción de dicho país.</p> <p>5) Las personas individuales o jurídicas que realicen cualesquiera de las siguientes actividades:</p> <p>a) Operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques.</p> <p>b) Operaciones sistemáticas o sustanciales de emisión, venta o compra de cheques de viajero o giros postales.</p> <p>c) Transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos y/o movilización de capitales.</p> <p>d) Factorajes.</p> <p>e) Arrendamiento financiero</p> <p>f) Compra venta de divisas.</p> <p>g) Cualquier otra actividad que por naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizada para el lavado de dinero u otros activos, como se establezca en el reglamento.</p>	<p>Las personas obligadas a que se refiere la presente Ley, que ya se encuentren registradas como tales, que hayan nombrado oficiales de cumplimiento y cuenten con registros de clientes y empleados, de conformidad con la normativa contra el lavado de dinero u otros activos, únicamente deberán hacer extensivas a la prevención del financiamiento del terrorismo las demás medidas de control, prevención y otros deberes establecidos en dicha normativa.</p> <p>Las oficiales de cumplimiento designados por las personas obligadas de conformidad con la normativa contra el lavado de dinero u otros activos deberán extender sus funciones y atribuciones al cumplimiento de la normativa contra el financiamiento del terrorismo.</p> <p>El destino de las multas que se impongan por la aplicación de la presente Ley u otras disposiciones aplicables, se regirán por lo dispuesto en la normativa contra el lavado de dinero u otros activos.</p> <p>Art. 18 ARTÍCULO 18. Régimen especial.</p> <p>Se crea un régimen de personas que, por la naturaleza de sus actividades, estarán obligadas a proporcionar a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, las informaciones y reportes, cuando esta se los requiera, para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, permitirán a dicha Superintendencia, el libre acceso a todas sus fuentes y sistemas de información para la verificación o ampliación de las informaciones proporcionadas por ellas mismas, o cuando esto sea necesario para el análisis de casos relacionados con el financiamiento de terrorismo.</p> <p>Este régimen especial será aplicable a las personas individuales o jurídicas que realicen las siguientes actividades:</p> <p>a) Actividades de promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles;</p> <p>b) Actividades de compraventa de vehículos automotores;</p> <p>c) Actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos;</p> <p>d) Actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades;</p> <p>e) Notarios, Contadores Públicos y Auditores; y Contadores; y</p> <p>f) Cualquier otra actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizada para el financiamiento del terrorismo, para lo cual, el Presidente de la República podrá hacer extensivo el régimen especial establecido por el presente artículo a cualquier otro tipo de actividades.</p>
---	---

			En todo lo demás les serán aplicables las obligaciones que establecen los artículos 16 de la presente Ley y 28 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, salvo para el caso de las personas indicadas en la literal e) del presente artículo, quienes no estarán obligadas a cumplir con lo dispuesto en el artículo 16 de la presente Ley.
Reglamento a la Ley ALD del año 2002		Reglamento a la Ley CFT del año 2006:	
Art. 5	<p>ARTÍCULO 5.* Personas obligadas. Para los efectos de la Ley y este Reglamento, y de conformidad con el volumen de operaciones, y atendiendo a la naturaleza de sus actividades, las personas obligadas se subdividen en:</p> <p>I.Grupo A. este grupo incluye: a) Banco de Guatemala; b) Bancos del sistema; c) Sociedades financieras; d) Casa de cambio; e) Personas individuales o jurídicas que se dediquen el corretaje o a la intermediación en la negociación de valores; f) Emisores y operadores de tarjetas de crédito; y, g) Entidades fuera de plazo (off-shore)-</p> <p>II.Grupo B. este grupo incluye: a) Empresas que se dedican a las transferencias sistemáticas o sustanciales de fondos y/o movilización de capitales; b) Compañías de seguros y fianzas; c) Empresas que se dedican a realizar operaciones sistemáticas o sustanciales de canje de cheques; d) Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas; e) Entidades que se dedican a factoraje; f) Entidades que se dedican al arrendamiento financiero; g) Almacenes generales de depósito; y, h) Otras que la legislación someta específicamente a la vigilancia e inspección de la Superintendencia de Bancos. i) Las Cooperativas que realicen operaciones de ahorro y crédito, independientemente de su denominación j) Las entidades autorizadas por el Ministerio de Gobernación para realizar loterías, rifas y similares, independientemente de la denominación que utilicen.</p> <p>Dependiendo del volumen de sus operaciones y atendiendo a la naturaleza de sus actividades, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, podrá transferir de grupo a las personas obligadas, según los incisos anteriores, lo cual se comunicará por medio de la notificación de la resolución o bien de su</p>	Art. 10	<p>ARTÍCULO 10. Régimen especial de personas obligadas.</p> <p>Para el cumplimiento de lo establecido en el artículo 18 de la Ley, las-personas obligadas que se indican en dicho artículo deben remitir su información general a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, cuando ésta se los requiera en forma escrita y en el plazo que ésta señale, utilizando para ello los formularios especiales que se diseñen para el efecto.</p> <p>Cuando haya modificaciones en los datos reportados, dichas personas obligadas deberán hacerlo del conocimiento de la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, en el plazo de veinte (20) días después de efectuado el cambio correspondiente.</p>

	publicación dos veces en un período de quince días, en el Diario Oficial y en otro de amplia circulación en el país.		
--	--	--	--

556. Actualmente están registradas en la Intendencia de Verificación Especial (IVE) 417 Personas Obligadas, y esperaban que en las semanas siguientes se registrasen aproximadamente 560 Personas Obligadas bajo Régimen Especial, incluyendo a las APNFD.

PERSONAS OBLIGADAS ACTIVAS AL 30/03/2009

PERSONAS OBLIGADAS	CANTIDAD
Afianzadoras	11
Almacenadoras	15
Arrendadoras	9
Aseguradoras	17
Bancos	20
Casas de Bolsa	21
Casas de Cambio	1
Casas de Empeño	1
Empresas de Canje de Cheques	1
Cooperativas	256
Financieras	16
Financiadoras	1
Factoraje	2
Operadores de Tarjetas de Crédito	2
Off-shore	8
Transferencias de Fondos	26
Tarjetas de Crédito	9
Otras Instituciones	1
TOTAL	417

557. A las APNFD se les informó a través del Oficio IVE No. 424-2009 de abril del 2009 (menos de 2 meses antes de la visita de la Misión Evaluadora del GAFIC) sobre las obligaciones que deben observar respecto al cumplimiento de las normativas contra LD/FT (Registro ante la IVE, Operaciones en efectivo superiores a US\$10,000, Reporte de Transacciones Sospechosas, ciertos controles mínimos como primer paso, etc.). Cabe señalar que las APNFD están obligadas desde el año 2005 con la Ley CFT y su Reglamento del año 2006. A la Lotería (como APNFD) se le convocó a través del Oficio No. 179-2009 de febrero del 2009.

558. Las APNFD deben registrarse en la IVE conforme las siguientes disposiciones:

559. El artículo 7 del Reglamento a la Ley ALD:

“Artículo 7. Datos generales de personas obligadas. Las personas obligadas deberán remitir a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, por única vez, la información general de las mismas que ésta última les requiera, en los formularios que para el efecto diseñará. Las personas obligadas tendrán un (1) mes calendario, contado a partir de la vigencia del Reglamento, para remitir la información indicada.

Cuando haya modificaciones en los datos generales reportados, las personas obligadas deberán hacerlo del conocimiento de la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, en un plazo de quince (15) días después de efectuado el cambio correspondiente”

560. El Instructivo sobre Medidas de Prevención Contra el Lavado de Dinero, comunicado a las personas obligadas mediante Oficio IVE No. 247-2003; sin embargo es anterior a la Ley CFT y su Reglamento, que son los que incluyen las APNFD. Este instructivo establece lo siguiente:

“-Inscripción y/o registro de personas obligadas. Para efecto del cumplimiento de la obligación de registro de personas obligadas en la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia Verificación Especial (la Intendencia), de conformidad con los artículos 18 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (la Ley), y 7 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (el Reglamento), se aplicarán los plazos y procedimientos siguientes:

-Nuevas personas obligadas. Quienes de conformidad con la Ley y el Reglamento sean personas obligadas, y hayan sido creadas o autorizadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la citada normativa, deben proceder a su inscripción y/o registro, dentro del plazo de quince (15) días contados a partir del inicio de sus operaciones.

-Para efecto de lo anterior, es requisito indispensable que la inscripción y/o registro se realice utilizando el FORMULARIO IVE-R-01 INFORMACIÓN GENERAL DE PERSONAS OBLIGADAS, al cual se deberá adjuntar, como mínimo, la documentación siguiente: Copia del documento que acredite su creación, autorización y registro (escritura pública, acta de constitución, patente de comercio, acuerdo gubernativo, u otro), copia de la cédula de vecindad y del nombramiento del representante legal debidamente registrado donde corresponda; en caso que éste último sea extranjero, deberá presentar copia de su pasaporte, o del documento de identificación personal respectivo con el que acredite su condición migratoria. Los documentos indicados con anterioridad deberán presentarse en fotocopia debidamente legalizada por Notario.”

561. Dentro de las APNFD, la actividad más importante es el de las inmobiliarias, concentradas principalmente en áreas urbanas. Las inmobiliarias desarrollan políticas para conocer a los desarrolladores habitacionales y a sus clientes, y por lo general no reciben dinero efectivo por los riesgos que esto conlleva.

562. Existen entidades autorizadas para funcionar como loterías, rifas y juegos, de conformidad con el Acuerdo Gubernativo del Presidente de la República emitido el 18 de mayo de 1956, que contiene el Reglamento para loterías, rifas y juegos que lleven a cabo personas particulares y sus respectivos derechos. En dicho reglamento, se delega en los gobernadores departamentales en su respectiva jurisdicción y en el Ministerio de Gobernación para toda la República, la facultad de autorizar loterías, rifas y juegos, dictando las medidas necesarias para garantizar los intereses del público, con base en lo que establece el Código Civil, en los artículos del 2137 al 2144. En la práctica la Lotería está constituida como una ONG y pasa por revisiones del Ministerio de Gobernación, el cual se hace en los respectivos sorteos. La Lotería emite cheques no negociables a los ganadores y éstos son debidamente identificados. Según informo la Lotería, ya están iniciando en preparar su programa de PLD/FT.

563. Los casinos son una realidad innegable en el país pese a estar prohibido por la ley, según interpretación amplia del art. 477 del Código Penal expresada por las autoridades locales; lo que en la práctica se traduce en que a este sector (reconocido como vulnerable al LD) no se le aplica o implementa la prohibición. Además, los Casinos no están sujetos a ninguna obligación de DDC en el contexto de políticas ALD/CFT. Autoridades del Ministerio de Gobernación afirmaron que han intentado aplicar medidas a las empresas de Casinos, pero éstos recurren de amparo.

564. En el sector de los APNFD predominan la estructura mercantil societaria anónima, y algunas de éstas tienen su capital representado en acciones al portador, por lo cual, cuando son clientes de instituciones financieras éstas presentan dificultad para recabar información sobre los beneficiarios finales. La información que al respecto lleva el Registro Mercantil no ayuda en mucho a control efectivo PLD/FT, y no se cuenta con un sistema de registro central, en donde se plasmen los detalles requeridos sobre la propiedad y el control para todas las compañías y otras personas jurídicas inscritas. Cabe señalar que el uso de las sociedades anónimas y acciones al portador para la realización de operaciones LD/FT es un patrón reconocido internacionalmente, lo cual en opinión de las autoridades encargadas de la persecución penal y administración de justicia tiene incidencia en Guatemala especialmente en el ámbito comercial. La evolución del sector financiero hacia su mayor modernización y cobertura geográfica, implica también mayores facilidades para que las APNFD eventualmente lleven a cabo transacciones de LD-FT. Un importante factor mitigador de riesgos es que por mandato legal el capital de los Bancos y de las empresas controladoras de grupos financieros debe utilizar acciones nominativas.

565. A la Misión Evaluadora se le informó que se están desarrollando estudios y propuestas específicas con relación a los siguiente aspectos: 1) Mecanismo legal para atenuar la utilización de estos instrumentos legales; 2) Elaboración de un proyecto de reformas al Código de Comercio de la República, para suprimir las acciones al portador; 3) Seguimiento al Proyecto de Reforma al Código de Comercio, elaborado por la Superintendencia de Bancos en el año 2003 y remitido al Congreso de la República en mayo del mismo año, en el cual se establece la creación obligatoria de un Registro de Acciones al portador en las Sociedades Anónimas y se modificaría el artículo 21 de la Ley ALD a efecto de otorgar a las personas obligadas la facultad de requerirle al cliente la información contenida en dicho registro.

DDC para APNFDs

566. (c. 12.1 y c.12.2) El régimen especial obliga a quienes llevan a cabo tales actividades y profesiones, a proporcionar a la Superintendencia de Bancos, a través de la IVE, informaciones y reportes cuando ésta los requiera, para el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo las APNFD sólo están obligadas en el ámbito de la Prevención FT y no en el ámbito de PLD y tampoco quedan sujetas por ley a la implementación de la política de Debida Diligencia respecto del Cliente (DDC), ni a medidas sobre Personas Expuestas Políticamente (PEP's), ni a la conservación de registros

567. Hasta el momento el sector de las APNFD no cuenta con Programas de Prevención LD/FT que incluyan políticas y controles internos para monitorear riesgos, capacitación y auditorías. Por otro lado, al estar iniciando el proceso de registro y primeros contactos con ciertos sectores de las APNFD, la IVE no puede aún cerciorarse sobre la implementación y efectividad de las políticas PLD/FT, ni hacer supervisión y seguimientos al respecto. Los notarios y contadores aún no han sido registrados ante la IVE para fines de PLD/FT.

4.1.2. Recomendaciones y Comentarios

568. Establecer en la legislación de manera expresa e inequívoca, las siguientes obligaciones para todos los APNFD:

- Contar con Programas de Prevención para prevenir tanto el LD, como el FT, incluyendo una permanente capacitación.
- Presentar RTS sobre LD.
- Desarrollar políticas de Conozca a su Cliente.
- Desarrollar políticas de DDC intensificada para clientes de alto riesgo, por ejemplo para los PEPs.
- Monitorear relaciones contractuales para detectar inusuales tendentes a determinar patrones de LD.
- Mantener registros de información por al menos de cinco años.
- Incluir como Sujetos Obligados a prevenir el LD y el FT a los proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos, y a casinos.

569. Acelerar y fortalecer el proceso de acercamiento y concienciación en Prevención LD/FT, con todos los sectores de APNFD.

4.1.3. Cumplimiento de la Recomendación 12

	Calificación	Resumen de los factores afines a la s.4.1 que apoyan la Calificación general
R.12	NC	<ul style="list-style-type: none"> • Las APNFD no están obligadas expresamente por ley a la Prevención LD, ni a desarrollar determinadas políticas en cuanto a conocer al cliente, a medidas especiales para clientes de alto riesgo como son los PEP's, ni a mantener registros de información, ni a presentar RTS sobre LD, ni a monitorear relaciones contractuales para detectar inusuales tendentes a determinar patrones de LD. • El sector de las APNFD no cuentan con Programas de Prevención LD/FT que incluyan políticas y controles internos para monitorear riesgos, capacitación y auditorías. • La Ley CFT (que establece la lista de las APNFD) es de agosto del 2005; sin embargo es hasta el 24 de abril del 2009 (menos de 2 meses antes de la visita de la Misión Evaluadora del GAFIC) que la Superintendencia de Bancos emite el Oficio No. 424-2009, por el cual hace del conocimiento a las APNFD que deberán dar cumplimiento a las normas legales de LD y FT. A la Lotería (como APNFD) se le convocó a través del Oficio No. 179-2009 de febrero del 2009. • Al momento de la visita de evaluación, la IVE apenas está iniciando el proceso de registro y primeras reuniones de acercamiento con ciertos sectores de las APNFD; razón por la cual no se puede conocer implementación y efectividad de las políticas PLD/FT, ni de la supervisión y seguimientos al respecto. • Los notarios, contadores y auditores aún no han sido registrados ante la IVE para fines de PLD/FT. • Los abogados y proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos no están previstos en las leyes y reglamentos de la materia como Sujetos Obligados a la Prevención LD/FT. • En el Registro Mercantil no hay información relevante sobre proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos. • El negocio de Casinos es una realidad innegable en el país pese a estar

		prohibido por la ley. No se logra hacer cumplir la prohibición, pero tampoco están sujetos a obligaciones ALD/CFT
--	--	---

4.2. Reporte sobre transacciones sospechosas (R.16) (R.13 a la 15, 17 y 21)

4.2.1. Descripción y Análisis

570. Resumen: En el sector de las APNFD únicamente las Loterías están obligadas a presentar RTS tanto por LD (conforme el art. 26 de la Ley ALD) como por FT (conforme el art. 16 de la Ley CFT). Las demás APNFD sólo están obligadas a RTS vinculadas a FT conforme el art. 16 de la Ley CFT y el art. 7 del Reglamento de la Ley CFT. En el caso de los abogados, notarios y contadores no están obligados a presentar RTS de ningún tipo. Hasta el momento ninguna APNFD ha presentado RTS, y no hay RTS en materia de FT. Existen APNFD que los estándares internacionales recomiendan incluir, pero en Guatemala no son tenidos como tales, siendo el caso de los proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos, y los casinos. Las APNFD no están obligadas expresamente a contar con Programas de Prevención LD/FT. La IVE apenas inicia el registro de las APNFD y los primeros acercamientos, por lo cual aún no se ha desarrollado ninguna inspección supervisión. No se ha aplicado ninguna sanción sobre las APNFD, menos aún por la no presentación de RTS.

571. Las disposiciones más relevantes en cuanto a la obligación de presentar RTS, son las siguientes:

572. En la Ley ALD:

“Artículo 26. Comunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales. Las personas obligadas prestarán especial atención a todas las transacciones, concluidas o no, complejas insólitas, significativas, y a todos los patrones de transacciones no habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente, debiéndolo comunicar inmediatamente a la Intendencia de Verificación Especial.”

573. En el Reglamento de la Ley ALD:

“Artículo 16. Comunicación de transacciones sospechosas. Las personas obligadas deberán comunicar a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, las transacciones que detecten como sospechosas, aplicando el procedimiento que se describe a continuación: (...)”

“Artículo 17. Informe trimestral de no detección de transacciones sospechosas. Las personas obligadas que en un trimestre calendario no detecten transacciones sospechosas, deben informarlo, por medio del oficial de cumplimiento o quien haga sus veces, a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, dentro del mes siguiente al vencimiento del trimestre al que corresponda.”

574. En la Ley CFT:

“Artículo 16. Reporte de Transacciones Sospechosas -RTS-. Las personas obligadas deberán reportar con prontitud y debida diligencia a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, toda transacción que no tenga al parecer una finalidad obviamente lícita, o cuando se sospeche o se tenga indicios razonables para sospechar que existen fondos vinculados con o que pueden ser utilizados para financiar el terrorismo. Para el efecto, las personas obligadas deberán aplicar los procedimientos establecidos al respecto en el reglamento de esta Ley, y en su defecto, en la normativa contra el lavado de dinero u otros activos, inclusive en lo relativo al registro de transacciones inusuales que no sean comunicadas a la autoridad competente.”

575. En el Reglamento de la Ley CFT:

“Artículo 7. Reporte de Transacciones Sospechosas de Financiamiento del Terrorismo –RTS/FT–. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Ley, las personas obligadas que indican los artículos 15 y 18 de la misma, deben aplicar el formulario diseñado por la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, y observar los plazos y procedimientos establecidos en el artículo dieciséis 16 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.(...)”

“Artículo 8. Ampliación. En los casos en que la información contenida en un Reporte de Transacciones Sospechosas de Financiamiento del Terrorismo, sea incompleta, confusa, ambigua o contradictoria, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, podrá solicitar a la persona obligada de que se trate, las ampliaciones correspondientes a dicho reporte y los documentos que sean necesarios.”

576. Existe un formulario emitido por la IVE denominado IVE-RTS- LD/FT **“REPORTES DE TRANSACCIÓN SOSPECHOSA DE LAVADO DE DINERO Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -RTS LD/FT ”**, utilizado por las personas obligadas para reportar transacciones sospechosas, el cual incluye los siguientes aspectos:

- Datos de la persona obligada reportante
- Información de las personas relacionadas en la transacción sospechosa
- Información de la transacción sospechosa
- Documentación que se debe anexar a la transacción sospechosa
- Descripción de la transacción sospechosa y señales de alerta detectadas.

577. Además, la IVE con el propósito de mejorar la calidad de los RTS y su respectivo análisis, instruyó a partir de julio 2008 la implementando un Check List para la admisibilidad de los RTS, y ha reforzado su área de analistas especializados. El Check List ha provocado que hayan menos RTS, pero con mejor calidad. Son pocos los RTS que han sido rechazados por la IVE por no cumplir con los requisitos del Check List.

RTS de APNFDs

578. (c. 13.1 & IV.1) En Guatemala la única categoría de APNFD que está obligada expresamente a presentar RTS en LD y en FT, son las empresas de Lotería, Rifas y Similares. Las APNFD previstas en el 18 de la Ley CFT sólo están obligadas a presentar RTS por FT, siendo éstas: a) Actividades de promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles; b) Actividades de compraventa de vehículos automotores; c) Actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos; y d) Actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades. Hay un Sector de las APNFD también previsto en el referido art. 18 de la Ley CFT, constituidos por Notarios, Contadores y auditores, a los que expresamente se les exige de la obligación de presentar RTS, ni ante la IVE, ni ante alguna autoridad de autorregulación; sin especificar el motivo, la delimitación o el contexto en el que opera dicha exención como podría ser el privilegio profesional legal o el secreto profesional legal. Los Abogados y los proveedores de servicios de sociedades y de fideicomisos no son Sujetos Obligados en Guatemala.

579. El negocio de Casinos es una realidad innegable en el país pese a estar prohibido por la ley (según interpretación amplia del Código Penal expresada por las autoridades locales); lo que en la

práctica se traduce en que este sector (reconocido como vulnerable pero no obligado por Ley) no esté sujeto a ninguna obligación de contar con Programa de Prevención LD/FT ni de presentar RTS conforme los estándares internacionales.

580. (c.13.2) Las APNFD previstas en el 18 de la Ley CFT sólo están obligadas a presentar RTS por FT. Al momento de la visita de evaluación, no se ha presentado ningún RTS relacionado al tema FT.

581. (c.13.3 y IV.2) El art. 26 de la Ley ALD, refiere a la obligación de presentar RTS alrededor de operaciones intentadas:

“Artículo 26. Comunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales. Las personas obligadas prestarán especial atención a todas las transacciones, concluidas o no, complejas insólitas, significativas, y a todos los patrones de transacciones no habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente, debiéndolo comunicar inmediatamente a la Intendencia de Verificación Especial.”

582. La disposición anteriormente citada es aplicable para el caso de los RTS en materia FT alrededor de operaciones intentadas, conforme el art. 16 de la Ley CFT:

“Artículo 16. Reporte de Transacciones Sospechosas -RTS-. Las personas obligadas deberán reportar con prontitud y debida diligencia a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, toda transacción que no tenga al parecer una finalidad obviamente lícita, o cuando se sospeche o se tenga indicios razonables para sospechar que existen fondos vinculados con o que pueden ser utilizados para financiar el terrorismo. Para el efecto, las personas obligadas deberán aplicar los procedimientos establecidos al respecto en el reglamento de esta Ley, y en su defecto, en la normativa contra el lavado de dinero u otros activos, inclusive en lo relativo al registro de transacciones inusuales que no sean comunicadas a la autoridad competente.”

583. (c. 13.4) No es necesaria una disposición expresa para presentar RTS, ya sea por LD o por FT, independientemente de que se piense o no que están involucradas cuestiones fiscales o tributarias, pues la Defraudación Tributaria es delito en Guatemala y constituye delito precedente de LD

584. Elemento adicional (c. 13.5) No existe una obligación expresa que oriente a las APNFD a presentar RTS por sospechar que los fondos están vinculados a actos criminales distintos al LD y FT, que pudiesen ser delitos precedentes de los mismos, sin embargo el artículo 16 de la Ley CFT establece la obligación de informar a la IVE, toda transacción que no tenga al parecer una finalidad obviamente lícita, extremo que podría interpretarse en su sentido amplio como relacionado con cualquier delito precedente

585. (c. 14.1) Las APNFD no tienen protección legal expresa por responsabilidades en ocasión de presentar RTS, por cuanto la Ley CFT y su Reglamento no establecen que a este tipo de entidades también le es aplicable la protección prevista para las instituciones financieras en el art. 30 de la Ley ALD. Sin embargo sí disponen de protección en cuanto a que no puede argumentarse violación de confidencialidad en su contra por el hecho de presentar un RTSs, dado que les aplica el artículo 28 de la Ley CLD sobre suministro de cualquier información a la IVE.

586. (c. 14.2) En el ordenamiento jurídico guatemalteco, no existen disposiciones por las cuales se prohíba a las APNFT y sus funcionarios, revelar el hecho de que un RTS está siendo presentado, y por consiguiente no se prevé sanciones sobre este aspecto.

587. Elemento adicional (c. 14.3). En la Ley ALD se prevé la confidencialidad que debe mantener la IVE, lo cual incluye la no revelación de los funcionarios y empleados de los Sujetos Obligados que presentan los RTS.

“Artículo 27. Reserva de la información solicitada. Las personas obligadas no podrán hacer del conocimiento de persona alguna, salvo a un Tribunal o al Ministerio Público, que una información le ha sido solicitada o la ha proporcionado a otro tribunal o autoridad competente.”

“Artículo 36. Reserva. Con el objeto de garantizar la reserva de las operaciones financieras, las personas que integran la Intendencia de Verificación Especial y cualquier otra persona que por razón del cargo conozca o tenga acceso a la información relacionada en esta ley, están obligadas a mantenerla en reserva, aún después de haber cesado en el cargo.”

Control interno y auditorías en APNFDs

588. (c. 15.1) Las APNFD no están obligadas expresamente a contar con Programas de Prevención LD/FT que incluya políticas y procedimientos de PLD/FT; y por iniciativa propia aún no lo implementan.

589. (c. 15.2) Las APNFD no están obligadas expresamente a contar con Programas de Prevención LD/FT que incluya el tema de Auditorías independientes sobre dicho Programa; y por iniciativa propia aún no lo implementan.

590. (c. 15.3) La APNFD apenas están en proceso de inscripción ante la IVE, y en las primeras reuniones de acercamiento y familiarización con el tema. Es mínima la capacitación que han recibido.

591. (c. 15.4) Las APNFD no están obligadas expresamente a contar con Programas de Prevención LD/FT que incluya políticas y procedimientos para aplicar altos estándares en la contratación de empleados.

592. (c. 15.5) Las APNFD no están obligadas expresamente a contar con Programas de Prevención LD/FT que incluya el tema del Oficial de Cumplimiento y su labor independiente; y por iniciativa propia aún no lo implementan

Atención a países de alto riesgo

593. (c. 21.1) Las APNFD no están obligadas expresamente a contar con Programas de Prevención LD/FT que incluya el tema del monitoreo especial a países que no aplican las Recomendaciones del GAFI; y por iniciativa propia aún no lo implementan

594. (c. 21.2) Las APNFD no están obligadas expresamente a contar con Programas de Prevención LD/FT que incluya el tema del monitoreo especial de transacciones vinculadas a países que no aplican las Recomendaciones del GAFI; y por iniciativa propia aún no lo implementan

595. (c. 21.3) Las APNFD no están obligadas expresamente a contar con Programas de Prevención LD/FT que incluya contramedidas ante países que no aplican las Recomendaciones del GAFI; y por iniciativa propia aún no lo implementan

4.2.2. Recomendaciones y Comentarios

596. Establecer en la legislación, de manera expresa para todos los APNFD, incluyendo a los Abogados, Notarios, Contadores y Casinos:

- La obligación de contar con Programas de Prevención para prevenir tanto el LD como el FT, incluyendo una permanente capacitación sobre la materia.
- La obligación de presentar RTS sobre LD y sobre FT.
- La protección legal por responsabilidades en ocasión de presentar RTS.
- Sanciones por incumplir la prohibición de revelar información en ocasión de un RTS.

597. Acelerar y fortalecer el proceso de acercamiento y concienciación en Prevención LD/FT, con todos los sectores de APNFD.

598. Concretar una efectiva labor de realimentación de la IVE hacia los APNFD sobre las decisiones y resultados alrededor de los RTS.

599. Fortalecer la labor de supervisión de la IVE sobre las APNFD.

4.2.3. Cumplimiento de las Recomendaciones 16

	Calificación	Resumen de los factores afines a la s.4.2 que apoyan la Calificación general
R.16	NC	<ul style="list-style-type: none"> • No existe obligación legal expresa y directa para que las APNFD (con excepción de loterías, rifas y similares) presenten RTS sobre LD conforme el art. 26 de la Ley ALD, únicamente están obligadas al RTS sobre FT conforme el art. 16 de la Ley CFT y art 7 del Reglamento a la Ley CFT. • Hay un Sector de las APNFD, constituidos por Abogados, Notarios y Contadores, a los que la Ley CFT expresamente los exime de la obligación de presentar RTS sobre FT, y conforme lo señalado en el factor de calificación anterior, tampoco están obligados a presentar RTS en LD, ni ante la IVE, ni ante alguna autoridad de autorregulación;. En ambas situaciones no se especifica el motivo, la delimitación o el contexto en el que opera dicha exención como podría ser el privilegio profesional legal o el secreto profesional legal. • Es nulo el cumplimiento de los RTS en el sector de los APNFD. La IVE está iniciando trabajos de registro y primeras reuniones de acercamiento con este sector obligado. • No existe una obligación expresa que oriente a que los RTS se estructuren y presenten independientemente de que se piense, o no, que están involucradas cuestiones fiscales o tributarias. • No existe realimentación de la IVE hacia los APNFD sobre las decisiones y resultados alrededor de un RTS: por ejemplo si prestó mérito para subsecuente investigación y/o judicialización; o si del análisis se concluyó que la transacción reportada era lícita. • Las APNFD no están obligadas expresamente por ley a desarrollar Programas de PLD/FT que incluyan políticas y controles internos para monitorear riesgos, capacitación y auditorías; y la mayoría de las APNFT no ha desarrollado Programas PLD/FT por iniciativa propia. • Los proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos no están previstos en las leyes y reglamentos de la materia como Sujetos Obligados a la Prevención LD/FT, y por consiguiente no están obligados a presentar RTS. • El negocio de Casinos es una realidad innegable en el país pese a estar prohibido por la ley (según interpretación amplia del Código Penal compartido por las autoridades locales); lo que en la práctica se traduce en que este sector (reconocido como vulnerable pero no obligado por Ley) no esté sujeto a ninguna obligación de contar con Programa de Prevención LD/FT ni de

	<p>presentar RTS conforme los estándares internacionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las APNFD no tienen protección legal expresa por responsabilidades en ocasión de presentar RTS, por cuanto la Ley CFT y su Reglamento no establece que a este tipo de entidades también le es aplicable la protección prevista para las instituciones financieras en el es el art. 30 de la Ley ALD: • En el ordenamiento jurídico guatemalteco, no existen disposiciones por las cuales se prohíba las APNFT y sus funcionarios, revelar el hecho de que un RTS está siendo presentado, y por consiguiente no se prevé sanciones sobre este aspecto.
--	--

4.3. Regulación, supervisión y monitoreo (R. 24-25)

4.3.1. Descripción y Análisis

600. En Guatemala la IVE es la autoridad para supervisar, monitorear y aplicar medidas sancionadoras en materia ALD/CFT a todos los Sujetos Obligados; sin embargo en cuanto a las APNFD, apenas está iniciando el proceso de inscripción y aún no cuenta con un manual para la supervisión efectiva de este sector, del que están excluidos los Casinos que sí operan en el país sin ningún tipo de control, tornándose como un negocio aún más vulnerable para el LD/FT.

Casinos

601. (c. 24.1) El negocio de Casinos es una realidad innegable en Guatemala pese a estar prohibido por la ley según interpretación del Código Penal expresada por autoridades locales, lo que debe ser punto de suma preocupación para el país por cuanto en la práctica se traduce en que este sector, reconocido por los estándares internacionales como altamente vulnerable: 1) funcionen sin ninguna licencia; 2) no estén incluidos en las Leyes ALD y CFT como Sujetos Obligados a contar con Programas ALD/FT; 3) no están obligados a presentar RTS; 4) no estén sujetos a un régimen efectivo de regulación y supervisión integral en políticas ALD/CFT; 5) no cuenten con una autoridad estatal que los monitoree y sancione en materia ALD/CFT; 6) no se puedan determinar indicios que por iniciativa propia o autorregulaciones estén implementando de manera efectiva algunas medidas ALD/CFT; 7) no prevengan que delincuentes controlen, participen, gerencien o se beneficien del negocio; y 8) por lo anterior, están expuestos por completo a ser permeados por el crimen organizado.

Otros APNFDs

602. (c. 24.2) En Guatemala, las APNFD son instituidos a través de Ley CFT del año 2005, en cuyos artículos 18 y 7, respectivamente, se establece lo siguiente:

“Artículo 18. Régimen especial. Se crea un régimen de personas que, por la naturaleza de sus actividades, estarán obligadas a proporcionar a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, las informaciones y reportes, cuando ésta se los requiera, para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, permitirán a dicha Superintendencia, el libre acceso a todas sus fuentes y sistemas de información para la verificación o ampliación de las informaciones proporcionadas por ellas mismas, o cuando esto sea necesario para el análisis de casos relacionados con el financiamiento de terrorismo.

Este régimen especial será aplicable a las personas individuales o jurídicas que realicen las siguientes actividades:

- a) Actividades de promoción inmobiliaria o compraventa de inmuebles;*
- b) Actividades de compraventa de vehículos automotores;*

- c) *Actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos;*
- d) *Actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades;*
- e) *Notarios, Contadores Públicos y Auditores; y Contadores; y*
- f) *Cualquier otra actividad que por la naturaleza de sus operaciones pueda ser utilizada para el financiamiento del terrorismo, para lo cual, el Presidente de la República podrá hacer extensivo el régimen especial establecido por el presente artículo a cualquier otro tipo de actividades.*

En todo lo demás les serán aplicables las obligaciones que establecen los artículos 16 de la presente Ley y 28 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, salvo para el caso de las personas indicadas en la literal e) del presente artículo, quienes no estarán obligadas a cumplir con lo dispuesto en el artículo 16 de la presente Ley.”

“Artículo 7. Reporte de Transacciones Sospechosas de Financiamiento del Terrorismo –RTS/FT– Para efectos del cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Ley, las personas obligadas que indican los artículos 15 y 18 de la misma, deben aplicar el formulario diseñado por la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, y observar los plazos y procedimientos establecidos en el artículo dieciséis 16 del Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos. (...)

(...) Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo final del artículo 18 de la Ley, las personas obligadas que indica la literal e) de dicho artículo, podrán reportar transacciones sospechosas de financiamiento del terrorismo o bien presentarán denuncia penal ante autoridad competente cuando tengan conocimiento de la posible comisión de alguno de los delitos tipificados en la Ley.”

603. Todas las Personas Obligadas designadas en las normativas contra LD/FT, independientemente que estén o no bajo la vigilancia e inspección directa de la Superintendencia de Bancos, pueden ser supervisadas in-situ por la IVE a efecto de establecer el cumplimiento de las normativas contra LD/FT correspondientes. La IVE es la autoridad competente para supervisar, monitorear y sancionar a las APNFD en materia ALD/CFT de acuerdo con los artículos 18, 19 y 20 de la Ley CFT; y actualmente cuenta (dentro de niveles de razonabilidad) con personal y recursos técnicos para desempeñar estas funciones.

604. La IVE aún no cuenta con procedimientos y/o manual para la supervisión efectiva de las APNFD en materia ALD/CFT, lo cual afecta la implementación efectiva de esa función.

605. La Ley CFT es de agosto del 2005, sin embargo es hasta el 24 de abril del 2009 (menos de 2 meses antes de la visita de la Misión Evaluadora) que la Superintendencia de Bancos, a través de la IVE, emitió el Oficio IVE No. 424-2009, por el cual hace del conocimiento a las APNFD que están sujetas a cumplir con las normas legales y regulaciones sobre Prevención LD y FT, y por ende las llama a inscribirse ante la IVE.

606. Al momento de la visita de Evaluación del GAFIC, la IVE apenas está en proceso de registro de las APNFD y de las primeras reuniones de acercamiento con este sector, razón por la cual aún no se puede hablar de labor en marcha de una efectiva supervisión, monitoreo y de adopción de medidas sancionadoras por parte de la IVE; ni existen estudios que soporten que el sector de las APNFD representan un riesgo menor probado ante lo cual pueda estar justificado cualquier atenuación de las medidas ALD/CFT.

607. Las mismas autoridades reconocen que se necesita un mayor control georeferencial de operaciones en efectivo y de transferencias nacionales e internacionales de las Personas Obligadas Bajo Régimen especial (APNFD), asimismo se requieren directrices a las Instituciones Financieras para que

pongan especial atención en las cuentas de estas entidades (APNFD) a fin de identificar operaciones sospechosas oportunamente.

Guías para APNFDs

608. (c. 25.1) La tarea de realimentación que deben recibir los Sujetos Obligados de parte de las autoridades competentes, en especial la IVE en su rol de UIF, se prevé en el art. 25 del Reglamento de la Ley ALD.

“Artículo 25. Comunicación de nuevos patrones de lavado de dinero u otros activos. En los casos en los que, derivado del análisis de la información obtenida, de los patrones internacionalmente conocidos y de comunicaciones recibidas de instituciones especializadas, se determine la existencia de patrones de lavado de dinero u otros activos, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, deberá comunicar a las personas obligadas, por los medios que estime conveniente, las nuevas formas de operar en el lavado de activos, para que éstas tomen las medidas preventivas correspondientes.

Adicionalmente, la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, podrá instruir a las personas obligadas, en la forma que considere pertinente, acerca de nuevas medidas que deberán implementar, dentro del ámbito de la legislación aplicable, para prevenir que su institución sea utilizada en el lavado de dinero u otros activos.”

609. Al momento de la visita de Evaluación, la IVE apenas está en proceso de registro de las APNFD, pese a estar obligados por la Ley CFT desde el año 2005. La IVE está en las primeras reuniones de acercamiento con este sector convocado por medio de Oficio IVE No. 424-2009; razón por la cual aún no se puede hablar de labor efectiva de realimentación, directrices y lineamientos en materia ALD/CFT para los APNFD a tono con el referido art. 25 del Reglamento a la Ley ALD; ni se puede confirmar que las APNFD estén implementando efectivamente medidas ALD/CFT.

610. No obstante lo anterior, las autoridades de la IVE informaron que se están haciendo esfuerzos en relación a las APNFD, por ejemplo, 1) se les está informando sobre las principales obligaciones que deben observar en esta materia: Registro ante la IVE, Reporte de Transacciones en Efectivo, Reporte de Transacciones Sospechosas, entre otras; 2) que al momento de inscribirse se les está entregando el documento denominado “Instructivo sobre medidas de prevención contra el lavado de dinero u otros activos”, aprobado por Oficio IVE No. 247-2003 del 19 de mayo de 2003; y 3) que están recibiendo la remisión trimestral (dirigido a todos los Sujetos Obligados) de un Boletín Electrónico Informativo de la IVE, por el cual, entre otros aspectos, se hace referencia a las fuentes de información sobre los Informes de Tipologías emitidos por GAFIC y GAFISUD.

611. Cabe señalar que los lineamientos y directrices ALD/CFT que recientemente está implementando la IVE a través de la Guía No. SBR 01/09 denominada “ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS Y DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO -LD/FT-” notificada a través del Oficio IVE No. 434-2009 de abril del 2009 (menos de 2 meses antes de la visita de la Misión Evaluadora); no son aplicables al sector de la APNFD, sino que solamente a un sector de las instituciones financieras: Bancos, Sociedades Financieras y Entidades Fuera de Plaza (Bancos off-shore).

612. Ninguna autoridad estatal distinta a la IVE, u organizaciones gremiales y/o de autorregulación en el sector de las APNFD, ha desarrollado lineamientos en materia ALD/FT.

4.3.2. Recomendaciones y Comentarios

613. **R.24:** Incluir como Sujetos Obligados a prevenir el LD y el FT, a los casinos.

614. Establecer en la legislación de manera expresa que todos los APNFD estén sujetos a regulación especial, y a una efectiva y permanente supervisión y monitoreo en PLD/FT.
615. Debe la IVE contar con un Manual para una efectiva supervisión en PLD/FT a las APNFD.
616. **R.25:** Acelerar y fortalecer el proceso de acercamiento y concienciación en Prevención LD/FT con todos los sectores de APNFD, de parte de la IVE, y dar paso a una efectiva política de realimentación y directrices en la materia.
617. Debe la IVE emitir Guía para la Administración de Riesgos LD/FT dirigida a las APNFD, al igual que lo hizo con los Bancos, Sociedades Financieras y Entidades Fuera de Plaza (Bancos off-shore).
618. Fomentar la autorregulación gremial entre las APNFD en materia PLD/FT.

4.3.3. Cumplimiento de las Recomendaciones 24 y 25 (criterio 25.1, APNFD)

	Calificación	Resumen de los factores afines a la s.4.3 que apoyan la Calificación general
R.24	NC	<ul style="list-style-type: none"> El negocio de Casinos es una realidad innegable en Guatemala, pese a estar prohibido conforme al Código Penal. A pesar de que no se hace efectiva la prohibición para Casinos, tampoco están sujetos a licencias previas para operar; ni son Sujetos Obligado a Prevenir el LD/FT; ni existe ninguna autoridad estatal o de autorregulación que los supervise, los monitoree y les aplique medidas sancionadoras en materia ALD/CFT. La IVE está en proceso de registro de las APNFD y de las primeras reuniones de acercamiento con este sector, por lo cual aún no existe en marcha una efectiva supervisión, monitoreo y adopción de medidas sancionadoras por parte de la IVE. La IVE aún no cuenta con procedimientos y/o manual para la supervisión efectiva de las APNFD en materia ALD/CFT.
R.25 (c.25.1 – APNFD)	MC	<p>(c.25.1)[NC con respecto a APNFD]</p> <ul style="list-style-type: none"> No existe aún una labor efectiva de realimentación, directrices y lineamientos en materia ALD/CFT para los APNFD. La IVE está en las primeras reuniones de acercamiento con este sector convocado por medio del reciente Oficio IVE No. 424-2009 Ninguna autoridad gremial y/o de autorregulación en el sector de las APNFD ha desarrollado lineamientos en materia ALD/FT.

4.4. Otros negocios y profesiones no financieras; Técnicas modernas de pago (R.20)

4.4.1. Descripción y Análisis

Otras actividades no financieras

619. La lista de Sujetos Obligados, especialmente los del “régimen especial” previsto en la Ley CFT art. 18, incluye como obligadas a varias categorías de negocios distintas de las APNFD previstas en las recomendaciones del GAFI, entre ellas las actividades de compraventa de vehículos automotores y las

actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades. Además, el inciso “f” del art. 18 de la Ley CFT y el inciso “g” del art. 18 de la Ley ALD permite la posibilidad de incluir otras actividades como Sujetos Obligados.

620. Las autoridades de Guatemala cuentan con información sobre las vulnerabilidades y tendencias de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, los tipos de delitos predicados que están generando activos ilícitos (sean por delitos internos o cometidos en el extranjero), cálculos de montos de dinero que mueve el crimen organizado a nivel interno, así como sus métodos y técnicas. Dichos estudios lo agrupan alrededor de tres criterios principales: 1) FUENTE (Criterio= Delito Subyacente): a) Narcoactividad; b) Corrupción; c) Secuestro; d) Robo; e) Extorsiones; f) Venta de armas; g) Contrabando; h) Crimen organizado; i) Evasión Tributaria. 2) UBICACIÓN (Criterio= Geográfico): a) Ciudad Capital; b) Departamento de Guatemala; c) Zonas Fronterizas; d) Zona oriente; e) Zona norte. 3) CONCENTRACIÓN (Criterio= Actividad Económica): a) Sistema Financiero; b) Sector APNFD; c) Actividad Remesadora; d) Movimientos de Efectivo Físico; e) Economía Informal, la cual de mucha presencia y significación a nivel nacional, no se encuentra, del todo, bajo regulaciones de prevención LD-FT.

621. Según estudios citados por las autoridades, el negocio inmobiliario y otras actividades comerciales administradas por entidades o asociaciones no lucrativas como casinos, apuestas y equipos de fútbol, así como comercialización de ganado (principalmente en el área fronteriza con Honduras y El Salvador) y además un gran número de pequeñas y medianas empresas desarrolladas por comerciantes individuales (muchos de los cuales operan informalmente); tienen un alto volumen de manejo de efectivo y reflejan alta vulnerabilidad de LD/FT. Las casas de apuestas, las casas de empeño y los asesores de inversión aún no son considerados, expresamente, como Sujetos Obligados.

622. Las mismas deficiencias señaladas con respecto a los APNFD son aplicables las actividades de compraventa de vehículos automotores y las actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades. Sin embargo, de acuerdo con decisiones antecedentes del GAFI sobre esta materia, el hecho de que la ley incluya una nueva categoría de sujetos obligados es suficiente para que la Recomendación 20 se considere cumplida, pues en ella sólo se exige a los países “considerar” la ampliación del listado de sujetos obligados. En ese sentido, a diferencia de lo que ocurre con los APNFD que sí son obligatorios en las recomendaciones del GAFI, la falta de supervisión y de implementación práctica de las obligaciones antilavado por parte de las actividades de compraventa de vehículos automotores y las actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades en Guatemala no afecta la calificación de esta recomendación.

Medios modernos de pago para reducción de efectivo

623. El nivel de profundización financiera y de bancarización del país es relativamente bajo, sin embargo en los últimos años el Sistema Financiero ha venido creciendo en cobertura geográfica con puntos de servicio en áreas urbanas de toda la República en un esfuerzo por mejorar la atención a sus clientes, y con una alta concentración en el área metropolitana. Aunado al ya tradicional Sistema de Pago vía Tarjetas de Crédito y de Débito, es importante resaltar que actualmente algunas entidades bancarias están ofreciendo el uso de medios de pago electrónico vía teléfonos celulares, lo cual coadyuvará en la disminución del uso de efectivo.

624. Conscientes que entre mayor sea la utilización de dinero en efectivo así también mayores son las probabilidades de contratos de índole criminal, las autoridades expresaron que focalizarán esfuerzos en empresas grandes y medianas para establecer procedimientos ágiles y sencillos a fin de ir reduciendo el uso de efectivo en grandes transacciones.

625. En cuanto a los Sistemas Monetario y de Pagos Interbancarios, esta función le corresponde a la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, conforme el art. 132 de la Constitución Política

626. El Banco de Guatemala, media la Resolución de Junta Monetaria JM-51-2003 del año 2003, realiza esfuerzos por modernizar el Sistema de Pagos con la finalidad de hacer funcional la liquidación de operaciones entre entidades bancarias, con lo cual, entre otros objetivos, persigue coadyuvar a la administración del riesgo de liquidez a las entidades bancarias. Además una parte fundamental de la modernización lo constituye la funcionalidad del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real (LBTR) a tono con las tendencias y principios internacionales sobre la materia; la aprobación del reglamento de la Cámara de Compensación Bancaria; la contratación de un administrador privado para la administración del proceso de compensación de cheques; la adquisición, mediante el régimen de licitación pública, de un sistema de liquidación bruta en tiempo real, y la contratación de una red de comunicación privada para la liquidación de las operaciones a nivel nacional.

4.4.2. Recomendaciones y Comentarios

627. Tomar las medidas necesarias para empezar a exigir el cumplimiento de las obligaciones impuestas sobre los nuevos sujetos obligados: actividades de compraventa de vehículos automotores y las actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades.

628. Desarrollar trabajo efectivo a partir de los estudios de vulnerabilidades de LD/FT en los APNFD distintas a los recomendados por GAFI.

629. Continuar los esfuerzos por profundizar el nivel de bancarización del país, la modernización del sistema de pagos y la simplificación de los pagos por vía electrónica, teniendo cuidado de cubrir los riesgos de LD/FT implícitos en nuevas tecnologías.

4.4.3. Cumplimiento de la Recomendación 20

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.20	C	[cumplida]

5. ESTRUCTURAS JURÍDICAS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

5.1. Personas Jurídicas – Acceso a la información sobre beneficiario y control (R.33)

5.1.1. Descripción y Análisis

630. El Registro Mercantil de Guatemala es la institución pública donde se inscriben las sociedades mercantiles y demás personas jurídicas nacionales y extranjeras, atendiendo a las normas y preceptos establecidos en el Código de Comercio y el Decreto N° 2-70 que crea este Organismo.

631. En Guatemala están sujetos a la inscripción en el Registro Mercantil: los comerciantes individuales, las sociedades mercantiles, las empresas y establecimientos, los auxiliares de comercio, los hechos y relaciones jurídicas que especifiquen las leyes del país y las modificaciones que se efectúen a los hechos registrados. En cuanto a las sociedades organizadas bajo forma mercantil, se autorizan las siguientes:

- 1°. La sociedad colectiva.
- 2°. La sociedad en comandita simple.
- 3°. La sociedad de responsabilidad limitada.
- 4°. La sociedad anónima.

5°. La sociedad en comandita por acciones.

632. (c. 33.1) El Registro Mercantil mantiene información de los representantes legales de las sociedades mercantiles y sus modificaciones; no obstante, el mismo no permite obtener información del beneficiario real o personas naturales que ejercen el control de la sociedad, específicamente cuando se trata de acciones al portador, cuya emisión es autorizada por el marco jurídico de ese país.

633. Los hechos y relaciones jurídicas registradas en torno a las sociedades mercantiles son: la cancelación de empresas, la disolución de sociedades, la cancelación de mandatos, la sustitución y cancelación de representantes legales, el aumento de capital en las sociedades accionadas, la modificación de escrituras constitutivas de sociedades y el aviso de emisión de acciones.

634. Según afirmaron las propias autoridades guatemaltecas, en este momento el país no cuenta con un sistema de registro central de los accionistas de las sociedades en el que se deje constancia sobre la propiedad y control de las sociedades mercantiles y demás personas jurídicas en ese país.

635. Durante la visita in situ, el equipo de examinadores fue informado por el Registro Mercantil de la existencia de un Ante-Proyecto de Ley que modifica el Código de Comercio, el cual contempla entre otros aspectos los siguientes: la eliminación de las acciones al portador en todo tipo de sociedades que se constituyan a partir de la modificación de la normativa; la regulación de las sociedades de prestación de servicios públicos con capital mixto (51% de capital estatal, 49% de capital privado y acciones nominativas), entre otras disposiciones.

636. (c. 33.2) Las autoridades competentes del país pueden tener acceso solamente a los datos de constitución y modificación de las personas jurídicas inscritas en el Registro Mercantil; sin embargo, esta información no contempla la relativa al beneficiario real y las personas o individuos que ejercen el control de las personas jurídicas, según el mandato establecido por las recomendaciones el GAFI aplicables.

637. El Registro Mercantil informó al equipo de evaluadores que brindan colaboración a diferentes autoridades competentes, a través de un promedio de ciento ochenta y cinco (185) informes diarios requeridos por instituciones públicas como la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público, los Juzgados, entre otros.

638. (c. 33.3) En sentido general, no existen Lineamientos ALD/CFT específicos expedidos por el Registro Mercantil u otra Autoridad; por lo que, en consecuencia, no existe una política establecida que aborde las medidas para impedir el uso ilícito de las personas jurídicas por los lavadores de dinero u organizaciones dedicadas a financiar actos terroristas dictadas por esta entidad, no obstante este tema queda cubierto con la normativa antes descrita en este informe.

639. Elemento adicional (c. 33.4) La Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (Decreto N° 67-2001) dispone que las personas jurídicas deberán llevar un registro de las personas individuales o jurídicas con las que establezcan relaciones comerciales o relaciones del giro normal o aparente de sus negocios, sean estos clientes ocasionales o habituales; y de las operaciones que con ellas se realicen, particularmente en lo que se refiere a la apertura de nuevas cuentas, la realización de transacciones fiduciarias, arrendamiento de cajas de seguridad, entre otras.

640. A pesar de las obligaciones de Debida Diligencia que establece la normativa ALD-CFT del país en el caso de relaciones de negocios que gestionen las instituciones financieras con personas jurídicas, en la práctica se dificulta el cumplimiento de esta normativa toda vez que la información disponible al público en el Registro Mercantil, solo permite certificar cierta información de las personas jurídicas registradas, no así de los datos necesarios que permitan determinar la identidad de los beneficiarios

reales o sujetos que ostenten el control de las personas jurídicas a través de la propiedad accionaria en Sociedades Anónimas.

641. No existen medidas y/o prácticas registrales que faciliten a las autoridades e instituciones financieras al acceso a la información de los beneficiarios reales o sujetos que ejercen el control de las personas jurídicas a través de la propiedad de acciones al portador.

642. Las autoridades deberían aplicar medidas de identificación de los beneficiarios reales o de control de las personas jurídicas, y otras medidas dirigidas a prevenir el uso indebido de las personas jurídicas en general y particularmente de aquellas que emiten acciones al portador para la consecución de actividades ilícitas relacionadas con el Lavado de Dinero o el Financiamiento del Terrorismo.

5.1.2. Recomendaciones y Comentarios.

643. Capacitar al personal del Registro Mercantil y de las entidades declarantes guatemaltecas sobre las medidas ALD/CFT.

644. Aprobar las normas legales que ordenen la transparencia adecuada en cuanto a la identidad sobre el usufructuario y control de las personas jurídicas.

645. Adoptar marcos jurídicos y guías relacionadas con la prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo, a través de personas jurídicas.

5.1.3. Cumplimiento de la Recomendación 33

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.33	NC	<ul style="list-style-type: none"> • La legislación nacional permite la emisión de acciones al portador, no siendo posible a las autoridades y sujetos obligados tener acceso a información que permita conocer la identidad del beneficiario o usufructuario real, así como de los sujetos que controlen las personas jurídicas. • Las autoridades competentes y entidades declarantes no tienen acceso a información sobre los beneficiarios reales de las personas jurídicas o los sujetos quienes ejercen el control de estas últimas. • La ley y las reglamentaciones ALD/LFT no han abordado, a través de normas específicas el mecanismo para prevenir y controlar el posible abuso de las personas jurídicas, particularmente de las sociedades mercantiles que puedan emitir acciones al portador, en actividades de Lavado de Dinero o de Financiamiento del Terrorismo. • La información que se encuentra disponible en el Registro Mercantil si bien es de dominio público, no está actualizada y actualmente no existen los mecanismos adecuados que permitan esta actualización.

5.2. Estructuras Jurídicas - información sobre beneficiario y control (R.34)

5.2.1. Descripción y Análisis.

646. El Código de Comercio establece que solo podrán constituirse en fiduciarios los bancos e instituciones de crédito establecidos en territorio guatemalteco, siempre que cuenten con la autorización de la Junta Monetaria (Artículo 768 del Código de Comercio). Por su parte, los fideicomisos pueden ser de las siguientes clases: Fideicomisos de Garantía, de Inversión, de Administración o Mixtos. Estos fideicomisos son objeto de vigilancia y supervisión en materia ALD/CFT por parte de la Intendencia de

Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos de Guatemala siendo que por virtud de Ley únicamente los Bancos pueden ser fiduciarios en un contrato de fideicomiso.

647. Por su parte, para los Fideicomisos Públicos, se creó a partir del 2007 una unidad o área administrativa especializada dentro de la estructura organizativa de la Contraloría General de Cuentas, denominada Dirección de Fideicomisos, la cual se encarga de realizar auditorías a los recursos fideicomitidos del Estado.

648. (c. 34.1) La IVE en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos, exige en torno a los formularios para el inicio de relaciones de fideicomisos lo siguiente:

1. Que el fiduciario solicite a los fideicomitentes y fideicomisarios completar los formularios de inicio de relaciones con su respectiva documentación de respaldo.
2. Para aquellos casos en los que el contrato de fideicomiso conlleve la administración de alguna cartera crediticia, el fiduciario deberá solicitar que el fideicomitente y/o fideicomisario, cada uno de los que integre dicha cartera, llene el formulario respectivo.

649. Advierte el procedimiento instaurado por la IVE que en aquellos casos en que por la naturaleza del fideicomiso se imposibilite poder completar y documentar los formularios, el fiduciario deberá solicitar esta información al fideicomitente que estuviere aportando al fideicomiso la cartera correspondiente, a efecto de poder aplicar en parte, la política de conocimiento del cliente.

650. Además a las medidas descritas, cada fiduciario es responsable de aplicar políticas, programas y procedimientos con el fin de dar cumplimiento a las normas nacionales ALD/CFT.

651. (c. 34.2): De conformidad con la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos, la totalidad de entidades públicas o privadas quedan obligadas a prestar la colaboración que les solicite la Superintendencia de Bancos a través de la IVE, para la realización de los objetivos de la referida Ley (artículo 20).

652. Con relación a los bancos e instituciones de crédito, a las mismas se les exige información adecuada, precisa y actualizada sobre el usufructuario y control para los sujetos intervinientes en el contrato de fideicomiso: fideicomitente, el fiduciario y los beneficiarios de los fideicomisos.

653. (c. 34.3): Las autoridades del país mencionaron que a partir del 21 de abril de 2009, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, aprobada mediante Decreto 57-2008 del Congreso de la República, cuyo objeto es garantizar el derecho a petición y acceso a información pública en posesión de autoridades y sujetos obligados por dicha Ley, los fideicomisarios y fideicomitentes de los fideicomisos que se constituyan o administren con fondos públicos o provenientes de préstamos, convenios o tratados internacionalmente suscritos por la República de Guatemala, son sujetos obligados a cumplir con todas las disposiciones enmarcadas en dicha Ley.

5.2.2. Recomendaciones y Comentarios.

654. Sería conveniente mayor capacitación en materia ALD/CFT dirigida al personal de las autoridades encargadas de fiscalización de los contratos de fideicomiso y de las entidades financieras que ofrecen estos servicios en calidad de fiduciarios. Asimismo, sería propicio la publicación de guías sobre medidas para prevenir, detectar y controlar el uso de los servicios fiduciarios en actividades de Lavado de Dinero o Financiamiento del Terrorismo.

5.2.3. Cumplimiento de la Recomendación 34

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.34	MC	<ul style="list-style-type: none"> Efectividad: Aún cuando sólo entidades de crédito supervisadas pueden ser proveedores de servicios fiduciarios y deben cumplir la misma normativa ALD/CFT, se requiere dotarlos de mayores guías e instructivos especializados, y un mejor cumplimiento de medidas para estos servicios.

5.3. Organizaciones sin fines de lucro (RE.VIII)**5.3.1. Descripción y Análisis**

655. Resumen: La legislación guatemalteca, en general, obliga al registro, licencias y controles contables y tributarios de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), cuya información está disponible para las autoridades competentes, e incluso para el público en general conforme la Ley de Acceso a la Información. Las OSFL que están sometidas a un mayor monitoreo son las que perfilan como Sujetos Obligados ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE) en razón del giro de su actividad: créditos, remesas y loterías, las cuales están obligadas a mantener archivos de sus transacciones por un período de cinco años. Existen otras OSFL que además son controladas por la Contraloría General de Cuentas la República en razón de manejar fondos públicos para ejecutar obras sociales.

656. Sin embargo, no existe una supervisión y monitoreo efectivo sobre las OSFL, ni medidas efectivas que aseguren investigaciones, recopilación y rápido intercambio de información sobre las OSFL en general, ni comunicación fluida entre las entidades estatales que manejan información sobre la OSFL, ni respuestas a solicitudes internacionales de información por investigaciones ante sospechas de actividades terroristas, incluyendo el financiamiento. Tampoco se conocen estudios sobre vulnerabilidad de este sector ante los riesgos de LD/FT, ni sobre los niveles de corrupción, ni sobre los recursos financieros que manejan, ni sobre sus actividades internacionales. Ninguna OSFL en Guatemala ha sido sancionada por incumplimientos en materia de ALC/CFT puesto que no son Personas Obligadas, sin embargo si existen denuncias presentadas por la IVE que involucran a este tipo de organizaciones en actos de lavado de dinero.

657. Entre las principales leyes guatemaltecas aplicables a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), se encuentra la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (Decreto No. 02-2003 del Congreso de la República de Guatemala), la cual establece una definición de las mismas a partir de su naturaleza y finalidades:

“Artículo 2. Naturaleza. Son Organizaciones No Gubernamentales u ONG"s, las constituidas con intereses culturales, educativos, deportivos, con servicio social, de asistencia, beneficencia, promoción y desarrollo económico y social, sin fines de lucro. Tendrán patrimonio propio proveniente de recursos nacionales o internacionales, y personalidad jurídica propia, distinta de la de sus asociados, al momento de ser inscritas como tales en el Registro Civil Municipal correspondiente. Su organización y funcionamiento se rige por sus estatutos, las disposiciones de la presente Ley, y demás disposiciones jurídicas de carácter ordinario.”

“Artículo 3. Finalidades. Las finalidades de la asociación deberán establecerse en su constitución como ONG, pero en ella deberán incluirse entre otras:

- a) Ser asociación sin fines de lucro y de beneficio social.*
- b) Promover políticas de desarrollo de carácter social, económico, cultural y de ambiente.”*

“Artículo 18. Prohibición de distribuir dividendos. Las Organizaciones No Gubernamentales son personas jurídicas no lucrativas que tienen prohibición expresa de distribuir dividendos, utilidades, excedentes, ventajas o privilegios a favor de sus miembros. Podrán realizar todas las operaciones de lícito comercio que permitan las leyes y en tal forma podrán obtener recursos que deberán utilizar únicamente para el cumplimiento de sus fines.”

658. En Guatemala las OSFL se manifiestan en Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro o en Fundaciones, sin embargo expresamente no son tenidas como “Sujetos Obligados” a prevenir el LD/FT, sino que, encajan en dicha categoría únicamente en razón de su giro principal, tal es el caso, por ejemplo, de Fundaciones dedicadas al microcrédito (microfinanciera), a las remesas, o a la actividad de Lotería y Videoloterías.

659. La única labor de concienciación en prevención de FT en el sector de las OSFL lo desarrolla la IVE; y esto, en razón y según la actividad o giro de negocio conforme el régimen jurídico de la materia. Hasta el momento, esta tarea de la IVE se aplica únicamente sobre aquellas OSFL dedicadas a las Remesas (art. 18, literal “c”, de la Ley ALD, art. 5, Grupo B, “a”, del Reglamento de Ley ALD y art. 15 de la Ley CFT), y muy recientemente (3 o 4 meses antes de la visita de la Misión Evaluadora) sobre aquellas OSFL dedicadas a Loterías y Rifas (art. 5, Grupo B, “j”, del Reglamento de Ley ALD y art. 15 de la Ley CFT).

660. Con la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, y otras regulaciones aplicables (por ejemplo el artículo 18, “f”, de la Ley ALD y el artículo 18, “g”, de la Ley CFT que flexibiliza la inclusión de otras actividades como Sujetos Obligados), distintas autoridades estatales Guatemaltecas cuentan con instrumentos jurídicos razonables para poder requerir y/o obtener información necesaria sobre las OSFL que permitirían ejecutar revisiones y reevaluaciones domésticas periódicas para determinar la idoneidad del régimen jurídico aplicable y el perfil de su riesgos LD/FT.

661. En correspondencia con el giro de las distintas OSFL y conforme distintas leyes, son varias las entidades estatales que manejan información sobre las mismas, y que por consiguiente se erigen en fuentes de datos importantes de cara a prevenir el LD/FT, entre otras: 1) Las municipalidades; 2) El Registro Civil; 3) El Ministerio de Economía; 4) La Superintendencia de Administración Tributaria; 5) El Ministerio de Gobernación: Cuando las OSFL se dedican a la actividad de Loterías y Videoloterías (sorteos electrónicos); 6) La Contraloría General de la República: Cuando las OSFLOSFL reciben fondos públicos, vía licitación, para la ejecución de proyectos sociales estatales o municipales; 7) La Intendencia de Verificación Especial: Cuando se dedican a negocios o actividades que ubica a las OSFL como Sujetos Obligados (créditos, remesas y loterías); y 8) La Superintendencia de Bancos: Cuando las OSFL manejan cuentas en los Bancos y/o figuran como organizadores o socios en los mismos. Sin embargo, no existe comunicación fluida entre estas entidades, salvo entre la Superintendencia de Bancos y la IVE que forman parte de la misma estructura organizacional.

662. Conforme la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, para que las OSFL obtengan su personalidad jurídica deben inscribirse en el Registro Civil de la cabecera municipal de su domicilio, autoridad ésta que, junto con el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria, están llamadas a compartir y actualizar información relevante sobre las OSFL.

“Artículo 10. Inscripción. Las Organizaciones No Gubernamentales para obtener su personalidad jurídica deberán inscribirse en el Registro Civil de la cabecera municipal del lugar en que constituyan su domicilio.

Los registradores civiles municipales deberán autorizar un libro especial para la inscripción de las asociaciones constituidas como Organizaciones No Gubernamentales, en el cual asentarán su constitución y modificaciones, disolución y liquidación, en su caso; además, la inscripción de sus representantes legalmente nombrados y el registro de los libros de actas que autoricen para uso de las Asambleas Generales o de las Juntas Directivas de las ONG"s legalmente constituidas."

"Artículo 11. Aviso de registro. Los registradores civiles municipales dentro del plazo de treinta días posteriores a su inscripción deberán enviar al Ministerio de Economía un aviso que contenga: fecha de escritura de constitución, número de instrumento público, nombre del Notario autorizante, denominación, plazo, domicilio, objetivos, recursos financieros, y nombre del representante legal de la ONG, el número, folio y libro de su inscripción, lugar y fecha."

El Ministerio de Economía llevará un registro de las Organizaciones No Gubernamentales inscritas en todo el país; las cuales están obligadas a informar y actualizar semestralmente la información, e inmediatamente cuando procedan cambios de la información reportada."

"Artículo 13. Contabilidad. Las Organizaciones No Gubernamentales tienen obligación de inscribirse en la Superintendencia de Administración Tributaria, para su registro y control, y de llevar contabilidad completa en forma organizada, así como, los registros que sean necesarios, de acuerdo al sistema de partida doble, aplicando principios de contabilidad generalmente aceptados, y apegada a lo que disponen las leyes del país a ese respecto."

"Artículo 14. Libros. La contabilidad de las Organizaciones No Gubernamentales constará de los libros de inventario, diario, mayor, estados financieros, pudiendo llevarlos de conformidad con los sistemas electrónicos legalmente aceptados, los cuales serán habilitados por la Superintendencia de Administración Tributaria o en sus dependencias departamentales."

"Artículo 15. Donaciones. En los casos en que reciban donaciones, cualquiera que sea su destino, las Organizaciones No Gubernamentales deberán extender a nombre de las personas donantes recibos que acrediten la recepción de las donaciones, en formularios autorizados por la Superintendencia de Administración Tributaria."

663. Los mismos Bancos constituyen una importante fuente de información sobre la OSFL para las autoridades estatales respectivas, principalmente para la Superintendencia de Bancos y para la IVE, toda vez que, conforme lo expresa el art. 17 de la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, dichos organismos pueden depositar sus fondos *"en el Banco de Guatemala o en los bancos del sistema nacional debidamente autorizados para operar en el país."* Cabe señalar que los Bancos generalmente aplican una diligencia intensificada y monitoreo especial a sus clientes que son OSFLOSFL. A manera de referencia, sólo en uno de los Bancos Off-Shore que opera en Guatemala, existen 25 Cuentas de OSFL de carácter filantrópico y compuestas por extranjeros. También la Superintendencia de Bancos tiene acceso directo y actualizado a información sobre OSFLOSFL, toda vez que éstas figuran como organizadores y/o socios de entidades que están bajo su supervisión, lo cual es permitido por la Ley de Bancos y Grupos Financieros.

ARTÍCULO 8. Procedimientos.

"(...) Las personas jurídicas podrán participar como organizadoras y/o accionistas de bancos, siempre que la estructura de propiedad de las mismas permita determinar con precisión la identidad de las personas individuales que sean propietarias finales de las acciones en una sucesión de personas jurídicas. Para los efectos del inciso c) del artículo 7 de esta Ley, los interesados deberán proporcionar a la Superintendencia de Bancos la nómina de los accionistas individuales que posean más del cinco por ciento del capital pagado de dichas personas jurídicas, así como cualquier otra información que dicha Superintendencia considere necesario obtener. Para efectos del cómputo anterior, se sumarán las acciones del cónyuge e hijos menores de edad.(...)"

664. La Superintendencia de Bancos conforme el artículo 4 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, también está facultada para requerir información a las OSFL que reciben depósitos o aportaciones de sus asociados y de terceros:

“ARTÍCULO 4. Excepciones.

Las entidades que reciban depósitos o aportaciones de sus asociados y de terceros, tales como las cooperativas, las sociedades mutualistas, las asociaciones comunitarias de desarrollo, empresas comunitarias asociativas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones privadas de desarrollo, entre otras, y que sean normadas por una ley especial, quedan exceptuadas de las disposiciones de esta Ley. En todo caso, tales entidades estarán obligadas a presentar las informaciones periódicas u ocasionales que les requiera la Superintendencia de Bancos.”

(c. VIII.2).

665. Entre las autoridades estatales que tienen acceso a información sobre las OSFL, únicamente la IVE ha iniciado, recientemente, ciertos trabajos de acercamiento, concienciación y diseminación de información hacia una parte de este sector a fin de prevenir el FT. En febrero del 2009, por medio del Oficio: IVE No. 179-2009, fueron llamados a registrarse ante la IVE los empresas dedicadas a Loterías y Videoloterías, siendo las de mayor presencia a nivel nacional las desarrolladas por ONG's, sin embargo aún no se puede hablar de un programa efectivo de diseminación de información preventiva LD/FT hacia las OSFL. Cabe señalar que los negocios de Loterías son autorizados (previa fianza) e inspeccionados por el Ministerio de Gobernación, que está facultado para autorizar, denegar y revocar licencias, y ante el cual se rinde informes de Estados Financieros cada seis meses, y siempre este Ministerio está presente en los sorteos de la Lotería.

666. No se conoce sobre apuestas por Internet, ni sobre OSFL que manejen Casinos. Cabe señalar que el negocio de Casinos es una realidad innegable en el país pese a estar prohibido por la ley (según interpretación amplia del Código Penal compartido por las autoridades locales); lo que en la práctica se traduce en que este sector (reconocido como vulnerable pero no obligado por Ley) no esté sujeto a ninguna obligación de ALD/CFT. Autoridades del Ministerio de Gobernación afirmaron que han intentado aplicar medidas a las empresas de Casinos, pero éstos han recurrido en acciones de amparo que se encuentran en proceso.

667. Una de estas ONG dedicada a la actividad de Lotería afirmó a la Misión del GAFIC que recibe pocas donaciones y que ya está esbozando los cimientos de su Programa de Prevención LD/FT. Una de las medidas específicas que aplica es la de emitir cheques no negociables a favor de los ganadores de los sorteos, los que son debidamente identificados. No tienen, por el momento, estudios sobre zonas geográficas de mayor incidencia de grandes premios.

668. Existen también OSFL organizadas como Fundaciones y dedicadas a las Microfinanzas y a las Remesas, y como tal son Sujetos Obligados conforme las Leyes ALD y CFT y monitoreadas por la IVE, sin embargo no son supervisadas por la Superintendencia de Bancos a como le correspondería por su carácter de institución de crédito, a tono con el art. 1 de la Ley de Supervisión Financiera:

“ARTÍCULO 1. Naturaleza y objeto.

La Superintendencia de Bancos es un órgano de Banca Central, organizado conforme a esta ley; eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de Guatemala, bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás entidades que otras leyes dispongan.

La Superintendencia de Bancos tiene plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, goza de la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de sus fines, y para velar porque las personas sujetas a su vigilancia e inspección cumplan con sus obligaciones legales y observen las disposiciones normativas aplicables en cuanto a liquidez, solvencia y solidez patrimonial”

669. Pese a los controles que respectivamente realizan la Superintendencia de Administración Tributaria y la Contraloría General de la República (Tribunal de Cuentas) sobre la contabilidad y transparencia de las OSFL que manejan fondos públicos, vía licitación, para la ejecución de obras sociales, este sector se ha visto envuelto en escándalos de corrupción. Algunas autoridades, sin embargo, afirman que se trata de percepción mediática por la influencia de los medios de comunicación. Las autoridades estatales manifestaron que queda mucho por hacer en temas sensibles como transparencia, contabilidad, integridad y confianza pública en la administración y manejo de las OSFL, principalmente en el sector de éstas que están vinculadas a órganos del Estado y Municipios y a las cuales se les encarga la ejecución de obras públicas.

670. Muchos de los RTS presentados por los Bancos se refieren a OSFL y a PEPs (Alcaldes). Sin embargo políticas sobre PEPs es bastante nuevo en Guatemala. Las OSFL dedicadas a actividades de Loterías y Videoloterías, y por lo tanto Sujetos Obligados, hasta la fecha no han presentado RTS.

671. No se obtuvieron indicios de una supervisión y monitoreo efectivo de las OSFL, ni se conoció de estudios sobre LD/FT a través de las OSFL, ni sobre los niveles de corrupción en este sector, ni sobre los recursos financieros que manejan ni sobre sus actividades internacionales.

(c. VIII.3.1).

672. La Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, y otras regulaciones administrativas emitidas por el Ministerio de Gobernación, exigen a las OSFL mantener a disposición de las autoridades información sobre el propósito y objetivos de sus actividades, la identidad de la (s) persona (s) quienes posean, controlen o manejen sus actividades. Estas exigencias se acentúan para aquellas OSFL que son Sujetos Obligados ante la IVE en razón del giro de su actividad (crédito, remesas, loterías). Además, conforme el artículo 6, inciso 29, de la Ley de Acceso a la Información Pública (del año 2008) se tiene como obligados a las Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y Asociaciones que reciban, administren o ejecuten fondos públicos; en virtud de lo cual cual y conforme el art. 1, inciso 3, de dicha Ley; se debe *“Garantizar la transparencia de la administración pública y de los sujetos obligados y el derecho de toda persona a tener acceso libre a la información pública”*.

(c. VIII.3.2):

673. Además de la cancelación o revocación de la Licencia para operar y de la pérdida de su personalidad jurídica, no se conocen otras sanciones aplicables a las OSFL producto de violaciones de medidas o reglas de supervisión. Únicamente para el caso de la OSFL que son Sujetos Obligados ante la IVE en razón del giro de su actividad (créditos, remesas, loterías), las leyes de la materia prevén sanciones pecuniarias en razón de incumplimientos en el tema ALD/CFT, sin embargo en la práctica no se ha aplicado ninguna a este sector.

(c. VIII.3.3):

674. La Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, y por su parte otras regulaciones administrativas emitidas por el Ministerio de Gobernación prevén la obligación de registro y licencia para las OSFL, y esta información está disponible permanentemente.

(c. VIII. 3.4):

675. Solamente para las OSFL que son Sujetos Obligados ante la IVE en razón del giro de su actividad , (créditos, remesas, loterías), pende la obligación legal expresa de mantener archivos durante un período de cinco años y a disposición de las autoridades competentes, sobre sus transacciones domésticas e internacionales.

(c. VIII.4):

676. Sin perjuicio de la labor de la IVE sobre OSFL que son Sujetos Obligados ante la IVE en razón del giro de su actividad , (créditos, remesas, loterías), no se conocen otras medidas efectivas que aseguren investigaciones y recopilación de información sobre las OSFL en general. No existe comunicación fluida entre las entidades que manejan información sobre la OSFL.

(c. VIII.4.1):

677. No existe comunicación fluida entre las entidades que manejan información sobre la OSFL, salvo los esfuerzos que está iniciando la IVE.

678. (c. VIII.4.2 y c. VIII.4.3) La legislación vigente en Guatemala permite el pleno acceso a información sobre la administración y manejo de las OSFL durante el transcurso de una investigación; sin embargo en la práctica no se implementan mecanismos para el rápido intercambio de información entre todas las autoridades que manejan datos sobre las OSFL. Guatemala aún no cuenta con expertis investigativa para examinar a OSFL sospechosas de actividades terroristas.

(c. VIII.5):

679. No se conoce sobre implementación de acuerdos y respuestas a solicitudes internacionales de información sobre OSFL por investigaciones ante sospechosas de actividades terroristas, incluyendo el financiamiento.

5.3.2. Recomendaciones y Comentarios

680. Realizar estudios y evaluaciones sobre vulnerabilidades de LD/FT y corrupción entre las OSFL.

681. Celebrar convenios interinstitucionales e internacionales de colaboración para intercambio de información ante investigaciones por LD/FT en donde se vinculen a las OSFL.

682. Dotar a la IVE de facultad expresa y recursos para materializar una supervisión en PLD/FT para todas las OSFL, principalmente sobre aquellas con porción significativa de recursos financieros o que realizan actividades internacionales; incluyendo expresa potestad sancionadora.

5.3.3. Cumplimiento de la Recomendación Especial VIII

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
RE. VIII	PC	<ul style="list-style-type: none"> Las autoridades estatales pertinentes no desarrollan reevaluaciones periódicas para determinar posibles vulnerabilidades de las OSFL ante el FT. No existe ningún convenio de colaboración entre las autoridades estatales para un fluido intercambio de información ante investigaciones de OSFL.

	<ul style="list-style-type: none"> • Las OSFL que no califican como Sujetos Obligados ante la IVE, no pasan por mayores controles, únicamente son registradas y autorizadas. • No existe labor de supervisión y monitoreo efectivo ALC/CFT en el sector de las OSFL, ni de manera particular sobre aquellas que tienen una porción significativa de recursos financieros o de actividades internacionales en dicho sector. • No se han hecho estudios sobre corrupción en todo el sector de las OSFL, ni de manera particular en aquellas que reciben fondos del Estado para ejecutar obras sociales, pese a que este tipo de OSFL también tiene controles por parte de la Contraloría de la República. • No existen respuestas a solicitudes internacionales de información por investigaciones de OSFL ante sospechas de actividades terroristas, incluyendo el financiamiento. • Ninguna OSFL en Guatemala ha sido sancionada por incumplimientos en materia de ALC/CFT.
--	--

6. COOPERACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

6.1. Cooperación y coordinación a escala nacional (R.31)

6.1.1. Descripción y Análisis

683. Resumen: El proyecto de Acuerdo Gubernativo que crea la Comisión Nacional de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala, es un buen comienzo en los esfuerzos de Guatemala con respecto a la coordinación y cooperación interinstitucional de ALD/CFT. Sin embargo, mientras este proyecto de Acuerdo Gubernativo no sea promulgado y no sea implementado por medio de la creación de grupos interinstitucionales de investigación al nivel operativo, seguirá existiendo un gran vacío en el sistema ALD/CFT de Guatemala. Las autoridades que se dedican a la detección, prevención, y represión de LD y FT no están aprovechando y compartiendo las destrezas de investigación y operatividad de cada cual por la falta de comunicación. No existe una cooperación efectiva entre la IVE, la Unidad de Análisis, y las fiscalías de sección del Ministerio Público que conocen los casos de LD/FT.⁹

684. (c. 31.1): El artículo 20 de la Ley CFT señala que la IVE tendrá las mismas facultades, funciones y atribuciones que le confiere la Ley ALD, su reglamento y otras disposiciones relativas a dicha materia. Así mismo señala que las entidades públicas y privadas quedan obligadas a prestar la colaboración que le solicite la Superintendencia de Bancos a través de la IVE, para la realización de los objetivos de esa Ley.

685. Cuando las entidades públicas dispongan de bases de datos, podrá coordinarse con la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia un mecanismo apropiado, para que esta última pueda consultar las mismas.”

686. Derivado de esa potestad legal y la colaboración con entidades públicas, se han realizado la cantidad siguiente de solicitudes a la Superintendencia de Administración Tributaria y la Dirección General de Migración:

⁹ Algunos meses después de la visita de evaluación Guatemala confirmó que ya fue promulgado este Acuerdo Gubernativo bajo el número 132-2010.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Total
SAT	2	5	17	20	18	1	63
Migración	0	0	14	3	3	0	20

687. En este sentido, también se ha pedido colaboración a otras entidades gubernamentales tales como: Instituto de Fomento Municipal, Municipalidad de Guatemala, Registro de la Propiedad, Ministerio de Gobernación, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, Ministerio de Relaciones Exteriores, La Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, entre otras.

688. En el ámbito interinstitucional la Intendencia de Verificación Especial ha firmado los siguientes acuerdos de cooperación, que permiten cooperar, coordinar y desarrollar mecanismos de apoyo para la prevención y combate de los delitos de LD y FT:

No .	Entidad	Fecha de suscripción
1	Superintendencia de Administración Tributaria	26/11/2004
2	Registro General de la Propiedad	17/03/2009
3	Ministerio Público	16/11/2009

689. Derivado de la firma del Acuerdo de cooperación con el Registro General de la Propiedad, la Intendencia de Verificación Especial ha participado en una comisión interinstitucional con un miembro titular y un suplente en 20 sesiones de trabajo, en las cuales participan las instituciones gubernamentales siguientes: Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses INACIF, Secretaría de Asunto Agrarios, Archivo General de Protocolos, Policía Nacional Civil, Dirección Especializada de Investigación Criminal, Procuraduría General de la Nación, Registro Nacional de Personas, Registro General de la Propiedad, Registro de Información Catastral, Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Proyecto JADE, Ministerio de la Defensa Nacional, Fondo Nacional de Tierras, Bienes del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado y el Segundo Registro de la Propiedad.

690. Con la implementación del Convenio Administrativo de Cooperación Interinstitucional entre la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público, la IVE y la Fiscalía de Sección Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos del Ministerio Público han venido teniendo reuniones periódicas donde se analizan casos remitidos por la IVE, así como comunicación frecuente con la atención de requerimientos del Ministerio Público. Estas reuniones serán extensibles a otras Fiscalía que por su función investigan casos de Lavado de Dinero u Otros Activos, Terrorismo y/o Financiamiento del Terrorismo.

691. Derivado de la coordinación interinstitucional, está por implementarse el proyecto de intercambio de información digital que agilizará el proceso de transmisión de información por parte de la Intendencia de Verificación Especial derivado de requerimientos del Ministerio Público.

AÑO	REQUERIMIENTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO A LA IVE (31/12/2009)			
	Pendientes	Parcialmente	Completamente	Total
2005	0	0	167	167
2006	0	0	166	166

2007	0	0	207	207
2008	0	0	216	216
2009	4	4	219	227
TOTAL	4	4	975	983

692. Así mismo, el Reglamento de la Ley ALD señala en su artículo 31 que, las entidades públicas o privadas deberán proporcionar a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia, la colaboración que esta última les solicite, de conformidad con el último párrafo del artículo 34 de la Ley. Existe también un Proyecto de Acuerdo Gubernativo que crea la Comisión Nacional de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala, que promueve la Superintendencia de Bancos a través de la IVE el cual ya fuera discutido y consensuado por entidades del estado a participar. El mismo tiene como objeto: Coordinar los esfuerzos y la cooperación interinstitucional entre las entidades del Estado que participan dentro de la estructura legal de la prevención, control, vigilancia y sanción de los delitos de lavado de dinero u otros activos y financiamiento del terrorismo, con el propósito de coadyuvar al efectivo cumplimiento de la ley dentro de un sistema nacional de prevención y represión de los mismos, respetando la competencia legal y autonomía de cada entidad.

693. Para la sensibilización del proyecto nacional de prevención LD/FT, del 27 al 30 de abril de 2009 se realizó, en la Superintendencia de Bancos, el taller: “El Plan Integral para la Coordinación entre las unidades Guatemaltecas responsables en ALA/CFT”. Dicha actividad contó con la participación de Oficiales de Cumplimiento de bancos, Entidades de Seguros y cooperativas, así como funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria, Contraloría General de Cuentas, Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto Nacional de Cooperativas, Inspección General de Cooperativas, Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Registro General de la Propiedad Inmueble y otros. Sin embargo, al momento de la evaluación no existían aún mecanismos efectivos establecidos de cooperación interna en la lucha de ALD/CFT entre las agencias del orden y aquellos que forman parte del sistema de ALD/CFT de Guatemala. Por ejemplo, no existía una entidad o grupo oficial o de facto que convocara a todos los actores del régimen ALD/CFT periódicamente para intercambiar información y colaborar y cooperar en la priorización e investigación de casos específicos, de impacto, de importancia, o interés común. Las principales entidades nacionales que se dedican a la detección, prevención, y represión de LD y FT no están aprovechando apropiadamente las destrezas de investigación y operatividad de cada cual por la falta de efectividad en sus respectivos estilos de comunicación.

694. Salvo la UNILAT (descrita en la sección 2.6 de este informe), la cual solamente conoce e investiga casos específicos en conexión al narcotráfico, defraudación tributaria y lavado de dinero asociado, no existen grupos de trabajo interdisciplinarios a un nivel operativo para coordinar la lucha ALD/CFT. Tampoco existe un intercambio de inteligencia espontáneo y efectivo entre la IVE, la Unidad de Análisis, y las fiscalías de sección del Ministerio Público que conocen los casos de LD/FT. La comunicación entre el MP y la IVE está limitada al traslado de denuncias de la IVE a la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, a contestaciones de la IVE a requerimientos de ampliación de información del MP, y en algunos casos a diseminaciones espontáneas de informaciones mediáticas sobre LD de la IVE a la Fiscalía ante mencionada, salvo los recientes esfuerzos que han llevado a sostener reuniones periódicas con la Fiscalía de Lavado de Dinero.

695. Además de recibir denuncias de la IVE por medio de la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, las fiscalías de sección hacen requerimientos de ampliación a la IVE y solicitan asesoría a su Unidad de Análisis internamente. La IVE lleva a cabo sus investigaciones y responde a los requerimientos de las fiscalías de sección, sin ésta tener acceso oportuno a la información que ya haya

recabado el Ministerio Público por medio de la aplicación de los Tratados de Asistencia Legal Mutua y la recopilación de otros datos a los que no tiene acceso la IVE. En algunos casos en los que la IVE no logró obtener información financiera por medio de requerimientos mediante el Grupo Egmont a unidades homólogas en otros países, el Ministerio Público si la pudo obtener por medio de otras vías. Sin embargo, al no haber recibido realimentación de la Unidad de Análisis del Ministerio Público en algunos casos, la IVE siguió esperando recibir la misma información con la que el MP ya contaba.

6.1.2. Recomendaciones

696. Se debería impulsar la promulgación del Acuerdo Gubernativo que crea La Comisión Nacional de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala.

697. Crear mecanismos de cooperación interinstitucional entre los principales actores en la lucha contra LD/FT, especialmente los estamentos de seguridad, el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera IVE, que permitan generar procesos y condenas a personas o casos de alto impacto, así como identificar y rastrear propiedades susceptibles de confiscación.

698. Crear grupos de trabajo al nivel operativo para incrementar la efectividad de las investigaciones del ALD/CFT llevadas a cabo por el Ministerio Público y las agencias del orden.

699. Se debería crear espacios de mayor cooperación entre la IVE y la Unidad de Análisis del Ministerio Público.

6.1.3. Cumplimiento de la Recomendación 31

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.31	PC	<ul style="list-style-type: none"> Al momento de la visita no existían mecanismos para una buena coordinación y colaboración entre las entidades con facultades de investigar, prevenir y reprimir los delitos de LD-FT.

6.2. Las Convenciones y las Resoluciones Especiales de las NU (R.35 y RE.I)

6.2.1. Descripción y Análisis

700. El país ratificó la Convención de Viena de 1988 sobre Tráfico Ilícito de Estupefacientes el 28 de febrero de 1991 (ver [ONU](#)). También ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado o “Convención de Palermo” el 25 de septiembre de 2003 (ver [ONU](#)) y la Convención Internacional de 1999 para la Supresión del Financiamiento del Terrorismo el 12 de febrero de 2002 (ver [ONU](#)). La forma y alcance con que estas convenciones han sido incorporadas en el derecho interno ha sido analizada a lo largo de este informe y su ratificación formal por el país fue verificada en la base de datos de la Secretaría General de las Naciones Unidas: <http://treaties.un.org/Pages/CNs.aspx>.

701. En la siguiente tabla se indican las normas que incorporan estas tres Convenciones al ordenamiento interno del país.

Convención de Viena de 1988 (estupefacientes)	Normativa Interna del País
3 (Delitos y Sanciones)	Decreto Número 48-92, Ley contra la narcoactividad, Capítulo VII: de los delitos y sus penas; artículos 35-53.

4 (Jurisdicción) Competencia.	<p>El Capítulo XI del Decreto Número 48-92 establece la Comisión contra las adicciones y el tráfico ilícito de drogas, la cual estudiará y decidirá (Art. 71. Competencia) las políticas nacionales para la prevención [...]</p> <p>El Artículo 77 del mismo Capítulo de dicha ley, también establece que dicha Comisión podrá nombrar subcomisiones de su propio seno [...], cuya función será desarrollar y vigilar la ejecución de las estrategias y medidas adoptadas por la comisión [...]</p>
5 (Confiscación) Decomiso.	El Decreto Número 48-92, Ley Contra la Narcoactividad, Capítulo III, artículo 18 establece las medidas necesarias para autorizar el comiso o decomiso de los instrumentos del delito [...]
6 (Extradición)	El Capítulo X, artículo 68 del Decreto Número 48-92, Ley Contra la Narcoactividad, establece la prevalencia de los tratados o convenciones internacionales sobre la extradición, y que a falta de ellos, el país procederá de acuerdo al principio de reciprocidad y a los usos y costumbres internacionales.
7 (Asistencia Legal Mutua) Asistencia Judicial Recíproca.	El Capítulo IX, artículo 63 del Decreto Número 48-92, Ley contra la narcoactividad da la facultad al Ministerio Público y a las autoridades judiciales competentes de solicitar y brindar asistencia jurídica internacional, referentes a delitos tipificados de conformidad con lo establecido al primer párrafo del artículo 3 de dicha ley (delitos y sanciones).
8 (Transferencia de Autos Judiciales)	El artículo 66 del Decreto Número 48-92, indica que se considerarán todas las solicitudes de asistencia formuladas por otros estados que sean planteadas por la vía diplomática o directamente al Ministerio Público, quien propiciará su rápida ejecución ante los tribunales competentes.
9 (Otras formas de cooperación y capacitación)	El Decreto Número 48-92, Ley contra la narcoactividad establece mediante el artículo 7 el deber del Estado, por medio de sus órganos competentes, propiciar la cooperación internacional [...] para fortalecer, así como coordinar estrategias entre estados y programas de investigación, prevención, sanción y rehabilitación [...]; y establece mediante el artículo de la misma Ley, que las entidades y dependencias del Estado, podrán coadyuvar con la Comisión (contra las adicciones y el tráfico ilícito de drogas), en lo que les fuere solicitado.
10 (Cooperación y Asistencia Internacional a estados de tránsito) Cooperación Interna y Asistencia Internacional a los estados de tránsito	El Decreto Número 48-92, Ley contra la narcoactividad establece mediante el artículo 7 el deber del Estado, por medio de sus órganos competentes, propiciar la cooperación internacional [...] para fortalecer, así como coordinar estrategias entre estados y programas de investigación, prevención, sanción y rehabilitación [...]
11 (Entregas Controladas) Entrega vigilada.	Decreto 21-2006 La Ley Contra la Delincuencia Organizada, en el

	Título III, contempla los Métodos Especiales de Investigación. Ellos son: Operaciones Encubiertas (artículos del 21 al 34); Entregas Vigiladas (artículos del 35 al 47); e Interceptaciones Telefónicas y Otros Medios de Comunicación (artículos del 48 al 71). Sin embargo, ninguna institución en Guatemala ha hecho, hasta la fecha, uso de los primeros dos métodos antes mencionados.
15 (Transportadoras comerciales) Transportistas Comerciales.	El artículo 38 del Decreto Número 48-92, Ley contra la narcoactividad establece que el que sin autorización legal adquiera [...] importe, exporte, almacene, transporte, distribuya [...] sustancias o productos clasificados como drogas, estupefacientes, psicotrópicos o precursores, será sancionado con prisión de doce a veinte años y una multa [...]
17 (Tráfico Ilícito en el mar)	<p>Código Penal, Decreto No. 17-73 artículos 299, 307, 308 numeral 4.</p> <p>Nota: Artículo 307 derogado por los artículos 35 y 38 del Decreto 48-92 Ley Contra la Narcoactividad.</p> <p>Artículo 308 derogado por artículo 25 Decreto 48-92</p> <p>Para el caso de tráfico de dinero en efectivo aplicarían los artículos 25 de la Ley CLD y 37 de su Reglamento y 8 de la Ley CFT.</p> <p>Decreto No. 39-2003 en el cual se aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos de América para cooperar en la supresión del tráfico ilícito, marítimo y aéreo, de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, suscrito en la Ciudad de Guatemala, el diecinueve de junio del año dos mil tres y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 367-2004.</p> <p>Convenio Sobre Cooperación para la Supresión del Tráfico Ilícito Marítimo y Aéreo de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, en el Área del Caribe, ratificado el 26 de junio de 2006. El Convenio tiene el #660 firmado el 10-04-2002 en San José Costa Rica. Tiene como referencia el Decreto 64-2005 del Congreso de la República de Guatemala</p>
19 (uso del correo) Utilización de los Servicios Postales	Artículo 24 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que establece la inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros, que indica que únicamente puede ser consultada por autoridad competente.
Convención de Palermo de 2003 (crimen organizado)	Normativa Interna del País
5 (Tipificación de participación en grupo de delincuencia organizada) Tipificación de la participación en un grupo delictivo organizado de	Decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada: Capítulo tercero.

delincuencia organizada.	
6 (Tipificación del lavado de los activos producto del crimen) Penalización del blanqueo del producto del delito.	Decreto 67-2001, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos; Sección I: artículo 2.
7 (Medidas para combatir el lavado de dinero)	Decreto 67-2001, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos; Sección n I: artículo 2.
10 (Responsabilidad de personas jurídicas) Responsabilidad de las personas jurídicas.	Decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada: artículo 82.
11 (Procesamiento, Fallo y Pena) Proceso Fallo y Sanciones	Decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada: Capítulo tercero.
12 (Decomiso y Confiscación) Decomiso e Incautación	Decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada: Capítulo primero.
13 (Cooperación Internacional con propósitos de confiscación)	Decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada: artículo 78-80.
14 (Disposición de activos procedentes del crimen o de bienes confiscados) Disposición del producto del delito o de los bienes decomisados.	Decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada: artículo 78-80.
15 (Jurisdicción)	Decreto 17-73, Código Penal: Artículos 4 y 5. Establece la Territorialidad y Extraterritorialidad de las leyes penales.
16 (Extradición)	Decreto 28-2008, Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición. Establece los principios, garantías y procedimientos de Extradición.
18 (Asistencia Legal Mutua) Asistencia Judicial Recíproca	Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos: artículo 21.
19 (Investigaciones Conjuntas)	Convención Interamericana de Asistencia Legal Mutua y Convención Centroamericana de Asistencia Legal Mutua, de las que Guatemala es parte. Permiten la Investigación Conjunta.
20 (Técnicas Especiales de Investigación)	Decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada: Capítulos segundo y tercero.
24 (Asistencia y protección de víctimas) Protección de los Testigos	Decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada: Artículo 104 Decreto 70-96, Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Persona Vinculadas a la Administración de Justicia Penal.
25 (Asistencia y protección de víctimas) Asistencia y protección a las víctimas	Decreto 40-94, Ley Orgánica del Ministerio Público: Artículos 8 y 26. Decreto 70-96, Ley para la Protección de Sujetos Procesales y

	Persona Vinculadas a la Administración de Justicia Penal.
26 (Medidas para mejorar la cooperación con las autoridades del orden público)	Decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada: Capítulo cuarto.
27 (Cooperación autoridades del orden público) Cooperación en materia de cumplimiento de la ley.	Decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada: Capítulo cuarto.
29 (Capacitación y asistencia técnica)	Decreto 40-94, Ley Orgánica del Ministerio Público: Artículo 81. Decreto 41-99, Ley de la Carrera Judicial: Capítulo V
30 (Otras medidas) Aplicación de la convención mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica.	Existen medidas adicionales con respecto a agravantes especiales tales como penas accesorias para los que administren, supervisen, sean funcionarios públicos, o hagan uso de menores en la comisión del delito dentro del Decreto 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada: artículo 12.
31 (Prevención)	Decreto 48-92 Ley contra la Narcoactividad: Artículo 1 Decreto 67-2001 Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: Artículo 2 y Capítulo IV y V. Decreto 21-2006 Ley contra la Delincuencia Organizada: Artículo 1
34 (Implementación de la Convención) Aplicación de la Convención.	Decreto 48-92 Ley contra la Narcoactividad: Capítulo VII Decreto 67-2001 Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: Capítulo II. Decreto 21-2006 Ley contra la Delincuencia Organizada: Capítulo III
Convención de 1999 (Financiamiento del Terrorismo)	Normativa Interna del País
2 (Delitos)	Decreto del Congreso 58-2005; Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; Capítulo II: artículo 4 – De los delitos de los responsables y las penas
4 (Penalización) Tipificar infracción penal y Sanción de los Delitos.	Decreto del Congreso 58-2005; Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo; Capítulo II: artículos 7 – 11 - De los delitos de los responsables y las penas
5 (Responsabilidad de las personas jurídicas)	Decreto 58-2005 Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: Artículo 7
6 (Justificación de la perpetración de un delito)	Decreto 58-2005 Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: Artículo 6. Justificaciones no Aplicables.
7 (Jurisdicción)	Decreto 17-73 Código Penal: Artículos 4 y 5, Territorialidad y

	Extraterritorialidad de la Ley.
8 (Medidas para identificación, detección, congelamiento y decomiso de fondos)	El Reglamento de la Ley CFT, artículo 2 hace extensiva la definición y alcance del concepto “bienes”.
9 (Investigaciones y los derechos del acusado)	Decreto 51-92 Código Procesal Penal: Capítulo II, Sección primera. Derechos de los imputados. Capítulo IV, Procedimiento Preparatorio. Decreto 21-2006 Ley contra la Delincuencia Organizada: Título Segundo y Tercero. Medios para Investigar Grupos Delictivos Organizados y Delitos de Grave Impacto Social; Métodos Especiales de Investigación; Entregas Vigiladas; Interceptaciones Telefónicas y Otros Medios de Comunicación.
10 (Extradición de nacionales)	Decreto 58-2005 Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: Artículo 13 Decreto 28-2008, Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición. Establece los principios, garantías y procedimientos de Extradición.
11 (Delitos que son extraditables)	Decreto 58-2005 Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: Artículo 13 Delitos: Financiamiento del Terrorismo, Tráfico de Dinero y Conspiración para los delitos anteriores.
12 (Asistencia a otros Estados)	Decreto 67-2001 Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos: artículo 21; literal h). Las autoridades competentes también podrán prestar y solicitar asistencia a las autoridades competentes de otros países [...] y las actividades de las personas con respecto a las cuales existen sospechas razonables de que participan en el delito de financiamiento del terrorismo.
13 (Negativa a prestar asistencia en caso de un delito fiscal)	Constitución Política de la República de Guatemala: Artículo 24
14 (Negativa a prestar asistencia en el caso de un delito político)	Convención ratificada, Artículo 27 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
15 (No obligación si se cree que el auto judicial se basa en razones de raza, nacionalidad, opinión, política, etc.)	Convención ratificada, Artículo 27 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
16 (Transferencia de prisioneros)	Decreto 58-2005 Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: Artículo 22. Traslado de Personas Detenidas o Cumpliendo Condena para la Investigación o Enjuiciamiento de los Delitos establecidos en los Convenios Internacionales de los que Guatemala sea parte.
17 (Garantía de un tratamiento justo para las personas bajo custodia)	Constitución Política de la República de Guatemala: Artículos 7-

	11 y 19
18 (Medidas para prohibir que se estimulen, organicen o cometan delitos. Que instituciones financieras y otras que realizan operaciones financieras apliquen medidas sobre RTS y mantenimiento de registros y DDC). Facilitar intercambio de información entre las agencias)	Decreto 58-2005 Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo: Capítulo V. Régimen de Personas Obligadas y Medidas Administrativas. Capítulo VI, Artículo 23, Asistencia Administrativa e Intercambio de Información Decreto 67-2001 Ley contra el Lavado de Dinero u otros Activos: Capítulo IV. De las personas obligadas y sus obligaciones. Artículo 35, Asistencia Administrativa

Resolución 1267:

702. Los procedimientos en cuanto a las Providencias Cautelares que establece la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo no son lo suficientemente ágiles, y no se ha creado un mecanismo alternativo para dar cumplimiento a la Res. 1267 con la rapidez que ésta exige.

703. De acuerdo con el Glosario de la Metodología de Evaluación, la expresión “sin demora” “para propósitos de la S/RES/1267(1999) significa, idealmente, en cuestión de horas a partir de la designación por parte del Comité de Sanciones a Al-Qaida y el Taliban”. ...Sin embargo, La legislación guatemalteca permite que un Juez penal, a solicitud del Ministerio Público, en cualquier momento del proceso y sin notificación previa al afectado, emita cualquier providencia o medida de garantía prevista en las leyes. Aunque el artículo 11 de la Ley ALD establece que estas solicitudes deben ser resueltas por el Juez de manera inmediata, la norma supone la existencia de un proceso penal en curso. Esto podría causar demoras innecesarias, lo cual va en contra de lo que exige la Res. 1267 (ver Sección 2.4 del informe).

Resolución 1373:

704. No se ha establecido un procedimiento en Guatemala que le indique a las autoridades cómo actuar en caso de que otro país les notifique que ha designado a una persona como terrorista con base en la Resolución 1373 de las Naciones Unidas. Las designaciones en el marco de la Res.1373 no necesariamente revisten el carácter de asistencia legal mutua, y al no existir un procedimiento interno claro que le permita evaluar la razonabilidad de la designación hecha por otro país, las autoridades guatemaltecas no sabrían como proceder en consecuencia (ver Sección 2.4 del informe).

Elemento adicional

705. El país ha adoptado otros instrumentos internacionales tales como:

- 1) Convención sobre los Delitos y otros Actos cometidos a Bordo de las Aeronaves.
- 2) Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves.
- 3) Convención para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsión Conexa, cuando estos tengan Transcendencia Internacional.
- 4) Convenio para la Represión de Actos ilícitos contra la Seguridad de la Aviación civil.
- 5) Convención para la Prevención y Castigo de Delitos contra Personas Internacionalmente Protegidas, inclusive los Agentes Diplomáticos
- 6) Convención Internacional contra la Toma de Rehenes
- 7) Convención para la Protección Física Nuclear

- 8) Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de violencia en los Aeropuertos que Prestan Servicios a la Aviación Civil Internacional, complementario del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil.
- 9) Convenio Internacional para la Represión de los Atentados terroristas Cometidos con Bombas.
- 10) Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo
- 11) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
- 12) Adhesión del Gobierno de Guatemala al Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
- 13) Convención Interamericana contra el Terrorismo
- 14) Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República de Guatemala y el Departamento Administrativo de Seguridad de la República de Colombia sobre la Cooperación para la Capacitación e Intercambio de información sobre Seguridad Presidencial y de Altos Funcionarios en Materia de Inteligencia Protectiva, Contrainteligencia, Terrorismo, Secuestro y Temas Afines.
- 15) Acuerdo de Asistencia y Cooperación sobre Seguridad Pública entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de la República Argentina.
- 16) Tratado de Cooperación Mutua entre el Gobierno de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos para el Intercambio de Información respecto de Operaciones Financieras para Prevenir, Detectar y Combatir Operaciones de Procedencia Ilícita o de Lavado de Dinero.
- 17) Convenio Centroamericano para la Prevención y la Represión de los Delitos de Lavado de Dinero y de Activos, relacionados con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos Conexo.

6.2.2. Recomendaciones y Comentarios

706. Crear procedimientos y mecanismos que permitan dar cumplimiento a las Resoluciones 1267 y 1373 con la rapidez que éstas requieren (ver RE.III)

6.2.3. Cumplimiento de la Recomendación 35 y la Recomendación Especial I

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.35	C	
RE.I	PC	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos existentes no son lo suficientemente rápidos para permitir tomar medidas en cumplimiento de las Resoluciones 1267 y 1373

6.3. Asistencia Legal Mutua (R.36-38, RE.V)

6.3.1. Descripción y Análisis.

707. Existe una serie de Tratados de Asistencia Legal Mutua (TALM) y otros instrumentos legales multilaterales suscritos y ratificados por la República de Guatemala que hacen posible a este país brindar una amplia cooperación judicial internacional en investigaciones y procesos penales por la presunta comisión de los delitos de Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo.

708. (c. 36.1) La Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos establece con relación a la asistencia legal mutua que con la finalidad de facilitar las actuaciones e investigaciones judiciales relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, el Ministerio Público, la IVE y cualquier otra autoridad competente, podrán prestar y solicitar asistencia a las autoridades competentes de otros países para:

- a) Recibir los testimonios o tomar las declaraciones a las personas.
- b) Presentar documentos judiciales.

- c) Efectuar inspecciones o incautaciones.
- d) Examinar objetos y lugares
- e) Facilitar información y elementos de prueba.
- f) Entregar originales o copias autenticadas de documentos y expedientes relacionados con el caso, inclusive documentación bancaria, financiera y comercial.
- g) Identificar o detectar el producto, los instrumentos y otros elementos con fines probatorios.
- h) Cualquier otra forma de asistencia judicial recíproca, autorizada por el derecho interno. (Artículo 21)

709. La cooperación descrita también es aplicable a investigaciones y procesos por Financiamiento del Terrorismo.

710. En lo concerniente al traslado de personas (Artículo 22), las personas que se encuentren detenidas o cumpliendo una condena en el territorio nacional, podrán ser trasladadas a otro Estado, siempre que medie autorización judicial y toda vez que sea para fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o enjuiciamiento de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales de los que Guatemala es parte.

711. Otros instrumentos legales internacionales que facilitan la cooperación judicial y que puede invocar Guatemala para prestar la asistencia a otros países son los siguientes:

- La Convención Interamericana sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal;
- El Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales entre las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá;
- El Tratado de Cooperación entre el Gobierno de la República de Guatemala y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre Asistencia Jurídica Mutua;
- La Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias psicotrópicas;
- La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional;
- La Convención Interamericana contra la Corrupción;
- La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
- El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo; y
- La Convención Interamericana contra el Terrorismo.

712. (c. 36.1.1) Las asistencias judiciales tienen un término que fija la Ley Guatemalteca para ser atendidas por parte de las autoridades competentes de ese país. Según lo establecido en la instrucción 1-2007 del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público, en su numeral III, inciso 9, que el tiempo de respuesta a los requerimientos internacionales deberá ser en un plazo máximo de treinta (30) días, término éste que puede prorrogarse razonablemente, cuando existan causas que justifiquen y fundamente tal prórroga.

713. (c. 36.2) De acuerdo a las entrevistas celebradas con el Ministerio Público y al examen de la normativa penal guatemalteca aplicable, se aprecia que no existen medidas restrictivas desproporcionadas que condicionen la asistencia judicial internacional. Las únicas exigencias son el cumplimiento de las normas consagradas en la Constitución Política de Guatemala y las leyes ordinarias de ese país, que establecen procedimientos y limitantes razonables para la cooperación.

714. (c. 36.3): Según se pudo determinar de la revisión efectuada a la normativa penal y judicial vigente, así como de la entrevista sostenida con los funcionarios del Ministerio Público, existen procedimientos tendientes a garantizar la efectiva cooperación judicial brindada por las autoridades judiciales guatemaltecas a otros países, tal como se señaló en párrafo 338 de este Informe, que desarrolló lo relativo al cumplimiento del criterio 36.1.1.1.

715. (c. 36.4): En el ordenamiento penal guatemalteco no se establecen disposiciones que afecten o impidan prestar asistencia legal mutua puramente sobre la base de que el delito involucre asuntos fiscales. El delito de Lavado de Dinero no se restringe o limita a un catálogo de delitos precedentes, por lo que los fondos derivados de esta actividad criminal tal como lo establece el Código Penal encajarían en el delito de lavado de dinero u otros activos y, por consiguiente, se podría brindar la cooperación judicial internacional.

716. (c. 36.5) La Ley no prohíbe a las autoridades prestar asistencia legal mutua a autoridades judiciales de otro Estados aduciendo la existencia y aplicación de disposiciones del país relativas al sigilo o la confidencialidad de instituciones financieras con sus clientes o de normas que protejan el secreto profesional, cuando se trata de investigaciones o procesos penales relacionados con la presunta comisión de delitos de Lavado de Dinero u otros Activos y de Financiamiento del Terrorismo.

717. (c. 36.6) Las mismos poderes de aplicación de medidas cautelares y prácticas de diligencias judiciales que confiere el Derecho Interno a las autoridades del ramo de Ejecución de la Ley en Guatemala se hacen extensivas a las asistencias judiciales que tramiten estas autoridades por razón de investigaciones y procesos de Lavado de Dinero u otros Activos y Financiamiento del Terrorismo en otros Estados.

718. (c. 36.7) De acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos, las personas que se encuentren detenidas o cumpliendo una condena en el territorio nacional, podrán ser trasladadas a otro Estado, siempre que medie autorización judicial y toda vez que sea para fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o enjuiciamiento de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales de los que Guatemala es parte.

719. Elemento adicional (c. 36.8) Las peticiones de Asistencia Legal Mutua deben ceñirse al cumplimiento de los procedimientos y formalidades que establecen los Tratados de Asistencia Legal Mutua (TALM) y los instrumentos de cooperación multilateral invocados como fundamento para la asistencia.

720. (c. V.1) La cooperación judicial internacional en casos relacionados con el delito de Financiamiento del Terrorismo es posible, al ser suscriptor el Estado Guatemalteco de los Tratados de Asistencia Legal Mutua en Materia Penal bilaterales y multilaterales con otras naciones, y Estado parte, a su vez, en la aplicación de instrumentos internacionales en la materia como son la Convención para la Represión de la Financiación del Terrorismo y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, respectivamente.

721. Estos instrumentos de cooperación internacional facultan al país a brindar una amplia asistencia judicial en diligencias como son: la recolección de documentos (registros financieros u otros), acopio de evidencia, toma de declaraciones de testigos, entre otros.

722. Elemento adicional (c.V.6) En este apartado se aplica para el Financiamiento del Terrorismo el Artículo 22 de la Ley contra el Lavado de Dinero y otros Activos, el cual deja por sentado que las personas que se encuentren detenidas o cumpliendo una condena en el territorio nacional, podrán ser trasladadas a otro Estado, siempre que medie autorización judicial y toda vez que sea para fines de prestar testimonio o de identificación o para que ayude a obtener pruebas necesarias para la investigación o enjuiciamiento de los delitos establecidos en los instrumentos internacionales de los que Guatemala es parte.

723. Criminalidad Dual y Asistencia Mutua (c. 37.1 & 37.2): El principio de Doble Incriminación, si bien es cierto rige como parte de los requisitos para la asistencia judicial mutua; el mismo no constituye

un impedimento para brindar la asistencia judicial por la forma amplia con que es concebido el tipo penal base de Lavado de Dinero y otros activos, el cual no restringe a un catálogo cerrado de actividades ilícitas predeterminadas por la norma penal, el origen de los fondos. Esta situación definitivamente facilita la cooperación legal entre Guatemala y el resto de países.

724. Cooperación Internacional bajo RE.V (c. V.2) Al tenor de lo dispuesto en el Código Penal y de Procedimiento Penal Guatemalteco, el país puede prestar la cooperación internacional en casos relacionados con el Financiamiento del Terrorismo, los actos terroristas o la participación en una organización terrorista. Asimismo, como Estado Parte de los instrumentos de cooperación internacional mencionados, el país cuenta con los mecanismos y procedimientos jurídicos necesarios para poder atender las diligencias judiciales o prácticas de pruebas requeridas en virtud de asistencias legales mutuas por razón de estos delitos.

725. Celeridad en solicitudes de asistencia y Confiscación (c. 38.1) Guatemala posee en su Derecho Positivo, las leyes y procedimientos apropiados para dar una respuesta eficaz y oportuna a los pedidos de asistencia judicial recíproca efectuados por otros países en relación con la identificación, el congelamiento, la incautación o el decomiso de los bienes lavados provenientes de actividades ilícitas, así como los instrumentos utilizados o que se pretenden utilizar para la comisión de conductas delictivas de Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo.

726. Con relación al **Comiso**, el Código Penal de Guatemala establece que *“El comiso consiste en la pérdida, a favor del Estado, de los objetos que provengan de un delito o falta, y de los instrumentos con que se hubieren cometido, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. Cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio, se acordará el comiso, aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del imputado. Los objetos decomisados de lícito comercio, se venderán y el producto de la venta incrementará los fondos privativos del Organismo Judicial”*.

727. Propiedad de valor correspondiente (c. 38.2) El trámite seguido por el país a las asistencias legales mutuas alcanza a los valores de propiedades o bienes adquiridos con recursos económicos que deriven de la actividad ilícita precedente del delito de Lavado de Dinero u Otros Activos.

728. Con respecto a la normativa interna, la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos establece las siguientes normas en torno a las medidas cautelares:

“ARTÍCULO 11. Providencias cautelares. *El Juez o Tribunal que conozca del proceso podrá dictar en cualquier tiempo, sin notificación ni audiencia previas, cualquiera providencia cautelar o medida de garantía establecida en la Ley encaminada a preservar la disponibilidad de los bienes, productos o instrumentos provenientes o relacionados con el delito de lavado de dinero u otros activos, cuando lo solicite el Ministerio Público. Este requerimiento deberá ser conocido y resuelto por el Juez o Tribunal inmediatamente”*.

“ARTÍCULO 12. Peligro de demora. *En caso de peligro por la demora, el Ministerio Público podrá ordenar la incautación, embargo o inmovilización de bienes, documentos y cuentas bancarias, pero deberá solicitar la convalidación judicial inmediatamente, acompañando el inventario respectivo de éstos e indicando el lugar donde se encuentran. Si el Juez o Tribunal no confirma la providencia cautelar, ordenará en el mismo acto la devolución de los bienes, documentos o cuentas bancarias, objetos de la misma”*.

“ARTÍCULO 13. Custodia. Los bienes, productos o instrumentos objeto de medidas cautelares quedarán bajo la custodia del Ministerio Público o de la persona que éste designe, quienes serán responsables de su conservación para su incorporación al proceso. Incorporación de normativa”.

729. (c. 38.3): La coordinación de las acciones de confiscación y decomiso son solamente aquellas que emanan de las disposiciones jurídicas contenidas en los diversos instrumentos internacionales de cooperación, entiéndase los Tratados de Asistencia Legal Mutua (TALM) y los Convenios de Cooperación en la materia en los que es parte el Estado Guatemalteco.

730. (V.3) La aplicación de las medidas de comiso y confiscación se aplican también para el delito de Financiamiento del Terrorismo sin ningún límite o condicionante más allá de los que establece la normativa penal y de procedimiento guatemaltecos, similares a los aplicados al delito de Lavado de Dinero u otros Activos.

731. Fondo de activos incautados (c. 38.4) Los bienes producto de los delitos de Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo, durante su estado o fase en que son objeto de medida precauteladora son asignados a la administración y custodia del Órgano Judicial, el que una vez dictado el fallo y ordenado el comiso de los bienes, ordena la incorporación de dichos bienes como parte de su patrimonio institucional.

732. Cabe mencionar que, a la fecha, no se ha conformado un fondo de activos comisados que coadyuve en las tareas o funciones que desempeñan autoridades con responsabilidades en la prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo en Guatemala, las que ejercen fuerzas del orden y las autoridades de investigación de estos delitos, respectivamente.

733. En la práctica, si bien la legislación permite la asignación provisional de activos comisados a otras instituciones; los mismos en la práctica no han sido asignados para su uso transitorio por parte de las autoridades encargadas de prevenir y reprimir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo.

734. (c. 38.5) La compartición de los bienes y otros recursos por parte de Guatemala con otros Estados producto del Lavado de Dinero u Otros Activos, depende de lo establecido en los TALM ratificados por Guatemala y los Convenios Internacionales en los que es parte el Estado Guatemalteco. En ese sentido, no se cuenta con estadísticas que muestren la aplicación de estas medidas por parte del país y procedimiento jurídico en el Derecho Interno sobre la forma como deben ser repartidos los bienes y demás activos.

735. Elemento adicional (c. 38.6): Las autoridades judiciales de Guatemala solo reconocen las órdenes de Decomiso procedentes del extranjero, siempre que las mismas sean proferidas por una autoridad judicial competente del Estado Requiriente dentro de un proceso penal por razón del Lavado de Dinero u otros Activos y/o del Financiamiento del Terrorismo.

736. Elemento adicional (c V.7): Guatemala solamente contempla el establecimiento de un fondo de custodia de activos procedentes del Lavado de Dinero y otros Activos, no del Financiamiento del Terrorismo.

737. Estadísticas: Guatemala solo aportó estadísticas agregadas sobre asistencia legal mutua, por un total de 1,482 solicitudes hechas y 251 enviadas por ellos. También informó la lista de países involucrados e indicó que estos números incluyen cualquier tipo de asistencia, desde solicitudes de información, hasta declaración de testigos, etc. No fue posible identificar el número de solicitudes por LD y FT, los tiempos de respuesta, el tipo de solicitud ni otros elementos para evaluar la efectividad de la cooperación ALD/CFT.

6.3.2. Recomendaciones y Comentarios

738. R.36: Establecer un sistema eficaz de recolección de estadísticas sobre asistencia legal mutua.

739. R.38: Guatemala no posee una regulación específica que determine expresamente la custodia y repartición de los bienes vinculados al Financiamiento del Terrorismo. El país debería evaluar la posibilidad de:

740. Crear un fondo de custodia de bienes comisados que coadyuve a fortalecer a las autoridades preventivas y las de investigación y orden público.

741. Regular lo relativo a la repartición de activos asociados con la realización de investigaciones conjuntas con autoridades de otros Estados.

742. Aprovechar los medios legales existentes para utilizar temporalmente los activos producto medidas cautelares, para beneficio de las diferentes autoridades encargadas de prevenir y reprimir el LD/FT.

6.3.3. Cumplimiento de las Rec. 36 a la 38, y la RE.V)

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.36	MC	<ul style="list-style-type: none"> La falta de estadísticas detalladas impide evaluar adecuadamente la efectividad.
R.37	C	
R.38	PC	<ul style="list-style-type: none"> No se ha considerado autorizar la repartición de activos relacionados con LD/FT, cuando se realizan investigaciones conjuntas con otros países. No se ha considerado crear un fondo de activos comisados que coadyuve en las tareas que desempeñan autoridades competentes, como las fuerzas del orden y las autoridades de investigación de estos delitos.
RE.V	MC	<ul style="list-style-type: none"> Aunque existe la normativa para brindar cooperación, la falta de casos no permite establecer claramente el nivel de efectividad y celeridad en aplicación de la misma por parte de las autoridades judiciales

6.4. Extradición (R.37, 39, RE.V)

6.4.1. Descripción y Análisis.

743. La figura de la extradición es permitida por las normas jurídicas del país, siempre que el procedimiento se ajuste a los postulados que al efecto establecen la Constitución Política de Guatemala y las leyes. El Ministerio de Relaciones Exteriores es el organismo estatal competente de recibir las solicitudes de extradición libradas a ese país, las cuales son trasladadas al Órgano Judicial para su debido trámite.

744. En ese sentido, la Constitución Política de Guatemala establece que la extradición se rige por lo dispuesto en tratados internacionales (Artículo 3).

745. Agrega la misma excerta jurídica que por delitos políticos no se procede la extradición de guatemaltecos, quienes en ningún caso serán entregados a gobierno extranjero, salvo lo dispuesto en los tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el Derecho Internacional

Doble Incriminación, ALM y Extradición

746. (c. 37.1 & 37.2): El Principio de Doble Incriminación no constituye un impedimento u obstáculo para atender las solicitudes de extradición en la práctica. Lo anterior, a consecuencia del sistema abierto de tipificación del Lavado de Dinero y otros Activos adoptado por Guatemala y gracias a la tipificación del delito de Financiamiento del Terrorismo en el Código Penal.
747. (c. 39.1): La Ley Contra el Lavado de Dinero y otros Activos establece en su artículo 3 que los delitos contemplados en la presente ley darán lugar a la extradición activa o pasiva, de conformidad con la legislación vigente.
748. Asimismo, el Artículo 13 de la Ley sobre Prevención y Represión del Financiamiento del Terrorismo de Guatemala (DECRETO NÚMERO 58-2005), establece que los delitos contemplados en la presente Ley darán lugar a extradición activa o pasiva de conformidad con la Constitución Política de la República, los tratados internacionales de los que Guatemala sea parte y la legislación vigente.
749. En ese orden de ideas, aplica también a la Extradición las normas contenidas en la Ley contra Narcoactividad (DECRETO NUMERO 48-929, que dispone en esta materia lo siguiente:
- “Artículo 68. Extradición y procedimiento para tramitarla. Para los efectos de esta ley, en cuanto a la extradición, ya sea activa o pasiva, se establecen las siguientes reglas:*
- a) Prevalencia de los tratados o convenciones internacionales. Habiendo tratados o convenios internacionales de extradición, ésta será pedida y otorgada por la vía diplomática con arreglo al procedimiento establecido en dichos tratados o convenciones; y en su defecto, o en lo que no estuviereregulado, conforme a lo dispuesto en este artículo.*
 - b) A falta de tratados o convenciones, se procederá de acuerdo al principio de reciprocidad y a los usos y costumbres internacionales.*
 - c) La extradición funcionará siempre que el país requirente de igual tratamiento a la República de Guatemala en casos similares.*
 - d) Las pruebas producidas en el extranjero, serán apreciadas de conformidad con las normas valorativas del país que la produjo, siempre que tales extremos sean demostrados mediante los procedimientos determinados por la Ley del Organismo Judicial, en materia de prueba de la vigencia de leyes extranjeras, y que el país productor de las mismas mantenga reciprocidad en igual sentido con la República de Guatemala.*
 - e) Cuando un país extranjero solicitare la extradición de un imputado, que se encuentre en Guatemala, la Corte Suprema de Justicia calificará la solicitud, y si la encontrare arreglada a derecho, designará al Juez que debe tramitarla, el que necesariamente será uno de los jueces de primera instancia de sentencia del Departamento de Guatemala. El trámite será en la vía de los incidentes y la resolución de fondo que se dicte, deberá consultarse al Tribunal Superior Jurisdiccional. En todo caso, dicha Resolución será apelable. f) Si una persona fuere reclamada por más de un Estado al mismo tiempo, será atendida con preferencia la solicitud de extradición del Estado en cuyo territorio se hubiere cometido el delito más gravemente sancionado; y habiendo dos o más delitos de igual gravedad aparente, la del que la hubiere reclamado primero, si un sindicado fuere solicitado por un mismo hecho delictivo, por varios Estados la extradición concederá al país donde el delito se hubiere cometido.*
 - g) Cuando la extradición hubiere sido declarada procedente, y el estado, requirente no dispone de la persona reclamada dentro de los treinta días después de haber quedado a su disposición, la misma será puesta en inmediata libertad, al día siguiente de transcurrido el termino indicado, sin que se pueda pedir nuevamente la extradición del imputado, por el mismo hecho delictivo.*
 - h) Firme el fallo, el expediente se comunicará al Organismo Ejecutivo por conducto de la Presidencia del Organismo Judicial, si en éste se deniega la extradición, el Ejecutivo no puede concederla; si por el contrario se resuelve que si procede la entrega de la persona reclamada, el Ejecutivo tiene la facultad para ceñirse o no a lo resuelto por los tribunales de justicia. En todo caso las diligencias y demás antecedentes se devolverán al tribunal de origen, para que sean archivadas o en su caso, se continúe con el proceso en Guatemala.*

i) Si se denegare la extradición, porque así lo resolvieron los tribunales de justicia o porque el Ejecutivo así lo dispuso, Guatemala queda en la obligación de procesar a la persona no extraditada, y además entregarle al Estado solicitante, copia certificada de la sentencia.

El presente artículo, se aplicará a los delitos tipificados en esta ley”.

“Artículo 69. Renuncia a la extradición. *El Estado de Guatemala, podrá entregar a la persona reclamada a la parte requirente sin un procedimiento formal de extradición, siempre y cuando la persona reclamada consienta a dicha entrega ante una autoridad judicial competente”.*

Extradición de Nacionales

750. (c. 39.2) La Constitución Política de Guatemala prohíbe la extradición de nacionales de ese país; no obstante, en dichos casos las autoridades judiciales son competentes del enjuiciamiento por los delitos indicados en el pedido, aplicando las normas penales y procesales que dictan las leyes guatemaltecas.

751. En tanto, el Código Penal de Guatemala establece el principio de EXTRATERRITORIALIDAD DE LA LEY PENAL, indicando que las disposiciones de ese cuerpo normativo se aplicarán:

“1o. Por delito cometido en el extranjero por funcionario al servicio de la República, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se perpetró el hecho.

2o. Por delito cometido en nave, aeronave o cualquier otro medio de transporte guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país en el que se cometió el delito.

3o. Por delito cometido por guatemalteco, en el extranjero, cuando se hubiere denegado su extradición.

4o. Por delito cometido en el extranjero contra guatemalteco, cuando no hubiere sido juzgado en el país de su perpetración, siempre que hubiere acusación de parte o del Ministerio Público y el imputado se hallare en Guatemala.

5o. Por delito que, por tratado o convención, deba sancionarse en Guatemala, aun cuando no hubiere sido cometido en su territorio.

6o. Por delito cometido en el extranjero contra la seguridad del Estado, el orden constitucional, la integridad de su territorio, así como falsificación de la firma del Presidente de la República, falsificación de moneda o de billetes de banco, de curso legal, bonos y demás títulos y documentos de crédito”. (Artículo 5)

Cuando se tratare de SENTENCIA EXTRANJERA, el Artículo 6 del Código Penal señala que *“En los casos de los incisos 1o. y 6o. del artículo anterior, el imputado será juzgado según la ley guatemalteca, aun cuando haya sido absuelto o condenado en el extranjero. La pena o parte de ella que hubiere cumplido, así como el tiempo que hubiere estado detenido, se abandonará al procesado.*

En los demás casos, si hubiere condena, se aplicará la ley más benigna. La sentencia extranjera producirá cosa juzgada”.

752. (c. 39.3): Guatemala puede brindar cooperación con otros Estados en aspectos procesales y de pruebas para asegurar la eficiencia del enjuiciamiento por Lavado de Dinero en los casos donde un Estado Requirente solicite en extradición a un nacional.

753. (c. 39.4): El Código Penal y de Procedimiento Penal de Guatemala establecen las normas sustantivas y de procedimiento aplicables a la extradición. Por otra parte, rigen además los Tratados y Convenios suscritos por Guatemala en materia de extradición a saber:

- Tratado sobre Extradición de Criminales entre Guatemala y Bélgica, suscrito el 20 de noviembre de 1897.
- Convención Adicional al Tratado de Extradición entre Guatemala y Bélgica, suscrito el 26 de abril de 1934.
- Protocolo adicional a la Convención sobre Extradición entre Guatemala y Bélgica, suscrito el 21 de octubre de 1959.
- Tratado de Extradición entre Guatemala y el Reino Unido de España, suscrito el 7 de noviembre de 1895.
- Protocolo Adicional al Tratado de Extradición entre Guatemala y el Reino Unido de España, suscrito el 23 de febrero de 1897.
- Tratado de Extradición entre Guatemala y Estados Unidos de América, suscrito el 20 de febrero de 1940.
- Tratado de Extradición entre Guatemala y la Gran Bretaña, suscrito el 4 de julio de 1885.
- Protocolo Adicional al Tratado de Extradición entre Guatemala y la Gran Bretaña, suscrito el 30 de mayo de 1914.
- Canje de Notas para extender las estipulaciones del Tratado de Extradición a algunos territorios bajo el mandato de la Gran Bretaña, según fecha de canje de 21 de mayo de 1929.
- Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de Guatemala y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito el 17 de marzo de 1997.
- Tratado de Extradición entre la República de Guatemala y la República de Corea, suscrito el 12 de diciembre de 2003.
- Convención Centroamericana sobre Extradición, suscrito el 7 de febrero de 1923.
- Convención Interamericana sobre Extradición, suscrito el 26 de diciembre de 1933.

754. Estadísticas: Fueron muy escasos los datos aportados en esta materia por Guatemala. En referencia a las Extradiciones Pasivas se han tramitado 23 expedientes de personas requeridas por otros países desde finales del año 2008, habiendo sido requeridos por Estados Unidos de América, México, El Salvador y España. No fue posible determinar cuáles son por narcotráfico, lavado de dinero u otros delitos

6.4.2. Recomendaciones y Comentarios.

755. R.39: El país cuenta con disposiciones que hacen posible la extradición en casos de Lavado de Dinero u otros Activos, así como de Financiamiento del Terrorismo. Sin embargo, el número de solicitudes de extradición y el proceso seguido a lo interno por ese país debiera reflejar de modo más claro la eficacia en la implementación actual de los Tratados y Convenios existentes en materia de extradición por casos de Lavado de Dinero u otros Activos.

6.4.3. Cumplimiento de las Rec. 37 y 39, y la RE.V

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.39	MC	<ul style="list-style-type: none"> • El número de solicitudes de extradición y el proceso seguido a lo interno por ese país debiera reflejar de modo más claro la eficacia en la implementación actual de los Tratados y Convenios existentes en materia de extradición por casos de Lavado de Dinero u otros Activos.
R.37	C	
RE.V	MC	<ul style="list-style-type: none"> • El número de solicitudes de extradición y el proceso seguido a lo interno debiera reflejar de modo más claro la eficacia en la implementación actual de los Tratados y Convenios existentes en materia de extradición en casos de FT.

6.5. Otras Formas de Cooperación Internacional (R. 40, RE.V)

6.5.1. Descripción y Análisis

756. (c. 40.1) ; (c. 40.5): El artículo 34 de la Ley ALD y el artículo 21 de la Ley CFT autorizan al Ministerio Público, a la Intendencia de Verificación Especial y a cualquier otra autoridad competente a prestar y solicitar asistencia a las autoridades competentes de otros países en conexión a actuaciones e investigaciones judiciales relativas a los delitos a que se refieren dichas leyes para: a) recibir los testimonios o tomar declaración a las personas; b) presentar documentos judiciales; c) efectuar inspecciones e incautaciones; d) examinar objetos y lugares; e) facilitar información y elementos de prueba; f) entregar originales o copias auténticas de documentos y expedientes relacionados con el caso, inclusive documentación bancaria, financiera y comercial; g) identificar o detectar el producto, los instrumentos y otros elementos con fines probatorios; y h) cualquier otra forma de asistencia judicial recíproca, autorizada por el derecho interno.

757. Tal como explicamos al analizar la RE.III, el derecho interno contempla una amplia gama de medidas cautelares que pueden usarse para atender solicitudes de otros estados, si bien existen limitaciones menores como no poder congelar bienes indirectamente usados por un terrorista individual. Para facilitar acciones de congelamiento de fondos requeridas por otras jurisdicciones, Guatemala cuenta en el artículo 21 de la Ley FT, en donde establece que *“Con la finalidad de facilitar las actuaciones e investigaciones judiciales relativas a los delitos a que se refiere esta Ley, el Ministerio Público y las autoridades judiciales competentes podrán prestar y solicitar asistencia a las autoridades competentes de otros países para:h) Cualquier otra forma de asistencia judicial recíproca, autorizada por el derecho interno.”*

758. (c. 40.1.1): La Encuesta de Satisfacción del Usuario, realizada a los países atendidos requerimientos durante 2008, en Tiempo de respuesta a su requerimiento indicaron un 80% Muy Satisfactorio, y 20% Satisfactorio; en Confiabilidad y calidad de la Información, indicaron un 60% Muy Satisfactorio, y 40% Satisfactorio; y en Atención recibida un 80% Muy Satisfactorio, y 20% Satisfactorio.

759. (c. 40.2): La Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en su Artículo 33 el inciso d); Reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos en sus Artículos 27 y 30; y Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo en sus Artículos 23 y 25 facultan a la Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, la suscripción de memoranda de entendimiento o acuerdos de cooperación con las entidades homólogas de otros países.

760. Consecuentemente, se han firmado en materia de lavado de dinero 38 Memoranda de Entendimiento con unidades homólogas, de los cuales 23 incluyen el financiamiento del terrorismo. Asimismo, la IVE ha proporcionado información en ciertas circunstancias, a pesar de la ausencia de un Memorando de Entendimiento (MOU).

761. Asimismo, la Superintendencia de Bancos ha suscrito 16 acuerdos de cooperación con supervisores extranjeros. La SIB no requiere un MOU para proveer asistencia a un homólogo de otro país.

762. La Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, es miembro del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera, desde el 23 de julio de 2003, por lo cual se aplican los Principios para el Intercambio de Información entre Unidades y el modelo de Memorandum de Entendimiento del mismo, siempre y cuando no contravengan la legislación nacional.

763. (c. 40.3): Se ha intercambiado información con entidades homólogas de otros países:

Requerimientos de Información Internacionales		
Año	Atendidos	Solicitados por la IVE
2006	18	14
2007	36	72
2008	31	19

764. (c. 40.4): Además de las facultades de poder prestar y solicitar asistencia a las autoridades competentes de otros países citadas arriba, las autoridades competentes de Guatemala también pueden, según sus leyes, prestar y solicitar información sobre la identidad, el paradero y las actividades de las personas con respecto a las cuales existen sospechas razonables de que participan en el delito de FT.

765. (c. 40.4.1): La Intendencia de Verificación Especial, de la Superintendencia de Bancos, aplica los Principios para el Intercambio de Información entre Unidades y utiliza como base el modelo de Memorandum de Entendimiento del Grupo Egmont, siempre y cuando no contravengan la legislación nacional. Por tanto, las respuestas a los requerimientos de información de las homólogas extranjeras de la IVE incluyen resultados de la búsqueda de bases de datos, incluyendo información relacionada con los reportes de transacciones sospechosas, a pesar de la ausencia de un MOU.

766. Asimismo, se intercambia información remitida por las Personas Obligadas, previa suscripción de memoranda de entendimiento u otros acuerdos de cooperación.

767. (c. 40.6, 40.7, 40.8): La única prohibición con respecto al acceso e intercambio de información es la indicada en la Constitución Política de la República de Guatemala con respecto a la “Inviolabilidad de correspondencia, documentos y libros”, descritos en la sección 3.4 de este informe. Sin embargo, el Servicio de aduanas no cuenta con un mecanismo establecido para comunicar a otros países cuando encuentre a alguien escondiendo metales preciosos.

768. (c. 40.9): El artículo 36 de la Ley ALD indica:

“Reserva. Con el objeto de garantizar la reserva de las operaciones financieras, las personas que integran la Intendencia de Verificación Especial y cualquier otra persona que por razón del cargo conozca o tenga acceso a la información relacionada en esta ley, están obligadas a mantenerla en reserva, aún después de haber cesado en el cargo.”

6.5.2. Recomendaciones

769. Fortalecer los mecanismos de cooperación de las autoridades aduaneras con sus homólogas del exterior, especialmente para mejorar la detección de envíos ilegales de efectivo y metales preciosos.

770. Recopilar estadísticas útiles y confiables acerca del resultado de los controles aduaneros en cuanto se relacione con el combate al LD/FT.

771. Complementar las respuestas de la IVE a los requerimientos enviados por UIFs extranjeras, con información sobre antecedentes judiciales de las personas investigadas y otras bases de datos externas que sean relevantes.

772. Continuar la medición periódica que hace la IVE de la satisfacción de sus homólogos externos con el tiempo y la calidad de sus respuestas.

6.5.3. Cumplimiento de las Rec. 40, y la Recomendación Especial V.

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.40	MC	<ul style="list-style-type: none"> • El Servicio de aduanas no cuenta con un mecanismo establecido para comunicar a otros países cuando encuentre a alguien escondiendo metales preciosos. • La IVE no aprovecha suficientemente la posibilidad de consultar información de terceras fuentes (como antecedentes judiciales de las personas) al responder solicitudes de información. • A pesar de la existencia de un convenio de cooperación aduanera con El Salvador con respecto al tránsito de personas, mercancías y dinero en efectivo, al momento de la visita no había estadísticas disponibles con respecto a la cooperación llevada a cabo entre El Salvador y Guatemala.
RE.V	MC	[ver secciones 6.3.3 y 6.4.3]

7. OTRAS CUESTIONES**7.1. Recursos y estadísticas**

	Calificación	Resumen de los factores que apoyan la Calificación
R.30	PC	<ul style="list-style-type: none"> • El Órgano Judicial no ha recibido suficiente capacitación especializada en el área de LD-FT. • La Policía no tiene suficientes recursos ni capacitación para enfrentar delitos de cuello blanco. • El Departamento de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) del Ministerio Público se conforma mayormente de estudiantes universitarios, quienes tampoco están adecuadamente dotados ni capacitados a nivel técnico para investigar delitos de LD-FT. • La Dirección de Inteligencia Civil (DIGICI) del Ministerio de Gobernación DIGICI no está suficientemente capacitada y no tiene los recursos necesarios para colaborar con los otros actores en la lucha ALD-CFT. • La IVE carece de suficientes recursos humanos para supervisión in situ ALD/CFT de las 400 instituciones financieras registradas. Esto se agravará al incluir a las APNFDS, de las cuales se habían registrado 429 al momento de la visita. •
R.32	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Aunque la IVE recopila estadísticas adecuadas relacionadas con su trabajo como UIF y como Supervisor, no existe un sistema de recolección y análisis de datos en otras instituciones que le permita a las autoridades priorizar necesidades, planear una estrategia integral nacional, ni revisar la eficacia de su sistema ALD/CFT. • El Ministerio Público no cuenta con un sistema de estadísticas establecido para darle seguimiento a la efectividad de investigaciones y condenas por LD-FT. • No se conoce el número exacto, sino una estimación de las APNFDS.

		<ul style="list-style-type: none"> • No hay estadísticas disponibles sobre cooperación con autoridades aduaneras de otros países para la detección de dinero o valores en frontera.
--	--	--

7.2. Otras medidas o asuntos ALD/CFT relevantes

**Los Evaluadores pueden utilizar esta sección para plasmar información sobre alguna medida o cuestión adicional que se corresponda con el sistema ALD/CFT en el país que está siendo objeto del examen, y que no sea abordada en otra parte del informe.*

7.3. Marco general para el sistema ALD/CFT (ver también sección 1.1)

**Los Evaluadores pueden utilizar esta sección para expresar sus comentarios sobre algún aspecto del marco general jurídico e institucional dentro del cual han sido establecidas las medidas ALD/CFT, y particularmente con respecto a algún elemento estructural incluido en la sección 1.1, en los casos en que consideren que estos elementos del marco general afectan o inhiben la efectividad del sistema ALD/CFT.*

773. Las graves dificultades del aparato legal e institucional de Guatemala para investigar delitos complejos de LD, para señalar y castigar a los grandes delincuentes y a los funcionarios corruptos involucrados en operaciones de lavado, y para quitarles a éstos el producto económico de sus delitos, constituyen quizás la principal dificultad que enfrentan las autoridades de Guatemala en materia de prevención y combate al LD y FT.

774. El equipo evaluador es optimista sobre la evolución de los planes existentes en el país para integrar y coordinar los esfuerzos de las distintas autoridades que están trabajando en esto. El involucramiento que tuvo el Vicepresidente de la República en este proceso de evaluación, así como el rol impulsor que asumirá dentro del esquema de coordinación interinstitucional que estaba próximo a formalizarse al momento de la visita, generan expectativas positivas sobre los resultados del sistema guatemalteco a mediano plazo.

775. Sin embargo, los esfuerzos por combatir la corrupción, por modernizar el sistema judicial y combatir el crimen en general, deben redoblar-se para generar los cimientos sin los cuales el sistema ALD/CFT no podrá ser eficaz.

TABLA 1. CALIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO CON LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI

La Calificación del cumplimiento con respecto a las recomendaciones del GAFI debe hacerse en concordancia con los cuatro niveles de cumplimiento a los que se hace mención en la Metodología del 2004: Cumplida (C), Mayormente Cumplida (MC), Parcialmente Cumplida (PC), No Cumplida (NC), o, en casos excepcionales, se podría marcar como no aplicable (na).

Las Cuarenta Recomendaciones	Calificación	Resumen de factores que apoyan la Calificación ¹⁰
Sistema jurídico		
1. Tipificación del LD	MC	<ul style="list-style-type: none"> • Efectividad: Bajo número de sentencias por LD en relación con el alto índice de criminalidad que existe en este país.
2. Tipificación del LD–elemento mental y responsabilidad corporativa	MC	<ul style="list-style-type: none"> • No se ha condenado penalmente a ninguna persona jurídica por LD, a pesar de estar previsto en la legislación desde el 2001. • Aun son pocas las condenas con penas severas y los casos complejos de LD a través del sistema financiero (uno de ellos relacionado con Corrupción). La mayoría de condenas corresponde a casos de transporte ilegal de efectivo (o “mulas”). Esto reduce el efecto disuasivo de las penas.
3. Confiscación y medidas provisionales	PC	<ul style="list-style-type: none"> • No se autoriza el comiso de bienes de valor equivalente. • No existen medidas para prevenir o anular actos o contratos celebrados con el fin de restringir la posibilidad de las autoridades de recuperar bienes sujetos a confiscación. • La solicitud del Ministerio Público ante los Tribunales, para que sean dictadas medidas cautelares es dilatada, poco efectiva y compromete la confidencialidad de la diligencia a practicar. • El beneficio de Antejuicio de que gozan algunos funcionarios públicos, especialmente a nivel municipal, limita en la práctica la investigación, rastreo y confiscación de bienes en casos de corrupción. • No existe coordinación táctica, técnica ni operativa entre las autoridades y agencias del orden público para identificar y rastrear adecuadamente la propiedad sujeta a confiscación.
Medidas preventivas		
4. Leyes sobre el secreto a tono con las Recomendaciones	C	[cumplida]
5. Diligencia debida sobre el cliente	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Algunas obligaciones que deberían estar plasmadas en ley o reglamento (criterios con asterisco 5.5.2.b y 5.4.a), están solo incluidas en circulares obligatorias de menor jerarquía • Eficacia: La limitada confiabilidad de la Cédula de Vecindad puede representar dificultades para que las personas obligadas identifiquen a sus clientes apropiadamente tal como se

¹⁰ Se pide plasmar estos factores solamente cuando la Calificación es inferior a Cumplida.

		<p>requiere en el artículo 21 de la Ley ALD (c. 5.3).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Problemas de eficacia para que las instituciones financieras determinen la titularidad de una empresa jurídica pues el formulario de apertura de cuentas se centra excesivamente en una certificación del Registro Mercantil que no contiene información suficiente ni actualizada, y la existencia de acciones al portador limita el conocimiento acerca del tenedor de los títulos (c. 5.5.2). • Según las personas obligadas, los esfuerzos de actualización de datos no han sido completamente eficaces (c. 5.7.2) • La Guía de Administración de Riesgos solo aplica a Bancos, Financieras y Offshore, por lo que no se ha exigido al resto de las instituciones financieras, realizar una diligencia debida más profunda para categorías de clientes, relaciones comerciales o transacciones de mayor riesgo.(c. 5.8) • No se establecen límites referentes a los casos en que es permitido posponer la verificación de la identidad del cliente y beneficiario real tras el establecimiento de la relación comercial. Además, no se les indica a las instituciones financieras que establezcan procedimientos de manejo de riesgos cuando permitan esta situación. (c. 5.14) • No se indica a las instituciones financieras que deben considerar elaborar RTS cuando no puedan obtener o verificar los datos del cliente o del beneficiario real o los datos referentes a la naturaleza de la relación (c. 5.15)
6. Personas políticamente expuestas	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Las disposiciones de debida diligencia sobre las PEPS no han sido requeridas a todas las instituciones financieras solo a Bancos, Financieras, y Offshore que concentran el mayor riesgo. • No se exige a las instituciones financieras que obtengan la aprobación de un funcionario gerencial para continuar la relación comercial ya establecida con una persona políticamente expuesta. • La definición de PEPs no es tan amplia como lo pide el GAFI ni incluye a las personas asociadas a estos
7. Banca corresponsal	MC	<ul style="list-style-type: none"> • Las regulaciones no aplican a relaciones entre corredores de bolsa e hipotéticas contrapartes del exterior • No se han dado lineamientos mas específicos sobre las medidas ALD/CFT que deben tomar las instituciones financieras en relación a las Payable Through Accounts.
8. Nuevas tecnologías y negocios que no son cara a cara	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Las disposiciones específicas referentes a avances tecnológicos y relaciones que no son cara a cara son de reciente emisión por lo que no se pudo comprobar su efectividad (la Guía de Administración de Riesgos fue emitida unos cuantos meses antes de la visita). • La Guía de Administración de Riesgo emitida por la IVE en abril de 2009, que constituye el lineamiento que aborda en forma directa el tema de los productos y servicios innovadores, y el tema de los canales de distribución (dentro de los cuales podrían incluirse las relaciones que no son cara a cara) no ha sido completamente implementada y aplica

		solamente a Bancos, Financieras y Offshore, por lo que las demás personas obligadas están desprovistas de una instrucción clara y específica al respecto.
9. Terceros e intermediarios presentadores	MC	<ul style="list-style-type: none"> No existen lineamientos para los casos en que las instituciones deleguen algunos aspectos de la DDC, porque en opinión de las autoridades esto no está permitido, y en la práctica nunca se ha dado. Sin embargo, en opinión de los evaluadores, tal delegación no está claramente prohibida.
10. Mantenimiento de registros	MC	<ul style="list-style-type: none"> Las normas no establecen de manera expresa desde qué momento se empieza a contar el plazo de cinco años para los registros de la correspondencia comercial de clientes que no este relacionada con transacciones.
11. Transacciones inusuales	MC	<ul style="list-style-type: none"> Los intermediarios de seguros, como instituciones financieras, no están obligados a la Prevención LD/FT, ni al monitoreo, detección y análisis de operaciones inusuales.
12. APNFD– R.5, 6, 8-11	NC	<ul style="list-style-type: none"> Las APNFD no están obligadas expresamente por ley a la Prevención LD, ni a desarrollar determinadas políticas en cuanto a conocer al cliente, a medidas especiales para clientes de alto riesgo como son los PEP's, ni a mantener registros de información, ni a presentar RTS sobre LD, ni a monitorear relaciones contractuales para detectar inusuales tendentes a determinar patrones de LD. El sector de las APNFD no cuentan con Programas de Prevención LD/FT que incluyan políticas y controles internos para monitorear riesgos, capacitación y auditorías. La Ley CFT (que establece la lista de las APNFD) es de agosto del 2005; sin embargo es hasta el 24 de abril del 2009 (menos de 2 meses antes de la visita de la Misión Evaluadora del GAFIC) que la Superintendencia de Bancos emite el Oficio No. 424-2009, por el cual hace del conocimiento a las APNFD que deberán dar cumplimiento a las normas legales de LD y FT. A la Lotería (como APNFD) se le convocó a través del Oficio No. 179-2009 de febrero del 2009. Al momento de la visita de evaluación, la IVE apenas está iniciando el proceso de registro y primeras reuniones de acercamiento con ciertos sectores de las APNFD; razón por la cual no se puede conocer implementación y efectividad de las políticas PLD/FT, ni de la supervisión y seguimientos al respecto. Los notarios, contadores y auditores aún no han sido registrados ante la IVE para fines de PLD/FT. Los abogados y proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos no están previstos en las leyes y reglamentos de la materia como Sujetos Obligados a la Prevención LD/FT. En el Registro Mercantil no hay información relevante sobre proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos. El negocio de Casinos es una realidad innegable en el país pese a estar prohibido por la ley. No se logra hacer cumplir la prohibición, pero tampoco están sujetos a obligaciones ALD/CFT
13. Reporte de	MC	<ul style="list-style-type: none"> Es mínimo el número de RTS's (cerca del 2% del total)

transacciones sospechosas		<p>presentados por instituciones financieras no bancarias, tales como financieras, aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, casas de cambio, almacenadoras y empresas de canje de cheques</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los RTS presentan ciertas deficiencias de calidad y contenido. • Existe temor entre algunos Oficiales de Cumplimiento de ser llamados en calidad de testigos o peritos ante los Tribunales en relación con la operación reportada.
14. Protección y no alertar	C	[cumplida]
15. Controles internos, cumplimiento y auditoría	C	[cumplida]
16. APNFD – R.13-15 & 21	NC	<ul style="list-style-type: none"> • No existe obligación legal expresa y directa para que las APNFD (con excepción de loterías, rifas y similares) presenten RTS sobre LD conforme el art. 26 de la Ley ALD, únicamente están obligadas al RTS sobre FT conforme el art. 16 de la Ley CFT y art 7 del Reglamento a la Ley CFT. • Hay un Sector de las APNFD, constituidos por Abogados, Notarios y Contadores, a los que la Ley CFT expresamente los exime de la obligación de presentar RTS sobre FT, y conforme lo señalado en el factor de calificación anterior, tampoco están obligados a presentar RTS en LD, ni ante la IVE, ni ante alguna autoridad de autorregulación;. En ambas situaciones no se especifica el motivo, la delimitación o el contexto en el que opera dicha exención como podría ser el privilegio profesional legal o el secreto profesional legal. • Es nulo el cumplimiento de los RTS en el sector de los APNFD. La IVE está iniciando trabajos de registro y primeras reuniones de acercamiento con este sector obligado. • No existe una obligación expresa que oriente a que los RTS se estructuren y presenten independientemente de que se piense, o no, que están involucradas cuestiones fiscales o tributarias. • No existe realimentación de la IVE hacia los APNFD sobre las decisiones y resultados alrededor de un RTS: por ejemplo si prestó mérito para subsecuente investigación y/o judicialización; o si del análisis se concluyó que la transacción reportada era lícita. • Las APNFD no están obligadas expresamente por ley a desarrollar Programas de PLD/FT que incluyan políticas y controles internos para monitorear riesgos, capacitación y auditorías; y la mayoría de las APNFT no ha desarrollado Programas PLD/FT por iniciativa propia. • Los proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos no están previstos en las leyes y reglamentos de la materia como Sujetos Obligados a la Prevención LD/FT, y por consiguiente no están obligados a presentar RTS. • El negocio de Casinos es una realidad innegable en el país pese a estar prohibido por la ley (según interpretación amplia del Código Penal compartido por las autoridades locales); lo que en la práctica se traduce en que este sector (reconocido como vulnerable pero no obligado por Ley) no esté sujeto a

		<p>ninguna obligación de contar con Programa de Prevención LD/FT ni de presentar RTS conforme los estándares internacionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Las APNFD no tienen protección legal expresa por responsabilidades en ocasión de presentar RTS, por cuanto la Ley CFT y su Reglamento no establece que a este tipo de entidades también le es aplicable la protección previta para las instituciones financieras en el es el art. 30 de la Ley ALD: En el ordenamiento jurídico guatemalteco, no existen disposiciones por las cuales se prohíba las APNFT y sus funcionarios, revelar el hecho de que un RTS está siendo presentado, y por consiguiente no se prevé sanciones sobre este aspecto.
17. Sanciones	PC	<ul style="list-style-type: none"> Solo 10 multas en 6 años (entre 2003 y 2008), todas concentradas en Bancos, salvo 1 para una Casa de Cambio. La escala de sanciones pecuniarias establecida por la Superintendencia limitó la sanción máxima muy por debajo de lo previsto en la Ley, lo cual podría impedirle a la SIB imponer multas ejemplarizantes o proporcionales a la gravedad de ciertas infracciones La gama de sanciones ALD/CFT es limitada: No se prevén sanciones a directores y a la administración superior No existe facultad para retirar, restringir o suspender licencia por incumplimientos PLD/FT a los Sujetos Obligados que no son instituciones financieras.
18. Bancos ficticios	MC	<ul style="list-style-type: none"> No se prohíbe a Casas de Bolsa , tener relaciones de corresponsalia con bancos ficticios en el extranjero. La Guía sobre Bancos Corresponsales, Sucursales y Subsidiarias fue emitida durante el período de la visita por lo que no fue posible verificar su implementación indagando sobre la misma al sector financiero.
19. Reporte de transacciones en efectivo	C	[cumplida]
20. Otros APNFD y técnicas seguras para transacciones	C	[cumplida]
21. Atención especial a países de mayor riesgo	MC	<ul style="list-style-type: none"> Las Guías que recientemente incluyeron medidas de prevención e información sobre países de alto riesgo tienen las siguientes deficiencias: a) sólo aplican a bancos, compañías financieras y entidades off-shore (sector de mayor riesgo según estudio hecho por Guatemala), y no a las demás instituciones financieras tales como casas de bolsa que no pertenezcan a grupos financieros, y cooperativas de ahorro y crédito (estas últimas tienen casi la misma cantidad de activos que las compañías financieras); b) se expresan en un lenguaje que no deja clara su obligatoriedad.
22. Sucursales y subsidiarias en el exterior	PC	<ul style="list-style-type: none"> A las personas obligadas diferentes de bancos y offshore se les indica que se aseguren de que sus sucursales y subsidiarias cumplan con las disposiciones ALD del país anfitrión, lo cual es el principio inverso al requerido por el GAFI. Además no

		<p>se les exige que estos establecimientos apliquen los requisitos de Guatemala en especial cuando el país anfitrión es un país no cooperante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se les exige a las instituciones financieras diferentes de bancos y offshore a que instruyan a sus sucursales y subsidiarias en el extranjero a aplicar el estándar más alto cuando hay diferencias entre los requisitos de Guatemala y los del país extranjero. • No se exige a las instituciones financieras diferentes de bancos y offshore, informar a la SIB sobre dificultades que sus sucursales o subsidiarias extranjeras encuentre al intentar cumplir con las medidas ALD/CFT debido a impedimentos del país extranjero. • Aunque no es posible abrir una sucursal bancaria sin autorización de la SIB Supervisión la Guía específica sobre sucursales aplicable a bancos, es muy reciente y no se pudo verificar su eficaz aplicación (fue emitida al final de la visita del equipo evaluador).
23. Regulación, supervisión y monitoreo	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Recurso humano insuficiente en la IVE para poder supervisar a todos los sujetos obligados del país. • Poco antes de la evaluación se implementó un esquema moderno de supervisión basada en riesgos. Sin embargo, anteriormente la IVE no daba informes escritos a las instituciones supervisadas, ni realizaba seguimientos de rutina a las recomendaciones de mejora y era demorada en comunicar al menos verbalmente sus hallazgos de inspección a la institución financiera. • No se han hecho suficientes visitas de inspección in situ a instituciones del sector de seguros y valores, y aun menos a las instituciones no sujetas a principios centrales (como empresas remesadoras).
24. APNFD- regulación, supervisión y monitoreo	NC	<ul style="list-style-type: none"> • El negocio de Casinos es una realidad innegable en Guatemala, pese a estar prohibido conforme al Código Penal. • A pesar de que no se hace efectiva la prohibición para Casinos, tampoco están sujetos a licencias previas para operar; ni son Sujetos Obligado a Prevenir el LD/FT; ni existe ninguna autoridad estatal o de autorregulación que los supervise, los monitoree y les aplique medidas sancionadoras en materia ALD/CFT. • La IVE está en proceso de registro de las APNFD y de las primeras reuniones de acercamiento con este sector, por lo cual aún no existe en marcha una efectiva supervisión, monitoreo y adopción de medidas sancionadoras por parte de la IVE. • La IVE aún no cuenta con procedimientos y/o manual para la supervisión efectiva de las APNFD en materia ALD/CFT.
25. Guías y Realimentación	MC	<ul style="list-style-type: none"> • Limitada y reciente realimentación hacia las instituciones financieras. • Solamente el 2% del total de RTSs son presentados por instituciones financieras no bancarias, tales como financieras, aseguradoras, afianzadoras, casas de bolsa, casas de cambio,

		<p>almacenadoras y empresas de canje de cheques. Esto denota falta de guía y concienciación adecuadas en estos sectores.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existen lineamientos que indican que se debe brindar a las instituciones financieras información sobre métodos y técnicas LD, sin embargo, no se pudo comprobar que las autoridades den esta información a las instituciones obligadas • APNFD: No existe aún una labor efectiva de realimentación, directrices y lineamientos en materia ALD/CFT para los APNFD. La IVE está en las primeras reuniones de acercamiento con este sector convocado por medio del reciente Oficio IVE No. 424-2009 • APNFD: Ninguna autoridad gremial y/o de autorregulación en el sector de las APNFD ha desarrollado lineamientos en materia ALD/FT.
Medidas institucionales y de otro tipo		
26. UIF	MC	<ul style="list-style-type: none"> • La IVE no tiene acceso rápido a información policial • La IVE no recibe respuestas rápidas a los requerimientos de información que le hace a otras instituciones • Excesivo gasto de tiempo y recursos para tramitar consultas del MP, los cuales podrían asignarse a fortalecer el análisis de casos y la coordinación con el propio MP para investigación de casos complejos. • La Unidad de Análisis de Información de la IVE aún no ha dado a conocer públicamente suficientes informes periódicos con estadísticas, tipologías y tendencias, e información de las actividades de la IVE
27. Autoridades del orden y técnicas de investigación	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Efectividad: las acciones penales en contra de lavadores de dinero son relativamente pocas y sin suficiente énfasis en los líderes de organizaciones criminales o corruptas. Las autoridades del orden responsables de la investigación del delito, especialmente la Policía Nacional Civil, no tienen capacidades técnicas ni humanas suficientes para apoyar al Ministerio Público en sus investigaciones por LD/CFT. • La experiencia indica que no es posible preservar la confidencialidad en la investigación de casos de LD/FT después que el juez haya sido informado. • El fuero del que disfrutaban los alcaldes puede ser, en algunos casos, un obstáculo para el MP en la investigación de casos de LD/FT.
28. Poderes para acceder a documentos e información.	C	[cumplida]
29. Supervisores-facultades	MC	<ul style="list-style-type: none"> • Ni la Superintendencia ni la IVE tienen facultad expresa para sancionar a directores y miembros de la alta gerencia de las instituciones financieras por incumplimientos del régimen ALD/CFT. Sólo pueden hacerlo indirectamente emitiendo instrucciones a la institución financiera.
30. Recursos, integridad y capacitación	PC	<ul style="list-style-type: none"> • El Órgano Judicial no ha recibido suficiente capacitación especializada en el área de LD-FT.

		<ul style="list-style-type: none"> • La Policía no tiene suficientes recursos ni capacitación para enfrentar delitos de cuello blanco. • El Departamento de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) del Ministerio Público se conforma mayormente de estudiantes universitarios, quienes tampoco están adecuadamente dotados ni capacitados a nivel técnico para investigar delitos de LD-FT. • La Dirección de Inteligencia Civil (DIGICI) del Ministerio de Gobernación DIGICI no está suficientemente capacitada y no tiene los recursos necesarios para colaborar con los otros actores en la lucha ALD-CFT. • La IVE carece de suficientes recursos humanos para supervisión in situ ALD/CFT de las 400 instituciones financieras registradas. Esto se agravará al incluir a las APNFDS, de las cuales se habían registrado 429 al momento de la visita.
31. Cooperación nacional	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de la visita no existían mecanismos para una buena coordinación y colaboración entre las entidades con facultades de investigar, prevenir y reprimir los delitos de LD-FT.
32. Estadísticas	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Aunque la IVE recopila estadísticas adecuadas relacionadas con su trabajo como UIF y como Supervisor, no existe un sistema de recolección y análisis de datos en otras instituciones que le permita a las autoridades priorizar necesidades, planear una estrategia integral nacional, ni revisar la eficacia de su sistema ALD/CFT. • El Ministerio Público no cuenta con un sistema de estadísticas establecido para darle seguimiento a la efectividad de investigaciones y condenas por LD-FT. • No se conoce el número exacto, sino una estimación de las APNFDS. • No hay estadísticas disponibles sobre cooperación con autoridades aduaneras de otros países para la detección de dinero o valores en frontera.
33. Personas jurídicas – beneficiarios	NC	<ul style="list-style-type: none"> • La legislación nacional permite la emisión de acciones al portador, no siendo posible a las autoridades y sujetos obligados tener acceso a información que permita conocer la identidad del beneficiario o usufructuario real, así como de los sujetos que controlen las personas jurídicas. • Las autoridades competentes y entidades declarantes no tienen acceso a información sobre los beneficiarios reales de las personas jurídicas o los sujetos quienes ejercen el control de estas últimas. • La ley y las reglamentaciones ALD/LFT no han abordado, a través de normas específicas el mecanismo para prevenir y controlar el posible abuso de las personas jurídicas, particularmente de las sociedades mercantiles que puedan emitir acciones al portador, en actividades de Lavado de Dinero o de Financiamiento del Terrorismo. • La información que se encuentra disponible en el Registro Mercantil si bien es de dominio público, no está actualizada y actualmente no existen los mecanismos adecuados que

		permitan esta actualización.
34. Acuerdos legales – beneficiarios	MC	<ul style="list-style-type: none"> Efectividad: Aún cuando sólo entidades de crédito supervisadas pueden ser proveedores de servicios fiduciarios y deben cumplir la misma normativa ALD/CFT, se requiere dotarlos de mayores guías e instructivos especializados, y un mejor cumplimiento de medidas para estos servicios.
Cooperación Internacional		
35. Convenciones	C	[cumplida]
36. Ayuda legal mutua (ALM)	MC	La falta de estadísticas detalladas impide evaluar adecuadamente la efectividad.
37. Doble incriminación	C	[cumplida]
38. ALM en confiscación y congelamiento	PC	<ul style="list-style-type: none"> El país adolece de normas jurídicas que autoricen la repartición de la propiedad relacionada con el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo, cuando se realicen investigaciones conjuntas con otros países. Los bienes comisados por los delitos de LD y FT únicamente benefician al Órgano Judicial. No se ha conformado un fondo de activos comisados que coadyuve en las tareas que desempeñan autoridades competentes, como las fuerzas del orden y las autoridades de investigación de estos delitos. En la práctica, si bien la legislación lo contempla, los activos confiscados producto de las providencias que ordenan medidas cautelares, no son asignados provisionalmente para su uso por parte de las diferentes autoridades encargadas de prevenir y reprimir el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo en ese país.
39. Extradición	MC	<ul style="list-style-type: none"> El número de solicitudes de extradición y el proceso seguido a lo interno por ese país debiera reflejar de modo más claro la eficacia en la implementación actual de los Tratados y Convenios existentes en materia de extradición por casos de Lavado de Dinero u otros Activos.
40. Otras formas de cooperación	MC	<ul style="list-style-type: none"> El Servicio de aduanas no cuenta con un mecanismo establecido para comunicar a otros países cuando encuentre a alguien escondiendo metales preciosos. La IVE no aprovecha suficientemente la posibilidad de consultar información A pesar de la existencia de un convenio de cooperación aduanera con El Salvador con respecto al tránsito de personas, mercancías y dinero en efectivo, al momento de la visita no había estadísticas disponibles con respecto a la cooperación llevada a cabo entre El Salvador y Guatemala.
Las Nueve Recomendaciones Especiales	Calificación	Resumen de factores que apoyan la Calificación
RE.I Implementación de instrumentos de las NU	PC	<ul style="list-style-type: none"> Los mecanismos existentes no son lo suficientemente rápidos para permitir tomar medidas en cumplimiento de las Resoluciones 1267 y 1373
RE.II Penalización del	MC	<ul style="list-style-type: none"> Aunque estudios serios realizados por las autoridades indican

financiamiento del terrorismo		<p>que el riesgo de FT ha sido muy bajo en el pasado, la ausencia de casos e investigaciones impide tener total certeza sobre la efectiva implementación de esta recomendación. .</p> <ul style="list-style-type: none"> • La inhabilidad del Sistema Judicial para perseguir e investigar delitos complejos en los que se utilice al sistema financiero, pone en duda la posibilidad de imponer sanciones por FT. • La financiación de individuos u organizaciones terroristas no es mencionada en el Código Penal y para sancionarla es necesario hacer una interpretación amplia de la ley, la cual aun no ha sido puesta a prueba judicialmente.
RE.III Congelamiento y confiscación de activos terroristas	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha demostrado en la práctica la posibilidad de congelar muy rápidamente activos derivados de cualquier delito y el fiscal podría dar una orden en cuestión de horas con base en los listados del CSNU. pero no hay obligación general para los sujetos obligados de suspender la transacción e inmovilizar los fondos mientras reciben una orden formal–. • No hay procedimiento para tramitar peticiones de retirar un nombre de la lista de la Res. 1267, ni para autorizar acceso a fondos mínimos de subsistencia al afectado. • No se permite el embargo o secuestro de bienes adicionales generados indirectamente a partir de los bienes utilizados por un terrorista, a menos que éste sea parte de una organización criminal.
RE.IV Reporte de transacciones sospechosas	MC	<ul style="list-style-type: none"> • La obligación de presentar RTS en materia FT prevista en el art. 16 de la Ley CFT, no hace referencia expresa a las operaciones intentadas o no concluidas. • Los mismos factores de la Rec. 13 afectan la Rec.
RE.V Cooperación internacional	MC	<ul style="list-style-type: none"> • Aunque existe la normativa para brindar cooperación, no se pudo establecer claramente el nivel de efectividad y celeridad en aplicación de la misma por parte de las autoridades judiciales • El número de solicitudes de extradición y el proceso seguido a lo interno debiera reflejar de modo más claro la eficacia en la implementación actual de los Tratados y Convenios existentes en materia de extradición en casos de FT
RE VI Negocios de transferencia de dinero/valor	MC	<ul style="list-style-type: none"> • La IVE no ha expedido un instructivo para remesadoras que permita poner en práctica todos los controles previstos en la Ley.
RE VII Transferencias cablegráficas	MC	<ul style="list-style-type: none"> • Aunque la Ley y el Reglamento CFT establecen obligaciones acordes con la RE.VII, y el sector bancario las cumple en buena medida, podrían generarse dudas acerca del umbral a partir del cual se exige obtener información y monitorear transferencias cablegráficas. • Los factores que determinan la calificación de la Rec. 17 (sanciones) afectan el cumplimiento de esta recomendación.
RE.VIII Organizaciones sin fines de lucro	PC	<ul style="list-style-type: none"> • Las autoridades estatales pertinentes no desarrollan reevaluaciones periódicas para determinar posibles vulnerabilidades de las OSFL ante el FT. • No existe ningún convenio de colaboración entre las autoridades estatales para un fluido intercambio de

		<p>información ante investigaciones de OSFL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las OSFL que no califican como Sujetos Obligados ante la IVE, no pasan por mayores controles, únicamente son registradas y autorizadas. • No existe labor de supervisión y monitoreo efectivo ALC/CFT en el sector de las OSFL, ni de manera particular sobre aquellas que tienen una porción significativa de recursos financieros o de actividades internacionales en dicho sector. • No se han hecho estudios sobre corrupción en todo el sector de las OSFL, ni de manera particular en aquellas que reciben fondos del Estado para ejecutar obras sociales, pese a que este tipo de OSFL también tiene controles por parte de la Contraloría de la República. • No existen respuestas a solicitudes internacionales de información por investigaciones de OSFL ante sospechosas de actividades terroristas, incluyendo el financiamiento. • Ninguna OSFL en Guatemala ha sido sancionada por incumplimientos en materia de ALC/CFT.
RE.IX – Declaración/Revelación de efectivo transfronterizo	PC	<ul style="list-style-type: none"> • No existe un control efectivo del movimiento de personas y dinero en efectivo en las fronteras y en los puestos marítimos. • No existe una efectiva cooperación entre las autoridades competentes en ALD-CFT y el Servicio de Administración Tributaria-Aduanas. • No existe una política establecida y eficaz para el control del movimiento transfronterizo inusual de oro, metales o piedras preciosas. • No existe en Guatemala ningún mecanismo que le permita a las autoridades identificar, ni una norma que las obligue a controlar y retener, dinero en las fronteras que pudiera estar relacionado con personas listadas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. • No se pueden imponer sanciones administrativas por la violación de la obligación de declarar

TABLA 2: PLAN DE ACCIÓN RECOMENDADO PARA MEJORAR EL SISTEMA ALD/CFT

Sistema ALD/CFT	Acción que se recomienda
1. General	
2. Sistema Jurídico y Medidas Institucionales Relacionadas	
2.1 Penalización del Lavado de Dinero (R.1 & 2)	<p>R.1 y 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer la capacidad de la Policía para apoyar más eficazmente al Ministerio Público en las investigaciones. Considerar la creación de una unidad especializada de investigación policial. • Debería considerarse incrementar el número de Fiscalías especializadas (actualmente 4) que atienden casos de LD, con la intención de agilizar los procesos. • Dictar a los jueces programas de actualización acerca de la normativa penal de LD, para evitar interpretaciones incorrectas sobre su alcance y capacitarlos para manejar casos de LD más complejos que los asociados al contrabando de efectivo. Debería valorarse la posibilidad de crear Tribunales Especializados para conocer casos de LD o de delitos financieros. • Debe aprobarse el Acuerdo Gubernativo que está en proyecto y crea una comisión interinstitucional que incluye a los estamentos de seguridad, el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera IVE, además del Organismo Judicial, e implementar el trabajo de la misma con la intención de minimizar la desconexión sistemática en el abordaje integral del fenómeno del LD. • Buscar entablar un vínculo a nivel técnico entre los analistas de la IVE y los de la unidad especializada de análisis financiero del Ministerio Público, para perfeccionar y distribuir adecuadamente el análisis, y así ahorrar tiempo y optimizar la calidad de los informes.
2.2 Penalización del Financiamiento del Terrorismo (RE. II)	<ul style="list-style-type: none"> • Incorporar expresamente en el Código Penal el acto de financiar a una organización terrorista o a un terrorista individual, para que el castigo de esta conducta no dependa de una interpretación amplia del artículo 5. • Se recomienda fortalecer y modernizar las estructuras y técnicas investigativas tanto del Ministerio Público, como de los estamentos de seguridad, así como la interacción entre estos cuerpos instructivos, con la finalidad de poder iniciar y desarrollar investigaciones efectivas en materia de delitos

	<p>complejos, como el Financiamiento del Terrorismo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debería implementarse el uso de los modernos métodos de investigación, consistentes en las operaciones encubiertas, entregas vigiladas, interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación, contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, con la finalidad de detectar e investigar casos por delitos complejos, entre estos el FT en Guatemala. Estas modernas técnicas de investigación, se encuentran consagradas y en vigencia por Ley, en el Título III, del Decreto del Congreso de la República N° 21 del año 2006.
<ul style="list-style-type: none"> • 2.3 Confiscación, congelamiento y decomiso de activos del crimen (R.3) 	<ul style="list-style-type: none"> • Identificar y eliminar las razones por las cuales el Ministerio Público teme que al solicitar medidas provisionales a los jueces se pone en riesgo la confidencialidad y eficacia de las investigaciones. Eliminar también los efectos indeseados del beneficio de antejuicio en las investigaciones por lavado sobre los funcionarios públicos a quienes beneficia esta figura. • Autorizar el comiso de bienes de valor equivalente y crear recursos legales para que las autoridades puedan prevenir o anular los contratos celebrados por personas que simplemente buscan impedir la confiscación de bienes. • Debería considerarse una reforma legal, para que el dinero y bienes comisados por casos de LD y FT, así como el uso temporal de bienes sujetos a medidas provisionales, sean distribuidos de acuerdo con criterios de equidad y política criminal entre todos los cuerpos tanto preventivos, como represivos involucrados en la lucha ALD/CFT, y no sólo al Organismo Judicial. • Crear canales de comunicación interinstitucionales entre la IVE y las demás entidades encargadas del orden público, como la policía y las fiscalías, y fortalecer la capacidad técnica, operativa, y presupuestaria de Policía y Fiscalías para identificar y rastrear la propiedad sujeta a confiscación. • Realizar esfuerzos para lograr una interacción y un mayor grado de comunicación y coordinación entre el IVE y la Unidad de Análisis del Ministerio Público, con el objetivo de evitar duplicidad de funciones y la mayor comunicación a nivel técnico de los analistas. • Considerar modificar y ampliar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad CICIG para atender casos relacionados con el LD y el FT, lo que podría descongestionar el sistema, agilizar los procesos y llegar a fallos por estos delitos más rápido y con resultados más

	efectivos.
2.4 Congelamiento de fondos utilizados para el financiamiento del terrorismo (RE. III)	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer un procedimiento específico que permita congelar en cuestión de horas después de detectados, los activos de personas designadas bajo el marco de la Resolución 1267 (1999) del Consejo de Seguridad de la ONU. • Establecer un procedimiento para actuar en tiempo razonable en caso de que otro país notifique a Guatemala que ha designado a una persona como terrorista con base en la Resolución 1373 de las Naciones Unidas, cuando dicha notificación no reviste el carácter de asistencia legal mutua. • Se sugiere comunicar más eficazmente a los sujetos obligados cada vez que haya una actualización de las listas, y darles instrucciones precisas sobre cómo proceder. Se sugiere además que en caso de coincidencias con listas de Naciones Unidas, el reporte se envíe simultáneamente a la IVE y a una Fiscalía especializada, con el fin de obtener una orden de congelamiento rápidamente. • Realizar esfuerzos tendientes a agilizar la culminación y entrada en vigencia del Acuerdo Gubernativo que crea la Comisión Nacional de Coordinación, lo que facilitaría la coordinación interinstitucional tanto a nivel gubernamental, como en el ámbito privado, lo que haría más efectiva la implementación de los procedimientos para el congelamiento de fondos o activos de personas designadas. • Definir un procedimiento para autorizarle a la persona cuyos fondos sean incautados en virtud de la Res.1267, que acceda a fondos para su subsistencia o para cubrir ciertos honorarios y servicios necesarios.
2.5 La Unidad de Inteligencia Financiera y sus funciones (R.26)	<ul style="list-style-type: none"> • Hacer un mayor esfuerzo en comunicar al Ministerio Público los méritos de la contratación de un asesor legal para incrementar la cooperación y efectividad en la asistencia que se prevé dar a la Fiscalía Contra el Lavado de Activos. • Explorar posibles vías para reducir el esfuerzo dedicado a recopilar información para el MP y para trabajar más coordinadamente con el MP en la investigación de casos complejos. • Establecer la comunicación en medio electrónico de los RTS de las personas obligadas a la IVE, y de los casos que la IVE envía al Ministerio Público. • Firmar memoranda de entendimiento con más instituciones públicas, incluyendo la Policía, con el fin de mejorar el acceso rápido y seguro a información que pueda servir de apoyo a las

	<p>investigaciones de la IVE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procurar comunicaciones más directas entre la IVE y el MP para minimizar el número de personas que tienen acceso a las denuncias que la IVE traslada al MP.
2.6 Autoridades del orden, ministerio público y otras autoridades competentes (R.27 y 28)	<p>R.27:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitar más activamente a miembros del Organo Judicial, del Ministerio Público, y de la DIGICI en temas de ALD/CFT. • Fortalecer a la Policía Nacional Civil y otras agencias en temas de ALD/CFT. • Formar grupos permanentes o temporales especializados en la investigación de LD/CFT con el fin de llevar a cabo investigaciones en conjunto con las autoridades competentes apropiadas de otros países. • Continuar con la implementación de los Métodos Especiales de Investigación en casos de LD/FT como las operaciones encubiertas, entregas vigiladas, e interceptaciones telefónicas con el fin de lograr la incautación de altas montas de dinero, la captura y enjuiciamiento de los principales actores detrás del crimen organizado. • Revisar dentro de un espíritu de colaboración la implementación de los métodos de investigación que usen las agencias del orden en casos de LD/FT con el fin de compartir y diseminar los hallazgos o estudios resultantes con los demás actores dentro del sistema de ALD/CFT. • Explorar medidas para prevenir fugas de información después de que los jueces hayan sido informados y para asegurarse que el fuero de los alcaldes no sea un obstáculo en las investigaciones de casos de LD y FT.
2.7 Declaración o Revelación Transfronteriza. (RE. IX)	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer sanciones administrativas por violación de las obligaciones de declaración del efectivo en frontera. • Establecer la obligación para las autoridades de aduanas, de controlar y retener dinero en las fronteras que pudiera estar relacionado con personas listadas en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Establecer igualmente un mecanismo eficaz para poner en práctica esta obligación. • Asegurarse de que los Formularios de Declaración Jurada estén disponibles a todas las personas que ingresen al país y salgan de él no solamente por vía aérea, sino que por vía marítima y terrestre, y reforzar la capacidad de verificación en

	<p>las fronteras terrestres.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer e implementar medidas estrictas de control de movimiento de transfronterizo inusual de oro, metales y piedras preciosas, y procedimientos para avisar a las autoridades aduaneras correspondientes en otros países, cuando se detecten movimientos inusuales de este tipo de mercancías. • Crear mecanismos de cooperación bien definidos entre las autoridades aduaneras, de migración, policial, el Ministerio Público, y la IVE.
3. Medidas Preventivas – Instituciones Financieras	
3.1 Riesgo de lavado de dinero o de financiamiento del terrorismo	
3.2 Diligencia debida sobre el cliente, incluyendo medidas mejoradas o reducidas (R.5 a la 8)	<p>Rec. 5</p> <ul style="list-style-type: none"> • R.5. Incluir dentro de las personas obligadas a los intermediarios de seguros. • Exigir expresamente que se considere elaborar un RTS cuando no se pueda obtener o verificar los datos. • R.5. Mejorar la confiabilidad del documento de identificación nacional, como en efecto se contempla mediante la expedición del nuevo Documento Personal de Identificación. Establecer mecanismos que faciliten a las instituciones financieras, la identificación de sus clientes con base en el DPI. Se sugiere promover convenios entre las instituciones financieras y las autoridades relacionadas con la emisión del nuevo documento de identificación a fin de que las ultimas proporcionen información a las instituciones financieras para lograr la actualización de los datos de los clientes. • R5.4 Incluir la pregunta expresa sobre si se está actuando en beneficio de un tercero, en los formularios diseñados para Empresas de Tarjeta de Crédito y para Casas de Cambio en cuanto al inicio de relaciones con personas jurídicasR.5.5. Exigir expresamente a las instituciones financieras que conozcan al beneficiario real en contratos de fideicomiso y verifiquen la información de todos los involucrados en dichos contratos. • R5.5 Dejar claro en la normativa que debe identificarse siempre al beneficiario real de una cuenta, con especial énfasis en las cuentas de Sociedades Anónimas con acciones al portador

	<ul style="list-style-type: none"> • R5.5 Establecer lineamientos claros que exijan a las instituciones financieras tomar medidas para determinar quienes son las personas naturales que en última instancia son los que poseen o controlan una persona jurídica o empresa. • R5.7 Se sugiere realizar reuniones con las instituciones financieras a fin de encontrar soluciones a los problemas que dificultan la actualización de los datos de los clientes. • R5.8 Exigir a todas las instituciones financieras que lleven a cabo una diligencia debida más profunda para categorías de clientes, relaciones comerciales o transacciones de mayor riesgo. (La Guía de Administración de Riesgos podría ser aplicada al resto de las personas obligadas y no solamente a Bancos, Financieras y Offshore). • R5.8 Particularmente se recomienda incluir dentro de los clientes de alto riesgo a los clientes no residentes e incluir ejemplos de medidas de DDC aumentada a ser aplicadas por las personas obligadas en las relaciones u operaciones de alto riesgo. • R5.9 -12. Analizar la posibilidad de permitir a las personas obligadas, el establecimiento de medidas de DDC simplificadas de acuerdo a las recomendaciones del GAFI, para los casos en los que el riesgo sea menor. • R5.9 - Cuando se emitan disposiciones que permitan a las aseguradoras o a otras entidades la aplicación de medidas simplificadas de DDC mas alla de un formulario mas corto para inicio de relación debe aclararse que dichas medidas aplicadas a a clientes residentes en otro país, debe limitarse a países sobre los que se esté convencido que cumplen con las Recomendaciones del GAFI, y que estas se implementan de manera efectiva y que dichas medidas no pueden usarse cuando exista una sospecha de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo o se trata de escenarios específicos de riesgo . • R5.14) Establecer disposiciones para las instituciones financieras en las que se indique que las mismas pueden realizar la verificación de la identidad del cliente y beneficiario real luego del establecimiento de la relación comercial siempre que ésta tenga lugar tan pronto como sea razonablemente practicable, esta acción sea necesaria para no interrumpir la conducción normal del negocio o cuando los riesgos de LD/FT sean manejados con efectividad. • R5.14.1 Exigir a las instituciones financieras que adopten procedimientos de manejo del riesgo cuando permitan a sus clientes utilizar la relación comercial antes de que se efectúe
--	---

	<p>la verificación de sus datos. Estos procedimientos deben incluir un grupo de medidas como la limitación del número, tipos y/o monto de transacciones que se pueden efectuar, y el monitoreo de transacciones grandes o complejas que se están realizando fuera de las normas esperadas para ese tipo de relación.</p> <p>Rec. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • R.6 Extender las disposiciones relativas a los PEPS a fin de que deban ser implementadas también por las Afianzadoras, Almacenadoras, Arrendadoras, Aseguradoras, Casas de Bolsa, Casas de Cambio, Casas de Empeño, Empresas de Canjes de Cheques, Cooperativas, Financiadoras, Empresas de Factoraje, Operadoras de Tarjeta de Crédito, Empresas de Transferencias de Fondos, Empresa de Tarjetas de Crédito y demás personas obligadas por las leyes ALD/CFT. • R.6 Modificar la definición de PEPS contenida en los oficios emitidos por la IVE, de forma que indique que se debe considerar PEP los individuos que desempeñen o hayan desempeñado funciones publicas destacadas en un país extranjero, así como sus familiares y asociados cercanos. Esto sin perjuicio de que se mantengan como PEPs los funcionarios u otras personas nacionales incluidas en la definición actual. • R6. Exigir a las instituciones financieras que obtengan la aprobación de un funcionario gerencial para continuar la relación comercial, cuando un cliente ha sido aceptado, y más tarde se descubre que el cliente o beneficiario real es una PEP, o luego pasa a ser una PEP. <p>Rec. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • R7. Exigir a todas las instituciones que podrían al menos hipotéticamente establecer relaciones de corresponsalia o relaciones similares, aplicar las disposiciones emitidas con respecto a la banca corresponsal transfronteriza. • R7. Exigir en forma clara a las instituciones financieras que evalúen los controles ALD/CFT de la institución ordenante, y que precisen si estos son adecuados y efectivos. • R7. Exigir a todas las instituciones financieras que pudieran prestar servicios de corresponsalia u otros similares, que documenten las respectivas responsabilidades ALD/CFT de cada institución con respecto a la relación de corresponsalia. <p>Rec. 8</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • R8. Exigir a todas las instituciones financieras que cuenten con políticas establecidas o que tomen las medidas que sean necesarias para prevenir el uso indebido de los avances tecnológicos en los esquemas de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo. Esto se podría realizar enviando la Guía de Administración de Riesgos al resto de las personas obligadas. • R8. Exigir a todas las instituciones financieras que cuenten con políticas y procedimientos para abordar todo riesgo específico asociado con las relaciones o transacciones comerciales que no son cara a cara. Estas políticas y procedimientos deben aplicarse al establecer relaciones con el cliente y al efectuar la diligencia debida continua. Esto se podría realizar enviando la Guía de Administración de Riesgos al resto de las personas obligadas. Se recomienda considerar modificar la redacción de la Guía a fin de hacer mayor énfasis en las transacciones que no son cara a cara, para que las instituciones tengan mayor claridad sobre el tema.
3.3 Terceros y negocios intermediados (R.9)	<ul style="list-style-type: none"> • Emitir disposiciones que indiquen a las instituciones las medidas que deben guardar en caso de que se apoyen en un tercero para realizar elementos del proceso de DDC o para presentar negocios. Estas disposiciones deben ser acordes a lo dictado por la recomendación 9 del GAFI. En caso contrario, prohibir explícitamente esta posibilidad.
3.4 Secreto o confidencialidad de la institución financiera (R.4)	<ul style="list-style-type: none"> • Se debería buscar un balance entre los requerimientos de información que hace el Ministerio Público por medio de la IVE, y por medio de órdenes judiciales, con el fin de evitar un desgaste de requerimientos de ampliación del Ministerio Público hacia la IVE
3.5 Normas sobre el mantenimiento de registros y las transferencias cablegráficas (R.10 y RE. VII)	<ul style="list-style-type: none"> • Rec. 10: Requerir a las personas obligadas, mantener planes de acción, designar recursos y plazos razonables de cumplimiento para completar y actualizar los datos, documentos y perfiles de los clientes antiguos. • Fortalecer la labor de supervisión de la Superintendencia de Bancos en general, y de la IVE en particular, sobre el cumplimiento de parte de todos los Sujetos Obligados de la obligación de mantenimiento seguro y actualizado de registros de sus clientes, conforme matrices y lineamientos previamente definidos, dejando soportes físicos y/o electrónicos (informes escritos y/o ayudas memorias) de los hallazgos de debilidades e incumplimientos, conforme el art. 3, literal “c”, de la Ley de Supervisión Financiera. • R.E. VII: Emitir circular sobre identificación del cliente en transferencias cablegráficas, que no deje lugar a dudas

	<p>sobre la obligación de identificar sin importar el monto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deben aplicarse mayores controles y lineamientos para los negocios de remesas a fin de disminuir los sectores informarles e integrarlos a los supervisados en PLD/FT. • La IVE debería revisar y actualizar, a tono con la gravedad de los incumplimientos, la gradualidad o escala de sanciones pecuniarias conforme los montos mínimos y máximos previstos en la Ley, respecto al tema de FT para el caso de las transferencias cablegráficas.
3.6 Monitoreo de transacciones y relaciones (R.11 y 21)	<ul style="list-style-type: none"> • R.11: Fortalecer la labor de supervisión de la Superintendencia de Bancos en general, y de la IVE en particular, para poder cubrir regularmente a todos los Sujetos Obligados conforme a períodos razonables, y cerciorarse de la calidad y efectividad del proceso de examen y conclusiones por escrito, registro y expedientes de aquellas transacciones detectadas como inusuales cuando no concluyen en un RTS. • Disponer en la legislación y/o en las circulares y normativas de la materia, la obligación para las instituciones financieras (distintas a Bancos, Financieras y OffShore) de prestar atención especial a las relaciones comerciales y transacciones con personas de o en países que no apliquen las Recomendaciones del GAFI o lo hagan de manera insuficiente. • R.21: Modificar la Guía sobre Administración de Riesgos de LD/FT para dotarla de un lenguaje más imperativo. • Establecer obligaciones para los intermediarios de seguros sobre el monitoreo, detección y análisis de operaciones inusuales a tono con las Rec. 11 y 21
3.7 Informes sobre transacciones sospechosas y otros reportes (R.13-14, 19, 25 y RE. IV)	<ul style="list-style-type: none"> • R. 13: Tomar las medidas pertinentes sobre los siguientes aspectos: <ul style="list-style-type: none"> • Continuar superando las deficiencias de calidad y contenido presentes en los RTS. • Verificar regularmente el cumplimiento por parte todos los Sujetos Obligados conforme a períodos razonables, y cerciorarse de la calidad y efectividad del proceso para determinar y presentar RTS. • R. 13: Establecer de la mejor forma posible, protección o medidas alternas para que el Oficial de Cumplimiento no se vea expuesto a llamamientos judiciales en calidad de expertos o testigos durante el enjuiciamiento de casos reportados por ellos, procediendo a la incorporación del

	<p>Perito experto por parte de la IVE para asistir a debates.</p> <ul style="list-style-type: none"> • R.25 Fortalecer la labor de la IVE en cuanto a realimentación hacia las instituciones financieras sobre temas RTS respecto al seguimiento de los mismos. • RE.IV: [igual a R.13]
3.8 Controles internos, cumplimiento, auditoría y sucursales extranjeras (R.15 y 22)	<ul style="list-style-type: none"> • R15. Recomendar a las instituciones financieras que verifiquen los antecedentes penales de los empleados a contratar. • R22. Exigir además de Bancos nacionales y Off-Shore, a las casas de bolsa, que aseguren que sus sucursales y subsidiarias extranjeras observen las medidas ALD/CFT en concordancia con los requisitos de Guatemala y las Recomendaciones del GAFI, en la medida en que las leyes y regulaciones del país extranjero lo permitan, en particular con respecto a sus sucursales y subsidiarias ubicadas en países que no aplican las Recomendaciones del GAFI o lo hacen de manera insuficiente. Se recomienda también cambiar la redacción del Artículo 6 del Reglamento ALD a fin de lograr consistencia entre la legislación y la Guía sobre Sucursales y Subsidiarias, así como los otros criterios incluidos en la Guía en mención
3.9 Bancos ficticios (R.18)	<ul style="list-style-type: none"> • R18. Regular el tema con Casas de Bolsa aunque no tengan actualmente relaciones de Corresponsalia exigiéndoles que en caso de que ello ocurra quedarán sujetas a las mismas obligaciones sobre corresponsalia impuestas a los bancos.
3.10 El sistema de supervisión y vigilancia - las autoridades competentes y las Organizaciones de Autorregulación. Papel, funciones, responsabilidades y poderes (incluyendo sanciones) (R. 23, 30, 29, 17& 25).	<ul style="list-style-type: none"> • R23. Mejorar la cantidad y calidad de las auditorías in situ de ALD/CFT practicadas por el Área de Supervisión de la IVE. Para esto es de vital importancia que se brinde un mayor apoyo a esta área a fin de que cuente con más personal que le permita realizar más auditorías a las instituciones financieras y demás obligados. • R23. Se sugiere establecer convenios de cooperación con organismos sectoriales que realizan auditorías, a fin de que estos contribuyan con la IVE en la supervisión ALD/CFT de las personas obligadas. En este sentido, fue notificado por la Inspección General de Cooperativas (INGECOP), que esta organización realiza supervisiones ALD/CFT al sector cooperativo y que en 2008 realizó 108 auditorías que cubrieron los temas LD/FT. Estos convenios podrían reducir la carga de trabajo de la IVE o al menos podrían proporcionarle elementos útiles que le faciliten la labor de supervisión. • R23. Ampliar la aplicación del Modelo de Supervisión Basada en Riesgos para todos los sectores obligados. • R23. Proporcionar oportunamente a las personas obligadas los hallazgos de las auditorías ALD/CFT realizadas por el

	<p>Área de Supervisión.</p> <ul style="list-style-type: none"> • R23. Dar seguimiento a la implementación de las recomendaciones emitidas en los informes de supervisión ALD/CFT. • R23. Dar lineamientos para que el sector asegurador y de valores maneje el riesgo LD/FT. • R23. Otorgar facultades a la SIB para revisar en todo momento, y no sólo al momento de autorizar el funcionamiento de una institución, la idoneidad de quienes adquieran una participación accionaria significativa o una función administrativa en instituciones financieras distintas de Bancos, Aseguradoras y entidades pertenecientes a grupos financieros (para estas ya existe esta obligación). Especial prioridad debería darse a cooperativas y remesadoras. R23. • R25. Brindar a todas las personas obligadas realimentación sobre las técnicas y métodos del LD y el FT en Guatemala. • R.29 Se sugiere hacer explícita la facultad y función de la IVE para realizar inspecciones in situ en materia ALD/CFT sobre las instituciones financieras que operan fuera del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Bancos. • R.17- Establecer en la legislación: <ul style="list-style-type: none"> a. Sanciones administrativas en el tema PLD/FT para directores y para la administración superior de las instituciones financieras. b. El retiro, suspensión o restricción de la licencia para operar de todo los Sujetos Obligados, como sanciones en el tema PLD/FT. c. R.17- Revisar y actualizar, a tono con la gravedad de los incumplimientos, la gradualidad o escala de sanciones pecuniarias conforme los montos mínimos y máximos previstos en la Ley. d. Incluir en la legislación, como Sujetos Obligados, a los intermediarios de seguros.
3.11 Servicios de transferencia de dinero/valor (RE. VI)	<ul style="list-style-type: none"> • Expedir un instructivo obligatorio para remesadoras, que les permita poner en práctica todos los controles previstos en la Ley. • Llevar a cabo una campaña de concienciación acerca de las responsabilidades de las empresas de remesas con respecto al cumplimiento de reportes y las leyes de ALD/CFT.
4. Medidas Preventivas – Actividades y Profesiones No Financieras Designadas	
4.1 Diligencia debida sobre el cliente y mantenimiento de registros (R.12)	<p>Establecer en la legislación de manera expresa e inequívoca, las siguientes obligaciones para todos los APNFD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contar con Programas de Prevención para prevenir tanto el LD, como el FT, incluyendo una permanente capacitación. • Presentar RTS sobre LD. • Desarrollar políticas de Conozca a su Cliente. • Desarrollar políticas de DDC intensificada para clientes de alto riesgo, por ejemplo para los PEPs.

	<ul style="list-style-type: none"> • Monitorear relaciones contractuales para detectar inusuales tendentes a determinar patrones de LD. • Mantener registros de información por al menos de cinco años. • Incluir como Sujetos Obligados a prevenir el LD y el FT a los proveedores de servicios de sociedades y fideicomisos, y a casinos. • Acelerar y fortalecer el proceso de acercamiento y concienciación en Prevención LD/FT, con todos los sectores de APNFD.
<ul style="list-style-type: none"> • 4.2 Reporte de transacciones sospechosas (R.16) 	<p>Establecer en la legislación, de manera expresa para todos los APNFD, incluyendo a los Abogados, Notarios, Contadores y Casinos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La obligación de contar con Programas de Prevención para prevenir tanto el LD como el FT, incluyendo una permanente capacitación sobre la materia. • La obligación de presentar RTS sobre LD y sobre FT. • La protección legal por responsabilidades en ocasión de presentar RTS. • Sanciones por incumplir la prohibición de revelar información en ocasión de un RTS. • Acelerar y fortalecer el proceso de acercamiento y concienciación en Prevención LD/FT, con todos los sectores de APNFD. • Concretar una efectiva labor de realimentación de la IVE hacia los APNFD sobre las decisiones y resultados alrededor de los RTS. • Fortalecer la labor de supervisión de la IVE sobre las APNFD.
<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 Regulación, supervisión y monitoreo (R. 24-25) 	<ul style="list-style-type: none"> • R.24: Incluir como Sujetos Obligados a prevenir el LD y el FT, a los casinos. • Establecer en la legislación de manera expresa que todos los APNFD estén sujetos a regulación especial, y a una efectiva y permanente supervisión y monitoreo en PLD/FT. • Debe la IVE contar con un Manual para una efectiva supervisión en PLD/FT a las APNFD. • R.25: Acelerar y fortalecer el proceso de acercamiento y concienciación en Prevención LD/FT con todos los sectores de APNFD, de parte de la IVE, y dar paso a una efectiva política de realimentación y directrices en la materia. • Debe la IVE emitir Guía para la Administración de Riesgos LD/FT dirigida a las APNFD, al igual que lo hizo con los Bancos, Sociedades Financieras y Entidades Fuera de Plaza (Bancos off-shore). • Fomentar la autorregulación gremial entre las APNFD en materia PLD/FT.
4.4 Otros Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (R.20)	<ul style="list-style-type: none"> • Tomar las medidas necesarias para empezar a exigir el cumplimiento de las obligaciones impuestas sobre los nuevos sujetos obligados: actividades de compraventa de vehículos automotores y las actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades. • Desarrollar trabajo efectivo a partir de los estudios de

	<p>vulnerabilidades de LD/FT en los APNFD distintas a los recomendados por GAFL.</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuar los esfuerzos por profundizar el nivel de bancarización del país, la modernización del sistema de pagos y la simplificación de los pagos por vía electrónica, teniendo cuidado de cubrir los riesgos de LD/FT implícitos en nuevas tecnologías.
5. Personas Jurídicas y Acuerdos Legales y Organizaciones Sin Fines de Lucro	
5.1 Personas Jurídicas – Acceso a la información sobre el beneficiario y el control (R.33)	<ul style="list-style-type: none"> Capacitar al personal del Registro Mercantil y de las entidades declarantes guatemaltecas sobre las medidas ALD/CFT. Aprobar las normas legales que ordenen la transparencia adecuada en cuanto a la identidad sobre el usufructuario y control de las personas jurídicas. Adoptar marcos jurídicos y guías relacionadas con la prevención del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo, a través de personas jurídicas.
5.2 Acuerdos Legales – Acceso a la información sobre el beneficiario y el control (R.34)	<ul style="list-style-type: none"> Sería conveniente mayor capacitación en materia ALD/CFT dirigida al personal de las autoridades encargadas de fiscalización de los contratos de fideicomiso y de las entidades financieras que ofrecen estos servicios en calidad de fiduciarios. Asimismo, sería propicio la publicación de guías sobre medidas para prevenir, detectar y controlar el uso de los servicios fiduciarios en actividades de Lavado de Dinero o Financiamiento del Terrorismo.
5.3 Organizaciones sin fines de lucro (RE. VIII)	<ul style="list-style-type: none"> Realizar estudios y evaluaciones sobre vulnerabilidades de LD/FT y corrupción entre las OSFL. Celebrar convenios interinstitucionales e internacionales de colaboración para intercambio de información ante investigaciones por LD/FT en donde se vinculen a las OSFL. Dotar a la IVE de facultad expresa y recursos para materializar una supervisión en PLD/FT para todas las OSFL, principalmente sobre aquellas con porción significativa de recursos financieros o que realizan actividades internacionales; incluyendo expresa potestad sancionadora.
6. Cooperación Nacional e Internacional	
6.1 Cooperación y coordinación a escala nacional (R.31)	<ul style="list-style-type: none"> Se debería impulsar la promulgación del Acuerdo Gubernativo que crea La Comisión Nacional de Coordinación de los Esfuerzos Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Guatemala. Crear mecanismos de cooperación interinstitucional entre los principales actores en la lucha contra LD/FT, especialmente los estamentos de seguridad, el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera IVE, que permitan generar procesos y condenas a personas o casos de alto impacto, así como identificar y rastrear propiedades susceptibles de confiscación.

	<ul style="list-style-type: none"> • Crear grupos de trabajo al nivel operativo para incrementar la efectividad de las investigaciones del ALD/CFT llevadas a cabo por el Ministerio Público y las agencias del orden. • Se debería crear espacios de mayor cooperación entre la IVE y la Unidad de Análisis del Ministerio Público.
6.2 Las Convenciones y las Resoluciones Especiales de las NU (R.35 y RE. I)	<ul style="list-style-type: none"> • Crear procedimientos y mecanismos que permitan dar cumplimiento a las Resoluciones 1267 y 1373 con la rapidez que éstas requieren (ver RE.III)
6.3 Ayuda Legal Mutua (R.36, 37, 38, RE. V)	<p>R.38: Evaluar la posibilidad de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crear un fondo de custodia de bienes comisados que coadyuve a fortalecer a las autoridades preventivas y las de investigación y orden público. • Regular lo relativo a la repartición de activos asociados con la realización de investigaciones conjuntas con autoridades de otros Estados. • Aprovechar los medios legales existentes para utilizar temporalmente los activos producto medidas cautelares, para beneficio de las diferentes autoridades encargadas de prevenir y reprimir el LD/FT.
6.4 Extradición (R.39, 37, RE. V)	<ul style="list-style-type: none"> • R.39: El número de solicitudes de extradición y el proceso seguido por Guatemala debiera reflejar de modo más claro la eficacia en la implementación actual de los Tratados y Convenios existentes en materia de extradición por casos de Lavado de Dinero u otros Activos.
6.5 Otras Formas de Cooperación (R.40, RE. V)	<p>R.40:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecer los mecanismos de cooperación de las autoridades aduaneras con sus homólogos del exterior, especialmente para mejorar la detección de envíos ilegales de efectivo y metales preciosos. • Recopilar estadísticas útiles y confiables acerca del resultado de los controles aduaneros en cuanto se relacione con el combate al LD/FT. • Complementar las respuestas de la IVE a los requerimientos enviados por UIFs extranjeras, con información sobre antecedentes judiciales de las personas investigadas y otras bases de datos externas que sean relevantes. • Continuar la medición periódica que hace la IVE de la satisfacción de sus homólogos externos con el tiempo y la calidad de sus respuestas.
7. Otras Cuestiones	
7.1 Recursos y Estadísticas)R. 30 & 32)	<p>Rec. 30</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brindar capacitación especializada sobre LD-FT a los jueces. • Dotar a la Policía de suficientes recursos y capacitación para enfrentar delitos de cuello blanco. • Mejorar el apoyo al Departamento de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) del Ministerio Público, pues hoy se conforma mayormente de estudiantes universitarios sin la dotación ni capacitados técnica para investigar delitos de LD-FT. • A la recién creada Dirección de Inteligencia Civil (DIGICI)

	<p>del Ministerio de Gobernación tendrá que dotársele de los recursos necesarios para colaborar con los otros actores en la lucha ALD-CFT.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La IVE debería recibir suficientes recursos humanos para supervisión ALD/CFT de las 400 instituciones financieras registradas. Esto se agravará al incluir a las APNFDS, de las cuales se habían registrado 429 al momento de la visita. <p>Rec. 32</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aunque la IVE recopila parte algunas estadísticas útiles, especialmente en su rol de UIF y de Supervisión, debería crearse un sistema de recolección de datos en otras instituciones, que le permita a las autoridades y al nuevo Comité de Coordinación priorizar necesidades, planear una estrategia integral nacional, y revisar periódicamente la eficacia de su sistema ALD/CFT. • El Ministerio Público debería tener un sistema para contabilizar y darle seguimiento a las investigaciones y condenas por LD-FT. • Las autoridades de Aduanas deberían contar con estadísticas sobre cooperación con homólogos de otros países para la detección de dinero o valores en frontera.
7.2 Otras medidas o asuntos relevantes en materia ALD/CFT	
7.3 Marco general – cuestiones estructurales	

TABLA 3: RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES A LA EVALUACIÓN (en caso necesario)

No hay comentarios adicionales para publicación.

ANEXOS

- | | |
|-----------------|--|
| Anexo 1: | Lista de abreviaturas. |
| Anexo 2: | Órganos con los que se realizaron reuniones durante la visita in situ |
| Anexo 3: | Listado de todas las leyes, regulaciones y demás material recibido. |

Anexo 1: Abreviaturas.

ALD	Anti-Lavado de Dinero
APNFD	Actividades y Profesiones No Financieras Designadas
CFT	Combate al Financiamiento del Terrorismo
DDC	Debida Diligencia del Cliente
DICRI	Dirección de Investigaciones Criminalísticas
DIGICI	Dirección General de Inteligencia Civil
FENACOAC	Federación Nacional de Cooperativas y Agencias de Crédito
FT	Financiamiento del Terrorismo
GAFI	Grupo de Acción Financiera Internacional
GAFIC	Grupo de Acción Financiera del Caribe
INACOOP	Instituto Nacional de Cooperativas
IVE	Intendencia de Verificación Especial (UIF de Guatemala)
LD	Lavado de dinero (también lavado de activos)
MOU	Memorando de Entendimiento
NU	Organización de las Naciones Unidas
OSFL	Organización sin fines de lucro (NPO)
PEP	Persona expuesta políticamente
ROS/RTS	Reporte de Operación/Transacción Sospechosa
SAT	Superintendencia de Administración Tributaria
SIB	Superintendencia de Bancos de Guatemala
UIF	Unidad de Inteligencia Financiera
UNSCR	Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

**Anexo 2: Órganos con los que se realizaron reuniones durante la visita in situ –
Ministerios, otras entidades gubernamentales, representantes del sector privado y otros.**

Rama Ejecutiva

Regulación/Supervisión Financiera:

Superintendencia de Bancos (SIB)
Intendencia de Verificación Especial -IVE
INACOP e INGECOP (Regulador Cooperativas)
IVE
Ministerio de Gobernación

Otras autoridades administrativas:

Superintendencia de Administración Tributaria-
SAT
Intendencia de Aduanas
Registro Mercantil
Banco de Guatemala
Vicepresidencia de la República

Judicial, Policial, Control

Ministerio Público (Fiscalía General)
Fiscalía Especializada contra el Lavado de Dinero
Juez
Organismo Judicial- Sub-Secretario General
Dirección General de Inteligencia Civil- DIGICI
Contraloría de Cuentas
Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala – CICIG (ONU)

Sector Privado

Actividades financieras:

Asociación Bancaria de Guatemala
Asociación Guatemalteca de Instituciones de
Seguros - AGIS
Banco Industrial
Citibank
Banco Azteca
Banco de Antigua
Negocios y Transacciones Institucionales, S.A.
(bursátil)
Western Union (SOIN S.A.)
Génesis Empresarial, S.A.
Asociación Guatemalteca de Instituciones de
Seguros
Seguros G&T
FENACOAC (Federación de Cooperativas)

Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Obrero
GTC Bank (offshore)
Banco de Desarrollo Rural –BANRURAL
Génesis Empresarial (Microfinanzas)
Bolsa Nacional de Valores

APNFD:

Colegio de abogados y notarios
Lotería Santa Lucía
TRANSAC Inmobiliaria
Colegio de Contadores Públicos y Auditores

Anexo 3: Lista de leyes, regulaciones y demás material recibido.

1. Decreto 67-2001 del Congreso de la República Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (“Ley ALD”).
2. Acuerdo Gubernativo 118-2002 del Presidente de la República Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (“Reglamento ALD”).
3. Acuerdo Gubernativo No. 438-2002, del Presidente de la República (Incorpora a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, como Personas Obligadas)
4. Acuerdo Gubernativo No. 524-2007, del Presidente de la República (Incorpora a las Loterías, Rifas y Similares autorizadas por el Ministerio de Gobernación, como Personas Obligadas)
5. Decreto 58-2005 del Congreso de la República Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (“Ley CFT”).
6. Acuerdo Gubernativo 86-2006 del Presidente de la República Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (“Reglamento CFT”).
7. Oficio IVE No. 247-2003, del 19 de mayo de 2003 sobre Medidas de Prevención Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
8. Oficio IVE No. 1585-2008, del 20 de agosto de 2008 sobre la Elaboración del Archivo Electrónico para el Reporte Mensual de Transferencia de Fondos Mayores o Iguales a US\$2,000.00 o su Equivalente en otra Moneda.
9. Oficio IVE No. 13-2009, del 7 de enero de 2009 sobre Lineamientos para el mantenimiento de cuentas a Sociedades u Otras Entidades en Formación.
10. Oficio IVE No. 180-2009, del 20 de febrero de 2009 sobre la Elaboración del Archivo Electrónico para el Reporte Mensual de Compra y Venta de Moneda Extranjera en Efectivo.
11. Oficio IVE No. 181-2009, del 20 de febrero de 2009 sobre la Elaboración del Archivo Electrónico para el Reporte Mensual de Ingreso y Egreso de Efectivo en Moneda Nacional.
12. Oficios IVE No. 244-2009, 245-2009 y 303-2009 del 6 y 31 de marzo de 2009 relacionado con Personas Expuestas Políticamente.
13. Oficio IVE No. 424-2009, del 24 de abril de 2009 dirigido a Personas Obligadas Bajo Régimen Especial –PORES-
14. Oficio IVE No. 434-2009, del 24 de abril de 2009 relacionado con la “Guía de Administración del Riesgo de Lavado de Dinero u Otros Activos y de Financiamiento del Terrorismo”.
15. Oficio IVE No. 837-2009, del 17 de junio de 2009 relacionado con la “Guía Básica de Prevención para Servicios de Banca Corresponsal, Sucursales de Bancos Nacionales en el Extranjero y Subsidiarias”.
16. Oficio IVE No. 838-2009, del 17 de junio de 2009 relacionado con la “Guía Básica sobre medidas a adoptar por las Persona Obligadas, en caso de Activos o Bienes que puedan o estén relacionados con Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y otros actos relacionados”.